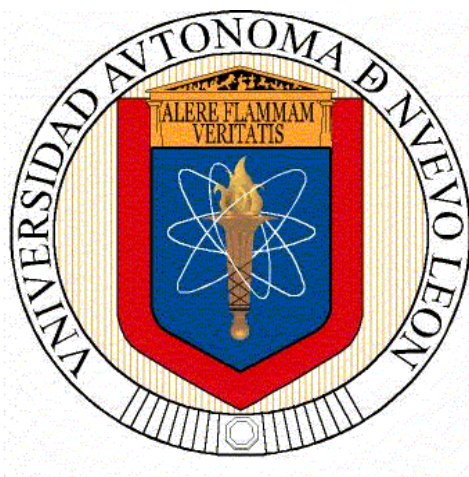


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**



**TESIS
EL DERECHO AL DESARROLLO COMO FINALIDAD DEL ESTADO Y LAS
INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL MEXICANO**

PRESENTA

TALIA GARZA HERNÁNDEZ

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO CON
ORIENTACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

JULIO 2015



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**



**TESIS
EL DERECHO AL DESARROLLO COMO FINALIDAD DEL ESTADO Y LAS
INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL MEXICANO**

**PRESENTA
TALIA GARZA HERNÁNDEZ**

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO CON
ORIENTACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

**DIRECTOR DE TESIS
DOCTOR JOSE LUIS PRADO MAILLARD**

JULIO 2015

ÍNDICE

Introducción....6

Primera Parte

El Derecho al Desarrollo dentro del sistema de fuentes mexicano

Capítulo I

Marco teórico sobre el derecho humano al desarrollo...11

I.I. Aspectos generales del derecho humano al desarrollo: su promoción en Naciones Unidas y Agencias....11

I.II. Implicaciones del derecho humano al desarrollo en México....19

I.II.I. La reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011....19

I.III. Bases para la interpretación legal del derecho humano al desarrollo....23

I.III.I Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos....23

I.III.II La jurisprudencia mexicana....32

I.IV. Aproximación a los contenidos del derecho humano al desarrollo....40

Capítulo II

Fundamentos jurídicos del Derecho al Desarrollo....47

II.I El Derecho al Desarrollo en los tratados internacionales....63

II.II El Derecho al Desarrollo en el ordenamiento jurídico mexicano....82

II.III El Derecho al Desarrollo en la jurisprudencia....91

II.III.I La jurisprudencia mexicana....91

II.III.II La jurisprudencia en el sistema interamericano de los derechos humanos....98

Capítulo III

Configuración constitucional del Derecho al Desarrollo en México....116

III.I Los sujetos del Derecho al Desarrollo....137

III.II Elementos del Derecho al Desarrollo....144

III.III Las responsabilidades respecto del Derecho al Desarrollo....173

III.IV Los principios de interpretación respecto del Derecho al Desarrollo....177

III.IV.I Interdependencia....179

III.IV.II Progresividad....181

III.IV.III Indivisibilidad....183

III.IV.IV Universalidad....184

Segunda Parte

Capítulo IV

Las obligaciones que se desprenden del Derecho al Desarrollo en México

IV. Las obligaciones básicas del Derecho al Desarrollo....186

IV.I Obligación de acceso a los recursos básicos....207

IV.II Obligación de acceso a la educación....210

IV.III Obligación de acceso a los servicios de salud....214

IV.IV Obligación de proveer seguridad alimentaria....216

IV.V Obligación en materia de vivienda....223

IV.VI Obligación en materia de empleo....233

IV.VII Obligación de justa distribución de los ingresos (igualdad de oportunidades)....244

Capítulo V

V. Obligaciones prospectivas del derecho al desarrollo

V.I Obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos....253

V.II Obligación de medidas progresivas contra la violación de los derechos humanos....271

V.III Obligación en materia de libre determinación de los pueblos....288

V.IV Obligación de fomentar la Democracia participativa (art. 8.2 de la declaración)....291

V.V Obligación de inclusión de la mujer (art. 8.1 de la declaración)....304

V.VI Obligación en materia de derechos de los discapacitados....311

Conclusiones....327

Bibliografía....332

ABREVIATURAS

BRICS	Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CIDPD	Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
CESE	Comité Económico y Social Europeo
DIDH	Derecho internacional de los derechos humanos
DUDH	Declaración Universal de los Derechos Humanos
ECOSOC	Consejo Económico y Social
EPT	Educación para Todos
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OACDH	Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU-Hábitat	Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
ONG	Organización no Gubernamental
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UE	Unión Europea
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
INB	Ingreso Nacional Bruto per cápita

Introducción

Con motivo de la decimosexta sesión anual del grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, que tuvo verificativo del 27 de abril al 1 de mayo de 2015. En su discurso de apertura el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el Señor Zeid Ra'ad Al Hussein, dio cuenta de los cambios significativos en el mundo, que consisten en procesos económicos y políticos que están reconfigurando el orden mundial: los movimientos de África hacia la configuración acuerdo continental de libre comercio; el tratado trasatlántico de libre comercio entre Estados Unidos y Europa y el Banco de Desarrollo de los BRICS.¹ A luz del derecho constitucional es posible retomar las preguntas implicadas por las transformaciones de la globalización en el derecho,² nuevamente son los Estados-nación una vez más los protagonistas e impulsores de las reconfiguraciones económicas, políticas y sociales en la gobernanza global.³

¹ AL HUSSEIN, Zeid Ra'ad "Opening statement," *Working Group on the Right to Development The sixteenth annual session*, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 27 April – 1 May 2015, p. 2.

² NÚÑEZ Torres, Michael, "La vida social y económica, para vencer las vicisitudes a las que están expuestas dentro del marco de lo que es la globalización, requieren de unas respuestas rápidas que solucionen los innumerables problemas que acosan a la sociedad. El Estado Constitucional muchas veces no puede hacer frente a estas dificultades desde la perspectiva de la clásica retórica parlamentaria, acaso bosquejada para una realidad menos compleja, sino que necesita de decisiones ejecutivas que le permitan asumir su responsabilidad ineludible de ser la institución política, dentro de la cuál realmente la sociedad se pueda desarrollar con justicia. Se hacen indispensables cambios en la vida política, de modo que pueda adecuarse a la sociedad tecnológica a la cual pertenecemos, pero sin abandonar el avance institucional ni los logros democráticos que con esfuerzo hercúleo hemos alcanzado." NÚÑEZ Torres, Michael, *La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución. El paradigma de Venezuela y España*, Editorial Porrúa, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2006, p. XV.

³ NA. En los contenidos de esta presente tesis abordaré el concepto de gobernanza solo desde una perspectiva transversal. Por gobernanza global se entiende a los nuevos mecanismos políticos que complementando el marco del Estado-nación y sus mecanismos políticos típicos de intervención (estado territorial, sede del institucionalismo democrático), para resolver problemas colectivos derivados de crisis, riesgos que requieren de la intervención "más allá del Estado," de diversos actores para resolver los problemas globales. Kacowicz: "Kind of intermediary stage between the management of global problems through traditional interstate politics and the operation of a world government." Por world order (orden mundial) Kacowicz entiende: "...a larger number and character of actors, not just nations-states, but first and foremost human beings themselves embedded in a global society". Para Kacowicz el Orden Mundial en la globalización es una especie de nuevo medievalismo. Es la expresión metafórica con la que designa la idea cosmopolita del orden mundial. El professor Núñez Torres también ha abordado estas ideas, escribe en una de sus obras: "Precisamente, la falta de una institución política que monopolizara la capacidad legislativa constituyó sin lugar a dudas, una de las características más importantes, en lo que a nuestra premisa se refiere, del periodo medieval." Además agrega: "En la práctica, el hombre de la edad media ejerce unos derechos

Paralelo a la escritura de esta tesis de investigación doctoral, en el año 2011, el derecho humano la comunidad internacional conmemoraba el 25 aniversario de la declaración sobre el derecho humano al desarrollo, el próximo año en 2015 se conmemorarán 30 años de que en 1986, la Asamblea General acorde en el contexto del desmoronamiento del modelo soviético y del inicio del primado de las teorías neoliberales,⁴ emitiera la Declaración sobre el Derecho Humano al Desarrollo. Sabido es que fue recibida con beneplácito por los países en desarrollo, hubo cierto desacuerdo por en los países industrializados, pero en el transcurso de los años el derecho humano ha sido promovido en instancias de Naciones Unidas y Agencias, al tiempo que ha tenido como infiere Salomon importantes contribuciones jurídicas en el orden económico internacional, para aminorar los efectos negativos en la acumulación del capital.⁵ Lo cual ha generado implícitamente que los Estados progresivamente se hayan comprometido en la implementación de las obligaciones que constituyen el núcleo central de la declaración. Semejantes consecuencias no han sido gratuitas como expone el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Al mismo tiempo, la pobreza, el desempleo masivo, la creciente desigualdad dentro y entre los países, la degradación del medio ambiente, un orden económico internacional caducado con patrones insostenibles de consumo y producción, las modalidades insostenibles de consumo y producción, los conflictos armados, el extremismo violento y el terrorismo están todos trabajando para socavar los esfuerzos

subjetivos en tanto que pertenece a un estamento o a una corporación determinada.” Kacowicz coincide en que el orden mundial enfatiza primordialmente en los seres humanos: “Moreover, we no longer refer to an international order, but rather to world order, encompassing a larger number of characters of actors, not just nation states, but first and foremost human beings themselves embedded in a global society.” KACOWICZ, Arie, “Global Governance, International Order, and World Order,” en LEVI-FAUR, David, *The Oxford Handbook of Governance*, Oxford, New York, 2012, pp. 690- 696. NÚÑEZ Torres, Michael, *op. cit.*, pp. 7-9.

⁴ ROLLAND, Sonia E., *Development at the WTO*, Oxford University Press, United Kingdom, 2012, pp. 30-31.

⁵ SALOMON, Margot, “Legal Cosmopolitanism and the Normative Contribution of the Right to Development”, en MARKS, Stephen (Ed.), *Implementing the Right to Development The Role of International Law*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Geneva, 2008, p. 17.

mundiales para promover la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, todos reunidos en el derecho al desarrollo.⁶

Desde su tardía aparición en el núcleo de los derechos humanos “*core of human rights*,” el derecho humano al desarrollo ha despertado controversia tanto entre los países como en la academia, atribuida a la inconsistencia en términos de propósitos del desarrollo.⁷ En tal sentido, se orienta la observación de Rolland quien pone de relieve que el desarrollo como un asunto humano dependiente del elenco de los derechos humanos, no ha sido recibido por organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio.⁸

Siguiendo los pasos trazados en el sistema de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, pero bajo la sombra del derecho constitucional. El tema de esta investigación doctoral argumenta los fundamentos constitucionales y legales que dan luz de que Derecho al Desarrollo es una finalidad del Estado, atendiendo a las instituciones que integran los contenidos del derecho humano al desarrollo, constituyéndose como núcleo central de este derecho humano las obligaciones básicas y prospectivas, así como la titularidad de los sujetos beneficiarios.

La presente tesis doctoral se divide en dos partes, la primera que se encauza en *El Derecho al Desarrollo dentro del sistema de fuentes mexicano*. El capítulo primero estudia los aspectos generales del derecho humano al desarrollo, su origen y contexto en Naciones Unidas y Agencias, arroja luces implicaciones del derecho humano al desarrollo en México, parte central de este capítulo es la relativa a la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011, piedra de toque para la modernización del régimen de los derechos humanos en México y la adaptación de las instituciones nacionales de protección y garantía de los derechos humanos hacia los estándares

⁶ AL HUSSEIN, Zeid Ra'ad “Opening statement,” *op. cit.*, p. 3.

⁷ cfr. CHAUFFOUR, Jean-Pierre, *The Power of Freedom: Uniting Human Rights and Development*, p. Cato Institute, Massachusetts, 2009, 49.

⁸ ROLLAND, Sonia E., *op. cit.*, p. 28. Nótese que la autora no niega la perspectiva legal del derecho humano al desarrollo: “Despite the difficulty of pinpointing the exact form and content of the right to development, it has found some legal and practical grounding in international institutions, in particular the United Nations Development Programme. The right to development perspective must be recognized as a powerful counter-narrative to the Washington Consensus approach to development.” *Ibidem*, p. 27.

internacionales. Análisis de las bases para la interpretación legal del derecho humano al desarrollo, que se subdivide movilizando el sistema de fuentes en: jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia mexicana.

El capítulo segundo analiza los fundamentos jurídicos del derecho al desarrollo, se moviliza en el sistema de fuentes las bases legales de este instituto en los tratados internacionales; en el ordenamiento jurídico mexicano y en la jurisprudencia mexicana e interamericana.

El capítulo tercero ofrece un análisis de la configuración constitucional del Derecho al Desarrollo en México, incluye un análisis en términos de los elementos constitutivos del derecho, sujetos beneficiarios, titulares de deberes y los principios de interpretación de los derechos humanos, que se agregaron a la Constitución mexicana: interdependencia; progresividad; indivisibilidad; y universalidad.

La parte segunda se concentra en el núcleo central del derecho humano al desarrollo, consistente en las obligaciones que se desprenden del Derecho al Desarrollo en México. El capítulo cuarto analiza las obligaciones básicas del Derecho al Desarrollo, a saber: acceso a los recursos básicos; acceso a la educación; acceso a los servicios de salud; provisión de seguridad alimentaria; vivienda; obligación empleo y justa distribución de los ingresos (igualdad de oportunidades). El capítulo quinto aborda las obligaciones prospectivas del derecho al desarrollo, desarrollo progresivo de los derechos humanos; medidas progresivas contra la violación de los derechos humanos; libre determinación de los pueblos; fomento de la democracia participativa; inclusión de la mujer y obligaciones generales en materia de los derechos de los discapacitados.

En las conclusiones se encuentra el punto culminante del presente trabajo doctoral que parte la afirmación de que el derecho al desarrollo es un derecho humano y tiene la contraparte del Estado como sujeto obligado, por lo tanto constituye una relación bilateral entre el Estado y los particulares, de cooperación solidaria, que contiene un núcleo de obligaciones básicas y

prospectivas del derecho humano al desarrollo mismas que son fines esenciales del Estado.

Primera Parte

El Derecho al Desarrollo dentro del sistema de fuentes mexicano

Capítulo I

Marco teórico sobre el derecho humano al desarrollo

I.I. Aspectos generales del derecho humano al desarrollo: su promoción en Naciones Unidas y Agencias

En este primer capítulo pretendo analizar el marco teórico del derecho humano al desarrollo en el sistema de fuentes, para lo cual orientaré la investigación en un orden deductivo comenzando por sus orígenes en el ámbito internacional particularmente de Naciones Unidas, sus implicaciones en el ámbito nacional y en el sistema de fuentes jurisprudencial; la doctrina lo entiende como un concepto moral⁹ y le reconoce una base legal¹⁰ y por ende se ha incorporado como un derecho y un valor intrínseco en el ordenamiento jurídico mexicano en sentido amplio.

⁹ BUNN, Isabella D., *The Right to Development and International Economic Law: Legal and Moral Dimensions*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2012, p. 296. RAHMAN Osmani, Siddqur, "An essay on the human rights approach to development," en SENGUPTA, Arjun, NEGI, Archana, BASU, Moushumi, *Reflections on the right to development*, Center for Development and Human Rights, Sage Publications, India, 2005, p. 120. Sobre las implicaciones de los derechos morales en los derechos humanos, cfr. WELLMAN, Carl, *The moral dimensions of human rights*, Oxford University Press, New York, 2011, 235 p. "Some but not all, of the material sources of international human rights presuppose the existence of analogous moral human rights. This is certainly true of the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and is probably true of several more specific treaties such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1966 and the the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984. Thus moral human rights are relevant to the interpretation of the legal human rights they recognize. And probably the belief in human rights contributes to the *opinion juris* essential to those international customs that establish a limited number of human rights in international law." *Ibidem*, p. 100.

¹⁰ cfr. MARKS Stephen, "Human rights and development," en JOSEPH, Sarah, McBeth, Adam, *Research handbook on international human rights law*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2010, pp. 169-172. "Governments have a moral obligation to establish such policies to ensure that development is advanced in a way that systematically integrates the five principles of equity, non-discrimination, participation, transparency and accountability. In this sense, it is an aspirational right to which governments may be politically committed but for which there are not yet legal remedies. The imperfect obligation to realize the right to development should be progressively translated into more specific obligations if the political posturing that has so far characterised this right can be replaced by specific policies and programmes with measurable outcomes. The current role of the Open-Ended Working Group on the Right to Development and its high-level task force offer an opportunity to move in that direction." *Ibidem*, p. 172.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo aprobada el 4 de diciembre de 1986, fue el texto fundador que abordó una mirada integral acerca del concepto de desarrollo en términos de los derechos humanos. Esta declaración de la Asamblea General contó con el voto positivo de 146 estados de la comunidad internacional,¹¹ la resolución en su artículo primero expresó que el derecho de todas las personas para participar en el desarrollo y beneficiarse de él:

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.¹²

El derecho al desarrollo se ha considerado por la comunidad internacional como un derecho humano,¹³ Incluso la Declaración de Viena reafirmó que el derecho al desarrollo es parte integral de los derechos fundamentales,¹⁴ inclusive, se ha aceptado de forma reiterada que forma parte de la tercera generación de derechos humanos,¹⁵ que es una expresión para referirse a los “derechos emergidos en la evolución más reciente del Estado democrático-social (Derechos y libertades, Estado social de derecho). Los

¹¹ cfr. COLLIARD, Claude-Albert, «L'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration sur le droit au développement », *Annuaire français de droit international*, volume 33, 1987. pp. 614-628.

¹² Artículo 1, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, Resolución 41/128, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986.

¹³ El consenso sobre el DHD ha quedado patente a través de las presentaciones individuales que los Estados miembros han presentado en el Grupo de Trabajo sobre el DHD, el derecho ha tenido recientemente el respaldo de la Unión Europea que de acuerdo a su comunicación: “ha apoyado completamente el derecho al desarrollo, en base a la invisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la naturaleza multidimensional de estrategias de desarrollo y los individuos como sujetos centrales del proceso de desarrollo.” European Union, Submission in follow-up to HRC resolution 19/34 “The right to development,” p. 2.

¹⁴ [10], *Declaración y Programa de Acción de Viena*, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993.

¹⁵ ANGHIE, Antony, “International human rights law and developing world perspective,” en SHEERAN, Scott, RODLEY, Sir Nigel, *Routledge handbook of international human rights law*, Routledge, New York, 2013, 118.

mismos responden a las nuevas demandas de la sociedad civil, así como también a los excepcionales desarrollos de la ciencia y de la técnica.”¹⁶

El derecho al desarrollo se sitúa así como un derecho de carácter emergente que fluctúa entre los derechos de la personalidad (libre desarrollo de la persona) y los derechos colectivos. La dignidad humana es su principal fundamento, por ello se considera que este derecho en su definición lleva intrínsecos los valores de la dignidad humana y la justicia.¹⁷

Desde que Naciones Unidas lo clasificó como pieza fundamental en el ejercicio de la gobernanza¹⁸, y su posterior aceptación, si bien no de manera expresa en los ordenamientos constitucionales;¹⁹ pues el único tratado internacional que lo regula de manera expresa es la Carta Africana sobre los derechos humanos de los pueblos, fue consolidándose un consenso global en torno a la definición del derecho al desarrollo y parte de su fundamentación se ha perfilado haciendo hincapié en los contenidos de este novedoso derecho, sobre todo en los temas relativos a los deberes de los Estados y en la idea de la “deontología del Estado.” Cronológicamente, el derecho al desarrollo no

¹⁶ MONTANARI, L., Trad. X. Lazo Fuentes, en PEGORARO, Lucio (Coord.), *Glosario de derecho público comparado*, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012, p. 140-141.

¹⁷ “The right to development, when properly implemented, can assist in improving human dignity.” DE FEYTER, Koen, “The right to development in Africa,” en BREMS, Eva, VAN DER Beken, Christophe, ABAY Yimer, Solomon, *Human Rights and Development: Legal Perspectives from and for Ethiopia*, Hotei Publishing, 2015, p. 49.

¹⁸ El Informe del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, del PNUD retoma las implicaciones de la gobernanza mundial con implicaciones para México: “El G-20, que incluye potencias emergentes como Brasil, China, la India y México, se está convirtiendo en el principal portavoz en materia de gobernanza mundial. No obstante, tiene claramente un carácter selectivo y no cuenta con una estructura, un mandato o una responsabilidad ante la prestación de bienes públicos y la reestructuración de la gobernanza mundial. El surgimiento del Sur brinda una oportunidad para hacer que la gobernanza mundial sea más representativa, además de hacerla más eficaz. Sin embargo, esta voluntad requiere nuevas soluciones para la cooperación y el liderazgo internacionales. Una opción es aprovechar propuestas anteriores y establecer un Foro de Líderes Mundiales. Gracias a una reunión ordinaria de este grupo representativo de jefes de Estado, se podría facilitar la cooperación para la reducción de la vulnerabilidad en los diferentes estados y en el sistema de las Naciones Unidas, incluidos la Secretaría de las Naciones Unidas, fondos y programas; el Fondo Monetario Internacional; la Organización Internacional del Trabajo; el Grupo del Banco Mundial; la Organización Mundial de la Salud; y, en último término, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Mundial del Comercio.” Ver: *Informe del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia*, PNUD, Nueva York, 2014, p. 144.

¹⁹ JIBRIL Ali, Abdi, “The right to development in Ethiopia,” en en BREMS, Eva, VAN DER Beken, Christophe, ABAY Yimer, Solomon, *Human Rights and Development: Legal Perspectives from and for Ethiopia*, Hotei Publishing, 2015, p. 93.

apareció configurado por primera vez por las Naciones Unidas, sino que fue declarado inicialmente en la “Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos (Carta de Banjul),” en el artículo 22 que declaró: “Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por igual de la herencia común de la humanidad. Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo.”²⁰ Según Baldwin y Morel dicho instrumento de protección regional de los derechos humanos le otorga tratamiento igual a la garantía de los derechos humanos en las tres “vertientes” económica, social y cultural.²¹

Dicho artículo, único en su género en la declaración, contiene en su primer párrafo el derecho al desarrollo dimensionado en las áreas económicas, sociales y culturales, hay una referencia hacia el universalismo como valor, pero también al principio de autodeterminación de los pueblos, mejor dicho en su acepción del derecho a la autodeterminación (invocado este último derecho en el artículo 20 de la citada carta).²² No cabe duda que esta clase de instrumentos normativos han sido objeto de diversas críticas,²³ unas que encuentran una frecuente aspiración e idealismo como sucede con en el

²⁰ La Carta Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos, ha sido definida como: — como el fundamento legal del sistema que potencialmente podría jugar el mismo rol que en el caso de los sistemas regionales de derechos humanos de Europa y América.” Cfr: HEYNS, Christof, *La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos*, en GÓMEZ Isa, Felipe, PUREZA, José Manuel, (Coord.), “La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI,” Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 394. Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos (Carta de Banjul), art. 22. Evidentemente hubo un desarrollo en el catálogo de los derechos humanos, que se vio muy influenciado con la emergencia de jurisdicciones nacionales en materia de derechos humanos: tales como la Corte Europea de Derechos Humanos, La Comisión Africana de los derechos humanos de los pueblos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Véase: WOODIWISS, A, *Making human rights work globally*, Glasshouse, London, 2003, p. 30.

²¹ BALDWIN, Clive, MOREL, Cynthia, “Group rights,” en EVANS, Malcom, MURRAY, Rachel, *The African charter on human and peoples’ rights. The system in practice 1986-2006*, 2º ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 273.

²² cfr. Artículo 20, *Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta De Banjul)*, op., cit.

²³ MUTUA, Makau, *Human rights: a political and cultural critique*, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 2002, p. 122. MUTUA, Makau, “The construction of the African Human Rights system: prospects and pitfalls,” en POWER, Samantha, ALLISON, Graham (Eds.), *Realizing human rights. Moving from inspiration to impact*, Palgrave Macmillan, United States of America, 2000, p.148.

discurso de los derechos humanos como en el caso de África. Las críticas se extienden por el uso retórico del lenguaje de los derechos humanos.²⁴

Posteriormente vendría la adopción en 1986 de la declaración sobre el derecho al desarrollo, sería un momento fundador que colocó al derecho al desarrollo en la palestra del debate internacional, por medio de la célebre resolución 41/128 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, su valor reside en que prestó atención a la negligencia de las instituciones internacionales de gobernanza y de los gobiernos nacionales ante las diferentes crisis que se han encarado globalmente.²⁵ Sin duda alguna el contexto que resultó de la nueva gobernanza encabezada por Naciones Unidas, constituyó un nuevo orden global trasladando formas de vida, culturas e instituciones han tenido que consensuar un concepto universal del desarrollo, un punto de inflexión se reflejó en el discurso de investidura del presidente de los Estados Unidos Harry Truman el 20 de Enero de 1949, conocido como discurso Punto IV en el que anunció la ayuda hacia los países pobres y se empleó por vez primera la voz subdesarrollo.²⁶ Así comenzó la edad del

²⁴ "The prevailing circumstance of human rights today is in fact largely the result of a continuous process of compromise. Pendulum swings between 'ought' and 'is,' with tendencies veering towards one or other end, are apparent across human rights as a whole and within individual rights at different times and conditions. Certainly for every example of reasonable compromise, there are multiple examples of stark and debilitating differences between human rights theory and practice. One might fairly argue that it has indeed ever been thus and certainly since the dawn of the modern (post-war) age of rights. But what is especially notable about the development of human rights thinking and action in more recent times (and particularly in the last 20 years or so) has been the heightened concern to interrogate the reality behind the rhetoric of rights." KINLEY, David, "Where hope meets expectation between human rights idealism and pragmatism," en KINLEY, David, SADURSKI, Wojciech, WALTON, Kevin, *Human rights. Old problems, new possibilities*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2013, pp. 236-237.

²⁵ MENDES, Errol P., *Global governance, and human rights and international law. Combatting the tragic flaw*, Routledge, New York, 2014, p. 176.

²⁶ cfr. Si se gusta profundizar en las implicaciones del discurso del presidente Harry Truman se recomienda consultar las siguientes publicaciones: KEELEY, Brian, *De l'aide au développement La lutte mondiale contre la pauvreté: La lutte mondiale contre la pauvreté*, OECD Publishing, Paris, 2012, p. 72. EASTERLY, William, *Le fardeau de l'homme blanc. L'échec des politiques occidentales d'aide aux pays pauvres*, Editions Markus Haller, Italie, 2009, p. 38. "These, then are the reasons why Point Four should be considered the opening act of a new era –not because reality is created by words, but because certain forms of discourse express more accurately than others a reality in the making, because certain texts bring out more clearly than others the episteme of an epoch, and finally –this is the performative aspect of the text –because power does not necessarily involve changing reality, but, rather, inserting it into a different problematic, proposing a new interpretation to kindle the illusion of change. All this is contained in Point four, which is thus an important moment in the ceaseless reinterpretation of the metaphor of change. Power always belongs to the one who can make

desarrollo, usando un término muy bien examinado por Rist.²⁷ Con esta etapa posterior a la segunda guerra mundial, se inició un claro impulso, en los Estados industriales por acelerar el nivel en los estándares de la calidad de vida de sus habitantes; situación que se extendió hacia las naciones emergentes, así las cosas el paradigma del desarrollo había comenzado en el epicentro de los debates a colocarse, dado que los procesos de industrialización alcanzaron su clímax en el siglo XX desplegando concentraciones de capital y brechas tecnológicas que dejaban en desventaja a los países menos adelantados.²⁸

Un factor que adquiriría notable incidencia en la teoría específica del derecho al desarrollo fue el medio ambiente. Consiste en una dicotomía que recoge dos derechos humanos distintos, el derecho al desarrollo, derecho central de esta investigación y el derecho humano al medio ambiente, ambos pertenecen a la tercera generación de los derechos humanos.²⁹ Como consecuencia de la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional del nexo estrecho entre medio ambiente y desarrollo en 1992, Naciones Unidas adoptará la Declaración sobre Ambiente y Desarrollo, conocida como la Declaración de Río, se colocaron 27 principios rectores acerca del tema del desarrollo sustentable, que corresponden a una visión sobre el desarrollo sustentable.³⁰

himself the master of words.” RIST, Gilbert, *The history of development. From western origins to global faith*, 3ed., Academic Foundation, New Delhi, 2009, p. 78.

²⁷ Rist sostiene una visión crítica del paradigma del desarrollo, que en sus inicios a través de las nuevas organizaciones internacionales se presentó al desarrollo como un conjunto de “medidas técnicas” que dejaban fuera un “debate real” acerca del “conocimiento científico, crecimiento de la productividad, expansión y mercado internacional.” RIST, Gilbert, *Ídem*.

²⁸ Departamento de Pensamiento Social Cristiano, *Una nueva voz para nuestra época (Populorum Progressio 47)*, 3ª, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2006, p.197.

²⁹ DE LAET, Debra, *The global struggle for human rights. Universal principles in world politics*, 2 ed., Cengage Learning, Stamford, 2015, p. 20.

³⁰ “In this sense, the Rio Declaration has more in common with the definition of sustainable development put forward in the 1987 Report of the World Commission on Environment and Development Report: ‘development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Arguably, in recognizing that the interests of present and future generations may diverge, the language of principle 3 of the Rio Declaration highlights the need to address this tension. As will be discussed next, although the preparatory work shows that the formulation of principle 3, read in its historical context, was intended to stress the importance of present generations (‘with their right to development’) rather than futures ones, over time, the emphasis has progressively moved away from development as a merely present concern and towards a conception more sensitive to the temporal dimensions.” MOLINARI, Claire, “From a right to development to intergenerational

La base legal del derecho humano al desarrollo también se benefició por medio de la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993,³¹ que en palabras de Dam de Jong fue el siguiente “punto de referencia”³² para el reforzamiento del derecho al desarrollo. En la Declaración de Viena los Estados convinieron en cooperar para la realización de los derechos humanos interdependientes del derecho al desarrollo.

Recientemente en el 2007, se formuló otra declaración, que también está intrínsecamente relacionada con el derecho al desarrollo se trata de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.³³ Tendiente para hacer efectiva la participación de los pueblos indígenas en el proceso del desarrollo. En la resolución se hace hincapié en un catálogo básico de los derechos de estas minorías: libre determinación; participación en la vida política, económica, social y cultural del Estado; derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad; derecho a los medios de información; derecho a no ser desplazados. Incorpora la perspectiva de género, de los niños, de los ancianos

equity,” en VIÑUALES, Jorge (Ed.), *The Rio declaration on environment and development. A commentary*, Oxford University Press, United States of America, 2015, pp. 140-141.

³¹ Sin duda alguna la inclusión del derecho al desarrollo como un derecho humano, tiene que ver con el largo debate que la fundamentación de los derechos humanos ha propiciado, el debate se retrotrae hasta los debates preparatorios de la declaración universal de los derechos humanos. Cfr WOODIWISS, Anthony, “The law cannot be enough. Human rights and the limits of legalism,” en Meckled-García, Saladin, Çali, Başak, *The Legalization of Human Rights, Multidisciplinary perspectives on human rights and human rights law*, Routledge, 2006, p. 34. Es de notar además que el derecho al desarrollo emerge en un tiempo convulso, es decir en los setenta la doctrina principalmente proveniente de países en desarrollo en los ámbitos académicos empieza a promover este nuevo derecho, como bien opina Felipe Gómez Isa: “A partir de los años 70 estamos asistiendo a la aparición de un conjunto de nuevos derechos humanos, nuevos derechos que tratan de responder a los retos más urgentes que tiene planeados ante sí la comunidad internacional...Diferentes son los factores que han propiciado, y siguen propiciando, la aparición de estos nuevos derechos humanos. En primer lugar, el proceso descolonizador de los años 60 supuso toda una revolución en la sociedad internacional y, por ende, en el ordenamiento jurídico llamada a regularla, el Derecho Internacional. Este cambio también ha dejado sentir su influencia en la teoría de los derechos humanos, que cada vez se va a orientar más hacia los problemas y necesidades concretas de la nueva categoría de países que había aparecido en la escena internacional, los países en vía de desarrollo.” GÓMEZ Isa, Felipe, “El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad,” *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos*, Núm. 1, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, p. 13. Véase también KICHMEIER, Felix, *The right to development – where do we stand? State of debate of the right to development*, Occasional Paper, Friedrich Ebert Stiftung, Geneva, 2006, p. 8.

³² DAM De Jong, Daniëlla, *International law and governance of natural resources in conflict and post-conflict situations*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2015, p. 97.

³³ *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.

y de los discapacitados. El nexo con la declaración sobre el derecho al desarrollo lo constituyen de forma especial las mujeres y los discapacitados.

El medio ambiente y los indígenas son ejes transversales en el derecho humano al desarrollo.

Sin embargo, el derecho al desarrollo, como casi todos los derechos de la generación continúa con un carácter disperso, propio de su status emergente, el derecho al desarrollo tiene un contenido reciente que como todos los derechos de tercera generación implica un contenido amplio, derivado de la teoría específica del derecho al desarrollo.³⁴ Su elaboración doctrinal es interdependiente de otras instituciones de gobernanza internacional como el mercado y las relaciones internacionales económicas³⁵ y de los derechos humanos emergentes. Afortunadamente la base legal del derecho al desarrollo se encuentra formulada de manera implícita en un consenso internacional unificado en torno a los derechos humanos, frente al hecho de que gran parte de estas clases de derechos se emergentes han sido adoptadas en los ordenamientos constitucionales más recientes, en aquellas fruto de las transiciones constitucionales en América Latina y en los países del Este Europeo. En el ámbito internacional los derechos humanos emergentes han sido consagrados en tratados internacionales específicos. Aunque tampoco puede menospreciarse el hecho de que frecuentemente algunos derechos como en el caso del derecho humano al desarrollo su base legal no suele presentarse bajo el auspicio de un tratado internacional. Atendiendo al sistema de fuentes la declaración y demás instrumentos internacionales subsecuentes,

³⁴ "The law of development is less well defined but includes such topics as international finance, aid, trade, investments, anti-corruption, and lending. The treaties and other standard-setting instruments considered part of international development law in one way or another contribute to national and international efforts to protect vested interests, while often introducing a discourse about raising the populations of developing countries out of poverty and establishing a rules-based international political economy conducive to human welfare." MARKS, Stephen, "Human rights and development," *op. cit.*, p. 167.

³⁵ CASSIMATIS, Anthony, *Human Rights Related Trade Measures under International Law: The Legality of Trade Measures Imposed in Response to Violations of Human Rights Obligations under General International Law*, BRILL, The Netherlands, 2007, p. 93.

le dan un carácter de obligatoriedad aun cuando se le conceda el carácter de *soft law*.³⁶

I.II Implicaciones del derecho humano al desarrollo en México

I.II.I. La reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011

Las relaciones internacionales afectan al derecho constitucional de manera positiva, la globalización influye al derecho. El derecho constitucional no ha podido permanecer omiso ante los efectos de la internacionalización de los derechos humanos. Ahora bien, aunque en nuestro país ya se contaba con un capítulo dogmático en la constitución mexicana, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, sienta en México un precedente importante, modernizó el sistema constitucional de los derechos humanos de nuestro país, que frente a los avances del derecho constitucional europeo e interamericano de los derechos humanos, registraba avances tímidos, incorporó nuevos derechos humanos al elenco constitucional, extendiendo la protección a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales

³⁶ Por *Soft Law* en el ámbito internacional se entienden normas de carácter convencional, pero que han alcanzado un sistema amplio y detallado de normas consuetudinarias e inderogables, primarias y secundarias, que integra un sistema, aun incompleto de garantías. Comprende una gran variedad de instrumentos: recomendaciones normativas, principios, declaraciones, programas de acción, etc, y cada vez cobran más relevancia como instrumentos auxiliares que proporcionan una comprensión más detallada de las fuentes legales y extralegales, a las que están expuesto los ordenamientos jurídicos. Pero tienen una gran influencia para la construcción teórica de las categorías de los derechos humanos. Véase: XIONG, Ping, *An international law perspective on the protection of human rights in the TRIPS agreement. An interpretation of the TRIPS agreement in relation to the right to health*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2012, p. 257. RODRÍGUEZ –Rivera, Luis E., “Is the human right to environment recognized under international law”, en Claude, Richard Pierre, WESTON H., Burns (Ed.), *Human rights in the world community Issues and action*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2006, p. 271. Me parece pertinente señalar que el derecho no es ajeno a la existencia de fuentes extra legales: “se definen fuentes legales los modos de producción del Derecho previstos expresamente por cada ordenamiento jurídico. No obstante, el Derecho puede originarse también más allá de los mecanismos legales, y en este caso es posible definir como fuente *extra ordinem* a aquella que no se contempla como fuente de producción del ordenamiento jurídico. Es ante la necesidad de legitimar una intervención de este tipo, por ejemplo, en casos de acontecimientos bélicos o en situaciones de emergencia, donde a menudo el ordenamiento no prevé instrumentos para afrontarlos.” Véase BAGNI S., Trad. C. Astudillo, en PEGORARO, Lucio (Coord.), *Glosario de derecho público comparado*, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012, p. 217-218.

ratificados por México, adopción del principio de interpretación conforme;³⁷ especificó los principios que deben guardar las autoridades para respetar los derechos humanos, especialmente por la consagración de los principios de universalidad; interdependencia; indivisibilidad y progresividad; obligación del Estado de reparar los derechos humanos.³⁸

La reforma al artículo primero de la Constitución Mexicana permea con principios generales a todo el ordenamiento jurídico mexicano; pero, en realidad el proceso de avance se remonta a años atrás, México como miembro integrante de las Naciones Unidas, ya había suscrito tratados internacionales en materia de derechos humanos, que brindan una protección tanto en materia de derechos humanos como humanitaria sin precedentes a la persona humana. Una de esas suscripciones planteadas por el Estado Mexicano fue la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.³⁹

Era imperioso que México actualizara sus normas dogmáticas pues se observaba un retraso frente a los tratados internacionales de derechos humanos que el país había ratificado. En el sistema de fuentes los Pactos de 1966, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, comprenden los derechos humanos básicos. No es casualidad que el artículo primero de la Declaración del Derecho al Desarrollo, prescriba que los pueblos “están facultados para participar del desarrollo económico, social, cultural y político.”⁴⁰ En parte, esto responde a la aspiración propia que impregnaba a los citados Pactos, dado,

³⁷ “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales.” Artículo 1º, 2º párr, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

³⁸ “En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Artículo 2º, 3º párr, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

³⁹ Considerado dentro de la clasificación tan discutida denominada generaciones de derechos humanos, el derecho al desarrollo se hizo conocido mundialmente a raíz de la declaración de las naciones unidas de 1986. Como se explicará en el transcurso del presente documento este derecho se plantea en el marco conceptual de la tercera generación de derechos humanos. Véase KABAZAKAL Arat, Zehra F., *Human rights worldwide*, Contemporary World Issues, United States of America, 2006. El derecho al desarrollo se contextualizó en la clasificación determinada como la tercera generación de derechos humanos: “Entre los derechos que han sido propuestos para formar parte de esta nueva frontera de los derechos humanos se encuentran los siguientes: el derecho al desarrollo,...el derecho a la paz; el derecho al medio ambiente; el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad o el derecho a la asistencia humanitaria.” GÓMEZ Isa, Felipe, *op. cit.*, p. 13.

⁴⁰ Artículo 1º, *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op., cit.*

que estos se referían a derechos de diverso contenido: civil, político, económico, social y cultural. Es cierta medida esto corresponde a una consecuencia natural que el seno de las naciones unidas se originó para darle vitalidad y presencia a los derechos que se situaban en los célebres pactos.

Uno de los principios de los derechos humanos básicos que surgirán con fuerza en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas es el principio de libre de determinación de los pueblos previsto en los Pactos de 1966, la declaración sobre el derecho al desarrollo en segundo párrafo, de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se afirma el nexo entre el derecho humano al desarrollo y el principio de libre determinación:

El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

El artículo tercero de la Declaración en comento, menciona quien es el sujeto obligado, estamos ante un sujeto soberano, nacional, pero que tiene también un carácter internacional, por suscribir tales relaciones: “Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.”⁴¹

El artículo segundo de la misma declaración, establece la calidad que tiene la persona humana, como beneficiario del desarrollo en su primer apartado: “La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.”⁴²

Sin embargo, en el segundo apartado del artículo segundo de la declaración sobre el derecho al desarrollo, se establece también una obligación de los seres humanos, obligación de participar en la obtención del desarrollo: “todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la

⁴¹ Artículo 3°, *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op., cit.*

⁴² Artículo 2°, *Declaración sobre el desarrollo, op., cit.*

responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.”

Y, en cuanto a los Estados, finalmente se fundamenta la tendencia en el plano internacional de que los Estados formulen políticas públicas en materia de desarrollo, frecuentemente denominadas Planes Nacionales de Desarrollo: “Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.”

Diez son los artículos que integran la Declaración y la importancia que le han dado las Naciones Unidas y los Estados es tal que las Naciones Unidas cuentan con un Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Además, existen múltiples agencias no solo de los países menos adelantados sino de los países desarrollados que promueven y financian el desarrollo sobre todo enfocado a los países con más carencias estructurales. Sin embargo la amplitud del tema del desarrollo, hace que este tema no sea exclusivo de unos o de otros, sino que es un tema global, que tiene que ser debatido en la academia nacional e internacional y de hecho así ha sido. México regula en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se conoce como el capítulo económico de la Constitución el fundamento constitucional del deber estatal del Estado de promover el desarrollo:

Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución.⁴³

I.III. Bases para la interpretación legal del derecho humano al desarrollo

I.III.I Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por otra parte, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) redactada en el año de 1969, esta Convención, crucial e importantísima, (columna vertebral del sistema interamericano de protección de los derechos humanos), señala una obligación estatal que denominan derecho progresivo, así el artículo 26 define lo que la Organización de los Estados Americanos, entiende por desarrollo progresivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.⁴⁴

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha considerado que esta clase de derechos se agrupan en una categoría que la doctrina de la Corte Interamericana ha denominado como “derecho progresivo,” por lo que a través de sendos pronunciamientos jurisprudenciales, se ha ratificado la existencia de este derecho que implica un deber estatal, por lo tanto se habla de una obligación, que se establece además como un deber y un derecho correlativo para los ciudadanos de América Latina.⁴⁵

⁴³ Artículo 25, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, op., cit.

⁴⁴ Artículo 26, *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, adoptada por la Conferencia Especializa Interamericana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969.

⁴⁵ SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales*, Tirant lo Blanch, México D.F., 2012, pp. 541-542. ⁴⁵(Caso Acevedo Buendía y otros

Me parece interesante, que este criterio jurisprudencial, supone una aproximación para delimitar que la Corte establece un criterio básico de la teoría de los derechos humanos y es que los derechos humanos son interdependientes, se recuerda que el principio de interdependencia de los derechos humanos, fue añadido como principio en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, sin embargo ningún principio es absoluto, por lo que la Corte correctamente estima en el criterio en comento: “que la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende de la situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica.”

Acorde a lo anterior, la Corte Interamericana fundamentándose en los argumentos del supremo tribunal europeo de derechos humanos, la Corte de Estrasburgo, hace suyo el argumento disertante, que aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se refiere básicamente a derechos clásicos, de naturaleza libertaria, “civiles y políticos,” ese criterio “puede extenderse a la esfera de los económicos y sociales,... ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio.”⁴⁶ Esto también puede vincularse a que “[...] los unos y los otros derechos no son ni naturalmente diferentes, ni desde su fundamentación, su formulación y su titularidad. En definitiva, existe una interdependencia e indivisibilidad entre los derechos que provoca lo que puede calificarse como una esencial continuidad entre ellos, tanto en su conceptualización, como en el cálculo de costes, en su alcance y en sus límites.”⁴⁷

Ahora, pasaremos al segundo criterio que se agrupa en la materia de desarrollo progresivo,⁴⁸ y que corresponde también a un criterio jurisprudencial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.⁴⁹

(“Cesantes y jubilados de la contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).

⁴⁶ *Ídem.*, p. 542.

⁴⁷ ROSETTI, Andrés, “¿Los derechos sociales como derechos de segunda? Sobre las generaciones de derechos y las diferencias con los derechos de primera,” en ESPINOZA de los Monteros, Javier, ORDÓÑEZ, Jorge, *Los derechos sociales en el Estado Constitucional*, Tirant lo Blanch, México, 2013, p. 314.

⁴⁸ No debemos confundir desarrollo progresivo con derecho humano al desarrollo, aunque están cercanamente relacionados, por desarrollo progresivo se entiende que “Los tratados internacionales referidos a la protección de los derechos humanos ofrecen un marco apropiado para el desarrollo progresivo de su contenido. Frecuentemente la intención de las partes ha

Este criterio jurisprudencial, de la Corte Interamericana, también resulta de gran utilidad, primero, porque fue una decisión soberana, de los Estados miembros, dotar a la Convención, de una norma como el artículo 26, que supone de entrada una exigibilidad, como menciona, el numeral nació del interés de los Estados: “por consignar una “mención directa” a los “derechos” económicos, sociales y culturales; “una disposición que establezca cierta obligatoriedad jurídica [...] en su conocimiento y aplicación”; así como “los [respectivos] mecanismos [para su] promoción y protección.”⁵⁰ Además, fueron los propios estados los que subrayaron la necesidad de: “...dar a los derechos económicos, sociales y culturales la máxima protección compatible con las condiciones peculiares a la gran mayoría de los Estados Americanos.”⁵¹ En vista de lo anterior, corresponde ahora citar el tercer criterio jurisprudencial, que versa también sobre la materia y que refuerza la doctrina de la corte interamericana en materia de desarrollo.⁵²⁵³ En la misma línea, la Comisión

sido la de definir, de algún modo a esas convenciones como una suerte de punto de partida, que establece una garantía mínima, cuyas restricciones están prohibidas, pero cuyas ampliaciones están autorizadas. Esa intención de las partes, junto con la naturaleza misma que se ha reconocido a dichos instrumentos y las particularidades que se desprenden de la aplicación de las reglas de interpretación en este ámbito, constituyen las bases sobre las que el régimen evoluciona positivamente. El análisis de los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos revela como ellos, en sí mismos, contienen el principio de su desarrollo progresivo. Puede delinarse, en primer término, un marco general (I) dentro del cual la intención de quienes los suscriben, se manifiesta, expresa o implícitamente, en el sentido de impulsar un proceso de desarrollo progresivo, dentro del cual las diversas convenciones o declaraciones representan un paso que no agota la instauración del sistema. Por otro lado, en parte como consecuencia de la anterior circunstancia, la aplicación de las reglas de interpretación (II) al derecho internacional de los derechos humanos ofrece unas modalidades particulares que tienden a extender el alcance del sistema o, por lo menos, a optar por la más amplia entre las posibles interpretaciones que pueda motivar un determinado texto.” Véase: NIKKEN, Pedro, *La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo*, Civitas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Madrid, 1987, pp. 75-76.

⁴⁹ SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales*, op. cit., pp. 542-543. (Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).

⁵⁰ *Ídem.*

⁵¹ *Ídem.*

⁵² [Nota de la Jurisprudencia de la Corte] El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que “[c]uando estudie una comunicación en que se afirme que un Estado Parte no ha adoptado medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, [...] examinará las medidas, legislativas o de otra índole, que el Estado Parte haya adoptado efectivamente. Para determinar si esas medidas son ‘adecuadas’ o ‘razonables’, el Comité ‘podrá tener en cuenta, entre otras, las consideraciones siguientes: a) [h]asta qué punto las medidas adoptadas fueron deliberadas, concretas y orientadas al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; b) [s]i el Estado Parte ejerció sus facultades discrecionales de manera no discriminatoria y no arbitraria; c) [s]i la decisión del Estado Parte de no asignar recursos disponibles se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos; d) [e]n caso

Interamericana ha considerado que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá “determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso.”⁵⁴ Por todo lo expuesto, cabe afirmar que la regresividad resulta justificable cuando de derechos económicos, sociales y culturales se trate (Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).⁵⁵

Este criterio, menciona que las medidas que el Estado debe incorporar para obtener el desarrollo progresivo de derechos económicos, sociales y culturales, están sujetas a los principios de progresividad y que la regresividad en materia de esos derechos resulta justificable, por lo que se observa una obligación de hacer que tiene el Estado como deber, aunque también una

de que no existan varias opciones en materia de normas, si el Estado Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los derechos reconocidos en el Pacto; e) [e]l marco cronológico en que se adoptaron las medidas [, y] f) [s]i las medidas se adoptaron teniendo en cuenta la precaria situación de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, si las medidas fueron no discriminatorias y si se dio prioridad a las situaciones graves o de riesgo.” Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C.12/2007/1,38° Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 8.

⁵³ [Nota de la Jurisprudencia de la Corte] Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “[e]n caso de que un Estado Parte aduzca ‘limitaciones de recursos’ para explicar cualquier medida regresiva que haya adoptado, [...] examinará esa información en función de las circunstancias concretas del país de que se trate y con arreglo a los siguientes criterios objetivos: a) [e]l nivel de desarrollo del país; b) [l]a gravedad de la presunta infracción, teniendo particularmente en cuenta si la situación afecta al disfrute de los derechos básicos enunciados en el Pacto; c) [l]a situación económica del país en ese momento, teniendo particularmente en cuenta si el país atraviesa un período de recesión económica; d) [l]a existencia de otras necesidades importantes que el Estado Parte deba satisfacer con los recursos limitados de que dispone; por ejemplo, debido a un reciente desastre natural o a un reciente conflicto armado interno o internacional; e) [s]i el Estado Parte trató de encontrar opciones de bajo costo [, y] f) [s]i el Estado Parte recabó cooperación y asistencia de la comunidad internacional o rechazó sin motivos suficientes los recursos ofrecidos por la comunidad internacional para la aplicación de lo dispuesto en el Pacto.” Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C-12/2007/1,38° Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 10. (Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).

⁵⁴ Informe de Admisibilidad y Fondo No. 38/09, Caso 12.670, Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras Vs. Perú, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de marzo de 2009, párr.. 140 a 147.

⁵⁵ SILVA García, Fernando, Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. *Criterios esenciales*, op. cit., pp. 543-544.

flexibilidad acorde a sus capacidades, por si bien este deber estatal de emitir diversas providencias en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se encuentra condicionado pues según lo señala la Corte Interamericana: “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo [...] y las dificultades que implica cada país el asegurar [dicha] efectividad.”⁵⁶

La Corte Interamericana por medio de la jurisprudencia realiza un razonamiento jurídico, donde se observa que el argumento, se plantea en tres fuentes jurídicas, la Convención en su artículo 26, el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como sus protocolos facultativos, y finalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales quisiera establecer unos planteamientos debido a que la Corte los menciona en sus argumentos que conformarían los criterios jurisprudenciales.

Por ejemplo, Héctor Fix –Zamudio y Salvador Valencia Carmona, comentan que con la internacionalización de los derechos humanos, posterior a la segunda guerra mundial, ocurrió tal fenómeno de internacionalización en el tema de los derechos humanos, fue así que con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Bogotá, ambas del año de 1948, la primera de diciembre y la segunda de mayo, se comenzó a integrar de manera primaria el sistema internacional de los derechos humanos, existía cierto, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que establecía también a los derechos humanos, como un objetivo de la unión de los Estados miembros, sin embargo, estas declaraciones por sí solas y por la naturaleza jurídica que la propia declaración tiene “[...] no tuvieron un carácter vinculante.”⁵⁷

El resultado, es conocido, y como bien dicen los tratadistas se resume en la siguiente cita: “Más tarde, para hacer obligatoria la Declaración Universal, el 16 de diciembre de 1966, se adoptaron y abrieron a ratificación tres

⁵⁶ *Ídem.*

⁵⁷ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, México, Ed. Porrúa, 2012, p. 427.

documentos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo de este último; tales instrumentos entraron en vigor en 1976.”⁵⁸

Ello, en correlación al plano internacional, pues como se sabe en el ámbito regional, interamericano, que es el que le concierne a México, por proximidad geográfica y estratégica, “[...] por lo que se refiere a la Declaración Americana se le otorgó fuerza jurídica a través del Pacto de San José, firmado el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor el 28 de julio de 1978.”⁵⁹ El proceso no cesa, lo que sí cabe destacar es que los derechos humanos, con su internacionalización y su posicionamiento en el debate internacional de los estados transformaron también las ideas de que el derecho internacional, solo tenía por objeto, las relaciones entre los estados, con carácter de iguales, el fenómeno de la internacionalización de los derechos humanos, puso de relieve una transición que es propia del pensamiento liberal, en esto César Sepúlveda confirma lo siguiente:

No sólo significó un cambio vital en la esencia del derecho internacional, pues esta rama, pensada para las relaciones entre los Estados y sus derechos propios, tuvo que ensancharse para tratar también los derechos de los individuos, lo que a su vez produjo un impacto en el campo del dominio reservado de los Estados, introduciendo elementos nuevos y hasta cierto punto perturbadores en el derecho interno de los Estados.⁶⁰

Los razonamientos elaborados por la Corte Interamericana, que tomaron como fundamento las sentencias del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que a su vez su fundamentaron en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, encontraron una interrelación, y una interdependencia⁶¹

⁵⁸ *Ibidem.*, pp. 427-428.

⁵⁹ *Ibidem.*, p. 428.

⁶⁰ SEPÚLVEDA, Cesar, *Estudios sobre derecho internacional y derechos humanos*, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Colección Manuales (91/7), México, 1991, p. 17.

⁶¹ Pues bien las dos generaciones de derechos humanos propiciaron, que la aparición de los principios de indivisibilidad e interdependencia, principios que la Constitución Mexicana declara en su artículo 1, refiriéndose a los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. Esto no sucedió por obra de la casualidad, la aparición de las dos generaciones de derechos humanos: la de los derechos civiles y políticos y el pacto de los

en estos instrumentos jurídicos, planteando que el desarrollo progresivo, y el deber del estado de adoptar medidas progresivas en materia de derechos económicos, culturales y sociales, no era opuesto a la materia de los derechos civiles y políticos, sino que se armonizan, se establece como un deber, y está claro, limitado a las circunstancias propias de los países.⁶² En el ámbito europeo, Josep Casadevall, indica: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos no se limita a proclamar la serie de derechos y libertades fundamentales que se han enumerado.”⁶³

Respecto del ámbito europeo, se observa la tendencia a ampliar el marco de protección en materia de los derechos humanos, en el mismo orden de ideas, Josep Casadevall, comenta: “Más allá de proclamar derechos y libertades, y aquí radica la importancia y el fundamento de su efectividad, el Convenio Europeo reconoce tales derechos y libertades y a efectos de aplicar su contenido, de declarar las violaciones constatadas y, si procede, atribuir una reparación equitativa a la víctima, establece unos mecanismos de garantía y de control convencional.”⁶⁴ La tendencia que a mí me interesa, es que el Tribunal de Estrasburgo lo que pretende es ampliar los niveles de protección,

derechos económicos, sociales y culturales, ocasionó que ningún pacto fuera posible sin el cumplimiento del otro, para alcanzar los objetivos del primero, era necesario alcanzar los objetivos del segundo y viceversa, en la medida en que las circunstancias nacionales lo permitieran, sin embargo el deseo y la aspiración y la preocupación de la comunidad internacional en su conjunto, motivo y admitió estos pactos con los consecuentes principios que de manera inexorable fueron generando, como de manera estupenda lo afirma Felipe Gómez Isa: “A pesar de la existencia y aparición histórica de las dos generaciones de derechos humanos, que acabamos de analizar, estos dos tipos de derechos no son dos compartimientos-estancos, dos categorías completamente autónomas, sino que ambas generaciones van a estar profundamente interrelacionadas. Esta compenetración de los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por otro, ya se puso de manifiesto en la Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968. En el Acta Final de esta Conferencia se proclamaba la indivisibilidad e interdependencia de ambos tipos de derechos. Esta idea de una enorme importancia en la práctica de los derechos humanos, es reiterada en la resolución 31/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1977.” GÓMEZ Isa, Felipe, *op. cit.*, p. 12.

⁶² Si bien, el desarrollo es un tema complejo, y que se visualiza desde dos ópticas correlativas, como deber del Estado y derecho de los ciudadanos, el tema continua pendiente, por eso Victor Conde opina que “el desarrollo es un concepto complejo y controversial, difícil de definir, generalmente definido con dos acepciones: como un proceso y además como un específico y sustantivo derecho humano” En el original del inglés: “Development is a complex, controversial, and difficult concept to define, both generally as a process and as a specific substantive human right.” CONDÉ, Victor, *A Hand book of international human rights terminology*, 2º, Nebraska Press, 2004, pp. 65.

⁶³ CASADEVALL, Josep, *El convenio europeo de derechos humanos, el tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 46.

⁶⁴ CASADEVALL, Josep, *op. cit.*, p. 46.

admitiendo una interdependencia⁶⁵ y un contenido amplio de los derechos humanos, así en líneas anteriores Casadevall menciona:

Esta misión ya fue cumplida en su día con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y después con los convenios internacionales firmados en el marco de las Naciones Unidas, entre otros: sobre prevención y sanción de genocidios; contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes; para la eliminación de cualquier discriminación racial; para proteger los derechos de los refugiados y apátridas; los derechos de los niños y la igualdad de la mujer, sin olvidar el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales y el relativo a los derechos civiles y políticos.⁶⁶

Evidentemente, y retomando el ámbito de la teoría de los derechos humanos, la propia argumentación y fundamentación de los derechos con contenido económico, social y cultural, y esto vale para las dos generaciones de derechos (segunda y tercera), es problemática,⁶⁷ de entrada los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como derechos de segunda generación, se han relacionado como derechos que contienen preceptos de igualdad, porque como dicen Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, "...tienen que realizarse a través o por medio del Estado."⁶⁸ Esto

⁶⁵ En cuanto a la interdependencia como principio general de los derechos humanos, vale añadir que "...Más allá de toda discusión que genera esta división y de la cuestión de compatibilidad o tensión entre las distintas "generaciones," existe actualmente - especialmente en el derecho internacional no sin una buena dosis de retórica- la conocida posición "oficial" de las Naciones Unidas en el sentido de defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos, que considero correcta." ROSETTI, Andrés, *op. cit.*, p. 312.

⁶⁶ *Ídem.*

⁶⁷ "Human rights formerly known as solidarity rights or rights of solidarity. These latter terms should not be confused with the so-called "Right to solidarity," which is itself one of the Third Generation of human rights. They are complex, ill-defined conceptually and collective. Their validity as human rights is highly disputed. In theory, they are human rights that can only be realized through the concerted and good faith efforts of all actors in the international scene: states, NGO's, individual, IGOS, and other public and private bodies, that is, the international community as a whole. Their genesis and advancement was rather political and ideological, coming mostly from the cold war eastern bloc and third world/developing states. "Véase: CONDÉ, Victor, *op. cit.*, pp. 258- 259.

⁶⁸ *Ídem.*

corresponde según la academia y la doctrina supranacional (ámbito europeo e interamericano): "...una obligación de hacer,"⁶⁹ inherente al Estado.

Sin embargo esta obligación de hacer, como lo señala la propia doctrina se encuentra limitada por las condiciones económicas, sociales y culturales de cada estado, por lo que esta obligación de hacer no se debe llevar hasta sus últimas consecuencias hasta degenerar en un estatismo protagónico, excesivamente interventor, como en experiencias pasadas.⁷⁰ El Estado a través de medidas estratégicas, que involucren a los agentes económicos del ámbito privado, genera medidas que tengan un impacto en el beneficio del interés general.

El derecho al desarrollo y que es el objeto principal de la tesis, se centra en lo que la doctrina internacionalista y la teoría de los derechos humanos han aceptado como "derechos de solidaridad o de tercera generación," se trata de un cúmulo disperso a través de la legislación internacional y nacional, que la doctrina judicial, como se observa con las jurisprudencias y las fuentes citadas han remarcado, abrevio un poco aquí en esto, porque como dije, el derecho al desarrollo se ha focalizado en la tercera generación de los derechos humanos,

⁶⁹ *Ídem.*

⁷⁰ Por eso en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido a bien desarrollar jurisprudencia que claramente delimita mediante el método jurídico, la naturaleza de las condiciones jurídicas y de los derechos, a fin de evitar confusiones conceptuales, como la siguiente jurisprudencia que distingue debidamente entre pobreza y vulnerabilidad, aspectos propios a analizar en el tema de investigación doctoral: **"POBREZA Y VULNERABILIDAD. SUS DIFERENCIAS Y RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.** Conceptualmente la pobreza es de menor extensión que la vulnerabilidad. De acuerdo a la citada Ley la pobreza no es el único factor que puede posicionar a una persona o grupo en una situación de vulnerabilidad. Desde la misma definición legal de grupos vulnerables se hace referencia a la discriminación la cual, desde el concepto de discriminación contenido en el artículo [10. de la Constitución Federal](#) comprende una multitud de categorías que pueden provocarla: origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil; además la lista no es limitativa sino enunciativa, dejando abierta la posibilidad de nuevas categorías al incluir "cualquier otra que atente contra la dignidad humana". Pleno, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. Tesis:P./J. 86/2009, [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 1073.

que abarca derechos tales como “intereses difusos, que se inspiran en principios generales o universales cuyo respeto reclama la humanidad.”⁷¹

La tercera generación de derechos humanos, que surge a mediados del siglo XX,⁷² se considera que corresponde a un ámbito más cercano al derecho internacional de los derechos humanos, hay autores que clasifican a los derechos identificados con esta generación como derechos colectivos o difusos. Entre sus derechos más reconocidos se encuentran los llamados derechos “ecológicos (al medio ambiente sano)...derechos de los consumidores y usuarios, el derecho al desarrollo y a la paz, algunos derechos colectivos.”⁷³

Cabe añadir que entre los derechos más sobresalientes que se encuentran agrupados en esta clasificación, destacan: el derecho a la paz, a la libre autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho a beneficiarse del patrimonio de la humanidad.⁷⁴

I.III.II La jurisprudencia mexicana

Por lo que respecta a México, en la doctrina judicial, se encuentra una tesis aislada desarrollada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que pone de relieve que el medio ambiente es adecuado para el desarrollo y bienestar, lo relaciona con otros derechos fundamentales y principios constitucionales que intervienen en su protección. El razonamiento del tribunal que constituye un criterio, aunque aún no jurisprudencial, pero que sienta un precedente judicial en la tesis: Medio Ambiente Adecuado para el Desarrollo y Bienestar. Su Relación con otros Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales que Intervienen en su Protección.⁷⁵

⁷¹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, op. cit., p. 429. La agrupación de estos derechos ha sido aceptada por la doctrina, véase también: CONDÉ, Víctor, op. cit., p. 259.

⁷² Véase ROSETTI, Andrés, op. cit., p. 311.

⁷³ *Ídem.*

⁷⁴ *Ídem.*, p. 430.

⁷⁵ Medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Su relación con otros derechos fundamentales y principios constitucionales que intervienen en su protección, Cuarto Tribunal

Es posible distinguir en esta clase de precedentes judiciales un enfoque hermenéutico del desarrollo en relación con el medio ambiente, porque para argumentar los contenidos del derecho al medio ambiente, el juzgador interpreta el artículo 25 de la constitución con una óptica amplia, neoconstitucional, el juzgador interpreta que por el ser el desarrollo sustentable un objeto de interés general, el medio ambiente y los recursos naturales son de interés social, por lo que del propio derecho fundamental consagrado en la Constitución Mexicana al derecho ambiente, el juzgador hace una interpretación hermenéutica considerando que el derecho al medio ambiente, se amplía en un derecho fundamental al desarrollo sustentable, de hecho el juzgador va más lejos, al relacionar el citado derecho, con dos derechos de corte liberal como lo son el de seguridad jurídica y el de libertad de trabajo. En conclusión, el juzgador se fundamenta en el artículo primero de la constitución, que irradia en todo el ordenamiento jurídico mexicano y en nuestro sistema de derechos fundamentales, transcribo nuevamente el argumento final de la citada jurisprudencia a continuación:

[...] de ahí los principios de interpretación y aplicación sistemática, que se orientan a conseguir la unidad, coherencia, plenitud, eficacia y coexistencia inter-sistémica de los varios bienes jurídicos tutelados, reconociendo la interpretación de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Federal.⁷⁶

En el ámbito supranacional la Corte Internacional de Justicia ha creado jurisprudencia que arroja luces para justificar el nexo entre desarrollo y medio ambiente, sucedió con la sentencia del *caso concerniente al proyecto Gabčíkovo-Nagymaros*, la Corte, reconoció la intervención del hombre en la naturaleza en el transcurso de la historia, aduciendo que frecuentemente el uso de la naturaleza no respetó las consecuencias en el medio ambiente. Alega que con el surgimiento de las ideas científicas y la concientización de la

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo directo 167/2011. Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez, [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1807.

⁷⁶ *Ídem*.

humanidad acerca del valor del medio ambiente, se han buscado y adoptado: “...nuevas normas y estándares,” en diversos instrumentos en las últimas dos décadas, con el objeto de pensar en las generaciones futuras. Estima que estas recientes normas tienen un gran “peso” no para romper con el pasado, sino para mantener la continuidad del progreso, definiendo a esta situación como una “necesidad de conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente,” esta necesidad es la que da identidad al “concepto de desarrollo sostenible.”⁷⁷

La tesis aislada, que igualmente cumple una función de precedente judicial y que a continuación comento, aunque no menciona directamente el tema del desarrollo, por referirse a un derecho de contenido económico-social, da señales de recientes pronunciamientos del poder judicial en estas materias que son muy delicadas y que están sujetas, claro a las circunstancias especiales de cada Estado, como ya se señaló, sin embargo en la teoría actual de los derechos humanos, los derechos por estar sujetos a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se deben argumentar con un contenido amplio, interpretativo, neoconstitucional, pues esto último, es la tendencia o metodología que se desprende del criterio subsiguiente que fue elaborado por la primera sala constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ponencia del ministro Cossío Díaz: Derecho a la salud. Su regulación en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.⁷⁸

Esta tesis (criterio) me parece que también es útil, para la clasificación del desarrollo progresivo y contribuye como un fundamento práctico, para conseguir mi objetivo que es delimitar “el Derecho al desarrollo como finalidad

⁷⁷ *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros project*, 1997, I.C.J., Rep. 7, Judgment of 25 sept 1997, p. 75.

⁷⁸ Derecho a la salud. Su regulación en el artículo [4o. De la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos](#) y su complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, Primera Sala, Amparo en revisión 173/2008, Yaritza Lissete Reséndiz Estrada, 30 de abril de 2008, Cinco votos, Ponente: José Ramón Cossío Díaz, Secretaria: Dolores Rueda Aguilar, [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Pág. 457.

del Estado y las Instituciones que participan” esto implica, que se elabore una sistematización del derecho al desarrollo en la que concurre un consenso entre la opinión de la academia, de la jurisprudencia y de la legislación, para la delimitación del derecho y la sistematización de las instituciones que participan del derecho al desarrollo. También me parece oportuno que el ministro ponente, que aunque el derecho a la salud, es un derecho consagrado en diversos instrumentos del plano nacional-constitucional, interamericano e internacional, y que es una obligación del Estado proveer medidas para el desarrollo del disfrute de este derecho, esta obligación se extiende a la privatización del sector de la salud, donde lo que se tiene que supervisar es: “[...] que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia.”⁷⁹ Criterio que ha sido recogido también por la doctrina judicial en México, pues han germinado algunos criterios jurisprudenciales como este: “Derechos humanos. El relativo a una vivienda digna y decorosa debe ser analizado a la luz de los principios plasmados en la constitución federal y tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que favorezca en todo momento a las personas (aplicación del artículo 1o., párrafo segundo, constitucional *-principio pro homine-*)., en el mencionado criterio se interpreta que aquellos derechos humanos de la persona como el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, derecho de acceso a la seguridad social, todos estos reconocidos tanto por la Constitución como en tratados internacionales de derechos humanos, expone que por lo que hace al derecho a la vivienda Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha sostenido el criterio de que el derecho a la vivienda debe incorporar elementos y contenido mínimo para estar en condiciones de: “poder considerar que las personas tienen su derecho a la vivienda plenamente garantizado.” Se trata de las condiciones de

⁷⁹ Derecho a la salud. Su regulación en el artículo 4o. De la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y su complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, *op. cit.*

accesibilidad en la adquisición de un inmueble; acceso al agua potable; la seguridad jurídica; habitabilidad y la adecuación cultural, por lo que en relación con el derecho a la vivienda la interpretación debe seguir los principios consagrados en la constitución y en los tratados internacionales, de modo que la interpretación sea en todo momento la más favorable para el individuo. Es el principio *pro homine*.⁸⁰

La tesis anterior, ilustra una interpretación amplia que el juzgador realizó de lo que él consideró derecho fundamental el acceso a la seguridad social, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa, como derechos consagrados en la Constitución Federal y que se encuentran dispersos también en varias legislaciones de diferentes órdenes. Es interesante, que esta formulación se hace con motivo de una expropiación, por lo que el argumento en ese caso me parece válido.

El juzgador utilizó en el razonamiento precedente, el principio Pro – Homine contemplado en la norma fundamental, para dar a través de una interpretación, “la protección más amplia a las personas,” que es el elemento constitutivo del principio pro homine. Aunque no menciona el concepto de desarrollo, por vincular derechos de diferente orden, especialmente los económicos, sociales y culturales, que fueron considerados por la corte interamericana, como derechos que se relacionan con el contenido del derecho al desarrollo y del derecho progresivo, - como una característica que identifica la metodología propia de la teoría de los derechos humanos, para hacer posible la incorporación de los derechos fundamentales y humanos en la esfera correspondiente-, sientan un precedente de interrelación, en este orden.

El derecho al desarrollo se ha ido consagrando paulatinamente como un valor jurídico, su positivación cobró enorme impulso en el ámbito internacional,

⁸⁰ Derechos humanos. El relativo a una vivienda digna y decorosa debe ser analizado a la luz de los principios plasmados en la constitución federal y tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que favorezca en todo momento a las personas (Aplicación del artículo 1o., párrafo segundo, constitucional -Principio Pro Homine-).primer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito. Amparo directo 251/2011. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez, Secretaria: Ángelica Torres Fuentes. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4335.

pero fue propiciada por los ámbitos de cooperación regional (Caso África y del Sistema Interamericano); y tiene las siguientes características: "...forma parte del derecho internacional positivo,... resulta de una síntesis de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, es un derecho emergente, en formación, en proceso de positivación."⁸¹

En cuanto a la doctrina judicial mexicana, se ha elevado al rango de precedente judicial, el derecho al mínimo vital, conocido como renta básica, esta clase de derecho, es un elemento subsecuente de los elementos jurídicos que integran al derecho al desarrollo en sentido amplio, me parece útil añadir que en una tesis aislada, la primera sala de la Suprema Corte, en ponencia del Ministro José Ramón Cossío, admitió la constitucionalidad de este derecho, a partir de una argumentación sistemática, extensiva y neoconstitucional de los derechos humanos la tesis titulada: Derecho al Mínimo Vital en el Orden Constitucional Mexicano, recoge el criterio de que: la interpretación sistemática de los derechos fundamentales constitucionales consagrados en la Constitución mexicana en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123, permiten colegir la existencia de un derecho al mínimo vital, que se manifiesta en: "el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente." Para el Ministro Jose Ramón Cossío puede afirmarse la que este entramado constitucional constituye un parámetro que describe el contenido del derecho fundamental del derecho al mínimo vital, integrando las: competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias, medidas positivas o negativas que procuren que la persona cuente: "con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna."⁸²

El derecho al mínimo vital ha sido definido por la doctrina como un derecho que "cumple la función de asegurar a toda persona los medios necesarios para una existencia digna. Con ello la jurisdicción social de la tutela

⁸¹ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1995, 64.

⁸² Tesis: 1a. XCVII/2007, Primera Sala, Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Omar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 793.

no se convierte en la lámpara de Aladino. El derecho fundamental al mínimo vital sólo es reconocido en casos de urgencia, en los que la subsistencia de la persona o su familia se ve comprometida. La jurisdicción social de la tutela no es una de máximos, donde se garantice la justicia plena, sino una de mínimos, que impide que la persona caiga por debajo del nivel de vida que le permite reconocerse y ser reconocida como una persona digna de igual consideración y respeto por los demás.”⁸³

En que se relaciona el derecho al mínimo vital con la renta básica de ciudadanía (RBC), pues en que conceptualmente la renta básica constituye: “un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a garantizar a cada miembro de la sociedad como un derecho, y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o residencia.”⁸⁴ Este derecho, tiene como característica principal que: es un derecho universal, y no requiere trabajar a cambio, pero esto entendido en que se establece un sistema de garantías de renta básica, que se transfiere en la forma de impuesto negativo sobre la renta (INR), existen un sistema parcial de renta básica en *Alaska Alaska Permanent Fund*, un subsidio similar en Gran Bretaña, que pueden considerarse como ejemplos de políticas públicas, desplegadas por los gobiernos de estos países, sin embargo, la constitucionalidad del derecho al mínimo vital es también un ejemplo claro, de esta interrelación entre derecho fundamental al mínimo vital y la renta básica (RBC), en la Unión Europea, existen medidas de bonificación al empleo,⁸⁵ que son recompensas por cada empleo remunerado y evitar así la dependencia de las personas hacia políticas asistenciales, es también un ejemplo de pasos en esa dirección.

Definitivamente y como se persigue en el presente proyecto de investigación doctoral, el desarrollo solo importa para el derecho, en tanto tenga un valor jurídico, alcance al que por medio de la moderna teoría de los derechos humanos-fundamentales se puede arribar por vía de la

⁸³ ARANGO, Rodolfo, “La jurisdicción social de la tutela,” en MOLINA Betancur, Carlos Mario (Ed.), *Corte Constitucional. 10 años Balances y perspectivas*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Colombia, 2003, p. 116.

⁸⁴ PINILLA Pallejá, Rafael, *Más allá del bienestar. La renta básica de la ciudadanía como innovación social basada en la evidencia*, Icaria, Barcelona, 2006, p. 111.

⁸⁵ PINILLA Pallejá, Rafael, *op. cit.*, p. 207.

argumentación y la interpretación neoconstitucional con carácter hermenéutico. Pero el valor jurídico tiene que estar plenamente justificado, no se puede acudir sin tener claro el sistema fuentes y los principios y valores que dan fuerza para plantear de manera analítica al desarrollo como un valor jurídico, finalidad estatal y el conjunto de instituciones del Estado que participan de este valor. Así que de entrada, cuando se establece una finalidad por parte del estado, ya se habla entonces de un beneficiario, es decir se habla de derechos. Por ello, es correcta la opinión de Felipe Gómez Isa cuando expresa:

Aunque hay que reconocer que la lista de derechos no es, ni lo será nunca, una lista cerrada y que las nuevas necesidades van demandando progresivamente la aparición de nuevos derechos, debemos ser conscientes de que no toda nueva necesidad tiene que acabar, irremediablemente, en el reconocimiento de un nuevo derecho humano. En este sentido S. Marks ha afirmado que puede existir la tentación de convertir cualquier proposición deseable en un derecho humano.⁸⁶

Evidentemente hay una notable influencia del ámbito internacional, producto de la internacionalización de los derechos humanos, que de manera paralela ha impactado en los ordenamientos nacionales, hoy estamos ante una textura abierta de convivencia entre distintos ordenamientos jurídicos nacionales, por lo que el ámbito nacional cada vez está más influenciado por proyectos globales jurídicos y políticos. Después de todo el discurso de los derechos humanos, es un discurso global/universal. Por lo que es entendible que de la propia doctrina hayan emanado ideas que plantean distintos

⁸⁶ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 65. Asimismo Rafael de Asís Roig correctamente expresa: “En reiteradas ocasiones he señalado que no existe una única contestación a la pregunta ¿que son los derechos humanos?. A pesar de que se trata de una idea extendida por todo el planeta y de un término que forma parte del lenguaje jurídico, político y ético de todo el país, existen diferentes maneras de entender los derechos, lo que implica que es posible hablar de diferentes teorías sobre los derechos humanos.” Y prosigue correctamente al referir: “El proceso de generalización supone la ampliación de la titularidad de los derechos a otros sectores de la población. Es así un intento de dar coherencia al discurso de los derechos. Un discurso de los derechos que entiende a estos como naturales, esto es como pertenecientes a todos los seres humanos...Por todo lo anterior puede afirmarse que el contexto de la desigualdad es, en cierto sentido, el contexto natural de los derechos. Véase DE ASÍS Roig, Rafael, “Los derechos humanos en el contexto de la desigualdad”, en GARRIDO Gómez, María Isabel (Ed.), *El derecho al humano al desarrollo*, Tecnos, Madrid, 2013, p.117-118.

académicos y que no pueden ser ajenas al derecho constitucional que inciden en que:

[...] se garantice el proceso de creación de normas jurídicas internacionales, es decir, asegurar una cierta calidad de las normas de derecho internacional. En este sentido, y refiriéndose a otro sector del derecho internacional en el cual el proceso de creación de normas se ha visto amenazado, el derecho internacional de desarrollo, el profesor Flory ha afirmado que: la tarea de elaboración del derecho internacional de desarrollo no debe olvidar el dominio jurídico, debe permanecer atenta a la coherencia del derecho, a su calidad técnica y a su compatibilidad con los principios jurídicos que constituyen el armazón del derecho internacional.⁸⁷

Con base a lo anterior, quisiera comentar, que allí entra la importancia de que el derecho constitucional estudie en base a la teoría de los derechos humanos, que ha sido una disciplina vinculada e inherente al derecho constitucional, y además en uso de la teoría de los derechos fundamentales, el derecho constitucional debe procurar estudiar el valor jurídico del desarrollo, un estudio que se realiza en base a través de la búsqueda e interpretación exhaustiva de un sistema de fuentes, nacional, regional e internacional.

I.IV. Aproximación a los contenidos del derecho humano al desarrollo

Diferentes visiones acerca de este nuevo derecho, consideran que el derecho al desarrollo corresponde a un objetivo, que a un derecho humano,⁸⁸ aduciendo que el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no plantea el derecho al desarrollo de manera directa, ni es mencionado frontalmente como integrante del sistema de fuentes jurídicas en materia internacional del derecho al desarrollo, pero hay también quien consideran que

⁸⁷ *Ibidem.*, p. 66. Se tiene que tomar en cuenta que “La concepción y percepción de cuáles son los derechos humanos más importantes varía, por tanto, de acuerdo a un buen número de de parámetros. Desde una perspectiva jurídica, la importancia no está dada por los pareceres subjetivos sino por los reconocimientos normativos plasmados en los documentos que establecen los derechos.” ROSETTI, Andrés, *op. cit.*, p. 317.

⁸⁸ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, *op. cit.*, p. 83.

el artículo 2 y el párrafo 3 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque no lo mencionan de manera explícita (el derecho al desarrollo) se pueden valorar vinculados al artículo 28 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y por ende al la sistematización jurídico-internacional del derecho al desarrollo, igualmente se añade el artículo 11, del citado pacto, como seguimiento de la sistematización jurídica del derecho al desarrollo; de tal suerte que el derecho al desarrollo "...resultaría de una interpretación sistemática de los derechos humanos."⁸⁹

Asimismo no debe obviarse que dentro del sistema de fuentes del derecho al desarrollo "...los convenios constitutivos de la UNESCO, la FAO y la OMS se han considerado como fuentes implícitas que contribuyen a la afirmación de que existe un derecho humano al desarrollo."⁹⁰ En síntesis desde la perspectiva internacional, y esto ha tenido efectos de impacto en los ámbitos nacionales por hablar de México la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha reiterado constantemente que el desarrollo es un derecho humano, sin entrar en discusión ahora acerca de si es o no es un derecho humano, es necesario reafirmar que la Declaración sobre el derecho al desarrollo, sobre todo con su artículo primero "[...]es el instrumento de alcance universal más importante en relación con el derecho al desarrollo."⁹¹

Pues bien, desde la perspectiva más formal, atendiendo al derecho internacional consuetudinario, para dar una explicación primaria al fenómeno que impacta en la ciencia del derecho constitucional, debo señalar que si la Declaración Internacional sobre el Derecho al Desarrollo es la base jurídica más importante de donde fluye este concepto, es menester aclarar que por su constitución la Asamblea General de las Naciones Unidas no es un órgano legislativo mundial.⁹² En lo que si concuerdo es que esta declaración se ha integrado al derecho internacional consuetudinario, la Asamblea General de las Naciones Unidas, es finalmente un órgano representativo, y finalmente los principios que la declaración establece le otorgan un carácter imperativo.

⁸⁹ *Ibidem.*, p. 86.

⁹⁰ *Ibidem.*, p. 87.

⁹¹ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 90.

⁹² *Ibidem.*, p. 93.

Por lo que el valor jurídico de esta declaración y de su concepto, queda demostrado en que existió un “[...] consenso existente en torno a tal declaración, es decir, la opinión de los Estados acerca del alcance jurídico del derecho al desarrollo y acerca de la definición que de tal derecho se efectúa en la declaración.”⁹³

Este es un dato fundamental en cuanto al tema, porque “[...] la práctica totalidad de las delegaciones intergubernamentales que intervinieron, de una u otra forma, en la génesis y posterior aprobación sobre el derecho al desarrollo insistieron en que tal Declaración gozase del máximo consenso posible.”⁹⁴ De tal manera que resulta interesante observar que las delegaciones de varios países se suscribieron a la tesis que planteó la delegación española, cuando suscribió: “[...] tras reclamar la gran importancia que concede al derecho al desarrollo, subraya la necesidad de un consenso respecto de la definición de ese derecho y de la forma de asegurar su protección y promoción. Del mismo tenor son las opiniones de las delegaciones de Australia, la India, México, la República Federal de Alemania, Ecuador, Chile.”⁹⁵

Entonces queda claro, que en relación al derecho al desarrollo deben considerarse varios aspectos jurídicos que engloban la relación jurídica: los sujetos y por lo tanto su titularidad, entonces tenemos el titular del derecho y el sujeto obligado. El derecho al desarrollo como derecho emergente, apareja una situación diferente: pues es recíproca, a ambas partes les competen derechos y obligaciones; sin embargo queda claro, que por ser este derecho en su nueva dimensión, un derecho en emergente, en proceso de positivación, se puede notar: “una ambigüedad en la titularidad del derecho al desarrollo, cuando se refiere a los pueblos, no es la única indeterminación semántica que presenta la Declaración; de hecho existen lagunas de cierta consideración que afectan la realización del derecho al desarrollo.”⁹⁶

⁹³ *Ibidem.*, p. 98.

⁹⁴ *Idem.*

⁹⁵ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 98.

⁹⁶ LLANO Alonso, Fernando, “El derecho al desarrollo en el sistema de derechos humanos: entre los derechos de la personalidad y la actividad del Estado,” en GARRIDO Gómez, María Isabel (Ed.), *El derecho al humano al desarrollo*, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 53.

Respecto de los sujetos la persona humana, el artículo 1.1 de la declaración dispone: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.”

El artículo 2.1, dispone que la persona humana es el “sujeto central del desarrollo.” “2.1 la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.” Sin embargo puede haber en el proceso de especificación de los derechos ciertos sectores que por sus condiciones ya sean transitorias (en caso de grupos vulnerables) o condiciones de diferencia, si apelamos al valor emergente de la diversidad, que pueden acudir con más frecuencia a este derecho, así que podríamos desglosar los siguientes sujetos titulares del derecho al desarrollo:

Titulares:

Generalización y Universalización de los Derechos Humanos

La persona humana

Especificación de los Derechos Humanos

La mujer

El migrante

La juventud

Los jóvenes

La persona en sus relaciones con el medio ambiente

Así el derecho al desarrollo, integrado al conjunto de los derechos humanos, en un catálogo amplio, que no puede negarse teóricamente es válido, puede actuar en conjunto con los derechos humanos, como un

mecanismo preventivo de control de la constitucionalidad. Ahora bien, es cierto que los derechos humanos tienen que ser considerados con un carácter interdependiente, el derecho al desarrollo se enfoca a partir de novedosas necesidades que han tenido acogida a partir de los procesos que la globalización ha ocasionado. En tal sentido, el derecho al desarrollo, es un derecho de nuevo cuño, en proceso de positivación, emergente, de carácter internacionalista, pero que no excluye de su participación al ámbito internacional, sino que forma parte del esquema que la internacionalización de los derechos humanos ha generado, y a la que los Estados-Nación no han sido ajenos.

Pues bien a la luz de considerar su valor jurídico, es evidente que se tenga que considerar que el derecho al desarrollo es un valor jurídico, generador de una relación jurídica entre un obligado y un beneficiario, del derecho, por ello es importante señalar: “Ha de deducirse que la positivación del derecho al desarrollo no es un fenómeno emergente sino consolidado. Estamos ante un derecho formulado en términos jurídicos, regulado por el Derecho Internacional; la obligatoriedad jurídica de este derecho es además asumida (de un modo más o menos claro) por los Estados, las Organizaciones Internacionales e incluso muchos individuos.”⁹⁷

Definitivamente los derechos humanos, no se pueden aplicar de manera indiscriminada, no puede pensarse que cualquier persona en cualquier circunstancia puede pretender un derecho humano, de forma indisciplinada, el derecho al desarrollo, en este sentido tiene que regirse en base a una categorización: “Los derechos humanos no se podían dirigir exclusivamente a un ser humano considerado en abstracto sino que era necesario considerar a la persona concreta, a la persona situada en un determinado contexto.”⁹⁸ Por ello, considero relevante en la definición del derecho al desarrollo, y coincido en que

⁹⁷ CHUECA Sancho, A., “El derecho al desarrollo en el ámbito internacional,” *Seminario de Investigación para la paz*, Zaragoza, 21-22 de octubre de 1994, p. 10.

⁹⁸ GÓMEZ Isa, Felipe, “El derecho al desarrollo: ¿Otros veinticinco años de diálogo de sordos?,” en GARRIDO Gómez, María Isabel (Ed.), *El derecho al humano al desarrollo*, Tecnos, Madrid, 2013, p. 25.

[...] es necesario aclarar que el concepto de desarrollo tiene un significado que trasciende su acepción estrictamente económica, pues en realidad comporta un proceso global de contenido indudablemente económico (piénsese al respecto, en la función tan relevante que desempeña el Nuevo Orden Económico Internacional como marco institucional del Derecho Internacional del Desarrollo donde se manifiesta el diálogo Norte-Sur), aunque también posee un carácter social, cultural y político.⁹⁹

Por tal sentido, el derecho al desarrollo al configurarse como una obligación estatal, conlleva al estudio y análisis de la rectoría económica del estado, y a ciertos derechos de la persona humana, que circulan entre los derechos del libre desarrollo de la personalidad, y algunos derechos colectivos; esto origina que no todos los derechos deban ser necesariamente encuadrados en esta categoría. Por tal manera, cuando se habla de derechos que tienen que ver con el los derechos del desarrollo de la libre personalidad, invariablemente se recurre al concepto de dignidad humana, el artículo 2.0.1 de la Constitución Alemana establece el fundamento del derecho al libre desarrollo de la personalidad: “Artículo 2.0.1. Cada uno tendrá derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, en tanto no vulnere los derechos de otro y no atente al orden constitucional (*verfassungsmässige Ordnung*) o a la ley moral (*Sittengesetz*).”¹⁰⁰

Antes del citado precepto constitucional, el artículo 1.0 de la Constitución Alemana coloca al principio de dignidad humana, como el centro gravitante de la ley fundamental del Estado Alemán: “Artículo 1.0.1. La dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección.”¹⁰¹

⁹⁹ LLANO Alonso, Fernando, “El derecho al desarrollo en el sistema de derechos humanos: entre los derechos de la personalidad y la actividad del Estado,” en GARRIDO Gómez, Isabel, *op. cit.*, pp. 49-50.”

¹⁰⁰ *Constitución de Alemania, Ley Fundamental para La República Federal Alemana de 1949*, artículo 2.0.1.

¹⁰¹ *Constitución de Alemania, Ley Fundamental para La República Federal Alemana de 1949*, artículo 1.0.1.

Reformado en el año 1992, el numeral 23 de la ley alemana, introduce una reforma que le confiere a la norma un carácter programático, que sitúa una finalidad estatal para conseguir ciertos objetivos:

Artículo 23 1. Para la realización de una Europa unida, la República Federal de Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión Europea que está obligada a la salvaguardia de los principios democrático, del Estado de Derecho, social y federativo y del principio de subsidiaridad y garantiza una protección de los derechos fundamentales comparable en lo esencial a la asegurada por la presente Ley Fundamental.¹⁰²

En relación con la norma anterior, creo que en el sistema de fuentes jurídicas supranacionales puede considerarse como un modelo normativo, que ampara la idea de que el Derecho al Desarrollo tiene un contenido individual y otro colectivo, la norma anterior rescata una idea individual, por lo que es posible la tesis que indica: que: “La dignidad y el desarrollo de la dimensión moral de la persona son dos nociones complementarias que entroncan con el discurso de las facultades y las capacidades humanas.”¹⁰³ El Derecho al Desarrollo en conclusión se bifurca en dos sentidos: individual y colectivo.

¹⁰² *Constitución de Alemania, Ley Fundamental para La República Federal Alemana de 1949, artículo 23 (Modificado 21/12/1992).*

¹⁰³ LLANO Alonso, Fernando H., “El derecho al desarrollo en el sistema de derechos humanos: entre los derechos de la personalidad y la actividad del Estado,” en GARRIDO Gómez, María Isabel, *op. cit.*, p. 53.

Capítulo II

Fundamentos Jurídicos del Derecho al Desarrollo

La definición formal del derecho al desarrollo ocurrió en la Declaración de Naciones Unidas de 1986, su origen deviene de un conjunto de derechos humanos de la solidaridad,¹⁰⁴ su aparición es aproximadamente en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, es miembro de la tercera generación de los derechos humanos interdependiente de las primeras dos generaciones de derechos humanos (civiles y políticos y económicos, sociales y culturales).

Es conveniente mencionar que el derecho humano al desarrollo aparece en el contexto de la posguerra, en un escenario de países emergentes que iban saliendo de la colonización y se incorporaban a la política mundial como naciones soberanas. Con esto queda patente la pertinencia del enfoque histórico de las generaciones de los derechos humanos, pues las primeras generaciones de derechos humanos germinarán a partir de las revoluciones que tuvieron lugar a los dos lados del Atlántico: Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos y supusieron un avance terminal en el largo camino hacia la positivación, protección y disfrute de los derechos humanos; la idea de los derechos humanos, se fundamenta en un axioma evidente, que indica que los derechos humanos son concebidos como una pertenencia del individuo bajo el derecho natural, como una consecuencia por su condición de ser humano.¹⁰⁵ Los derechos humanos desarrollan garantías para la plena protección del individuo.¹⁰⁶ En realidad todo derecho humano requiere de garantías para

¹⁰⁴ GROSS Espiell, Héctor, "Strengthening moral solidarity: Human rights, human genetics, and the ethics of science and technology," en YUSUF, Abdulqawi, Standard-setting in Unesco, Volume I, Normative, action in education and culture, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Hotei Publishing, The Netherlands, 2007, "The idea of solidarity as a value has been included in international law to meet an uncontested necessity; and justice to demands." p. 137.

¹⁰⁵ "The concept of human rights is, to a considerable extent, though not wholly legal. It first appeared on the international agenda when the United Nations Charter declared in 1945 that the UN was determined 'to reaffirm faith in fundamental rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small.'" FREEMAN, Michael, *Human rights*, 2 ed., Polity Press, Cambridge, 2011, p. 4.

¹⁰⁶ Ferrajoli utiliza el término de garantías del estado de derecho. "Pero es claro que, al cambiar los derechos fundamentales objeto de tutela, cambian también las técnicas normativas predispuestas en garantía de los mismos: si a los derechos de libertad («o derechos de») corresponden garantías negativas consistentes en límites o prohibiciones de hacer, a los

poder ser efectivo,¹⁰⁷ por eso Juventino Castro, expresa que los derechos o garantías –el no hace distinción- “...son auténticas vivencias de los pueblos o de grupos que constituyen a éstos, quienes materialmente se las arrancan al soberano para lograr el pleno reconocimiento de libertades o atributos, que se supone corresponden a la persona humana por el simple hecho de tener esa calidad.”¹⁰⁸

Evidentemente, en el contexto de la posguerra con la adopción de los instrumentos de gobernanza mundial, Naciones Unidas percibe a los derechos humanos como un propósito esencial de las políticas y medidas institucionales en el Naciones Unidas y sus agencias y en las políticas públicas nacionales de los Estados miembros.

La premisa que designa que los derechos humanos son derechos positivos, a mi entender consigna uno de los requisitos básicos que abraza la teoría moderna de los derechos humanos, que recorre diversas etapas desde la proclamación, el reconocimiento, hasta la protección, tutela y garantía como mecanismos muy desarrollados del derecho positivo, porque explican la aplicación de los derechos humanos como mandatos operativos del derecho, así las cosas para Bazán: “el derecho positivo debe reconocerlos y garantizarlos, aunque su validez no dependa de dicho reconocimiento. Ciertamente el derecho positivo tiene como función, entre otras, su formulación, su caracterización, el establecimiento de sus límites- sin que sea legítimo en dicha tarea, en afortunada expresión del artículo 53(1) de la Constitución

derechos sociales («o derechos a») corresponden garantías positivas consistentes en obligaciones de prestaciones individuales o sociales. En todos los casos la elaboración de las garantías, es decir, de los mecanismos institucionales dirigidos a asegurar la máxima correspondencia entre normatividad y efectividad en la tutela o en la satisfacción de los derechos, constituye la tarea más importante y difícil tanto de una teoría como de una política garantista del derecho.” FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, Ed. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1995, p. 28. “La garantía de ciertas instituciones u organizaciones es prácticamente inescindible del reconocimiento de ciertos derechos fundamentales.” BAÑO León, José María, “La distinción entre derecho fundamental y garantía institucional en la constitución española,” *Revista Española de Derecho Constitucional*, Año 8. Num. 24. Septiembre-Diciembre 1988, pp. 155-179.

¹⁰⁷ Las garantías son los mecanismos de protección de los derechos humanos. cfr. APARICIO Wilhelmi, Marco, PISARELLO, Gerardo, “Los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas”, en BONET i Pérez, Jordi, SÁNCHEZ, Víctor M., *Los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas*, pp. 139-162.

¹⁰⁸ CASTRO, Juventino V., *Garantías y amparo*, Ed. Porrúa, 15ª, México, 2011, p. 3.

española, vaciarlos de su contenido esencial -. Pero el derecho positivo no es, en absoluto, condición necesaria para su validez. El derecho positivo debe reconocer la juridicidad prepositiva de los derechos humanos y asegurar su cumplimiento, su vigencia social; y establecer unos sistemas de reparación y satisfacción en caso de incumplimiento.”¹⁰⁹

La noción de garantía ha alcanzado su mayor esmero en las técnicas de garantías positivas de protección jurisdiccional,¹¹⁰ situación reflejada en las últimas décadas con el ensanchamiento de los sistemas de protección jurisdiccional de los derechos humanos, que en el ámbito internacional procede de la consagración en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del derecho humano de la persona a un recurso efectivo de protección de los derechos humanos,¹¹¹ desde entonces los sistemas regionales de protección de derechos humanos han avanzado hasta constituirse como verdaderos órganos protectores de los derechos humanos, implementando las garantías para la protección de los derechos de la persona humana, por lo que vale destacar la opinión de Cançado Trindade quien afirma: “la protección jurisdiccional es la forma más evolucionada de salvaguarda de los derechos humanos, y la que mejor atiende los imperativos del derecho y la justicia.”¹¹²

Aunque el derecho al desarrollo no se ha consolidado expresamente en ningún tratado internacional, la Declaración de Viena de 1993, resoluciones de Naciones Unidas, declaraciones gubernamentales, entre otros documentos oficiales de agencias de Naciones Unidas le han ido confiriendo su carácter normativo-jurídico,¹¹³ Naciones Unidas creó un grupo de trabajo

¹⁰⁹ BAZÁN, José Luis, Estudio preliminar, en ZUMAQUERO, José Luis, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos II 1978-1998*, EUNSA, Pamplona, 1998.

¹¹⁰ Basado en las nociones descritas por Luigi Ferrajoli, en FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, op. cit., p. 863.

¹¹¹ BANDRÉS José Manuel, “Artículo 8,” en PONS Rafols Xavier, *La declaración universal de los derechos humanos. Comentario artículo por artículo*. Asociación para las Naciones Unidas en España, Icaria Editorial, Barcelona, 1998, p. 189.

¹¹² CANÇADO Trindade, Antônio, “Hacia la consolidación de la capacidad jurídica internacional de los peticionarios en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos,” en *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, 37, Enero-Junio 2003, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pp. 13-52. NÚÑEZ Palacios, Susana, *La protección de los derechos sociales y su implementación en las sentencias de la Corte Interamericana*, Alegatos, Universidad Autónoma Metropolitana, No. 79, México, 2012. p. 646.

¹¹³ cfr. MARKS, Stephen, “Human rights and development,” op. cit., p. 170.

intergubernamental de expertos para aplicar, promover y generar informes sobre el derecho al desarrollo. Esta insistencia ha obtenido dividendos el derecho humano al desarrollo se ha incorporado en los objetivos del desarrollo del milenio, en este sentido se infiere, que el derecho al desarrollo como los entiende Gómez Isa: "...se puede deducir de diferentes instrumentos internacionales de carácter convencional. Entre estos textos citan la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, complementados por toda una serie de resoluciones y Declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas."¹¹⁴

El derecho al desarrollo emergió en el discurso de nuevos derechos emergentes alrededor de 1970, en el contexto de Naciones Unidas.¹¹⁵ Pero a pesar de ello se ha quedado en desventaja frente a otros derechos encarando obstáculos para su realización¹¹⁶ frecuentemente estos escollos se han producido debido a diversas confrontaciones entre diversas concepciones ideológicas y nacionales, algunas de ellas que veían peligrosa la iniciativa del derecho humano al desarrollo, una de ellas ha sido la posición de los Estados Unidos de América que no ha sido favorable.¹¹⁷

Parte de su fundamentación es debida al precedente legislativo de los denominados pactos: de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos sociales y culturales, se han revelado invariablemente ante la

¹¹⁴ GÓMEZ Isa, Felipe, El derecho al desarrollo. ¿Otros veinticinco años de diálogo de sordos?, en GARRIDO Gómez, Isabel, *op. cit.*, p. 27. Así las cosas existen diversos sectores doctrinales, que buscan restarle importancia al carácter vinculante de ciertos instrumentos normativos de carácter internacional, como por ejemplo la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y que ha sido precisamente un tema muy discutido en el campo del derecho internacional: "...por un lado, los que rechazan cualquier carácter vinculante del instrumento internacional. Por otro lado, los que postulan que la DUDH tiene un carácter obligatorio para los Estados miembros de las Naciones Unidas. A esto debemos agregar una visión matizada, que reconociendo el carácter vinculante de la DUDH, considera que no todos sus derechos son obligatorios." CANESSA Montejó, Miguel Francisco, p. 39. Esta reserva, obviamente se extiende a numerosas declaraciones en el caso del ámbito internacional, de las Naciones Unidas, que pretenden desvincular la obligatoriedad de estos instrumentos normativos internacionales, pero que, en su apartado específico, ya se discutirá con mayor profundidad.

¹¹⁵ MARKS, Stephen P., *Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980's?*, 33 *Rutgers L. Rev.* 435, 435-52 (1981).

¹¹⁶ MARKS, Stephen, The human right to development: between rhetoric and reality, *Harvard Human Rights Journal*, 137-68 (2004).

¹¹⁷ QUERIMI, Querim, *Development in International Law: A Policy-Oriented Inquiry*, Koninklijke Brill, The Netherlands, 2012, p. 85.

doctrina de los sectores nacionales e internacionales, como instrumentos jurídicos, de naturaleza internacional, con recepción en el derecho interno de los Estados, que no pueden ser razonados de manera jerárquica e independiente, por el contrario, los pactos, están fundamentados en sendos razonamientos que no niegan que guardan entre ellos, un carácter universal, progresivo, interdependiente e indivisible.¹¹⁸

Estos textos fueron adoptados por la Asamblea General en textos separados, esto a raíz de fuertes discrepancias¹¹⁹ entre los Estados Miembros, acerca de la viabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que el debate se concluyó por lo que hace a la redacción y adopción de los pactos, en el año de 1966, mediante la proclamación de dos pactos, aunque no se perdió el sentido de continuidad, dado que comparten “disposiciones comunes,” un mismo preámbulo, así como el mismo artículo primero, que les confiere una identidad conjunta. Los pactos se visualizaron así, y de hecho son como una extensión de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El pacto de los derechos civiles y políticos fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, por tener la naturaleza de un tratado internacional, tiene un carácter vinculante, su

¹¹⁸ Pigrau Solé comenta sobre este punto: “Tras la DUDH, el siguiente paso fue la elaboración de textos jurídicamente vinculantes: tratados internacionales generales de DD HH. Este proceso, iniciado en 1956 se prolongó hasta 1966, año en que la AG adoptó los dos Pactos internacionales de Derechos Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos acuerdos comportan la obligación de respetar en el territorio de los Estados que son parte de ellos o en los espacios sometidos a su jurisdicción, un extenso catálogo de derechos que pretende ser completo, adoptado con vocación de universalidad.” PIGRAU Solé, Antoni, Introducción al derecho internacional de los derechos humanos, en OLLÉ Sesé, Manuel, ACEBAL Monfort, Luis, GARCÍA Sanz, Nuria, *Derecho internacional de los derechos humanos: su vigencia para los Estados y los ciudadanos*, Anthropos, Barcelona, 2009. p. 24.

¹¹⁹ Pérez Luño documenta la situación que generó inconformidades entre las partes contratantes al momento de adoptar los pactos: “Inicialmente se pretendía ofrecer a la firma de la comunidad internacional un único texto, prueba de ello es lo que quedó recogido en aquellos tres artículos comunes a ambas, que actúan como el tronco común para sendas ramas. Pero la “guerra fría” iniciada tras las guerras mundiales dificultó la compatibilidad entre los derechos y ocasionó su fragmentación en tres generaciones. Occidente defendía la primera y los países del Este, la segunda. Y fueron los países del Sur los que enarbolaron los derechos de tercera generación como condición de posibilidad para el ejercicio de todos los derechos. En la declaración sobre el derecho al desarrollo (4/dic/86), se defendió que todos los derechos, los de las tres generaciones son “indivisibles e interdependientes.” PÉREZ Luño, *Estado de Derecho, Derechos humanos y Constitución*, Tecnos, Madrid, p. 29.

vinculación depende del acto de ratificación o adhesión que solicite el Estado soberano.¹²⁰ El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 16 de diciembre de 1966, convenio vinculante que contiene derechos que se consideran de segunda generación, estos derechos son económicos, sociales y culturales los cuales: “incluyen el derecho al trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, los derechos de protección a la familia y los menores, el derecho a un nivel de vida adecuada, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a participar, tener acceso y contribuir a la vida cultural.”¹²¹

Con la aprobación de los pactos no hizo sino comenzar la internacionalización y especificación de los derechos humanos en distintos convenios e instrumentos de *soft law* adscritos al derecho internacional de los derechos humanos, por lo cual, el derecho al desarrollo paulatinamente ha ido alcanzando un grado considerable que lo ha consolidado como un derecho humano, respecto de su efectividad desde la perspectiva de su base legal, esta es fundamentalmente de origen jurídico-internacional, para los juristas el derecho al desarrollo puede visualizarse a través de su positivación en instrumentos internacionales de carácter convencional tales como: La Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, con su

¹²⁰ Véase CARBONELL, Miguel, MOGUEL, Sandra, PÉREZ Portilla, Karla (Comp.), *Derecho internacional de los derechos humanos, Textos básicos*, Ed. Porrúa-Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2002. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos explicado por Barrena: “el PIDCP es una herramienta central para conocer los parámetros del derecho internacional para la protección de personas. La ratificación de los Pactos por países de todas las regiones y tradiciones jurídicas y culturales, la historia de su redacción, las discusiones que se generaron en el transcurso de su entrada en vigor y el impacto que conjuntamente han traído a la conformación de numerosas constituciones en el mundo, lo hacen también una herramienta útil para el estudio comparado de la protección de derechos en distintas regiones.” Véase: BARRENA, Guadalupe, *El pacto internacional de derechos civiles y políticos*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2012, p. 13.

¹²¹ Véase: RIVA Palacio Lavín, Antonio, *El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2012, p. 13. Para Martha Nussbaum la educación para el desarrollo humano debe generar habilidades en los estudiantes en temas como las humanidades: “A true education for human development requires much more. Currently most modern nations, anxious about national profit and eager to seize or keep a share in the global market, have focused increasingly on a narrow set of marketable skills that are seen as having the potential to generate short-term profit. The skills associated with the humanities and the arts – critical thinking, the ability to imagine and to understand another person’s situation from within, and a grasp of world history and the current global economic order – are all essential for responsible democratic citizenship.” NUSSBAUM C., Martha, *Creating capabilities, the human development approach*, Harvard University Press, United States of America, 2011, p. 155.

correspondientes protocolos facultativos, resoluciones y declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Especialistas como Marks aprecian que el derecho humano al desarrollo se distingue porque integra las normas vinculantes de los pactos internacionales de derechos humanos, y como un “derecho compuesto conlleva obligaciones perfectas.”¹²²

El propósito de este capítulo consiste en conseguir una exposición de la fundamentación jurídica del derecho al desarrollo, para lo cual es pertinente tomar en cuenta lo que Rodríguez Palop supone como la “perspectiva histórica de los derechos,”¹²³ lo cual es útil para apreciar que de las generaciones de los derechos humanos, fue la tercera generación de los derechos humanos la que proveyó la teoría del derecho al desarrollo. Esta generación incluye los subsecuentes derechos: derechos de los pueblos a la libre determinación; independencia económica y política; identidad nacional y cultural; derecho a la paz; derecho a la coexistencia pacífica; derecho a la cooperación internacional y regional; derecho al desarrollo; derecho a la justicia social internacional; derecho al uso de los avances de la ciencia y la tecnología; derecho a la seguridad alimentaria; cuestiones demográficas, educativas y ecológicas; derecho al medio ambiente; derecho al patrimonio común de la humanidad; derecho a una vida digna.¹²⁴

Debe destacarse que fiel al criterio de las generaciones de los derechos humanos, cualquier teorización de estos derechos implica según Rodríguez Palop la adopción de un análisis de los derechos humanos con una perspectiva histórica y racional¹²⁵ de los derechos humanos. Dicho análisis es aplicable para una explicación exhaustiva sobre la fundamentación jurídica del derecho humano al desarrollo, pues se inscribe en el grupo de la tercera generación de

¹²² *Ídem*.

¹²³ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación*, Dykinson, Madrid, 2010, p. 44.

¹²⁴ La tercera generación atribuye la titularidad jurídica de dichos derechos a personas o grupos y maneja tres ejes: paz, desarrollo y medio ambiente. cfr. ALSTON Philip, GOODMAN Ryan, *International human rights. The successor to international human rights in context*, Oxford University Press, United Kingdom, 2013, p. 1526. Sobre la identificación de los derechos humanos al medio ambiente en la tercera generación de los derechos humanos: KABASAKAL, Arat, Zehra F., *op. cit.*, p. 88.

¹²⁵ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *op. cit.*, p. 43.

los derechos humanos, que a su vez ha propugnado una visión histórica de los derechos humanos que surge con los cambios históricos, políticos y sociales que hacen que cada época les conceda a una o a otra generación de derechos una primaria atención.¹²⁶ Partidarios de esta visión como Nikhil Aziz han criticado un favoritismo por los derechos de primera generación en detrimento de los derechos de segunda y de tercera generación.¹²⁷ Otras voces como la de Ssenyonjo sostienen un diferente criterio, la autora crítica la creencia común de que los derechos de tercera generación solo pueden ser alcanzados una vez que los derechos de primera generación han sido establecidos, observa un defecto en ello, consistente en conceder una menor relevancia a los derechos de primera generación, en tanto no se inclina a la categoría de las generaciones de derechos humanos, sostiene la opinión muy encomiable de que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en su devenir: “se desarrollaron juntos.”¹²⁸

Para responder porque es importante colegir en la categoría de tercera generación de los derechos humanos y porque la necesidad de referirme hacia una clara fundamentación jurídica de este derecho, es debido aclarar un supuesto, el derecho al desarrollo en su enunciación jurídica, es un tanto problemático, pero esta problematicidad no es exclusiva del derecho al desarrollo, por un parte, porque el derecho al desarrollo implica una categoría jurídica aún vigente que se interpreta en relación con la primera y segunda generación de derechos humanos integrando una comunidad interdependiente de derechos humanos, que no puede renunciar ni a la continuidad histórica ni a la universalidad, por eso la perspectiva analítica de las generaciones de los

¹²⁶ “Even the commonly invoked ideas of “first generation” civil and political rights and “second generation” socioeconomic rights imply a very specific history of concept formation. In this understanding of human rights and history, the two categories of rights have not always been conjoined and of equal importance, but chronologically distinct historical events. Importantly, within each of these rival stories, the rights concept assumes a distinctive character.” ROBERTS, Cristopher N.J., *The contentious history of the international bill of human rights*, Cambridge University Press, New York, 2015, p. 6.

¹²⁷ “The dominant discourse in human rights, which is an integral aspect of GA, emphasizes individualistic political and civil rights to the exclusion of group/collectivistic economic, social, and cultural rights, and third generations rights.” AZIZ, Nikhil, “The human rights debate in an era of globalization: hegemony of discourse,” en *Debating human rights. Critical essays from the United States and Asia*, VAN NESS, Peter, Routledge, New York, 2003, p. 39.

¹²⁸ SSENYONJO, Manisuli, *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Bloomsbury Publishing, Portland, 2009, p. 12.

derechos humanos, se muestra como una categoría del estudio de los derechos humanos, muy generosa para los estudiosos de los derechos humanos.

Ahora bien, la fundamentación jurídica del derecho al desarrollo de ninguna manera puede limitarse a la conformación teórica de las generaciones de los derechos humanos, es igualmente importante que el derecho al desarrollo se inscriba no solamente en un catálogo amplio que acoge nuevas categorías de derechos es necesario también apuntar, en su análisis los problemas generales con los cuales el derecho al desarrollo se enfrenta no solo en su positivación sino también en su interpretación e integración, uno de ellos es que los derechos humanos, a pesar de desplegarse como una idea moderna y de largo alcance¹²⁹ siempre se les ha atribuido fuertes connotaciones políticas,¹³⁰ y de hecho las tienen, aunque no entraré a disgregar el tema referente a la antigua discusión entre la política y el derecho, la situación, aquí es que como bien observa Vasak, el tema de los derechos humanos por sus apegos políticos, ha sido durante mucho tiempo relegado, y también podríamos añadir con toda seriedad maltratado y malinterpretado, de allí que legítimas nuevas exigencias en el marco amplio de la clasificación de los derechos humanos, aparecieran como predicamentos inciertos, como aspiraciones ilusorias si un sentido claro de pertinencia que pudiera alcanzar un escaño privilegiado en el debate de los derechos humanos y en los grandes temas del milenio, pues sí, siguiendo a Vasak, esas categorías, derechos inciertos fueron eclipsados por la luz del positivismo jurídico.¹³¹ Esta oscura realidad, se ha transformado, Vasak lo atribuye a ciertos cambios producidos por los filósofos del derecho con su acuciado interés por el fenómeno de los derechos humanos, por la gradual positivación de los derechos humanos en los instrumentos internacionales, nacionales y regionales y por último en este caso, el cambio y la realidad han trascendido tomando a los derechos humanos como la realidad configuradora del derecho, en un cada vez más pragmático

¹²⁹ VASAK, Karel (Ed.), *The international dimensions of human rights*, Vol 1, Greenwood Press-UNESCO, Westport Connecticut, 1982, pp. 3-8.

¹³⁰ *Ídem.*

¹³¹ *Ídem.*

activismo judicial por parte de los jueces para interpretar el derecho y tomar declaraciones internacionales como fuentes jurídicas concretas.¹³²

Este efecto de relación interdependiente que ha dado nacimiento a configuraciones concretas que plasman el derecho al desarrollo se puede centrar en diversos eventos que le han dado continuidad a las exigencias que señala este nuevo derecho, una de ellas es la aportación de un jurista senegalés Keba M'Baye quien pronunció en una conferencia sobre el derecho al desarrollo en el ámbito internacional.¹³³

Posteriormente las Naciones Unidas en la resolución 4 (XXXIII), del 21 de febrero de 1977, en la resolución 5 (XXXV) del 2 de marzo de 1979. La Asamblea General también admitió la evolución de esta nueva clase de derechos, como puede observarse en la resolución 34/46 de 23 de noviembre de 1979; pero el gran paso en el camino de la positivación internacional del derecho al desarrollo continua avante, esta vez en 1981 cuando la Comisión de Derecho Humanos – ahora sustituida por el Consejo de Derechos Humanos – crea un Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales a quienes se les encomienda el diseño y la fundamentación jurídica – política del derecho al desarrollo como un derecho humano.¹³⁴ El producto más importante y el objeto por el cual esta Comisión fue creada era el de elaborar una Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que fue aprobada por la Asamblea General el 4 de diciembre bajo la resolución 41/128, que desde entonces se convertirá en el elemento más visible de la lucha internacional por la positivación y efectividad del derecho al desarrollo.

La resolución que fue aprobada por la Asamblea General, hace hincapié en el fundamento principal de la Declaración que es la Carta de las Naciones Unidas, en el aspecto referente a la realización de la cooperación internacional para la solución de los problemas internacionales de índole económica, social,

¹³² VASAK, Karel, *op. cit.*, p.

¹³³ Si se desea conocer a este autor consultar: M'BAYE, Kéba, NDIAYE, Birame, *The organization of African unity (OAU), The international dimensions of human rights*, Vol 1, Greenwood Press-UNESCO, Westport Connecticut, 1982, p. 583.

¹³⁴ En el área del derecho internacional se ha preferido la noción de derechos humanos.

cultural, humanitaria y tomando como consideración principal el respecto a los derechos humanos y libertades de la persona, bajo ninguna presión de discriminación.¹³⁵ En este aspecto puede expresarse que los redactores de la declaración al hacer alusión a la Carta de San Francisco de 1945 hicieron uso de un mecanismo particular de la función legislativa que reconoce la influencia de la voluntad legislativa que han ejercido los “propósitos y principios que inspiran la Carta.”¹³⁶ La resolución hace patente entre los antecedentes de la misma, la conformidad con tres instrumentos internacionales de gran peso:

- 1.- Las disposiciones de la Declaración Internacional de Derechos Humanos
- 2.- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
- 3.- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Respecto de los pactos no debemos olvidar que estos se interpretan conjuntamente, siendo la tendencia original de la ONU y de los iniciales redactores el abordarlos como un conjunto. Las votaciones y demás divergencias derivaron en la división pedagógica de los dos pactos, pero en las resoluciones de las naciones unidas y diversos instrumentos han reafirmado la universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos contenidos en la Declaración, los pactos y demás normativa internacional aplicable.

El pacto de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos sociales y culturales son reconocidos por ser instrumentos vinculantes, además de haber conjuntado un esfuerzo internacional de cooperación para integrar un extenso catálogo de derechos con una vocación de universalidad afirmó Pigrau Solé.¹³⁷ Los dos pactos fueron caracterizados por la doctrina, como sendos pactos que concretaron lo que se ha denominado

¹³⁵ Declaración Universal de los Derechos Humanos, véase: CARBONELL, Miguel, MOGUEL, Sandra, PÉREZ Portilla, Karla (Comp.), *Derecho internacional de los derechos humanos, Textos básicos*, op. cit.

¹³⁶ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, op. cit., p. 51.

¹³⁷ PIGRAU Solé, op. cit., p. 19.

como derechos de primera y de segunda generación, los derechos de primera generación que integran derechos de contenido civil y político, y de derechos de segunda generación que integran derechos humanos de un contenido económico, social y cultural.

Los derechos de primera generación de carácter civil y político, son derechos como apunta Serra Rojas: “hacia una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones políticas fundamentales,”¹³⁸ estos derechos por lo tanto son derechos que invariablemente se constituyen como derechos de libertad y en alguna medida también de igualdad. En el preámbulo del Pacto de los derechos civiles y políticos se establece que estos derechos: “derivan de la dignidad inherente a la persona humana,” y son reconocidos para la realización: “...del ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas.”¹³⁹

La Asamblea General aprobó, en la misma sesión, un Protocolo Facultativo del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, este protocolo que fue instituido en la misma fecha, entró en vigor al igual que el pacto 23 de marzo de 1976.

El pacto internacional de los derechos civiles y políticos establece su conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco de 1945) retomando la obligación fundamental que establece la Carta: “promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.”

El pacto internacional de los derechos civiles y políticos establece el derecho de libre determinación (derecho de autodeterminación), en su artículo 1º, el derecho de libre determinación de los pueblos sobre sus “riquezas y

¹³⁸ SERRA Rojas, Andrés, *Hagamos lo imposible. La crisis actual de los derechos del hombre*, Ed. Porrúa, México, 1982, p. 39.

¹³⁹ Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, en *Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Protección de la Persona Aplicables en México, Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Suprema Corte de Justicia de la Nación- Naciones Unidas – Derechos Humanos- Oficina del Alto Comisionado México, México, 2012, p. 53.

recursos naturales,” que será retomado en la declaración del derecho al desarrollo y demás resoluciones integradoras del derecho al desarrollo.

En el artículo 2° se establece la prohibición expresa de discriminación, no debe olvidarse que la discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos establecido en la declaración y confirmado en los sucesivos pactos, se establece como una relación recíproca entre los Estados y los individuos, para el Estado implica la obligación de comprometerse a respetar todos los derechos establecidos en el pacto tanto para los individuos que se encuentran en su territorio y que se encuentran sujetos bajo su jurisdicción, sin distinción de “raza, sexo, idioma, religión, opinión, política,” ni bajo cualquier condición que guarde la persona humana en razón de su “origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social.”

El artículo 3° establece el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres para garantizarles el disfrute de los derechos que ampara el convenio.

El artículo 6° consagra el derecho a la vida, el artículo 7° consagra la prohibición de la tortura, el artículo 8° consagra la prohibición de la esclavitud, el artículo 9° consagra el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el artículo 12° consagra la libertad de circulación y la libertad de residencia, el artículo 13° consagra derechos de extranjería, el artículo 14° el debido proceso y garantías de seguridad jurídica, el artículo 16° el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el artículo 17° el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, el artículo 18° la libertad de conciencia, el artículo 19° libertad ideológica, libertad de expresión, el artículo 21° consagra el derecho de reunión pacífica, el artículo 22° consagra el derecho de asociación, el artículo 23° el derecho para formar una familia, además se consagra el derecho para contraer matrimonio entre el hombre y la mujer en igualdad de condiciones.

El artículo 24° consagra los derechos del niño. El artículo 25° consagra un detallado catálogo de derechos políticos, el artículo 26° consagra la igualdad de las personas ante la ley, y puede interpretarse como una afirmación del estado de derecho. El artículo 27° consagra los derechos de las minorías y

constituye el reconocimiento internacional y también el compromiso para los Estados partes del respeto de las minorías (étnicas, religiosas y lingüísticas) y se interpreta en concordancia con el derecho a la libre determinación y representa el compromiso internacional para asumir un Estado multinacional. El artículo 28° es de los más importantes porque configura la creación del Comité de Derechos Humanos. La evolución en la normativa internacional fue presentándose, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se proclamó la Declaración de Río.

El otro momento decisivo en los alcances de la evolución normativa del derecho al desarrollo sucedió en 1993 con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que tuvo verificativo en Viena, la Declaración de Viena, reafirma el derecho al desarrollo, y confirma la interdependencia que el derecho al desarrollo guarda con la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Asimismo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se efectuó en El Cairo en 1994 reiteró la universalidad e inalienabilidad del derecho al desarrollo, como interdependientes e integrados en el catálogo internacional de los derechos fundamentales, como un derecho humano internacionalmente reconocido, fruto del consenso entre los Estados y generador de compromisos internacionales.

En materia de derechos humanos se destacan sólidos avances como los acaecidos con: la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, la Cumbre del Milenio, la Conferencia Mundial sobre el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y la Cumbre Mundial del 2005 en la celebración del sesenta aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas.

Los derechos humanos, y esto aplica para mi objeto de estudio que es el derecho al desarrollo responden en el caso del derecho al desarrollo a exigencias sociales que tienen que fundamentarse en concordancia con el derecho, por ello se indica en la teoría de los derechos humanos que para la

existencia y el respeto de los derechos humanos, se requiere necesariamente de un marco jurídico, por lo tanto de la existencia de un Estado de derecho como condición esencial del sistema político, por lo tanto el sistema político y el régimen político tienen que estar limitados por un marco legal, encuadrado en un Estado de derecho, que para su existencia legítima requiere de tres condiciones: democracia, separación de poderes y constitucionalismo de libertad y de igualdad; el constitucionalismo inevitablemente aparejará en el transcurso de la evolución jurídico-política la evolución de un sistema de garantías.

Los derechos humanos, y específicamente el derecho al desarrollo, requieren invariablemente de textos que los establezcan, esto implica cumplir con la exigencia de la realidad legal, en la cual el derecho positivo tiene que establecer una serie de marcos legales, de principios y de valores a través de normas jurídicas para asegurar el respeto y el disfrute de los derechos humanos, en este caso del derecho al desarrollo. Los derechos humanos deben ser protegidos y asegurados por el Estado de derecho, para poder ser una realidad legal y en estos tiempos para convertirse en una realidad constitucional con plenos efectos institucionales palpables en la calidad de vida de las personas.

De los derechos humanos, sin duda del catálogo amplio que integran los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, declarados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos conllevan a un análisis especial, sobre esta clase de derechos la Declaración Internacional del Derecho al Desarrollo señala en el artículo 1.2: “El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.”¹⁴⁰

¹⁴⁰ Artículo 1.2, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, *op., cit.*

Por esta razón en el estudio del derecho al desarrollo y sobre todo en el estudio de su fundamentación jurídico es importante tomar en cuenta su relación con los derechos económicos, sociales y culturales, como también señala el artículo 6.2 de la Declaración: “Los Estados debe adoptar medidas los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.”¹⁴¹

La tendencia actual de los académicos, consignada por Núñez Palacios es aquella que establece los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos: “actualmente la mayoría de los teóricos pugnan de manera fundamentada por la indivisibilidad de los derechos humanos, porque “valen igual, tienen el mismo peso, no pueden ser jerarquizados y exigen un mismo nivel de cumplimiento. Esto implica que el derecho a la salud no tiene menos valor que la libertad de expresión de algún medio de comunicación.”¹⁴²

Admite Núñez Palacios que aun cuando se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, no se ha podido hasta ahora “uniformar el fundamento las posibilidades reales de protección de los DESC establecidos en el Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales.”¹⁴³ Ahora la doctrina y los organismos internacionales trabajan en proveer esa fundamentación y posibilidad de garantía e implementación, uno de esos esfuerzos se reflejan en la opinión de un autor ya aludido por la Núñez Palacios. La misma jerarquía que les debe corresponder a todos los derechos humanos es puesta de manifiesto por Cançado Trindade cuando afirma: “podemos distinguir cuatro etapas: las de la dicotomía entre derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales; de la superación doctrinaria de dicha dicotomía por el reconocimiento de la indivisibilidad de los derechos humanos; de la búsqueda de solución para una protección eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales; y de las perspectivas de evolución de la

¹⁴¹ Declaración sobre el Derecho al Desarrollo artículo 6, en ZUMAQUERO, José Manuel, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos. II 1978-1998*, EUNSA, Navarra, 1998, p. 190.

¹⁴² NÚÑEZ Palacios, Susana, *op. cit.*, p. 650.

¹⁴³ NÚÑEZ Palacios, Susana, *op. cit.*, p. 651

materia en los próximos años.”¹⁴⁴Valdría la pena con ello apreciar el razonamiento de Ssenyonjo para quien el enfoque de las generaciones previene una generalización de los derechos humanos con sus “dimensiones positivas y negativas.”¹⁴⁵

En todo caso ha ganado terreno el criterio que avoca que los derechos humanos son finalmente indivisibles e interdependientes, esto se encuentra previsto por la Declaración Universal del Derecho al Desarrollo que suscribe en el artículo 6.3: “Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”¹⁴⁶

II.1 El Derecho al Desarrollo en los Tratados Internacionales

El derecho constitucional, como bien lo expresa Carrillo Salcedo: “explica” por medio del “principio constitucional de los derechos humanos las transformaciones experimentadas en el derecho de los tratados;”¹⁴⁷ de

¹⁴⁴ CANÇADO Trindade, Antonio, “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, en *Estudios de derechos humanos, Tomo I*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José 1994, p. 39.

¹⁴⁵ SSENIONJO, Manisuli, *op. cit.*, p. 14.

¹⁴⁶ Artículo 6.2, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, op. cit.*, p. 190.

¹⁴⁷ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *Soberanía internacional de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo*, Tecnos, Madrid, 1995, p. 101. Ferrajoli también coincide en la identificación de la constitución con el principio de los derechos humanos, escribe: “justamente porque el constitucionalismo no es otra cosa que la positivación de los principios de justicia y de los derechos humanos históricamente afirmados en las cartas constitucionales;” CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 24. En los sistemas constitucionales se ha preferido la noción de derechos fundamentales, no obstante esta imprecisión metodológica en el derecho constitucional mexicano después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, las normas dogmáticas quedaron definidas bajo la noción de derechos humanos, como se demostrará en el transcurso del trabajo la doctrina constitucional y la internacional han coincidido en que no existe una jerarquía de derechos, por lo que los derechos humanos de segunda generación, que importan un contenido social y una obligación activa del estado, no son puestos en discusión como derechos humanos con contenido esencial y pleno de ser garantizado, de todas formas la recíproca influencia que en el derecho constitucional y en el derecho internacional contemporáneo de los derechos humanos es una realidad, como una realidad también es que los derechos fundamentales, como se les denomina en la Carta y en algunos párrafos de la DUDH nacieron en los sistemas constitucionales particulares del marco de los Estados-Nación, previos a la instauración del orden internacional contemporáneo, me parece importante añadir la inteligente reflexión de Antonio Flores Saldaña sobre la operación del principio de los derechos fundamentales en los estados constitucionales para ilustrar como el principio de los derechos humanos fue propagándose a la esfera internacional: “Los derechos fundamentales se derivan del entendimiento de que el Estado constitucional está diseñado pensando en que la limitación del poder, por la vía del establecimiento de cuantiosos deberes a los órganos

acuerdo a lo anterior, estamos frente a un fenómeno que tiene por objeto: “la articulación de un verdadero orden público internacional;”¹⁴⁸ este orden tiene como fin, la concreción de una organización jurídica “de todos los pueblos, naciones y estados;”¹⁴⁹ que se sustenta sobre la idea del equilibrio.¹⁵⁰

En este proceso de intertextualidad entre distintas jurisdicciones, espacios y sistemas jurídicos que ya de por sí es irreversible, el derecho constitucional y el derecho internacional público han conocido de una recíproca influencia e interdependencia: se trata de que desde el ámbito internacional, hasta el ámbito nacional, valores como la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos, la universalidad, la interdependencia, de los derechos humanos, han sido consensadas a través de los canales de discusión que posee la voluntad soberana y se ha reconocido de esta manera la “existencia de obligaciones *erga omnes*” que quiere decir universales, respaldadas por el hecho factual de haber sido “reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario, solo modificables por normas del mismo carácter;” lo cual viene a significar que el derecho de los tratados y de distintos instrumentos internacionales ha sido recogido como norma de *ius cogens*; que a su vez ha sido recogido como derecho constitucional, porque sin ser redundante ha sido integrado a la constitución, al ordenamiento constitucional superior de un estado que irradia en el resto del ordenamiento jurídico estatal.

estatales, a fin de que los ciudadanos puedan ser libres y la regulación de la acción estatal que parte de una cautela ante la acción de los gobernantes se diseña: “parea hacer frente a los fracasos de quienes detentan el poder estatal,” sin que en el Estado constitucional existan mecanismos para hacer frente a los fracasos de los ciudadanos.” FLORES Saldaña, Antonio, El paradigma de la constitución. ¿Neoconstitucionalismo procedimental o sustancial?, en FLORES Saldaña, Antonio, *Interpretación y ponderación de los derechos fundamentales en el Estado constitucional*, Tirant Lo Blanch, Universidad Panamericana Campus Guadalajara Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2013, p. 230. La teoría más contemporánea que interpreta el constitucionalismo de los derechos es el neoconstitucionalismo, Flores Saldaña lo retrata con amplitud: “El neoconstitucionalismo tiene como premisa fundamental la prevalencia de la protección y expansión de los derechos fundamentales sobre las normas estructurales y formales del ordenamiento jurídico.” *Ibidem*, p. 386.

¹⁴⁸ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *Soberanía de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo*, op. cit., pp. 13-22.

¹⁴⁹ *Ídem*.

¹⁵⁰ *Ídem*.

Mucho se ha escrito acerca de si este fenómeno de la globalización del derecho y de la cada vez más recíproca intertextualidad y superposición en los ordenamientos jurídicos y los sistemas constitucionales, lo que es de destacarse, no obstante, esto ha venido a conformarse como una auténtica consecuencia de la voluntad soberana de los Estados, que lejos de ser adversa, tiende a manifestarse como una auténtica relación *inter pares*; es decir entre iguales en las relaciones internacionales, no hacerlo conduciría al aislamiento internacional, en este tenor para Bazán: “En efecto la irrupción de los modernos Tratados internacionales de Derechos Humanos en la escena iusinternacionalista ha supuesto la progresiva consagración de una tendencia hacia la creación de espacios jurídicos donde las obligaciones de los Estados ya no son meramente recíprocas y sinalagmáticas, sino fundamentalmente objetivas.”¹⁵¹

Indudablemente uno de los logros más significativos en el ámbito del derecho internacional de los derechos de los humanos, y enmarcado por supuesto objetivamente en el marco jurídico iusinternacionalista del derecho de los tratados fue la aprobación de sendos pactos vinculantes de derechos humanos, el pacto internacional de los derechos civiles y políticos y el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, inicialmente se tenía programado por la Comisión de Derechos Humanos, que los pactos fueran aprobados de manera paralela a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aglutinó de manera sorprendente el beneplácito de diversas naciones, dirigentes políticos y actores de la naciente sociedad civil.¹⁵² Bazán al respecto considera:

Los derechos humanos como exigencias operativas de justicia dimanantes de la dignidad humana, se han incorporado al patrimonio jurídico de la humanidad y han sido perfilados y plasmados en los textos

¹⁵¹ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *Soberanía de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo*, op. cit., pp. 13-22.

¹⁵² Como acertadamente escribe Bazán: “En las últimas décadas a partir, sobre todo, de 1945, puede observarse un cambio en las notas características de la sociedad internacional, y, consecuentemente del Derecho Internacional, que ha pasado de ser eminentemente descentralizado, liberal y oligocrático, a incluir elementos sociales, institucionales y democráticos.” BAZÁN, José Luis, Estudio preliminar, en ZUMAQUERO, José Manuel, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos II 1978-1998*, EUNSA, Navarra, 1998, p. 41.

internacionales, dando lugar a un efecto cascada que tiene su inicio cronológicamente en la Declaración de Bogotá, aunque por su relevancia y carácter universal, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).¹⁵³

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Bobbio describió como representante de la “conciencia histórica”¹⁵⁴ irrumpió en el escenario internacional, como la puerta de arranque para la creación de un orden internacional basado en el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas sin distinción alguna, la DUDH, se estableció como una expresión de la conciencia jurídica de la humanidad,¹⁵⁵ un fundamento de un proyecto de convivencia universal,¹⁵⁶ según Casares, la DUDH fue presentada por el jurista francés René Cassin el 9 de diciembre de 1948 en sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas,¹⁵⁷ posteriormente la DUDH fue aprobada un 10 de diciembre de 1948 contando con el voto unánime de los Estados, sin embargo la declaración era solo un paso en el ambicioso proyecto internacional de pacificación y de seguridad, la DUDH era como apunta Bazán solo la primera fase,¹⁵⁸ la segunda fase se integraría por la aprobación de los pactos internacionales como instrumentos jurídicos vinculantes y la tercera fase a través de la implementación de “medidas de carácter ejecutivo.”¹⁵⁹

Singularmente complejo ha sido el tránsito histórico, el estudio jurídico y objetivo de los pactos internacionales, no puede estudiarse sin tomar en cuenta el fundamento básico de los pactos que se constituye por la DUDH, la declaración ante las resistencias previas a su aprobación, se consolidó como el vehículo ideal para dar inicio a un proceso de “aceptación progresiva y generalizada”¹⁶⁰ de los derechos humanos, desde luego que dos elementos

¹⁵³ *Ibidem.*, p. 36.

¹⁵⁴ BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, Ed. Sistema, Madrid, 1998, p. 74.

¹⁵⁵ *Ibidem.*, p. 37.

¹⁵⁶ *Idem.*

¹⁵⁷ WINTER, Jay, PROST, Antoine, *René Cassin and Human Rights. From the Great War to the Universal Declaration*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2013, p. 221.

¹⁵⁸ *Idem.*

¹⁵⁹ *Idem.*

¹⁶⁰ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *Soberanía de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo*, op. cit., p. 37.

contribuyeron para explicar la “recepción del concepto de derechos humanos,” el primero fue la resolución que la Organización de las Naciones Unidas asumió del riesgo que conllevaba la declaración de “convertirse en un instrumento de liberación efectiva al aplicar el principio de autodeterminación para la emancipación de los pueblos coloniales;”¹⁶¹ el segundo pero más importante, porque coincide con la tradición del liberalismo político de fuerte arraigo en los sistemas constitucionales: “la progresiva identificación de los derechos humanos con un concepto de democracia más moderno en el sentido de más social y participativa.”¹⁶² En este último aspecto recordemos que los derechos humanos, son producto de la democracia liberal en el más estricto sentido.

La trascendencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es incuestionable, el sistema internacional de los derechos humanos ha generado un catálogo institucional de gran envergadura hemos asistido a la creación de instituciones y organismos internacionales, facultados para laborar en el ámbito internacional para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sustituida en el 2003 por el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo de Europa y sus órganos, la Comisión y el Tribunal de Estrasburgo, el Comité de Ministros de la Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Asimismo la constitucionalidad de la conformidad de la constitución con los textos internacionales de derechos humanos, se ha incrementado, países como Canadá, Portugal, España, Alemania, y recientemente México: “interpretan sus derechos fundamentales a luz de los textos

¹⁶¹ *Ídem.*
¹⁶² *Ídem.*

internacionales;”¹⁶³ lo que significa el ejemplo más factible de la efectiva influencia recíproca entre el constitucionalismo de los derechos y el derecho internacional de los derechos humanos, en esta aproximación recurrente entre dos espacios jurisdiccionales: el nacional y el internacional con el objeto de respetar y proteger los derechos humanos de la persona humana.¹⁶⁴

El derecho internacional contemporáneo se caracteriza como he comentado por una recíproca interacción con el derecho constitucional, esto significa que nos encaminamos hacia una armonización entre el derecho constitucional y el derecho internacional contemporáneo y el ejemplo más básico de esta transformación se identifica por la inclusión de los derechos humanos como nuevo principio constitucional introducido en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas.¹⁶⁵

En el derecho internacional se establece una distinción entre el derecho convencional que es el derecho de los tratados y el derecho consuetudinario, en esta última ramificación se integran las declaraciones internacionales, y demás instrumentos normativos que no poseen de formalmente un carácter vinculante, sin embargo, desde la perspectiva de lo que los internacionalistas denominan como derecho desarrollo normativo del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho consuetudinario a través de las declaraciones, particularmente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha afirmado con un carácter vinculante que integrado al derecho internacional consuetudinario por lo que los Estados – partes de la Declaración no pueden justificar su omisión o considerar sustraerse del respeto de los derechos humanos contenidos en la declaración ante diversas circunstancias, siendo las más evidentes las violaciones graves de derechos humanos – tema sobre el

¹⁶³ BAZÁN, José Luis, “Estudio preliminar,” *op. cit.*, p. 39.

¹⁶⁴ “Resulta inexcusable recordar como la mayoría de las constituciones modernas se fundamentan sobre los mismos valores que se hallan en la base de los derechos humanos: la libertad, la igualdad, la solidaridad e incorporan en muchos casos, como ocurre con la Constitución española, la referencia explícita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como fuente privilegiada de aplicación de sus normas.” 24-25. El artículo en comento es el artículo 10. 2 de la Constitución española que establece: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.” CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 36.

¹⁶⁵ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 36.

cual en estos momentos no abordaré- de lo anterior lo que sí se puede constatar es que la declaración ha sido aceptada paulatinamente como: “interpretación legítima de las normas relevantes de la Carta de las Naciones Unidas, en especial las relativas a la obligación jurídica de los Estados de promover la observancia de los derechos humanos.”¹⁶⁶

Quizás el objetivo más acabado de la Declaración fue la elaboración y aprobación de los pactos internacionales, de los convenios, conformando así el ideal primigenio bajo el cual fue concebida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cierto es que inicialmente la intención era que los pactos fueran aprobados de manera paralela a la declaración, pero los tiempos históricos de esa época complicaban la inventiva, los estados occidentales se interesaron más por los derechos civiles y políticos, derechos de primera generación; los países de influencia soviética se mostraban interesados por los derechos económicos, sociales y culturales, clasificados por la doctrina como derechos de segunda generación y los países del mundo subdesarrollado impulsaron como se ha mencionado en líneas precedentes los derechos de tercera generación; esta imprecisión y desacuerdo en parte fueron responsables de que la aprobación de los pactos se dilatará por diez años, sin embargo Carrillo Salcedo considera que esta demora fue beneficiosa pues los Estados – partes asumieron con mayor claridad el contenido de los derechos humanos.

No puede negarse que entre los esfuerzos más acabos de integración y que se reflejaron fielmente en la voluntad estatal de anticiparse a la internacionalización de los derechos humanos, uno de los esfuerzos más audaces se vio en el ámbito regional, en las instituciones europeas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del 4 de noviembre de 1950, previo a los pactos se adelantó entre algunas cosas a establecer una relación indivisible entre los derechos humanos, pues en el preámbulo del convenio, el convenio confirma la voluntad de los Estados-partes – del convenio para: “tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los

¹⁶⁶ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 53.

Derechos Humanos;” como explicaré más adelante la estructura del convenio coincide con la estructura de la declaración pues en ambos se puede palpar la voluntad de los Estados- partes de proclamar una indivisibilidad entre los derechos de primera, segunda y tercera generación, es decir que los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos emergentes convergen en un mismo medio y fin: son derechos inherentes a la persona humana, por su condición, resumidos en el principio universal de la dignidad humana;¹⁶⁷ que como bien explica González Saldaña el principio de dignidad humana aunado al principio democrático del consenso, se configuran en el constitucionalismo contemporáneo como: “formas de entender el carácter operativo de la norma fundamental en el Estado constitucional de derecho.”¹⁶⁸

Los artículos 1º y 2º de la Declaración contienen los principios de libertad, igualdad y no discriminación.

Los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º se refieren a derechos y libertades de orden personal.¹⁶⁹

Los derechos económicos sociales y culturales se encuentran integrados en los artículos 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º de la declaración.

¹⁶⁷ Juristas expertos como uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, René Cassin consideraron que la distinción entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y culturales era ilusoria, todos los derechos forman una totalidad, que se resume en los principios que el derecho internacional contemporáneo y el derecho constitucional contemporáneo, conocido como constitucionalismo de los derechos han reafirmado en los principios constitucionales que en el caso mexicano la constitución establece: que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, el jurista René Cassin escribe con acierto: “Experience demonstrates that there is no clear-cut distinction between civil and political rights which might alone be subject to due process of law, and economic, social or cultural rights. There are permissive rights or liberties which require supplementary legislative rules in order to become amenable to the jurisdiction of the courts in exactly the same way as economic rights that derive from general policy. The guarantee of the possibility of appeal before the proper judges can no more be refused to an individual whose child has illegally been refused entry to a school, to a person covered by social security who has failed to obtain benefits to which his special skills entitle him it can be to those who base their claim on press laws or the right to vote hold meetings.” VÉASE CASSIN, René, *The liberal Western Traditions of Human Rights, Round Table of Human Rights*, Oxford, 11-19 November 1965., UNESCO/22/HR/10.

¹⁶⁸ Declaración Universal de los Derechos Humanos, en *Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables a México*, op. cit., p. 41.

¹⁶⁹ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, op. cit., p. 38.

Los pactos internacionales de 1966, entraron en vigor el 1976 diez años después de la aprobación suscitada en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estos dos pactos se interpretan como una continuidad de los postulados de la declaración, los internacionalistas consideran que los pactos de 1966 son la expresión de una “aspiración de globalidad” que se había manifestado en el seno de las Naciones Unidas en los dos eventos más trascendentales 1945 con la adopción de la Carta y en 1948 con la adopción de la DUDH; la doctrina ha integrado a los dos pactos y a la DUDH como un solo cuerpo normativo en materia de derechos humanos, a esta integración la doctrina lo denomina como Carta internacional de los derechos humanos.

Aunque la declaración universal de los derechos humanos es un precedente histórico que afirmó el inicio del proceso de positivación internacional de los derechos humanos, los pactos internacionales cumplieron el objetivo de conceder mayor precisión a las “obligaciones jurídicas de los Estados en materia de derechos humanos,”¹⁷⁰ del mismo modo que los pactos fueron el canal de una expresión jurídica que en el siglo XXI ya se ha desarrollado con mayor vehemencia la noción de la garantía de los derechos, que en los pactos se formula en palabras de CARRILLO SALCEDO: “con la instauración de mecanismos de garantía y control en orden a verificar internacionalmente el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.”¹⁷¹ No cabe duda de que los pactos son los instrumentos internacionales convencionales más importantes en materia de derecho convencional de los derechos humanos, por lo que efectivamente es muy correcta la formulación que considera que los pactos son los “dos primeros tratados generales en materia de derechos humanos.”¹⁷²

Desde su nacimiento, los pactos internacionales, estuvieron vinculados a una categorización que los asumía bajo el método de la perspectiva histórica,¹⁷³ esta clasificación plantea la tesis de que los nuevos derechos aparecen como respuesta al surgimiento de nuevas necesidades;¹⁷⁴ esta

¹⁷⁰ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 56.

¹⁷¹ *Ídem.*

¹⁷² *Ibidem.*, p. 56.

¹⁷³ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *op. cit.*, p. 89.

¹⁷⁴ *Ídem.*

innovación producida en el interior del derecho positivo de los derechos humanos, es resultado como advierte Bobbio del cumplimiento de los procesos de positivación, generalización e internacionalización de los derechos humanos.¹⁷⁵ En este orden de ideas el derecho positivo de los derechos humanos expresado por medios de los pactos es lógicamente producto de una condición histórica que comparte Occidente, el nacimiento y la consolidación del estado de derecho, como “estado de ciudadanos,”¹⁷⁶ esto también explica la identificación que guardan los derechos humanos con la democracia en sus dos dimensiones social y participativa.

Por supuesto que ambos pactos por su contenido representan una innovación muy sugerente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, su conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fidedigna, pero además de su influencia en materia de constituir un derecho convencional de los derechos humanos, por tratarse de los dos primeros tratados generales en materia de protección de los derechos humanos, los tratados sientan las bases para la manifestación de una nueva línea de tendencia,¹⁷⁷ que Bobbio denomina la especificación de los derechos humanos,¹⁷⁸ esta especificación sustancial en importancia para el desarrollo de mi investigación doctoral significa: “el paso gradual pero siempre muy acentuado, hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos.”¹⁷⁹

¹⁷⁵ BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, op. cit., p. 109.

¹⁷⁶ *Ídem*.

¹⁷⁷ BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, op. cit., p. 109.

¹⁷⁸ *Ídem*.

¹⁷⁹ *Ídem*. Norberto Bobbio en su distinguido trabajo al definir este proceso de especificación de los derechos y sus particularidades pone de relieve las condiciones bajo las cuales se ha producido la especificación de los derechos, que según él se han enfocado: “...respecto al género, bien respecto a las distintas fases de la vida, bien teniendo en cuenta la diferencia entre estado normal y estados excepcionales de la vida humana.” En cuanto a la diferenciación del género señala que esta ha incidido en el reconocimiento de las “diferencias específicas de la mujer respecto del hombre;” En relación con las distintas etapas de la vida, se ha plasmado en la distinción entre: “los derechos de la infancia y de la ancianidad de aquellos del hombre adulto;” y según parece en la distinción establecida por la especificación de los derechos referidos a un estado normal y los estados excepcionales del ser humano Bobbio lo constata en la “exigencia de reconocer derechos especiales a los enfermos, a los incapacitados a los enfermos mentales, etc.” *Ibidem.*, p. 110. Los instrumentos normativos internacionales en los cuales fundamenta Bobbio su observación son por mencionar algunos: La Declaración de los Derechos del Niño (1959), Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, Declaración de Derechos del Disminuido Mental (1971); posteriormente se ha presenciado una

Los pactos se distinguen en su estudio como he apuntado porque hacen referencia a dos grandes agrupaciones de derechos (generaciones)¹⁸⁰ los derechos civiles y políticos que presuponen obligaciones estatales de no hacer y los segundos, aunque no en jerarquía, los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales le confieren al estado obligaciones de hacer. Ambos pactos contienen como es de suponerse conforme a la aspiración en la

avalancha de instrumentación normativa más vinculante: La Convención de los Derechos del Niño, la CEDAW, y evidentemente los dos pactos.

¹⁸⁰ Estas generaciones de derechos humanos son producto de una necesidad conceptual, de un fenómeno social ávido de definir los procesos que han multiplicado y universalizado la esfera de los derechos, estos tres procesos Bobbio los define así: “a) porque ha ido aumentando la cantidad de bienes considerados merecedores de ser tutelados; b) porque ha sido ampliada la titularidad de algunos típicos derechos a sujetos distintos del hombre; c) porque el hombre mismo no ha sido ya considerado como ente genérico, u hombre en abstracto, sino que ha sido visto en la especificidad o en la concreción de sus diversas maneras de estar en la sociedad, como menor, como viejo, como enfermo, etc.” Estos procesos configuran la acepción tradicional de las generaciones de derecho aunque con otras palabras, Bobbio cuando define el primer proceso señala que este: “se ha producido el paso de los derechos de libertad, de la llamada libertad negativa, de religión, de opinión, de prensa, etc., a los derechos políticos y a los derechos sociales, que requieren una intervención directa del Estado.” Este proceso sería un punto de encuentro entre la primera y la segunda generación de los derechos y podría ser un elemento para explicar la aspiración inicial que no pretendía desmarcar a ambas categorías; el segundo proceso que explica esta transformación en los derechos es explicado por Bobbio: “el paso de la consideración del ser humano *uti singulus*, que ha sido el primer sujeto al que se le atribuyeron derechos naturales (o morales), en otras palabras de la «persona», a sujetos distintos del individuo, como la familia, una minoría étnica o religiosa, toda la humanidad en su conjunto dentro del debate actual entre filósofos morales sobre el derecho de los descendientes a la supervivencia, y más allá de los individuos aisladamente considerados o en las distintas comunidades reales o ideales que lo representan, hasta titulares diferentes de los hombres, como los animales.” Las consideraciones de Bobbio acerca del segundo proceso bien pueden robustecer las ideas que conllevaron a que uno de los elementos indispensables de la DUDH y de los pactos fuera el principio de autodeterminación y una tendencia internacional para respetar derechos de las minorías, definidos como derechos minoritarios, en este caso con la irrupción que en el escenario internacional guarda los derechos culturales por señalar un ilustración, en todo caso el segundo proceso oscila entre derechos sociales y derechos de segunda y hasta de tercera generación como el derecho al desarrollo pero que reflejan esa tendencia que empieza a perfilar que los derechos humanos no solo se interpretan en función de la simple y llana condición humana, sino en función de sus derechos en acción frente y al interior de su comunidad, sea esta de la clase que sea. Y ya por último en estas líneas el restante tercer proceso documentado por Bobbio es: “el paso se ha producido del hombre genérico, del hombre en cuanto hombre, al hombre específico, o sea, en la especificidad de sus diversos *status* sociales, en relación a distintos criterios de diferenciación, el sexo, la edad, las condiciones físicas, cada uno de los cuales revela diferencias específicas, que no consienten igual tratamiento e igual protección. La mujer es diferente del hombre, el niño del adulto, el adulto del viejo, el sano del enfermo, el enfermo temporal del enfermo crónico, el enfermo mental de otros enfermos, los físicamente normales de los minusválidos, etc.” Este proceso sobre el cual Bobbio se manifiesta, es el tercer criterio por el cual Bobbio, contrasta la noción de especificidad de los derechos y nos demuestra que estos criterios son útiles para la elaboración de nuevos derechos en relación no solo de la función que el sujeto realiza en sentido social, sino también individual, no son derechos sociales, de la colectividad fácilmente descriptibles y aplicables bajo criterios que atienden a la colectividad, como sujeto, sino que la titularidad de los derechos alcanza formas más elaboradas en razón del sujeto titular del derecho: la mujer, el discapacitado, el niño, el migrante,” en este punto se localiza la circunflexión entre las tres generaciones de derechos humanos. BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, op. cit., pp. 115-116.

Comisión de Derechos humanos de aquella época, “disposiciones comunes”¹⁸¹ los principios de autodeterminación, no discriminación, e igualdad. Pero la principal aportación precisada por los pactos fue el primigenio desarrollo por parte de las Naciones Unidas de dotar a los derechos humanos de instrumentos de garantía de los derechos humanos.¹⁸²

El fundamento positivo de que los pactos pretendían “precisar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos” atendiendo de manera expresa a sus obligaciones internacionales y jurídicas para garantizar y respetar los derechos tanto civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, se encuentra en el pacto de los derechos civiles y políticos en el artículo 2.1 del pacto que estatuye el compromiso que asumen los estados para asumir las obligaciones que los pactos como compromiso internacional y jurídico implicaban:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.¹⁸³

Cumpliendo con la intención inicial de los redactores de la declaración,¹⁸⁴ de los estados-partes representados en la Comisión de Derechos Humanos, estos dos pactos estaban por decir una palabra hermanados, por lo que el artículo 2.2 del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales también contempla la obligación de los estados-partes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales:

¹⁸¹ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 58.

¹⁸² VASAK, Karel, *op. cit.*, p. CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 58.

¹⁸³ Artículo 2.1 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Véase

¹⁸⁴ Los pactos internacionales fueron redactados con la consigna de ser una extensión de la DUDH, Bobbio no fue omiso a esta ambición en el proyecto internacional de los derechos humanos, así manifiesta: “Se trata de un verdadero desarrollo o quizá incluso de una gradual maduración de la Declaración, que ha generado y está generando otros documentos interpretativos e incluso integradores del documento inicial.”BOBBIO, Norberto, *op. cit.*, p. 74.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.¹⁸⁵

Aunque los pactos internacionales comparten un interés y una voluntad internacional y jurídica por facilitar el análisis de los derechos humanos, por conectar el respeto y la protección de los derechos humanos en una sola vía y objetivo estatal e internacional, aunque estos pactos son la expresión más acabada de los designios de la Carta de San Francisco, no se debe olvidar que los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos son poseedores de una distinta naturaleza, porque como correctamente razona Bobbio, si bien con el devenir del tiempo se presentará una “formal extensión de la esfera del derecho a la vida de generaciones futuras,”¹⁸⁶ ciertamente y por el contrario en relación con las expectativas que genera el continuo acrecentamiento de la positivación internacional e interna de los derechos humanos, y el ensanchamiento claro está, de las generaciones, como explica acertadamente Bobbio, la promesa de los derechos humanos, se verá contrastada, hasta contradecida, por amenazas a las que está expuesta la humanidad: “cuya supervivencia está amenazada por el crecimiento desmesurado de las armas cada vez más destructivas, y a sujetos nuevos, como los animales, que la moralidad común ha considerado siempre solamente como objetos o, como máximo, sujetos pasivos, sin derechos;”¹⁸⁷ indiscutiblemente estas formulaciones son admirables porque como asevera: “a medida que las pretensiones aumentan, su satisfacción resulta siempre más difícil.”¹⁸⁸ Por eso Bobbio, considera que lo que realmente un argumento real y no ideal de los derechos humanos, de los derechos del hombre “siempre nuevos y siempre más extensos” consiste en asegurarles una protección

¹⁸⁵ Artículo 2.2 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En *Compilación de Instrumentos Internacionales. Derecho internacional de los derechos humanos*, op. cit., p. 51.

¹⁸⁶ BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, op. cit., p. 110.

¹⁸⁷ BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, op. cit., p. 110.

¹⁸⁸ *Ibidem.*, p. 111.

efectiva¹⁸⁹, en una palabra: garantías, que son como menciona el jurista de Turín, lo verdaderamente importante, la más acabada expresión del derecho, pues como dice: “lo que importa no es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos. No tengo necesidad de añadir ahora que para protegerlos no basta con proclamarlos. Hasta ahora he hablado solamente de las distintas y más o menos articuladas enunciaciones.”¹⁹⁰

Tales apreciaciones pueden visualizarse como razones fehacientes para observar porque los pactos internacionales como apunta Carrillo Salcedo presentaron divergencias¹⁹¹ en la positivación de las obligaciones asumidas por los Estados- partes en cada convenio, esto explica las razones por las cuales de los mecanismos institucionales previstos en los pactos, el mecanismo institucional establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, planteado de una manera muy rigurosa en otro documento vinculante que es su Protocolo Facultativo Anexo, fuera más detallado y más elaborado que el previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.¹⁹²

El pacto internacional de los derechos civiles y políticos comparte con el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales la disposición común que consagra el derecho humano a la autodeterminación, el pacto internacional de los derechos civiles y políticos consigna: “1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”¹⁹³

El artículo 2.1° del pacto internacional de los derechos civiles y políticos consagra como ya se señaló el principio de no discriminación,¹⁹⁴ el artículo 2.3° establece el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso, el artículo 3° establece el principio pero también el reconocimiento de

¹⁸⁹ *Ídem.*

¹⁹⁰ *Ibidem.*, p. 74.

¹⁹¹ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 59.

¹⁹² *Ídem.*

¹⁹³ Artículo 1.1° Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La redacción del artículo 1.1° del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es similar.

¹⁹⁴ Artículo 2.1° Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, *op. cit.*

la igualdad entre hombres y mujeres para el goce de los derechos civiles y políticos.¹⁹⁵

El artículo 6° contempla el derecho a la vida, que puede interpretarse como principio, valor, en el cual la vida es un fin no un medio, residente en el principio de dignidad humana positivizado en el preámbulo del pacto como el gran eje rector de este y del resto de los instrumentos internacionales de respeto y protección de los derechos humanos. La redacción de este artículo se extiende hacia la prohibición de la aplicación de la pena de muerte, citando un importante instrumento internacional que es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.¹⁹⁶

El artículo 7° se refiere a la prohibición de torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el artículo 8.1° establece la prohibición de la esclavitud, artículo 9° una serie de derechos de libertad personal, y garantías de seguridad jurídica; el artículo 12° libertad de circulación, 13° derechos de extranjería, 14° garantías del debido proceso; 16° derecho de la personalidad jurídica, 17° derecho a la seguridad, derecho a la intimidad y derecho a la privacidad, derecho a la protección de correspondencia; artículo 18° libertades de conciencia, libertad de pensamiento y libertades de religión.¹⁹⁷

El artículo 19° del pacto establece la libertad de expresión, pero también previene de sus límites y restricciones que son la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. El artículo 21° reconoce el derecho de asociación bajo el requisito impuesto por el convenio de que esta debe de ostentarse como pacífica; el artículo 21.3° consagra la libertad sindical ya prevista en otras normativas internacionales Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, enfatizando la protección del derecho de sindicación; el artículo 23° consagra el derecho fundamental del hombre y de la mujer para formar una familia; el artículo 24° consagra derechos del niño: protección por parte de su familia y del estado, a tener un nombre; y el derecho del niño a adquirir una nacionalidad; el artículo 25° consagra derechos políticos,

¹⁹⁵ Véase artículos 2.3° y 3° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; *op. cit.*

¹⁹⁶ Véase artículo 6° del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, *op. cit.*

¹⁹⁷ Ver artículos 7°, 8.1°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, *op. cit.*

a votar y ser elegidos, el derecho humano del ciudadano a participar en los asuntos públicos directamente (fundamento de la democracia directa y participativa) y por medio de representantes; este artículo también consagra el derecho de acceso en condiciones de igualdad en las funciones públicas de un país.¹⁹⁸

El artículo 26° consagra que todas las personas son iguales ante la ley; el artículo 27 establece el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.¹⁹⁹

El pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, contiene como mencioné disposiciones comunes con el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, siendo la más importante el preámbulo común a los pactos que confirma el principio de la dignidad humana. El pacto como ya se mencionó en el artículo 1° establece el derecho a la autodeterminación, configurando este gran principio universal; el artículo 2° no posee ni la misma redacción, ni la misma referencia a las garantías como en el artículo 2° del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, el artículo 2° del citado pacto atendiendo a las diferencias que se extraen de la divergente naturaleza de los derechos civiles y políticos que engloban una abstención del estado de interferir en la vida de los ciudadanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, que se realizan mediante una intervención activa de estado y una mayor participación en la vida social, pero que además incorporan un costo económico, ello explica como apunta Carrillo Salcedo: “que los Estados- partes en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales se comprometan únicamente a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales y hasta el máximo de los recursos que dispongan, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto.”²⁰⁰

¹⁹⁸ Ver artículos 19°, 21°, 21.3°, 23°, 24° y 25° del pacto internacional de los derechos civiles y políticos. *op. cit.*

¹⁹⁹ Ver artículos 26° y 27° del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, *op. cit.*

²⁰⁰ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 59.

Para ilustrar con una mayor profundidad las diferencias que para efectos de abordar los mecanismos de garantía de los derechos humanos por estos pactos y que han sido los elementos que se han calificado como lo más innovador de este proceso de positivación del derecho internacional de los derechos humanos, es que transcribo el diferente artículo 2° del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.²⁰¹

El artículo 3° es de una redacción similar al artículo 3° del pacto internacional de los derechos civiles y políticos en cuanto a que consagra el principio de la igualdad; el artículo 6° comprende el derecho al trabajo y ciertas garantías propias derecho laboral; el artículo 8° proclama la libertad sindical; el artículo 9° reconoce el derecho a la seguridad social; el artículo 9° comprende el derecho a la familia, y ciertos derechos especiales para los niños y los adolescentes, comprende medidas para sancionar el maltrato y la explotación

²⁰¹ Véase artículo 2° del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. En *Compilación de Instrumentos Internacionales. Derecho internacional de los derechos humanos*, op. cit., p. 79.

infantil; el artículo 11° comprende derechos con contenido económico: el artículo 11.1° se refiere a la calidad de vida, especialmente en materia de derecho a la alimentación y un abstracto derecho a la vivienda.²⁰²

El artículo 12° de convenio establece un derecho muy importante, el derecho a la salud, en su manifestación física y mental; el artículo 13° es uno de los fundamentos internacionales normativos del derecho a la educación, en el se establecen diversas garantías; el artículo 15° comprende el reconocimiento pleno a los derechos culturales, es un artículo crucial porque también establece la obligatoriedad para los estados partes de adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.²⁰³

Los pactos internacionales en su conjunto han coadyuvado para la aplicación de la universalización, generalización, positivación e internacionalización de los derechos humanos, sus avances en términos de insistencia hacia los Estados en materia de garantías han ido paulatinamente avanzado, por lo pronto el desarrollo normativo propiciado por la adopción de los pactos internacionales de 1966 del derecho internacional de los derechos humanos,²⁰⁴ ha reforzado el respeto y la protección internacional de los derechos humanos, y ha sido clave para la elaboración de convenios específicos como la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), la Convención de los Derechos del Niño (1989).

Quizá el avance que aun es más difícil de contextualizar es el tema de que las garantías de los pactos como garantías jurisdiccionales, comprenden un análisis más problematizado, en primer lugar porque se debe tomar en cuenta que la garantía jurisdiccional es una excepción, en el caso de los pactos pues las medidas ejecutivas para la llamada *implementación de los derechos*

²⁰² Véanse artículos 3°, 6°, 9°, 11° y 11.1° del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, *op. cit.*

²⁰³ Véanse artículos 12°, 13° y 15° del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, *op. cit.*

²⁰⁴ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 61.

humanos, es una vía idónea para su respecto y cooperación, vía que se nutre y se fortalece, por una vigencia del estado de derecho, que como “estado de ciudadanos” retomando a Bobbio, es la condición indispensable para la supervivencia de la democracia;²⁰⁵asimismo la asistencia y la cooperación internacional afirmadas en el artículo 2º del convenio son mecanismos de ayuda pero también de apremio para lograr revertir los retrocesos en materia de respeto y protección de los derechos humanos y asimismo para asegurar su cumplimiento, no en vano como menciona Bobbio quizás nos acerquemos a una cada vez mayor representatividad de los organismos internacionales,²⁰⁶que responde a un proceso de humanización del derecho internacional según Carrillo Salcedo, proceso se refleja a través de la erosión y relativización²⁰⁷ del orden internacional mediante la incorporación del desarrollo normativo de los derechos humanos que en el derecho internacional contemporáneo comprende al derecho internacional consuetudinario donde se enmarca la DUDH y el derecho convencional, con sus consiguientes pactos, de manera que esta erosión y relativización origina una dimensión nueva - subjetiva del individuo como sujeto de derechos humanos mediante la obligación estatal de respetar los derechos humanos de la persona humana.

Frente a este escenario es pertinente decir que los derechos humanos como dimensión constitucional se encuentran ante una transformación prometedora, aunque como señalé el aspecto de las garantías sea el más difícil de equilibrar porque efectivamente como menciona Bobbio, las garantías dependen totalmente de la vigencia del estado de derecho dice así:

Llamamos «Estados de Derecho» a los Estados en los que funciona regularmente un sistema de garantías de los derechos humanos: en el mundo hay Estados de Derecho y Estados que no son de Derecho. No

²⁰⁵ “Recuérdese que la lucha por la afirmación de los derechos humanos dentro de los Estados estuvo acompañada por la instauración de los regímenes representativos, es decir, por la disolución de los Estados con poder concentrado. Aun cuando siempre deba tomarse con mucha cautela cualquier analogía histórica, es probable que la lucha por la afirmación de los derechos humanos también contra el Estado presuponga un cambio que de hecho está ya en marcha, aunque es lento, acerca de la concepción del poder externo del Estado respecto a los demás Estados y un aumento del carácter representativo de los organismos internacionales.”BOBBIO, Norberto, *op. cit.*, p. 78.

²⁰⁶ *Ídem.*

²⁰⁷ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p. 18.

hay duda de que los ciudadanos que más necesidad tendrían de la protección internacional son los ciudadanos de los Estados que no son de Derecho. Pero estos Estados son precisamente los menos inclinados a aceptar las transformaciones de la comunidad internacional que deberían abrir la vía a la institución y al buen funcionamiento de una protección jurídica plena de los derechos humanos.²⁰⁸

Bobbio se refiere al procedimiento de demanda individual ante la Comisión Europea de Derechos Humanos suscrito en el *Convenio europeo para la protección de los derechos humanos de 1950*, este maravilloso ejemplo le sirve a Bobbio para hacer constancia del avance notorio que en algunos organismos, en este caso en el marco regional europeo, recordemos que en esos años la integración europea gestaba su génesis; durante esos años recuerdo ya se tenía la intención de crear una Corte Penal Internacional, ahora existente desde 1998, en el marco regional interamericano dos de las instituciones más logradas es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que juntas configuran lo que hasta ahora podría mencionarse como órganos en el caso de la Corte jurisdiccionales facultados para tutelar garantías jurisdiccionales.

A pesar de los avances que reviste el derecho humano al desarrollo debo dejar patente que el derecho al desarrollo no se encuentra establecido de manera formal en un tratado internacional, por lo tanto de manera expresa no ha logrado constituir una sola norma internacional vinculante.²⁰⁹ Sin embargo la doctrina ha recomendado dar el siguiente paso de incluirlo en una norma internacional de tipo vinculante asegurándolo en el sistema de fuentes del DIDH.²¹⁰

II.II El Derecho al Desarrollo en el ordenamiento jurídico mexicano

²⁰⁸ BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, op. cit., p. 79.

²⁰⁹ BUNN, Isabella D., op. cit., p. 280.

²¹⁰ SCHRIJVER, Nicolaas, "Many Roads Lead to Rome. How to Arrive at a Legally Binding Instrument on the Right to Development?," en MARKS, Stephen (Ed.), *Implementing the Right to Development The Role of International Law*, The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Geneva, 2008, p. 127.

Como ya he señalado los derechos humanos constituyen una dimensión obligatoria en el derecho internacional contemporáneo, son una dimensión especial porque el constitucionalismo de los derechos humanos tiene en su origen en los distintos preceptos que se fueron formulando paulatinamente entre tres sistemas constitucionales: el constitucionalismo inglés, el constitucionalismo estadounidense y el constitucionalismo francés. Esta evolución corresponde a una transformación estatal, estas transformaciones han sido analizadas por distintos autores, entre los cuales escojo a Vigo para quien la gran transformación del estado como estado de derecho se sitúa en: “tres grandes paradigmas en la historia jurídica y política de occidente: Estado de Derecho pre-moderno; Estado de Derecho Legal y Estado de Derecho Constitucional.”²¹¹

En el estado de derecho constitucional, los derechos humanos no son entendidos como lo eran antes en el marco jurídico-conceptual del estado de derecho legal, en el estado de derecho legal los derechos humanos se categorizaban como una: “concesión del estado”²¹² y “como una autorrestricción del mismo orden a asegurar la libertad;”²¹³ por esa razón el estado de derecho legal, era un estado estrictamente liberal; en esta modalidad de estado de derecho el liberalismo político se explaya en su más pura expresión, ello equivale a una mayor preferencia por los derechos de libertad y es precisamente una etapa histórica en la evolución del estado y por supuesto en la evolución de la teoría conceptual de los derechos humanos.

Contrariamente a la tradicional concepción de los derechos humanos/fundamentales en el estado de derecho legal, o llanamente estado de derecho, que tenía en la expresión derechos subjetivos públicos su más alta expresión y en donde estos se definían por la garantía de la libertad individual, bastando que el Estado no interfiriera en el disfrute de esta; en el estado de derecho constitucional, una de las finalidades básicas del estado es el respeto y la protección de los derechos humanos, función que no se agota solamente

²¹¹ VIGO, Rodolfo Luis, *Constitucionalización y judicialización del derecho. Del estado de derecho legal al estado de derecho constitucional*, Porrúa, México, 2013, p. 1.

²¹² VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 9.

²¹³ *Ídem*.

con el reconocimiento y la proclamación formal, sino a través del desarrollo de mecanismos sofisticados de garantía, entre los cuales, uno de los más destacados ha sido y es la “eficacia jurídica jurisdiccional,”²¹⁴ a través de mecanismos de garantía y de tutela jurisdiccional de los derechos humanos; que tienen en los arquetipos de los jueces constitucionales y supranacionales la fórmula más acabada de modelo de garantía jurisdiccional de los derechos, en un caso hablando de garantías internacionales de los derechos humanos, que como escribió Bobbio, han alcanzado un desarrollo muy avanzado, que aclaro, estas medidas se encuentran sujetas a una serie de restricciones y de limitaciones que emanan de la propia soberanía estatal.

Solo que la soberanía estatal de ninguna forma puede ser tergiversada para concurrir en violaciones graves de derechos humanos, y sobre todo malinterpretada para que los estados por ese subterfugio elucubren rehuir de sus obligaciones internacionales en la materia, tanto legislativas como a través de las medidas ejecutivas de las cuales el Estado se sirve para alcanzar beneficios institucionales y materiales para los ciudadanos en materia de derechos humanos;²¹⁵ además el fenómeno de la constitucionalización de los derechos humanos, y de las nuevas teorías que reclaman que “prevalezcan los derechos humanos,”²¹⁶ es muy claro y consistente de que el fundamento del estado constitucional de derecho, se encuentra respaldado por el encuentro entre el derecho positivo y el derecho natural, es decir que la constitucionalización del ordenamiento jurídico, que importa que los derechos humanos irradian el ordenamiento, como lo explica el constitucionalismo de los derechos encuentra en el derecho positivo su más elevada manifestación.²¹⁷

²¹⁴ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 9.

²¹⁵ CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *op. cit.*, p.

²¹⁶ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 9.

²¹⁷ La teoría más reciente vinculada al nuevo paradigma del tránsito del estado de derecho o estado legal al estado constitucional se encuentra estrechamente ligada como dice Vigo al: “proceso desencadenado en Europa a partir de la última guerra mundial, especialmente por la presencia gravitante que han tenido las nuevas constituciones en el terreno jurídico y también político-institucional.” Este proceso indudablemente debe analizarse a la luz de “esa inquietante y actual realidad” conocido como teoría neoconstitucionalista, que como correctamente escribe Vigo: “sirve de respaldo y desarrollo” para la actividad tuteladora y garantista realizada por los jueces constitucionales europeos en los países con control constitucional concentrado (un órgano constitucional autónomo facultado como la Constitución como máximo intérprete y garante del orden constitucional, a través de un tribunal que realiza funciones jurisdiccionales pero con control concentrado). Esta función se encuentra expresamente establecida por las

En México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos legislada y promulgada en junio del 2011 fundamenta constitucional y positivamente estas ideas, que ya habían sido formuladas doctrinaria y jurisdiccionalmente y que responden a un nuevo paradigma, pero que también son consecuencia de la paulatina evolución que el derecho por su vocación inherente hacia el individuo va formulando, el derecho resume en si una fuerza vital creadora, porque es producto de una coexistencia de factores entre la ley, los principios, los valores, la sociedad, el derecho posee esa naturaleza que como creación y disciplina humana, lo dota de una aspiración irrecusable: la búsqueda de la justicia, y la justicia y los derechos humanos son dos dimensiones fuertemente unidas.²¹⁸

La argumentación y la interpretación jurisdiccional/judicial y ahora constitucional, han tenido irremediablemente un connotado peso para la evolución de la argumentación, interpretación, legislación y aplicación del derecho; los ejemplos inundan las páginas y los libros jurídicos: el sistema judicial estadounidense con su tradición consuetudinaria, el derecho del *common law* más afín a la interpretación en base de principios y valores, pero también en el sofisticado y acabado derecho europeo: tribunales

constituciones nacionales que por medio de las asambleas constituyentes crean estos órganos/tribunales, estas constituciones (en los países con sistemas constitucionales que contemplan control constitucional concentrado: Alemania, España, Italia, Francia, Portugal entre otros, con sistema constitucional continental europeo, se caracterizan porque sus asambleas constituyentes dotaron a sus constituciones de extensos catálogos de derechos fundamentales como sus doctrinas los denominan y por una serie de principios y de valores jurídicos que integran el núcleo duro de la constitución principalmente los valores republicanos, la democracia, por supuesto, los derechos fundamentales, el estado constitucional, liberal y social de derecho como fórmula (ejemplo del caso español) y el laicismo entre otros. VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 33.

²¹⁸ Andrea Greppi describe con gran acierto esta naturaleza inherente al derecho y que explica su incesante transformación como técnica más elaborada de la civilización para alcanzar la igualdad y la libertad, es por eso que Greppi añade que el derecho como instrumento civilizatorio posee un pasado pero también un futuro: “Los derechos, en la medida en que son fundamento del Derecho, expresan la tendencia natural del hombre a evitar el dolor, la infelicidad y en general, el mal, entendido como expresión de lo irracional en la historia. Expresan la voluntad de superar agresiones y carencias intolerables. Son la técnica más elaborada, entre todas las que históricamente han sido posibles, para alcanzar una convivencia (relativamente) civilizada. En este sentido, los derechos tienen una historia pasada y tienen también un futuro, porque no derivan, como pretendían las diferentes escuelas racionalistas, de verdades universales y eternas. Podemos considerarlos como manifestación (como prueba) del progreso moral de la humanidad en la medida en que reflejan “el desarrollo de la conciencia de la conciencia, del sufrimiento, de la pobreza, de la miseria, y, en general, de la infelicidad en que vive el hombre en el mundo, en el sentimiento de la intolerabilidad de esta condición.” GREPPI, Andrea, en CARBONELL, Miguel, (Comp.), *Teoría constitucional y derechos fundamentales*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2002, p. 194.

constitucionales nacionales, instituciones europeas democráticas con órganos jurisdiccionales supranacionales, finalmente en el ámbito interamericano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas estas instituciones jurisdiccionales la mayoría en su conjunto, han ido dotando al derecho de interpretaciones jurisprudenciales que han transformado a la ley, por pretender establecer en el ejercicio de sus funciones competenciales la aplicación justa del derecho para resolver los conflictos, y han apelado a las distintas fuentes del derecho y, de entre el sistema de fuentes a los derechos humanos, aunque mejor dicho los derechos humanos encuentran en la argumentación e interpretación jurisprudencial una de las fuentes que lo han modelado.²¹⁹

Continuando con lo conducente, la reforma constitucional de derechos humanos en la materia del año 2011, se caracteriza por poseer “una importante dimensión internacional,”²²⁰ se “basa en la premisa de que los derechos humanos encarnan valores que comunes a todos los mexicanos;”²²¹ y constitucionaliza los mandatos que estipulan los pactos internacionales, porque: “eleva su protección y promoción – de los derechos humanos – en el sistema internacional a una política de Estado.”²²²

Conforme al constitucionalismo de los derechos o nuevo constitucionalismo cuyas ideas inspiran en buena parte, los resultados de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se basan en las generaciones de los derechos humanos, y en que estos según Vigo: “son visualizados como principios, mandatos de optimización o derechos

²¹⁹ En este sentido estoy de acuerdo con lo mencionado por Ferrer Mac-Gregor al escribir profusamente sobre el fenómeno de la constitucionalización del derecho internacional: “La progresiva aplicabilidad internacional de los derechos humanos en el ámbito interno de los Estados se ha venido realizando a través de diversas fórmulas o cláusulas constitucionales, o bien a través del dinamismo de la jurisprudencia constitucional.” FERRER- MACGREGOR, Eduardo, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano, en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro, *La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma*, Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 355.

²²⁰ SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natalia, COVARRUBIAS Velasco, Ana, “La dimensión internacional de los derechos humanos: Antecedentes históricos”, en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro, *La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma*, Instituto de Investigaciones Jurídicas- Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 1.

²²¹ *Ibidem.*, p. 2.

²²² SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natalia, COVARRUBIAS Velasco, Ana, “La dimensión internacional de los derechos humanos: Antecedentes históricos”, *op. cit.*, p. 2.

concentrados que requiere de los juristas que les extraigan las respuestas jurídicas apropiadas en función de los diferentes casos.”²²³ Lo anterior desde el plano internacional se explica cómo ya he señalado en que: “a medida que el régimen internacional fue evolucionando hacia un mayor grado de precisión de sus normas y aspirando a desarrollar mejores mecanismos de tutela jurisdiccional de las mismas.”²²⁴

No solo la evolución del derecho internacional fue propiciando este nuevo paradigma que se forjó acorde a la incorporación de los derechos humanos como prioridad del derecho internacional contemporáneo, y de igual manera que a partir de ese fenómeno se presentó una constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, desde la perspectiva doctrinal apunta Fix-Zamudio que:

La doctrina ha puesto de relieve que los derechos de la persona humana o derechos fundamentales según la terminología de los tratadistas alemanes (*Grundrechte*) poseen una naturaleza diversa de los derechos subjetivos ordinarios, puesto que afectan la dignidad e inclusive la existencia misma de la persona humana, por lo que su violación, aun tratándose de los derechos calificados como individuales, trascienden de la esfera del sujeto afectado y adquieren una repercusión de carácter social, con mayor razón tratándose de los derechos que se han calificado como sociales, económicos y culturales, que en ocasiones afectan a toda la comunidad.²²⁵

²²³ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 9.

²²⁴ SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natalia, COVARRUBIAS Velasco, Ana, “La dimensión internacional de los derechos humanos: Antecedentes históricos”, *op. cit.*, p. 11.

²²⁵ FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción al estudio procesal comparativo de la protección interna de los derechos humanos, en *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, México, UNAM, 1974, p. 184. La constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente bajo la figura de la cláusula de interpretación conforme a los tratados internacionales, pero también el proceso inverso de internacionalización de los derechos constitucionales de los derechos humanos, surgen como resultado de que: “La segunda mitad del siglo XX en Europa marca el tránsito del Estado de derecho legal al Estado de derecho constitucional, o sea el paso – al decir de Ferrajoli – del Estado de derecho “débil” al Estado de derecho “fuerte”. Así la realidad jurídica europea se transforma en sus líneas fundamentales, pero sintéticamente esos cambios suponen superar la sinonimia entre ley y derecho que había impulsado el siglo XIX a partir de la revolución francesa, lo cual queda receptado por primera vez en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 cuando se refiere a aquellas cualidades (“ley” y “derecho”) como distintas. VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 33.

Progresivamente el derecho en los albores del siglo XXI, se encuentra frente a un fenómeno con dos facetas: la constitucionalización del derecho y la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, ninguno es mayor ni menor al otro, ambos se retroalimentan mutuamente.

Estos procesos de gran transformación en el derecho se caracterizan, en el caso de la constitucionalización del derecho, por una serie de factores denominados como test de la constitucionalización,²²⁶ para Vigo, el primer requisito se explica en función de que la constitución se consagra como norma superior, como *higher law* porque: “pretende una permanencia prolongada y sus cambios suponen una justificación especial con un tratamiento particular,”²²⁷ el segundo requisito que define el proceso de constitucionalización del derecho previene que para conseguir estos cambios la constitución contemporánea y por ende, el constitucionalismo contemporáneo se nutre de “valores y principios”²²⁸ como fuentes constitucionales y con efectos reales en la argumentación y la interpretación del derecho, especialmente de los derechos humanos, y el tercer requisito indica que la constitución para el abono de sus fines requiere sustentarse como una “norma jurídica eficaz”²²⁹ esta innovación se personifica a través de un cada vez mayor activismo judicial, del control de convencionalidad difuso que por supuesto se sugiere debería ir aparejada de la constitucionalización de la cláusula de interpretación conforme a los tratados internacionales, la vinculación de la constitución a los tratados internacionales de derechos humanos; el principio *pro homine* y las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (obligación de respetar, proteger adoptar medidas y garantizar los derechos humanos; obligación de reparar los derechos humanos).²³⁰

²²⁶ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 38.

²²⁷ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 39.

²²⁸ *Ibidem.*, p. 39.

²²⁹ *Idem.*

²³⁰ Es conveniente de ser aplicable tomar el ejemplo que proporciona el Doctor Michael Núñez Torres previo estudio del modelo comparado, de unas instituciones jurídicas del derecho comparado en este caso del modelo jurídico británico: “La *Human Rights Act* de 1998 (S. 10), donde se autoriza a los ministros o a la Reina para que en Consejo puedan acometer las *Remedial orders*, lo cual conlleva una capacidad legislativa que le permite al Gobierno la modificación de leyes primarias, en virtud de una decisión judicial, bien porque las mismas hayan sido consideradas por una Corte Superior como incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos o porque la propia Corte Europea de Derechos Humanos haya

Ahora bien, el cuarto requisito radica en la idea de la eficacia jurisdiccional de la constitución, pues la constitución según Vigo se perfila como “garantía de control jurisdiccional”²³¹ el cual para Vigo es el rasgo: “que más acerca en la actualidad el sistema europeo al modelo norteamericano, en tanto son jueces los encomendados para velar por la prevalencia sustancial y formal de la constitución.”²³²

Sin duda una de las mayores aportaciones donde el derecho y el constitucionalismo se verán puestos a prueba es en el tema de los derechos humanos, pues estos “se tornan una realidad operativa en el derecho vigente de los Estados que pertenecen a la cultura occidental a partir de la segunda guerra mundial.”²³³ Como he mencionado el suceso tan trágico y violento de la segunda guerra mundial fue el cataclismo que aceleró el discurso que ya se venía gestando con antiquísima celeridad en las civilizaciones de occidente, no en vano Inglaterra y Francia son precursoras en el constitucionalismo de los derechos, y el derecho constitucional desde su nacimiento se encuentra fuertemente impactado por el aspecto de los derechos fundamentales o derechos del hombre, pero también como he venido señalando el discurso de los derechos humanos se había anquilosado por un excesivo tratamiento bajo el esquema legalista del estado liberal de derecho que después de la segunda guerra mundial se rebelaba insuficiente, era preciso pasar a la siguiente fase, a la fase del estado constitucional de los derechos humanos, y porque no al derecho internacional de los derechos humanos con una paulatina humanización y relativización del tradicional derecho internacional estatal y de

declarado tal disconformidad.” NÚÑEZ Torres, Michael, *op. cit.*, p. 31. Esta apreciación de una experiencia en el derecho comparado es relevante para el análisis de las obligaciones y deberes de los Estados previstas en el derecho internacional de los derechos humanos de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Particularmente para la obligación de realizar los derechos humanos que implica el deber de los Estados que son partes de los tratados internacionales de adoptar medidas positivas para conseguir el disfrute de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales. También se debe añadir la obligación de reparar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos “Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación,” prevista en el artículo 3 d), en los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, aprobada por la Asamblea General, el 16 de diciembre de 2005.

²³¹ *Ídem.*

²³² *Ídem.*

²³³ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 119.

la soberanía estatal en defecto del prioritario respecto y protección de los derechos humanos de las personas.

Este proceso de transformación de los derechos humanos, tiene que ver en palabras de Vigo con un “reconocimiento operativo”²³⁴ que trata de entender a los derechos humanos como “causa y también como efecto,”²³⁵ se repliega como bien añade Vigo:

Precisamente en Nuremberg cuando se condena a funcionarios nazis que habían cumplido la ley y violado el derecho porque aquella había incurrido en una injusticia extrema, marca el inicio de ese proceso de reconocimiento de que hay un núcleo de juridicidad indisponible que el constituyente, legislador o juez no pueden negar porque si lo hacen no lograrán crear normas jurídicas.²³⁶

Esta es la innegable transformación del constitucionalismo contemporáneo o nuevo constitucionalismo, este paradigma queda muy reflejado en dos contextos: los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo XX ganan terreno en su consideración de normas jurídicas, y no solo quedan en la pretensión de constituir argumentos, pretensiones morales, sino que su pretensión de validez jurídica se ensancha, a su vez, el nuevo constitucionalismo encabeza una miríada de transformaciones que deparan una transformación inversa, la constitución es receptora de principios y valores jurídicos y es un canal de expresión de una moralidad pública;²³⁷ y por último en que la constitución deja de ser una norma política, dedicada a regular y

²³⁴ *Ídem.*

²³⁵ *Ídem.*

²³⁶ VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 119.

²³⁷ Para ampliar la formulación precedente transcribo una reflexión muy interesante de Rodolfo Luis Vigo: “Las constituciones contemporáneas han dejado atrás aquel modelo llamado por Loewenstein “utilitario” que auspiciaba Kelsen, y han optado por cargarse de exigencias que remiten a la moral en tanto suponen preferencias sobre lo “bueno” o lo valioso que merecen o exigen ser consagradas jurídicamente. Por supuesto, que esas apelaciones constitucionales a lo que “debe ser” no siempre se rotulan de la misma manera, e incluso pareciera prevalecer contemporáneamente el lenguaje de los derechos humanos en tanto “reconocidos”, “inalienables” y “universales”. El lugar tradicional en donde se encuentra la “moralidad constitucional” es en la parte dogmática, pero ella también abunda en los Preámbulos y recordemos que en Francia – quizás el país europeo menos generoso con la constitucionalización – el Consejo Constitucional en 1971 reconoció la operatividad del contenido en la Constitución francesa con su invocación a las declaraciones de derechos.” VIGO Rodolfo, Luis, *op. cit.*, p. 39.

contener el poder público, la constitución se transforma en una norma jurídica a la usanza del derecho del *common law* o consuetudinario, lo que constituye un punto de encuentro entre dos constitucionalismos históricos.²³⁸

II.III El Derecho al Desarrollo en la Jurisprudencia

II.III.I La Jurisprudencia Mexicana

El derecho al desarrollo se ha manifestado en la jurisprudencia mexicana de manera indirecta, a través de diversas tesis jurisprudenciales enfocadas a derechos de sujetos de desarrollo que se enmarcan de acuerdo al estudio sistematizado del derecho al desarrollo como titulares del derecho al desarrollo en estricto sentido, a continuación enumero algunos de los sujetos especiales de este derecho a quienes les corresponde la titularidad jurídica en estricto sentido, el desarrollo progresivo de los derechos humanos consistente en “providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”²³⁹

- a) Desarrollo progresivo de los derechos humanos
- b) Medidas progresivas contra la violación de los derechos humanos
- c) Libre determinación de los pueblos
- d) Democracia participativa (art. 8.2 de la declaración)
- e) La inclusión de la mujer (art. 8.1 de la declaración)
- f) Discapacitados

²³⁸ Menciona Rodolfo Luis Vigo: “Otro factor igualmente muy importante en aquel proceso fue el descubrimiento en Europa que la Constitución era jurídica y no meramente política, consecuentemente permitía y exigía que se controlara desde ella a las demás normas, incluso aquellas que hacía el legislador.” VIGO, Rodolfo Luis, *op. cit.*, p. 120.

²³⁹ Artículo 26, *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Compilación de Instrumentos Internacionales sobre protección de la persona aplicables en México. Derecho internacional de los derechos humanos, op. cit.*, p. 169.

VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN ANALIZARSE DIRECTAMENTE POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO NO HUBIESEN SIDO PREPARADAS DENTRO DEL JUICIO NATURAL, CUANDO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO HABITA EN ZONAS QUE REQUIEREN UNA ATENCIÓN PRIORITARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA POBREZA, Y LOS RESULTADOS DE POBREZA A NIVEL NACIONAL Y POR ENTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS AMBOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 171, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, la preparación de las violaciones a las leyes del procedimiento no será exigible, entre otros supuestos, cuando el quejoso se encuentre en condiciones de pobreza o marginación que lo coloquen en una clara desventaja social para emprender un juicio. En estas condiciones, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizada dicha excepción cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, y los resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su calidad de organismo público descentralizado y, por ende, deberá analizar directamente las violaciones procesales planteadas, aun cuando no hubiesen sido preparadas dentro del juicio natural, a través de los recursos ordinarios procedentes.²⁴⁰

²⁴⁰ Tesis jurisprudencial aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

A continuación se agrega una tesis jurisprudencial interesante porque se refiere a un sujeto especial de desarrollo: la mujer.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO. EL ARTÍCULO 58, NUMERAL 5, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE ESTABLECE QUE PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, CADA PARTIDO DEBERÁ DESTINAR ANUALMENTE EL 2% DE AQUÉL, NO SE CONTRAPONA CON EL DIVERSO PRECEPTO 41, NUMERAL 1, INCISO A), DEL CITADO ORDENAMIENTO QUE PREVÉ LA OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS DE CANALIZAR EL 15% DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES QUE IMPULSEN MECANISMOS EN MATERIA DE GÉNERO. De los citados preceptos se advierte que ambos establecen reglas tendentes a garantizar la participación de las mujeres en la vida política del Estado de Chihuahua bajo dos vertientes. Así, el artículo 41 prevé como obligación de los partidos políticos la de canalizar el 15% del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que impulsen mecanismos en materia de perspectiva de género, de donde se sigue que lógicamente está enfocado en apoyar dicha perspectiva; a diferencia de lo dispuesto en el artículo 58 que fija las bases del financiamiento público anual que reciben los partidos políticos, señalando en su numeral 5 que para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido deberá destinar anualmente el 2% del financiamiento público ordinario, es decir, esta última es una regla expresa y desde luego

del Segundo Circuito, contiene los siguientes datos: Amparo directo 578/2013. Columba Beatriz León López. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. Amparo directo 582/2013. Carmen Vega Valdes. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Marlene Ramírez Marín. Amparo directo 587/2013. Luz María Maldonado Huerta. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: Ana Elena Ruedas Ydrac. Amparo directo 609/2013. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Miriam Corte Gómez. Amparo directo 579/2013. María Guadalupe Montoya González. 11 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretario: Lorenzo Hernández de la Sancha. Ejecutoria de amparo directo 609/2013. Tesis: II.4o.A. J/1 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 06 de diciembre 2013, 10° época, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

diferente a la que se contempla en el artículo 41, pues el porcentaje del 2% se refiere a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y el primer porcentaje mencionado se refiere en general al financiamiento para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar mecanismos en materia de perspectiva de género. En consecuencia, esas normas no se contraponen, sino que forman parte del sistema legal que tiende a garantizar el apoyo de las mujeres en las actividades políticas del Estado de Chihuahua, aunado a que no se aprecia la existencia de reglas discriminatorias en contra de aquéllas, sino por el contrario, de disposiciones que procuran su participación en la vida democrática de la entidad.²⁴¹

La siguiente tesis jurisprudencial también es importante, esta aborda el tema de desarrollo y medio ambiente que es un concepto sustancial en la Declaración del Desarrollo:

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la obligación correlativa de las autoridades de

²⁴¹ Esta jurisprudencia se aprobó por el tribunal en pleno producto de los siguientes datos: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2009 Y SUS ACUMULADAS 64/2009 Y 65/2009. Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y Procurador General de la República. 1o. de diciembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 16/2013 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece. Tesis: P./J. 16/2013 (9a.), Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Libro XX, Mayo de 2013, Décima época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 150.

vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).²⁴²

Para efectos de mi investigación doctoral adjunto otra tesis significativa por abordar un criterio en materia de control de convencionalidad:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P.

²⁴² Tesis jurisprudencial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contiene los siguientes datos: Amparo en revisión 496/2006. Ticic Asociación de Nativos y Colonos de San Pedro Tláhuac, A.C. 17 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. Amparo en revisión (improcedencia) 486/2008. Asociación de Residentes de Paseos de Las Lomas, A.C. 28 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Amparo en revisión (improcedencia) 230/2009. Carla Alejandra Chávez V. 24 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez. Amparo en revisión 267/2010. Margarita Ornelas Teijo. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. QUEJA 35/2013. Integradora de Empresas Avícolas de La Laguna Durango Coahuila, S.A. de C.V. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas. Ejecutoria Queja 35/2013. Tesis: I.4o.A. J/2 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XXV, Octubre de 2013, 10° época, Semanario Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, p. 1627.

LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los

derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.²⁴³

²⁴³ Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con los siguientes datos: Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia. [Amparo directo 225/2013](#). 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. Producto de Amparo directo: 225/2013. Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, 06 diciembre 2013, Semanario del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.

II.III.II La Jurisprudencia en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos

No hay duda de que las garantías internacionales jurisdiccionales han producido un interesante avance en lo que concierne a la eficacia de los derechos humanos, en este caso respecto de los mecanismos de garantía y de tutela jurisdiccional de los derechos humanos, pero sus avances han trascendido de la jurisprudencia a la doctrina, y consecuentemente a la evolución de los textos jurídicos con los cuales trabajan los juristas y demás operadores jurídicos, ello tiene que ver particularmente con lo concerniente a lo que Hart observa en la “naturaleza del derecho y de los conceptos jurídicos”²⁴⁴ pues encierra una verdad jurídica que no es ambivalente, porque según Hart indica un mecanismo corrector sobre “un error fundamental,”²⁴⁵:

El error fundamental consiste en creer que los conceptos jurídicos son precisos y cerrados, en el sentido de que es posible definirlos exhaustivamente en términos de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes; de manera que para todo caso real o ficticio es posible decir con certeza si cae bajo el concepto o no; el concepto se aplica o no se aplica; es lógicamente cerrado. Ello conllevaría que la aplicación de un concepto a un caso dado es una simple operación lógica concebida como un tipo de revelación de lo que no existe, y, en la formulación angloamericana, más simple, conllevaría a sostener la creencia de que el significado de todas las reglas jurídicas está precisado y predeterminado antes de que surja cualquier problema concreto relativo a su aplicación.²⁴⁶

Es suficiente para determinar que la función que desempeña la función jurisprudencial es esencial y se localiza en la misma naturaleza del derecho, porque como tempranamente señalaba Hart: “Los legisladores humanos no tienen tal conocimiento de todas las posibles combinaciones de circunstancias

²⁴⁴ HART, H.L.A., “El cielo de los conceptos de Ihering y la jurisprudencia analítica moderna”, en CASANOVAS, Pompeu, MORESO, José Juan (Eds.), *El ámbito de lo jurídico*, Crítica, Barcelona, 1994, p. 113.

²⁴⁵ *Ídem*.

²⁴⁶ HART, H.L.A., “El cielo de los conceptos de Ihering y la jurisprudencia analítica moderna”, en CASANOVAS, Pompeu, MORESO, José Juan (Eds.), *El ámbito de lo jurídico*, op. cit., p. 113.

que el futuro puede depararnos. Esto significa que todas las reglas jurídicas son “abiertas”; y cuando surge un caso no previsto tenemos que tomar una decisión nueva, y al hacerlo reelaboramos nuestros conceptos jurídicos, adaptándolos a fines socialmente deseables.”²⁴⁷ Esta es la idea temprana de la textura abierta del derecho que tanto impactará en la doctrina del nuevo constitucionalismo y lógicamente en las decisiones de los tribunales constitucionales y órganos jurisdiccionales en general.

Y porque el derecho como asienta Ihering: “existe para realizarse”²⁴⁸ la jurisprudencia según Ihering forma parte de un sistema que es una fuente inagotable de nueva materia,²⁴⁹ porque la jurisprudencia no sólo se “dedica a alumbrar lo que el legislador ha dispuesto indirectamente,”²⁵⁰ en ello no cabe hablar “de materia nueva”²⁵¹, la jurisprudencia no solamente “revela” sino que también crea, por eso Ihering afirma que: “existe en el sentido estricto de la palabra, la creación de materia absolutamente nueva.”²⁵²

Antes de entrar en materia solo resta recordar al jurista quien explica una realidad que pervive y que gracias a ella la jurisprudencia como criterio corrector de las normas jurídicas se consolida como una tarea fundamental del derecho: “La jurisprudencia nace con la interpretación, que por fuerza ha de ser la primera operación que aquella efectúe sobre la materia legal.”²⁵³ A través del tiempo que el derecho ha evolucionado, existe un irreversible encuentro entre el derecho internacional contemporáneo y el nuevo constitucionalismo, más abierto, más argumentativo, más interpretativo, centrado en principios y en

²⁴⁷ *Ibidem.*, p. 114.

²⁴⁸ Ihering en su trabajo: La jurisprudencia de conceptos” se avoca a estudiar la jurisprudencia escribe: “El derecho existe para realizarse. La realización es el elemento que otorga vida y verdad al derecho, es el derecho en sí mismo. El derecho que no se traduce en realidad, que únicamente se encuentra sobre el papel, en las leyes, no es sino pseudoderecho, vana palabrería. Por el contrario, lo que se plasma en derechos es derecho, aunque no aparezca en ninguna ley y el pueblo y la comunidad científica aún no se hayan percatado de ello.” IHERING Von, Rudolf, “La jurisprudencia de conceptos”, en CASANOVAS, Pompeu, MORESO, José Juan (Eds.), *El ámbito de lo jurídico*, Crítica, Barcelona, 1994, p. 60.

²⁴⁹ *Ibidem.*, p. 100.

²⁵⁰ *Ídem.*

²⁵¹ *Ídem.*

²⁵² IHERING Von, Rudolf, La jurisprudencia de conceptos, en CASANOVAS, Pompeu, MORESO, José Juan (Eds.), *El ámbito de lo jurídico*, op. cit., p. 100.

²⁵³ *Ibidem.*, p. 85.

valores, situado bajo la premisa de que la dignidad humana del hombre es fin y no medio.

La Convención Americana de Derechos Humanos, protege derechos y libertades similares a los derechos y libertades protegidos por tratados convencionales y sectoriales universales, esta convención “obedece a una tendencia regional, muy característica de esta parte del continente, pero no se opone al universalismo pues los derechos esenciales del hombre, como reza el Preámbulo de la Convención, “tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional.”²⁵⁴

Los Derechos y libertades protegidos por la Convención son: Derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica (artículo 3°), “es el derecho que garantiza la existencia de una persona humana frente a la ley.”²⁵⁵ Derecho a la vida (artículo 4°); derecho a la integridad física, síquica y moral (artículo 5°); prohibición de la esclavitud y servidumbre (artículo 6°); derecho a la libertad personal (artículo 7°) este derecho “regula la detención, el encarcelamiento y prohíbe la prisión por deudas.”²⁵⁶ Garantías judiciales (artículo 8°); Derecho al honor y derecho a la intimidad (artículo 11°) este derecho se encuentra en conexión con los derechos de la personalidad y el acabado derecho al desarrollo de la libre personalidad. La Convención asimismo proclama las libertades de conciencia y de religión (artículo 12°); las libertades de pensamiento y de expresión (artículo 13°); derecho de rectificación o respuesta, este derecho consiste en: “proteger la honra y reputación de informaciones inexactas o agraviantes de los medios de comunicación”²⁵⁷ doctrinalmente se le conoce como derecho de réplica. La Convención también consagra los derechos de reunión y de libertad de asociación (artículos 15° y 16°); el derecho a la familia (artículo 17°) consagrando a la familia como un bien jurídico protegido; derecho al nombre (artículo 18°); derechos de los niños

²⁵⁴ NIETO, Navia, *Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos humanos*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1993, p. 49.

²⁵⁵ *Ibidem.*, p. 50.

²⁵⁶ NIETO, Navia, *Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos humanos*, op. cit., p. 50.

²⁵⁷ *Ibidem.*, p. 51.

(artículo 19°); derecho a la nacionalidad (artículo 20°): este artículo consagra el derecho a la nacionalidad en base al *jus soli* y tutela la prohibición expresa de la privación arbitraria de la nacionalidad para evitar la situación indeseable de apátridas en el continente y estatuye el derecho inalienable a cambiar la nacionalidad.

La convención también consagra el derecho a la propiedad privada (artículo 21°); derecho de circulación y de residencia (artículo 22°); derechos políticos (artículo 23°) conectado con la democracia representativa y participativa; igualdad ante la ley (artículo 24°); el artículo 25 contiene una garantía de libertad personal y de protección judicial que es el *Habeas corpus*; (artículo 25°) y el artículo 26° es el fundamento del sistema interamericano que establece los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26°). Estos derechos se fundamentan en base al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado y suscrito en el décimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA en El Salvador en noviembre de 1988.²⁵⁸

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue instaurada por medio del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado en octubre de 1979 en la ciudad de La Paz Bolivia por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su noveno periodo de sesiones, en la resolución 448.²⁵⁹ El estatuto integrado por 32 artículos dispone en el artículo 1° que la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto.”²⁶⁰

El artículo 2° que establece la competencia y funciones de la Corte determina que: “La Corte ejerce una función jurisdiccional y consultiva, que su

²⁵⁸ *Ibidem.*, p. 52.

²⁵⁹ Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en: ZUMAQUERO, José Manuel, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos II 1978-1998*, EUNSA, Navarra, 1998, p. 1780.

²⁶⁰ *Ibidem.*, artículo 1° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 62° y 63° de la Convención y que su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64° de la Convención.”²⁶¹ La Corte se encontrará integrada por siete jueces procedentes de los estados nacionales de la OEA, se establecen una serie de requisitos estatutarios legales como criterios de elegibilidad y la prohibición expresa de que solamente debe haber un juez representante por nacionalidad, de ninguna manera dos nacionales.²⁶²

El artículo 27° señala que las relaciones con el país sede, con Estados y organismos de la Corte: “serán reglamentadas mediante un acuerdo sede. La sede la Corte tendrá carácter internacional. Las relaciones de la Corte con los Estados, con la OEA y sus organismos y con otros organismos internacionales gubernamentales relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos serán regulados mediante acuerdos especiales.”²⁶³

El artículo 28° estatuye acerca de las relaciones de la Corte con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, establece que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá y será tenida como parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la función jurisdiccional de ésta conforme al artículo 2.1 del presente estatuto.”²⁶⁴ A continuación una definición completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

²⁶¹ *Ibidem.*, artículo 2° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

²⁶² *Ibidem.*, artículo 4° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

²⁶³ *Ibidem.*, artículo 27° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

²⁶⁴ *Ibidem.*, artículo 28° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue establecida por el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 1° señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es: “un órgano de la Organización de Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” Además el artículo 1.2° del Estatuto de la Comisión Interamericana determina que por derechos humanos se entienden “a) los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los Estados partes en la misma; b) los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en relación con los demás Estados miembros,” el Estatuto también comprende en el artículo 2° que la Comisión se integra de siete miembros, estatuyendo los esenciales requisitos de elegibilidad y el mandato de que la Comisión debe representar a todos los Estados miembros de la OEA. Es importante señalar que el artículo 7° del Estatuto también determina que en la Comisión: “No puede formar parte más de un nacional de un mismo Estado.” Véase: Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en: ZUMAQUERO, José Manuel, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos II 1978-1998*, EUNSA, Navarra, 1998, pp.1771-1779.

Es una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir cualquier caso contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, y para disponer que se garantice a la víctima de la violación de un derecho o libertad protegidos por esta, el goce del derecho o libertad conculcados (arts. 62° y 63° de la Convención y art. 1° del Estatuto de la Corte). En virtud del carácter obligatorio que tienen sus decisiones en materia contenciosa (art. 68°), la Corte representa además, el órgano con mayor poder conminatorio para garantizar la efectiva aplicación de la Convención.”²⁶⁵

En este orden de ideas el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) redactada en el año de 1969, esta Convención, crucial e importantísima, (columna vertebral del sistema interamericano de protección de los derechos humanos), señala una obligación estatal que denominan derecho progresivo, así el artículo 26 define lo que la Organización de los Estados Americanos, entiende por desarrollo progresivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.²⁶⁶

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha considerado que esta clase de derechos se agrupan en una categoría que la doctrina de la Corte Interamericana ha denominado como “derecho progresivo,” por lo que a través de sendos pronunciamientos jurisprudenciales, se ha ratificado la existencia de este derecho que implica un deber estatal, por lo tanto se habla de una

²⁶⁵ NIETO, Navia, *Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos humanos*, op. cit., p.75.

²⁶⁶ Artículo 26, *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. op. cit.

obligación, que se establece además como un deber y un derecho correlativo para los ciudadanos de América Latina. Entre los criterios jurisprudenciales, a fin de justificar mi tesis, me propongo adjuntar unas tesis con los correspondientes análisis, a continuación adjunto un criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la materia objeto de investigación del presente documento:

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
INTERDEPENDENCIA CON LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

La Corte considera pertinente recordar la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Al respecto, resulta oportuno citar la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos que, en el caso Airey señaló que: El Tribunal no ignora que la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende de la situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica. Por otro lado, el Convenio [Europeo] debe interpretarse a la luz de las condiciones del presente [...] y ha sido diseñado para salvaguardar al individuo de manera real y efectiva respecto de los derechos protegidos por este Convenio [...]. Si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social. Por eso el Tribunal estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación del Convenio pueda extenderse a la esfera de los derechos sociales y económicos no es factor decisivo en contra de dicha interpretación, ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio²⁶⁷ (Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la

²⁶⁷ [Nota de la Jurisprudencia de la Corte] ECHR, Case of Airey v. Ireland, Judgment of 9 October 1979.

contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).²⁶⁸

En este orden de ideas se destaca que este criterio jurisprudencial, supone una aproximación para delimitar que la Corte establece un criterio básico de la teoría de los derechos humanos y es que los derechos humanos son interdependientes, se recuerda que el principio de interdependencia de los derechos humanos, fue añadido como principio en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, sin embargo ningún principio es absoluto, por lo que la Corte correctamente estima en el criterio en comento: *“que la progresiva realización de los derechos sociales y económicos depende de la situación de cada Estado, y sobre todo de su situación económica.”*

Acorde a lo anterior, la Corte Interamericana fundamentándose en los argumentos del supremo tribunal europeo de derechos humanos, la Corte de Estrasburgo, hace suyo el argumento disertante, que aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se refiere básicamente a derechos clásicos, de naturaleza libertaria, “civiles y políticos,” ese criterio “puede extenderse a la esfera de los económicos y sociales,... ya que no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el Convenio.”²⁶⁹ Esto también puede vincularse a que “[...] los unos y los otros derechos no son ni naturalmente diferentes, ni desde su fundamentación, su formulación y su titularidad. En definitiva, existe una interdependencia e indivisibilidad entre los derechos que provoca lo que puede calificarse como una esencial continuidad entre ellos, tanto en su conceptualización, como en el cálculo de costes, en su alcance y en sus límites.”²⁷⁰

²⁶⁸ SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales*, Tirant lo Blanch, México D.F., 2012, pp. 541-542.

²⁶⁹ *Ídem.*, p. 542.

²⁷⁰ ROSETTI, Andrés, “¿Los derechos sociales como derechos de segunda? Sobre las generaciones de derechos y las diferencias con los derechos de primera,” en ESPINOZA de los Monteros, Javier, ORDÓÑEZ, Jorge, *Los derechos sociales en el Estado Constitucional*, Tirant lo Blanch, México, 2013, p. 314.

Ahora, pasaremos al segundo criterio que se agrupa en la materia de desarrollo progresivo,²⁷¹ y que corresponde también a un criterio jurisprudencial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la materia:

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ANTECEDENTES DEL ART. 26 DE LA CONVENCIÓN. El compromiso exigido al Estado por el artículo 26 de la Convención consiste en la adopción de providencias, especialmente económicas y técnicas – en la medida de los recursos disponibles, sea por vía legislativa u otros medios apropiados – para lograr progresivamente la plena efectividad de ciertos derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido el Tribunal recuerda que el contenido del artículo 26 de la Convención fue objeto de un intenso debate en los trabajos preparatorios de ésta, nacido del interés de los Estados por consignar una “mención directa” a los “derechos” económicos, sociales y culturales; “una disposición que establezca cierta obligatoriedad jurídica [...] en su conocimiento y aplicación”; así como “los [respectivos] mecanismos [para su] promoción y protección”, ya que el Anteproyecto de tratado elaborado por la Comisión Interamericana hacía referencia a aquellos dos artículos que, de acuerdo con algunos Estados, sólo recog[ían] en un texto meramente declarativo, conclusiones establecidas en la Conferencia

²⁷¹ No debemos confundir desarrollo progresivo con derecho humano al desarrollo, aunque están cercanamente relacionados, por desarrollo progresivo se entiende que “Los tratados internacionales referidos a la protección de los derechos humanos ofrecen un marco apropiado para el desarrollo progresivo de su contenido. Frecuentemente la intención de las partes ha sido la de definir, de algún modo a esas convenciones como una suerte de punto de partida, que establece una garantía mínima, cuyas restricciones están prohibidas, pero cuyas ampliaciones están autorizadas. Esa intención de las partes, junto con la naturaleza misma que se ha reconocido a dichos instrumentos y las particularidades que se desprenden de la aplicación de las reglas de interpretación en este ámbito, constituyen las bases sobre las que el régimen evoluciona positivamente. El análisis de los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos revela como ellos, en sí mismos, contienen el principio de su desarrollo progresivo. Puede delinearse, en primer término, un marco general (I) dentro del cual la intención de quienes los suscriben, se manifiesta, expresa o implícitamente, en el sentido de impulsar un proceso de desarrollo progresivo, dentro del cual las diversas convenciones o declaraciones representan un paso que no agota la instauración del sistema. Por otro lado, en parte como consecuencia de la anterior circunstancia, la aplicación de las reglas de interpretación (II) al derecho internacional de los derechos humanos ofrece unas modalidades particulares que tienden a extender el alcance del sistema o, por lo menos, a optar por la más amplia entre las posibles interpretaciones que pueda motivar un determinado texto.” Véase: NIKKEN, Pedro, *La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo*, Civitas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Madrid, 1987, pp. 75-76.

de Buenos Aires”. La revisión de dichos trabajos preparatorios de la Convención demuestra también que las principales observaciones sobre la base de la cuales ésta fue aprobada pusieron especial énfasis en “dar a los derechos económicos, sociales y culturales la máxima protección compatible con las condiciones peculiares a la gran mayoría de los Estados Americanos”. Así, como parte del debate que en los trabajos preparatorios, también se propuso “hac[er] posible [la] ejecución [de dichos derechos] mediante la acción de los tribunales”. Asimismo resulta pertinente observar que si bien el artículo 26 se encuentra en el capítulo III de la Convención, titulado “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, se ubica, también, en la parte I de dicho instrumento, titulado “Deberes de los Estados y Derechos Protegidos” y, por ende, está sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 señalados en el capítulo I (titulado “Enumeración de los deberes”), así como lo están los artículos 3 al 25 señalados en el capítulo II (titulado “Derechos Civiles y Políticos). (Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).²⁷²

Este criterio jurisprudencial, de la Corte Interamericana, también resulta de gran utilidad, primero, porque fue una decisión soberana, de los Estados miembros, dotar a la Convención, de una norma como el artículo 26, que supone de entrada una exigibilidad, como menciona, el numeral nació del interés de los Estados: “por consignar una “mención directa” a los “derechos” económicos, sociales y culturales; “una disposición que establezca cierta obligatoriedad jurídica [...] en su conocimiento y aplicación”; así como “los [respectivos] mecanismos [para su] promoción y protección.”²⁷³ Además, fueron los propios estados los que subrayaron la necesidad de: “...dar a los derechos económicos, sociales y culturales la máxima protección compatible con las condiciones peculiares a la gran mayoría de los Estados Americanos.”²⁷⁴ En

²⁷² SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales*, op. cit., pp. 542-543.

²⁷³ *Ídem*.

²⁷⁴ *Ídem*.

vista de lo anterior, corresponde ahora citar el tercer criterio jurisprudencial, que versa también sobre la materia y que refuerza la doctrina de la corte interamericana en materia de desarrollo:

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD.

El Tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la plena efectividad de aquellos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa medida, “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo [...] y las dificultades que implica cada país el asegurar [dicha] efectividad.”²⁷⁵ En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido.²⁷⁶ Así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá

²⁷⁵ [Nota de la Jurisprudencia de la Corte] Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), U.N. Doc. E/1991/23, Quinto Período de Sesiones (1990), párr. 9.

²⁷⁶ [Nota de la Jurisprudencia de la Corte] El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que “[c]uando estudie una comunicación en que se afirme que un Estado Parte no ha adoptado medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, [...] examinará las medidas, legislativas o de otra índole, que el Estado Parte haya adoptado efectivamente. Para determinar si esas medidas son ‘adecuadas’ o ‘razonables’, el Comité ‘podrá tener en cuenta, entre otras, las consideraciones siguientes: a) [h]asta qué punto las medidas adoptadas fueron deliberadas, concretas y orientadas al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; b) [s]i el Estado Parte ejerció sus facultades discrecionales de manera no discriminatoria y no arbitraria; c) [s]i la decisión del Estado Parte de no asignar recursos disponibles se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos; d) [e]n caso de que no existan varias opciones en materia de normas, si el Estado Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los derechos reconocidos en el Pacto; e) [e]l marco cronológico en que se adoptaron las medidas [, y] f) [s]i las medidas se adoptaron teniendo en cuenta la precaria situación de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, si las medidas fueron no discriminatorias y si se dio prioridad a las situaciones graves o de riesgo.” Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de

ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos. Como correlato de lo anterior, se desprende un deber – si bien condicionado- de no – regresividad, que no siempre deberá ser entendido como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “las medidas de carácter deliberadamente re[gresivo] en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que [el Estado] disponga.”²⁷⁷ En la misma línea, la Comisión Interamericana ha considerado que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá “determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso.”²⁷⁸ Por todo lo expuesto, cabe afirmar que la regresividad resulta justiciable cuando de derechos económicos, sociales y culturales se trate (Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción

conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C.12/2007/1,38º Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 8.

²⁷⁷ [Nota de la Jurisprudencia de la Corte] Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “[e]n caso de que un Estado Parte aduzca ‘limitaciones de recursos’ para explicar cualquier medida regresiva que haya adoptado, [...] examinará esa información en función de las circunstancias concretas del país de que se trate y con arreglo a los siguientes criterios objetivos: a) [e]l nivel de desarrollo del país; b) [l]a gravedad de la presunta infracción, teniendo particularmente en cuenta si la situación afecta al disfrute de los derechos básicos enunciados en el Pacto; c) [l]a situación económica del país en ese momento, teniendo particularmente en cuenta si el país atraviesa un período de recesión económica; d) [l]a existencia de otras necesidades importantes que el Estado Parte deba satisfacer con los recursos limitados de que dispone; por ejemplo, debido a un reciente desastre natural o a un reciente conflicto armado interno o internacional; e) [s]i el Estado Parte trató de encontrar opciones de bajo costo [,] y f) [s]i el Estado Parte recabó cooperación y asistencia de la comunidad internacional o rechazó sin motivos suficientes los recursos ofrecidos por la comunidad internacional para la aplicación de lo dispuesto en el Pacto.” Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C-12/2007/1,38º Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 10.

²⁷⁸ Informe de Admisibilidad y Fondo No. 38/09, Caso 12.670, Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras Vs. Perú, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de marzo de 2009, párr.. 140 a 147.

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).²⁷⁹

Este criterio, menciona que las medidas que el Estado debe incorporar para obtener el desarrollo progresivo de derechos económicos, sociales y culturales, están sujetas a los principios de progresividad y que la regresividad en materia de esos derechos resulta justiciable, por lo que se observa una obligación de hacer que tiene el Estado como deber, aunque también una flexibilidad acorde a sus capacidades, por si bien este deber estatal de emitir diversas providencias en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se encuentra condicionado pues según lo señala la Corte Interamericana: “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo [...] y las dificultades que implica cada país el asegurar [dicha] efectividad.”²⁸⁰

La Corte Interamericana por medio de la jurisprudencia realiza un razonamiento jurídico, donde se observa que el argumento, se plantea en tres fuentes jurídicas, la Convención en su artículo 26, el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como sus protocolos facultativos, y finalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales quisiera establecer unos planteamientos debido a que la Corte los menciona en sus argumentos que conformarían los criterios jurisprudenciales.

Héctor Fix –Zamudio y Salvador Valencia Carmona, comentan que con la internacionalización de los derechos humanos, posterior a la segunda guerra mundial, ocurrió tal fenómeno de internacionalización en el tema de los derechos humanos, fue así que con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Bogotá, ambas del año de 1948, la primera de diciembre y la segunda de mayo, se comenzó a integrar de manera primaria el sistema internacional de los derechos humanos, existía cierto, el preámbulo de la Carta de las Naciones

²⁷⁹ SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales*, op. cit., pp. 543-544.

²⁸⁰ *Ídem*.

Unidas de 1945, que establecía también a los derechos humanos, como un objetivo de la unión de los Estados miembros, sin embargo, estas declaraciones por sí solas y por la naturaleza jurídica que la propia declaración tiene “[...] no tuvieron un carácter vinculante.”²⁸¹

El resultado, es conocido, y como bien dicen los tratadistas se resume en la siguiente cita: “Más tarde, para hacer obligatoria la Declaración Universal, el 16 de diciembre de 1966, se adoptaron y abrieron a ratificación tres documentos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo de este último; tales instrumentos entraron en vigor en 1976.”²⁸²

Ello, en correlación al plano internacional, pues como se sabe en el ámbito regional, interamericano, que es el que le concierne a México, por proximidad geográfica y estratégica, “[...] por lo que se refiere a la Declaración Americana se le otorgó fuerza jurídica a través del Pacto de San José, firmado el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor el 28 de julio de 1978.”²⁸³ El proceso no cesa, lo que sí cabe destacar es que los derechos humanos, con su internacionalización y su posicionamiento en el debate internacional de los estados transformaron también las ideas de que el derecho internacional, solo tenía por objeto, las relaciones entre los estados, con carácter de iguales, el fenómeno de la internacionalización de los derechos humanos, puso de relieve una transición que es propia del pensamiento liberal, en esto César Sepúlveda confirma lo siguiente:

No sólo significó un cambio vital en la esencia del derecho internacional, pues esta rama, pensada para las relaciones entre los Estados y sus derechos propios, tuvo que ensancharse para tratar también los derechos de los individuos, lo que a su vez produjo un impacto en el campo del dominio reservado de los Estados, introduciendo elementos

²⁸¹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, México, Ed. Porrúa, 2012, p. 427.

²⁸² *Ibídem.*, pp. 427-428.

²⁸³ *Ibídem.*, p. 428.

nuevos y hasta cierto punto perturbadores en el derecho interno de los Estados.²⁸⁴

Los razonamientos elaborados por la Corte Interamericana, que tomaron como fundamento las sentencias del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que a su vez se fundamentaron en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, encontraron una interrelación, y una interdependencia²⁸⁵ en estos instrumentos jurídicos, planteando que el desarrollo progresivo, y el deber del estado de adoptar medidas progresivas en materia de derechos económicos, culturales y sociales, no era opuesto a la materia de los derechos civiles y políticos, sino que se armonizan, se establece como un deber, y está claro, limitado a las circunstancias propias de los países.²⁸⁶ En el ámbito europeo, Josep Casadevall, indica: “El Convenio Europeo de Derechos

²⁸⁴ SEPÚLVEDA, Cesar, *Estudios sobre derecho internacional y derechos humanos*, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Colección Manuales (91/7), México, 1991, p. 17.

²⁸⁵ Pues bien las dos generaciones de derechos humanos propiciaron, que la aparición de los principios de indivisibilidad e interdependencia, principios que la Constitución Mexicana declara en su artículo 1, refiriéndose a los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. Esto no sucedió por obra de la casualidad, la aparición de las dos generaciones de derechos humanos: la de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, ocasionó que ningún pacto fuera posible sin el cumplimiento del otro, para alcanzar los objetivos del primero, era necesario alcanzar los objetivos del segundo y viceversa, en la medida en que las circunstancias nacionales lo permitieran, sin embargo el deseo y la aspiración y la preocupación de la comunidad internacional en su conjunto, motivo y admitió estos pactos con los consecuentes principios que de manera inexorable fueron generando, como de manera estupenda lo afirma Felipe Gómez Isa: “A pesar de la existencia y aparición histórica de las dos generaciones de derechos humanos, que acabamos de analizar, estos dos tipos de derechos no son dos compartimientos-estancos, dos categorías completamente autónomas, sino que ambas generaciones van a estar profundamente interrelacionadas. Esta compenetración de los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales, por otro, ya se puso de manifiesto en la Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968. En el Acta Final de esta Conferencia se proclamaba la indivisibilidad e interdependencia de ambos tipos de derechos. Esta idea de una enorme importancia en la práctica de los derechos humanos, es reiterada en la resolución 31/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1977.” GÓMEZ Isa, Felipe, *op. cit.*, p. 12.

²⁸⁶ Si bien, el desarrollo es un tema complejo, y que se visualiza desde dos ópticas correlativas, como deber del Estado y derecho de los ciudadanos, el tema continúa pendiente, por eso Víctor Conde opina que “el desarrollo es un concepto complejo y controversial, difícil de definir, generalmente definido con dos acepciones: como un proceso y además como un específico y sustantivo derecho humano” En el original del inglés: “Development is a complex, controversial, and difficult concept to define, both generally as a process and as a specific substantive human right.” CONDÉ, Víctor, *A Hand book of international human rights terminology*, 2º, Nebraska Press, 2004, pp. 65.

Humanos no se limita a proclamar la serie de derechos y libertades fundamentales que se han enumerado.”²⁸⁷

Respecto del ámbito europeo, se observa la tendencia a ampliar el marco de protección en materia de los derechos humanos, en el mismo orden de ideas, Josep Casadevall, argumenta que tras la proclamación de los derechos y libertades, lo realmente relevante en el Convenio Europeo es lo que incide en su efectividad, se trata de un texto convencional que no se limita al reconocimiento de los derechos y libertades, el convenio instituye en sus contenidos, medidas efectivas para poder ser aplicado en las violaciones de derechos humanos comprobadas, de proceder la aplicación se deberá otorgar a la víctima una reparación equitativa (obligación de reparar violaciones de los derechos humanos), es así como el convenio contiene los “mecanismos de garantía y de control convencional.”²⁸⁸ Un verdadero convenio garantista de derechos y libertades, pero esa no es la única connotación del convenio, en las últimas décadas el Tribunal de Estrasburgo ha pretendido ampliar los niveles de protección, admitiendo una interdependencia²⁸⁹ y un contenido amplio de los derechos humanos, por medio de su facultad de interpretación, sobre este tema conviene retomar las reflexiones de Casadevall:

Esta misión ya fue cumplida en su día con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y después con los convenios internacionales firmados en el marco de las Naciones Unidas, entre otros: sobre prevención y sanción de genocidios; contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes; para la eliminación de cualquier discriminación racial; para proteger los derechos de los refugiados y apátridas; los derechos de los niños y la

²⁸⁷ CASADEVALL, Josep, *El convenio europeo de derechos humanos, el tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 46.

²⁸⁸ CASADEVALL, Josep, *op. cit.*, p. 46.

²⁸⁹ En cuanto a la interdependencia como principio general de los derechos humanos, vale añadir que “...Más allá de toda discusión que genera esta división y de la cuestión de compatibilidad o tensión entre las distintas “generaciones,” existe actualmente - especialmente en el derecho internacional no sin una buena dosis de retórica- la conocida posición “oficial” de las Naciones Unidas en el sentido de defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos, que considero correcta.” ROSETTI, Andrés, ROSETTI, Andrés, “¿Los derechos sociales como derechos de segunda? Sobre las generaciones de derechos y las diferencias con los derechos de primera,” en ESPINOZA de los Monteros, Javier, ORDÓÑEZ, Jorge, *Los derechos sociales en el Estado Constitucional*, Tirant lo Blanch, México, 2013, p. 312.

igualdad de la mujer, sin olvidar el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales y el relativo a los derechos civiles y políticos.²⁹⁰

Evidentemente, y regresando un poco al ámbito de la teoría de los derechos humanos, la propia argumentación y fundamentación de los derechos con contenido económico, social y cultural, y esto vale para las dos generaciones de derechos (segunda y tercera), es problemática,²⁹¹ de entrada los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como derechos de segunda generación, se han relacionado como derechos que contienen preceptos de igualdad, porque como dicen Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, "...tienen que realizarse a través o por medio del Estado."²⁹² Esto corresponde según la academia y la doctrina supranacional (ámbito europeo e interamericano): "...una obligación de hacer,"²⁹³ inherente al Estado.

Naturalmente esta obligación de hacer, como lo señala la propia doctrina se encuentra limitada por las condiciones económicas, sociales y culturales de cada estado, por lo que esta obligación de hacer no se debe llevar hasta sus últimas consecuencias hasta degenerar en un estatismo protagónico, excesivamente interventor, como en experiencias pasadas.²⁹⁴ El Estado a

²⁹⁰ *Ídem.*

²⁹¹ "Human rights formerly known as solidarity rights or rights of solidarity. These latter terms should not be confused with the so-called "Right to solidarity," which is itself one of the Third Generation of human rights. They are complex, ill-defined conceptually and collective. Their validity as human rights is highly disputed. In theory, they are human rights that can only be realized through the concerted and good faith efforts of all actors in the international scene: states, NGO's, individual, IGOS, and other public and private bodies, that is, the international community as a whole. Their genesis and advancement was rather political and ideological, coming mostly from the cold war eastern bloc and third world/developing states. " Véase: CONDÉ, Victor, *op. cit.*, pp. 258- 259.

²⁹² *Ídem.*

²⁹³ *Ídem.*

²⁹⁴ Por eso en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido a bien desarrollar jurisprudencia que claramente delimita mediante el método jurídico, la naturaleza de las condiciones jurídicas y de los derechos, a fin de evitar confusiones conceptuales, como la siguiente jurisprudencia que distingue debidamente entre pobreza y vulnerabilidad, aspectos propios a analizar en el tema de investigación doctoral: "POBREZA Y VULNERABILIDAD. SUS DIFERENCIAS Y RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. Conceptualmente la pobreza es de menor extensión que la vulnerabilidad. De acuerdo a la citada Ley la pobreza no es el único factor que puede posicionar a una persona o grupo en una situación de vulnerabilidad. Desde la misma definición legal de grupos vulnerables se hace referencia a la discriminación la cual, desde el concepto de discriminación contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal comprende una multitud de categorías que pueden

través de medidas estratégicas, que involucren a los agentes económicos del ámbito privado, genera medidas que tengan un impacto en el beneficio del interés general.

El derecho al desarrollo y que es el objeto principal de la tesis, se centra en lo que la doctrina internacionalista y la teoría de los derechos humanos han aceptado como “derechos de solidaridad o de tercera generación,” se trata de un cúmulo disperso a través de la legislación internacional y nacional, que la doctrina judicial, como se observa con las jurisprudencias y las fuentes citadas han remarcado, abrevio un poco aquí en esto, porque como dije, el derecho al desarrollo se ha focalizado en la tercera generación de los derechos humanos, que abarca derechos tales como “intereses difusos, que se inspiran en principios generales o universales cuyo respeto reclama la humanidad.”²⁹⁵

provocarla: origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil; además la lista no es limitativa sino enunciativa, dejando abierta la posibilidad de nuevas categorías al incluir "cualquier otra que atente contra la dignidad humana". Pleno, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2006. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. Tesis:P./J. 86/2009, [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Agosto de 2009; Pág. 1073.

²⁹⁵ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, op. cit., p. 429. La agrupación de estos derechos ha sido aceptada por la doctrina, véase también: CONDÉ, Victor, op. cit., p. 259.

Capítulo III

Configuración constitucional del Derecho al Desarrollo en México

En el presente capítulo me referiré a la configuración constitucional del derecho al desarrollo en México. No hay una mención expresa al derecho humano al desarrollo en la constitución mexicana pero su pertenencia en el elenco de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano se perfila nítidamente con motivo de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011, con motivo de esta reforma se formalizó el proceso de internacionalización de los derechos humanos en México y se actualizó el capítulo dogmático de la constitución conforme a los estándares vanguardistas de las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Este contexto de mutación de los derechos humanos en México, manifestó colocar a los derechos humanos en el centro de la actividad estatal. En el marco de la reforma constitucional del año 2011 se manifestaron dos grandes vectores, por una parte se integró una perspectiva a partir del derecho internacional de los derechos humanos, la segunda dimensión y no la menos importante que consistió en la actualización de los derechos constitucionales en el orden de la constitución mexicana. Esto se traduce en el reconocimiento de los dos principales sistemas de fuentes, instrumentos normativos de protección de derechos humanos internacionales, constitución mexicana y jurisprudencia. Desde estos parámetros el internacional y el nacional, los derechos humanos en México adoptan un nuevo paradigma con motivo de la reforma en comento, pues este determinado sistema de fuentes se han unificado en un solo elenco de derechos humanos, ello de acuerdo a las nuevas tendencias del constitucionalismo moderno,²⁹⁶ que se inscribe como la teoría general del constitucionalismo de los derechos.

²⁹⁶ ÚBEDA de Torres, Amaya, *Democracia y derechos humanos en Europa y América. Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos*, Díaz-Bastien & Truan, Ed. Reus, Madrid, 2006, p. 350.

De acuerdo al capítulo que me antecede me sujeto a una metodología conforme al sistema de fuentes en el que se inscribe mi objeto de estudio: tratados internacionales; ordenamiento jurídico mexicano; jurisprudencia mexicana y jurisprudencia en el sistema interamericano de derechos humanos; la apelación al sistema de fuentes, justifica los dos enfoques que por razones metodológicas se continuaran en el presente capítulo.

La Declaración del derecho al desarrollo sostiene en el artículo 2.1 que: “la persona humana es el sujeto central del desarrollo,”²⁹⁷ El artículo 8.1 de la declaración hace referencia a los aspectos que caracterizan predominantemente este derecho que son: “acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos.”²⁹⁸, el artículo 8.1 además especifica que la mujer desempeña un papel especial como sujeto de ese derecho al estimar que: “deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.”²⁹⁹

La constitución mexicana en el artículo primero, consagra el principio *pro personae* que se aplica como un principio directo de protección para la persona humana, el artículo 1., segundo párrafo consigna: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”³⁰⁰

No es innecesario hacer notar que este párrafo constitucional fue producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que pretendía modernizar el sistema de derechos humanos y adaptarlo conforme al

²⁹⁷ Artículo, 8.1, *Declaración del derecho al desarrollo*, *op. cit.* El derecho humano al desarrollo se centra en la persona humana, me parece apropiado transmitir la siguiente cita de Martha Nussbaum: “The stoics taught that every single human being, just but virtue of being human, has dignity and is worthy of reverence. Our ability to perceive ethical distinctions and to make ethical judgments was held to be “god within,” and as such is worthy of boundless reverence.” NUSSBAUM C., Martha, *Creating capabilities*, *op. cit.*, p. 129.

²⁹⁸ *Ídem.*

²⁹⁹ *Ídem.*

³⁰⁰ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, artículo, 1.

sistema internacional de protección de derechos humanos. No obstante, el principio de la persona humana, también aparece en el primer párrafo del artículo 1° de la Constitución, numeral en el que de manera textual se puede leer: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”³⁰¹

En sentido doctrinario debo reconocer que el concepto de persona humana, tan repetidamente usado en el derecho internacional de los derechos humanos, en la doctrina de los derechos fundamentales, es un concepto antiguo, y cada vez más presente, porque se aplica, se analiza y se estudia en concreta relación con otro concepto trascendente: la dignidad humana, pues bien, jurídicamente el constructo dignidad de la persona humana, se ha convertido inevitablemente en un “principio fundamentador de los derechos humanos”³⁰², y en un “concepto central en la cimentación de todo el edificio constitucional,”³⁰³ pero, en qué consiste específicamente este principio a primeras luces tan filosófico y jurídica y constitucionalmente tan ambiguo.

Indudablemente el principio de la dignidad de la persona humana, ha sido recientemente muy recurrido en los ámbitos religioso, moral, político y jurídico³⁰⁴ pero se trata de un referente cuyos antecedentes por lo menos se rastrean hasta el mundo clásico, la voz latina, persona, comenta Tomás Melendo, - procedería de “*personare*” otra voz latina, que significa: “resonar, hacer eco, retumbar, sonar con fuerza”, Melendo, explica que esta palabra tenía sentido ya que: “...los actores griegos y latinos, utilizaban, a modo de megáfono o altavoz, una máscara hueca, cuya extremada concavidad

³⁰¹ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, op. cit.

³⁰² MATEO Pardo, Regino, La dignidad de la persona humana y su significación en la Constitución española de 1978 a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en “*Escritos Jurídicos en Memoria de Luis Mateo Rodríguez*”, Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Santander, 1993, p. 341.

³⁰³ *Ídem*.

³⁰⁴ *Ídem*.

reforzaba el volumen de la voz; esta carátula recibía en griego la denominación de “*prósopon*,” y en latín, justamente, la de persona.”³⁰⁵

Históricamente y en la epistemología filosófica el término de dignidad de la persona humana, tiene su asiento en primariamente en la teología de la ciencia cristiana, Santo Tomás de Aquino, no crea el concepto, sino que lo interpreta y lo reafirma de Boacio, pero la afirmación de Santo Tomás de Aquino será indiscutiblemente la central para la difusión y la traslación del concepto de dignidad de la persona al occidente moderno y su progresiva incorporación y aplicación a las ciencias jurídicas. Dice Santo Tomás de Aquino en su obra *Summa Teológica*:

Pues como ya se dijo (a 1), en general persona indica la *sustancia individual de la naturaleza racional*. Individuo es lo indistinto en sí mismo, pero distinto de los demás. Por lo tanto, en cualquier naturaleza, persona significa lo que es distinto en aquella naturaleza, como en la naturaleza humana indica esta carne, estos huesos y esta alma, que son los principios que individualizan al hombre. Estos principios, aun cuando no significan persona, sin embargo, si entran en el significado de persona humana.³⁰⁶

La dignidad humana vista desde la perspectiva del humanismo laico, es decir secularizada, conforme a la teoría del derecho constitucional contemporáneo, conserva su primaria relación con el concepto de autonomía en donde asegura Zagrebelsky: “...la reivindicación de los derechos constituye una manifestación de vigor y madurez de una sociedad, un signo de progreso hacia una meta representada por la autonomía humana frente a cualquier otra realidad social que pretenda ser asumida como “dato.””³⁰⁷

³⁰⁵ MELENDO, Tomás, *Las dimensiones de la persona*, Biblioteca Palabra, Madrid, 1999, p. 20-21.

³⁰⁶ Santo Tomás de Aquino, *Suma de Teología*, Ed. Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2001, C. 29 a 4, p. 329.

³⁰⁷ ZAGREBELSKY, Gustavo, *El derecho dúctil*. Ley, derechos y justicia, Trad. Marina Gascón, 10ª, Ed. Trotta, Madrid, 2011, 84.

Para Peter Häberle la dignidad humana, la definición del núcleo de la dignidad humana como independiente del ámbito cultural, tiene que ser analizado bajo dos presupuestos: los derechos de clase personal y los deberes, que en conjunto: “deben permitir al ser humano llegar a ser persona.”³⁰⁸ Interesante exposición porque construye la definición que debe guardar el concepto de la dignidad humana en el Estado constitucional, que parte de la idea de la persona como sujeto, lo cual concierne al concepto jurídico de la titularidad de los derechos: “El Estado constitucional realiza la dignidad humana haciendo a los ciudadanos *sujetos* de su actuación.”³⁰⁹ y lo más sorprendente es que Häberle no considera que la dignidad de la persona humana sea incompatible con el valor jurídico de la solidaridad, en realidad es que son complementarios bajo ciertos supuestos:

Los conceptos científico-sociales de la identidad comprueban además otra idea jurídica: en la dignidad humana se concibe de entrada una relación también con el tú. El reconocimiento de la “igual dignidad humana del otro” constituye el puente dogmático hacia la adecuación relativa al tú de la dignidad humana “del uno”, tal como lo han concretizado de manera especial la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal sobre la imagen del hombre o el catálogo de los derechos fundamentales, en particular los artículos 6°.y 140, 9°, y 21, o el artículo 28, inciso 2, de la LF. La referencia al “otro”, al “prójimo”, al “tú” y al “hermano” (en el sentido de la fraternidad de 1789), hoy también a la “hermana”, es una parte integral del principio jurídico-fundamental de la dignidad humana.³¹⁰

El concepto de la dignidad de la persona humana, apareció en la palestra del derecho internacional de los derechos humanos con un fervor inusitado a partir de la declaración universal de los derechos humanos de 1948, el multicitado preámbulo coloca como objeto central de la declaración y principio central el concepto de dignidad humana, a ese proceso también se le

³⁰⁸ HÄBERLE, Peter, *El estado constitucional*, Trad. Héctor Fix-Fierro, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, p. 170.

³⁰⁹ *Ibidem.*, p. 171.

³¹⁰ HÄBERLE, Peter, *op. cit.*, pp. 171-172.

reconoce como el proceso de humanización del derecho internacional, pero para efectos de método tenemos que reconocer dos vectores: uno que es el concepto de la dignidad humana desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos y el otro, que es el concepto de la dignidad humana desde el enfoque de los derechos fundamentales, como se comprobará la influencia y la retroalimentación son recíprocas, por lo tanto son conceptos interdependientes.

Desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 supuso un cambio de paradigma en lo que concierne al proceso de humanización del derecho internacional público, la dignidad de la persona humana se positivizó en los textos internacionales en un proceso sin precedentes en la historia del derecho, el preámbulo de la declaración lo dejó así asentado: “considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.”³¹¹

Este proceso resulta cautivador y a la vez da pie a reflexionar sobre las transformaciones que aún se encuentran en gestación en los Estados y en el derecho, si bien los derechos humanos catapultaron con su naturaleza creativa este momento, la textura abierta del derecho, de estas nuevas tendencias que afectan la cara tradicional del derecho constitucional y del derecho interno de los derechos humanos, de la concepción tradicional de los derechos humanos, redundados solo en un significado positivista se transforma, Zagrebelsky da cuenta de ello:

En efecto, es a esta visión “abierta” de la Constitución que se ha afirmado progresivamente en Europa no sin dificultad, a la que puede atribuirse el mérito, si de mérito se trata, de haber permitido a los Estados abrirse – con arreglo a las distintas vías seguidas por cada uno de ellos y frecuentemente por cada jurisdicción constitucional – nacional – a la organización de una autoridad y de una unión europeas cuya

³¹¹ Preámbulo, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, op., cit.

existencia misma contradice el carácter absoluto del dogma de la soberanía estatal. Una Europa que todos querríamos provista de un auténtico derecho constitucional, en lugar de un ambiguo derecho interestatal como el que hoy existe, pero que quizás pocos querrían dotada de soberanía, en el sentido de los Estados soberanos de otro tiempo.³¹²

Y nunca un concepto tan amplio, tan abierto, tan cualitativo, ha sido capaz de unir al mundo en conversaciones de paz y de unidad como derechos humanos, que se revela asimismo como la consecuencia benigna del proceso de humanización del derecho internacional público y de los procesos de transferencia de competencias y de soberanías, el derecho constitucional y especialmente el capitulado referente al derecho constitucional de los derechos humanos y de los derechos fundamentales asiste a esta transformación sin precedente, apunta Zagrebelsky:

No se trata en absoluto de una renuncia, como podría pensarse si se tuviera en mente una idea mezquina y pobre del “justo medio”, en el sentido de la *aurea mediocritas*. Se trata por el contrario, de una mayor plenitud de vida constitucional que no debe mantenerse con la actitud resignada de quien se pliega a una necesidad en espera de tiempos mejores para restaurar una concepción constitucional simplificada, menos basada en el compromiso y, por tanto, en este sentido, fuerte. Una plenitud de vida colectiva que exige actitudes moderadas (una *aurea medietas*), pero positivas y constructivas, y que pueda mantenerse con la conciencia de quien sabe que este ideal corresponde a una visión de la vida y a un *ethos* en modo alguno despreciables.³¹³

El ascenso del modelo de Estado social en el periodo de entreguerras, que precede al modelo de estado neoliberal procede de experiencias el ámbito nacional de los países europeos surgidas aproximadamente en el siglo XIX, que en palabras de Mario G. Losano constituyen el intento: “...de corregir las desigualdades, y transformar la caridad hacia el pobre en un derecho del

³¹² ZAGREBELSKY, Gustavo, *op. cit.*, p. 14.

³¹³ ZAGREBELSKY, Gustavo, *op. cit.*, p. 15.

pobre.”³¹⁴ Peter Häberle afirma en su obra “El Estado Constitucional,” que la feliz fórmula de “Estado social de derecho” fue obra y producto de la “ciencia jurídica y la práctica constitucional alemanas.”³¹⁵ En sus propias palabras el significado de cualquiera sea la fórmula con la que se asigne en los diferentes ordenamientos constitucionales a esta técnica refinada de protección social, su todas las fórmulas conducen a la designación de un Estado, por supuesto de tipo “constitucional”³¹⁶ que se encuentra: “comprometido con la justicia social.”³¹⁷ Para Núñez Torres el Estado social implica: “institución política que, en combinación con el ordenamiento jurídico adecuado a las nuevas circunstancias se erigía como el legitimado por la sociedad para tratar de solucionar una serie de problemas que comprendían la llamada cuestión social.”³¹⁸ Por tanto es a partir de la plena institucionalización de esta fórmula constitucional –la más de las veces-³¹⁹ con mayor frecuencia en el siglo XX, mediante la aplicación de un conjunto de instituciones dirigidas a corregir la desigualdad sobre todo en los sectores más desventajados, las medidas contemplan: protección y seguridad social; sanidad; política laboral; sindicalismo, reunidas en las teorías de solidaridad³²⁰ y del derecho social.

³¹⁴ LOSANO, Mario G., “Las teorías del solidarismo y su influencia en la formulación de los derechos fundamentales económicos,” en LOSANO, Mario G., *Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis*, Trad. Luis M. Lloredo Alix, Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas,” Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2011, p. 38.

³¹⁵ HÄBERLE, Peter, *El Estado Constitucional*, op. cit., p. 224. Hermann Heller es uno de los precursores de la fórmula de estado social: “La función del Estado consiste, pues, en la organización y activación autónomas de la cooperación social territorial, fundada en la necesidad histórica de un *status vivendi* común que armonice todas las oposiciones de intereses dentro de una zona geográfica, la cual en tanto exista un Estado mundial, aparece delimitada por grupos territoriales de dominación de naturaleza semejante.” HELLER, Herman, *Teoría del Estado*, 3ª ed., Trad. Luis Tobío, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 260.

³¹⁶ *Ibidem.*, p. 225.

³¹⁷ *Idem.*

³¹⁸ NÚÑEZ Torres, Michael, op. cit., p. 29.

³¹⁹ cfr. Véase la completa clasificación de la previsión del Estado social en numerosos ordenamientos constitucionales recientes que Häberle proporciona en su libro *El Estado Constitucional*. HÄBERLE, Peter, *El Estado Constitucional*, op. cit., p. 224-227.

³²⁰ LOSANO, Mario G., “Las teorías del solidarismo y su influencia en la formulación de los derechos fundamentales económicos,” op. cit., p. 39. “En el grupo de los solidarios tuvo una posición relevante también Célestin Bouglé (1870-1940), un alumno de Durkheim que se dedicó sobre todo a la investigación teórica y a la difusión de la sociología a todos los niveles. En la obra de Bouglé se puede ver “como el solidarismo se funda en las ciencias sociales, porque éste ha sido el único que ha buscado establecer explícitamente una conexión entre esta “doctrina político-social” tan influyente en la Tercera República francesa (1870-1940) y las construcciones teóricas de la escuela de Durkheim. Al inicio del siglo XX, el solidarismo se puede reconducir sobre todo a las doctrinas de Bourgeois y Durkheim: la primera está hoy en día casi olvidada...; la segunda, por el contrario, se ha convertido en la piedra angular de la sociología moderna, pero no por sus aspectos solidarios. Estos últimos, por el contrario, a comienzos del siglo XX se convirtieron en la ideología oficial de la Turquía de Kemal Atatürk,

Desde el punto de vista que requiere el método de este trabajo dirigido a la explicación del derecho al desarrollo en el sistema de fuentes, las implicaciones del Estado social en el derecho humano al desarrollo son inmensas. Pero en resumidas cuentas apuntaremos que para esbozar el nexo epistémico entre derecho humano al desarrollo y Estado Social favorece aquí la mención de que ambos modelos (intervencionismo estatal y liberalismo/neoliberalismo) son manifestaciones del movimiento de un péndulo que se decanta en algunos momentos por una fuerte y activa intervención estatal, otros por una abstención y mera rectoría de la economía, el péndulo por decirlo metafóricamente se inclina por “más Estado” o por “menos Estado.”³²¹ Y responden a los momentos históricos y los valores mayoritarios que la sociedad elige como fundamentales en las constituciones. Estos procesos se encuentran intrínsecos con la relevancia que tengan los derechos civiles y políticos, frente a la atención o en su caso, menoscabo que pudieran presentar los derechos económicos, sociales y culturales. Genéricamente en base en los pactos de 1966, en las políticas de Naciones Unidas y Agencias y los compromisos internacionales, como ya se abordó en su momento todos los derechos humanos se entienden como indivisibles e interdependientes, aunque los derechos de económicos, sociales y culturales y los derechos de solidaridad deben sujetarse al principio de progresividad, a la disponibilidad de los recursos

gracias a la mediación del mayor intelectual turco de la época, Ziya Gökalp.” LOSANO, Mario G., “La cuestión social y el solidarismo francés: actualidad de una antigua doctrina,” en LOSANO, Mario G., *Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis*, Trad. Luis M. Lloredo Alix, Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas,” Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2011, p. 20.

³²¹ Mario G. Losano proporciona una clasificación tripartita del Estado social: modelo liberal “orientado por la por la economía del mercado,” este modelo recoge instituciones que “aseguran el mínimo existencial a los más desfavorecidos.” Es el modelo adyacente a Estados Unidos, Canadá y parcialmente a Gran Bretaña. Un segundo modelo denominado “conservador-corporativo” situado en Alemania, Francia e Italia, en este modelo se incorporan políticas sociales de corte “difuso” orientadas hacia “sectores organizados.” Y finalmente, un tercer modelo al que se le asigna el nombre de “socialdemócrata,” modelo rector históricamente en las naciones escandinavas. cfr. LOSANO, Mario G., “Las teorías del solidarismo y su influencia en la formulación de los derechos fundamentales económicos,” *op. cit.*, p. 38. Punto de partida de la teoría de los derechos fundamentales del Estado social son, por un lado, las consecuencias derivadas de la teoría liberal de los derechos fundamentales y de la organización de la libertad del Estado de derecho burgués edificado sobre ella; por otro lado la sustitución, provocada por el desarrollo social general, del espacio vital dominado de autarquía individual por el espacio vital social de relaciones y prestaciones sociales efectivas”. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, *Escritos sobre derechos fundamentales*, Traducción de Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, Germany, 1993, p. 63.

y a la cláusula de regresividad, ello no significa justificar que los Estados difieran proteger y garantizar estos derechos humanos.

Debido precisamente a la complejidad que entraña la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales (derechos prestacionales) es que la fórmula del Estado Social desempeña un papel esencial para atender estas demandas que ocupan la intervención del Estado. Una de las apreciaciones en torno a los contenidos abiertos del Estado social es puesta de manifiesto en la formulación que el ministro José Ramón Cossío Díaz quien entiende al Estado Social: “como categoría abierta donde tienen cabida una variedad muy grande de contenidos que, al recogerse en normas constitucionales pertinentes a distintos tipos, permiten conducir nuestros análisis con cierta flexibilidad. Esta ventaja se ve potenciada en tanto partimos de la amplia noción de elevación de las condiciones de vida mediante prestaciones.”³²²

No es redundante decir que tras la finalización de la segunda guerra mundial y la constitución de las Naciones Unidas, que sustituyó y vino a dar cauce verdaderamente jurídico a la ahora extinta Sociedad de las Naciones, con posterioridad a la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, era pertinente y por eso se procedió así a la elaboración: “...de forma inmediata un ideario de conciencia universal; será la Declaración de Derechos Humanos.”³²³ Sobre este mismo asunto, Pigrau Solé afirma: “No es posible la comprensión del significado de la DUDH, sin incardinarla en el proceso que abre la Carta de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo los pueblos de las Naciones Unidas reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana.”³²⁴

³²² COSSIO Díaz, José Ramón, *Estado social y derechos de prestación*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pp. 33-34.

³²³ GONZÁLEZ, Nazario, *Los derechos humanos en la historia*, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1998, p. 174.

³²⁴ PIGRAU Solé, Antoni, *Comentario, preámbulo*, en “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, comentario artículo por artículo,” Asociación para las Naciones Unidas en España, Icaria, Barcelona, 1998.

La Declaración contribuyó, a la cimentación del concepto jurídico-internacional de la dignidad de la persona humana, y por supuesto a la humanización del derecho internacional público, como consecuencia. De manera que si atiendo a lo que consigna el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puedo tomar en consideración los grandes rasgos jurídicos abarca el mencionado articulado:

- a) La reafirmación de la “fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres”;
- b) Señala los fines de la organización: “realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.”³²⁵

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con independencia de su aplicación y de la importancia de su valor jurídico, concepto que se ha aclarado en el capítulo anterior, fue muy significativo en su momento, no solamente, por la cercanía de los acontecimientos de la segunda guerra mundial, evento que indudablemente fue una catástrofe civilizatoria, y que cimbró los valores del mundo occidental contemporáneo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su referido preámbulo, fue excepcional, porque se añadió a los procesos generacionales de los derechos como un momento histórico, pero para efectos de la ciencia jurídica, como un momento del constituyente universal de los derechos, la redacción del preámbulo fue muy trabajosa,³²⁶ en él se resumen las aspiraciones universales, el consenso en materia de derecho humanos, y también, es verdad, el optimismo de la posguerra: “...se contienen las principales líneas y directrices en cuanto a la

³²⁵ GIMBERNAT, José Antonio, *Los derechos humanos. A los cincuenta años de la Declaración de 1948*, Cuadernos FyS, Madrid, 1998, p. 8.

³²⁶ “Además el preámbulo se redactó al final, una vez que ya se conocían todos los derechos humanos que iban a figurar en el texto de la Declaración con lo que se refuerza la tesis de que supone una síntesis de la ideología de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.” ORAÁ Oraá, Jaime, GÓMEZ Isa, Felipe, *La Declaración universal de los derechos humanos*, op. cit., p. 53.

concepción de los derechos humanos que quiere expresar la Declaración Universal. Contiene, por decirlo así, la matriz ideológica de la Declaración.”³²⁷

La declaración universal como texto emblemático resume la tradición de liberalismo político y de la historia de las revoluciones liberales de los derechos: “...inspirada en el modelo de las “declaraciones históricas” de los derechos humanos y fruto de la combinación de diversos conceptos ideológico-religiosos, la Declaración de 1948 marca el abandono de la lógica estatista en la protección de los derechos humanos y al ascenso de éstos a principios fundamentales del ordenamiento internacional (derecho internacional).”³²⁸ De manera que al invocar la libertad y la justicia como fundamento de la “dignidad inherente a la persona humana,”³²⁹ la declaración aludía audiblemente a la tradición liberal de los derechos humanos.

Además, se adelanta, a lo que a la posteridad se denominará como derechos emergentes, al valor jurídico de la paz, también como fundamento de “la dignidad inherente de la persona humana.” En este sentido, los redactores de la declaración consensuaron que la igualdad, que se inscribe en las luchas por los derechos de igualdad, que más adelante se traducirán en derechos sociales y prerrogativas de interés colectivo, a las que no fue omiso el tránsito

³²⁷ *Ibídem.*, pp. 52-53.

³²⁸ SACCUCI, Andrea, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, en FLORES, Marcello, GROPPI, Tania, PISILLO Mazzeschi, Riccardo, ANSOLABEHERE, Karina (Coords.), “Diccionario básico de derechos humanos. Cultura de los derechos en la era de la globalización,” FLACSO, México, 2009, p. 57. El Estado liberal es el primer supuesto que permea para el nacimiento de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, constituye su principal presupuesto: “Con la aparición del estado liberal, los derechos reconocidos se relacionan con la libertad y tienen la función de crear un ámbito de autonomía ante el estado; es decir, una esfera de poder donde el estado no puede intervenir. El tipo de garantía es el derecho subjetivo, del sujeto - persona, que puede recorrer directamente a los tribunales de justicia en contra de quien haya vulnerado ese derecho; se trata de una reclamación de un sujeto contra otro.” BONET Pérez, Jordi, *Historia y evolución de los derechos humanos*, en “Los derechos humanos en el siglo XXI: continuidad y cambios, Huygens Editorial, Barcelona, 2008, p. 35.

³²⁹ Los denominados derechos civiles, son un punto nodal de la declaración, esta se integra por: “...las disposiciones contenidas en los primeros 18 artículos de la Declaración Universal, que comprenden el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona (art. 3), la prohibición de esclavitud y de servidumbre (art. 4), la prohibición de torturas, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5), las garantías contra el arresto, la detención, el exilio, arbitrarios (art. 9), la protección de la vida privada (art. 12) y propiedad privada (art. 17), la libertad de circulación (art. 13), de pensamiento, de conciencia, así como la libertad religiosa (art. 18) y los llamados “derechos a un *due process of law*” es decir, el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente, imparcial y preestablecido por ley (art. 10), la presunción de inocencia y el principio de legalidad de los delitos y las sanciones conforme a derecho (art. 11). *Ibídem.*, p. 58.

de la transfiguraciones del Estado. La declaración positivizó el concepto de dignidad humana.

Otro pronunciamiento importante en orden a situar a la dignidad como fundamento de los derechos humanos reconocidos en la Declaración lo encontramos en el artículo 1 de la misma. En virtud de esta disposición, que abunda en lo ya establecido en el preámbulo, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”³³⁰

El concepto de dignidad humana, si bien fue positivizado en el comentado texto, no fue definido completamente, los estudiosos afirman, con razón, que desde el principio de la redacción se descartaron referencias “de carácter metafísico para fundamentar la dignidad,”³³¹ las razones son perfectamente comprensibles, por una parte se tiene la tara de que las Naciones Unidas agrupaban entre sus miembros a países de todo el mundo, algunos de ellos con regímenes confesionales, que no distinguen entre iglesia y Estado, otros con razones culturales muy fuertes por tradición, aunque en principio el Estado no se ostentaba confesional, como China, pero con concepciones metafísicas/tradicionales de mundo, muy vinculadas a aspectos religiosos, en otro caso y quizás como elemento cohesionador, el salto evolutivo del pensamiento jurídico occidental, la secularización del Estado y su antecedente como presupuesto de las transformaciones del Estado y de sus relaciones.³³²

Pero esto, en principio es solo secundario, el hecho constitutivo del concepto de dignidad humana, que irá construyéndose, descansa como un carácter superior, a particularidades personales, religiosas, o nacionales de la persona: “...la dignidad es la cualidad de ser reconocido como persona.”³³³ Como he señalado estamos en los inicios de la positivación en el derecho internacional y también en el derecho interno de los Estados del principio de

³³⁰ ORAÁ Oraá, Jaime, GÓMEZ Isa, Felipe, *La Declaración universal de los derechos humanos*, op. cit., p. 53.

³³¹ *Ídem*.

³³² *Ídem*.

³³³ ORAÁ Oraá, Jaime, GÓMEZ Isa, Felipe, *La Declaración universal de los derechos humanos*, op. cit., p. 55.

dignidad de la persona humana, que como he comentado, no es que no hubiera existido anteriormente, es que el gesto, y la determinación que tomará a partir de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, no tendrá precedentes, antes bien, marcará el inicio de una nueva etapa en el derecho internacional, inaugura el sistema universal de protección de los derechos humanos en relación con la persona humana:

El reconocimiento del principio de protección de la dignidad humana como valor esencial del derecho internacional, está mutando la naturaleza interestatal del derecho internacional. Por una parte, funciona como un límite claro y cada vez más estricto al principio de soberanía del Estado en su vertiente interna, esto es, a su fuerza antiguamente ilimitada, como un agujero negro que no deja escapar la luz, de gobernar lo que sucede dentro de sus fronteras territoriales.³³⁴

Este principio apareja también una individualización del derecho, la dignidad de la persona humana, se concibe, como expliqué cuando mencioné la categorización que Santo Tomás de Aquino realizó para construir el concepto de persona, lo individualizó, lo particularizó, el reconocimiento del principio de protección de la dignidad humana, en el derecho internacional, hace parcialmente lo mismo: “Por otra, ha conducido, en ámbitos específicos pero crecientes, al reconocimiento de cierta subjetividad directa del individuo, esto es, de su titularidad subjetiva de derechos y obligaciones que emanan del derecho internacional y, en ciertos casos, de su capacidad para reclamar o responder intencionalmente por la violación de estos derechos.”³³⁵

El carácter subjetivo del que aparece dotado el ser humano, para ser titular de derechos humanos, fue posible, desde el enfoque internacional, bajo los auspicios de la construcción paulatina del principio de dignidad de la persona humana, este principio, que como dije fue fruto del desafío que trajo consigo la unión de dos grandes tradiciones jurídicas: la tradición iusnaturalista y la tradición positivista, ambas concedieron lo mejor de sí para la formación y

³³⁴ SÁNCHEZ M., Víctor, *Breve historia del derecho internacional*, en “Derecho internacional público,” Huygens Editorial, Madrid, 2009, p. 57.

³³⁵ *Ídem.*

consolidación de este principio y concepto jurídico, así las cosas, la dignidad de la persona humana es consiguientemente subjetiva si va acompañada de:

- a) garantía internacional;
- b) protección legal;
- c) atención a la dignidad del ser humano;
- d) protección de individuos y grupos;
- e) obligación para los Estados y los agentes de los Estados;
- f) no pueden ser suprimidos o suspendidos;
- g) igualdad e interdependencia;
- h) universalidad.³³⁶

El concepto de la dignidad de la persona humana, desde el enfoque de los derechos humanos en el derecho constitucional mexicano, no puede estudiarse debidamente si no tomo en cuenta previamente dos supuestos: el primero, que en México, los derechos humanos se han inscrito, principalmente desde la vigencia de la Constitución de 1917 en lo que afecta al derecho contemporáneo en México, como parte integrante de la constitución. El constitucionalismo mexicano, incorporó desde su génesis la tendencia del derecho constitucional en el modelo europeo, de considerar como las dos grandes manifestaciones del constitucionalismo contemporáneo: los derechos fundamentales y la organización del poder político, aunque la denominación derechos fundamentales ha sido la que ha prevalecido entre ciertos sectores académicos, y es considerada como la denominación que mejor acoge el carácter del derecho interno de los derechos humanos, hasta ahora no se ha consensado el uso exclusivo de un solo término para referirse a los derechos humanos/fundamentales de la persona humana, en este tenor, el constituyente reformador de la constitución en la reforma constitucional del 11 de junio del 2011, prefirió la clasificación del término: derechos humanos. Sobre esta terminología transitaré en el capítulo.

³³⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Serie de Capacitación Profesional N° 5/Add.2, *Derechos humanos y aplicación de la ley, Guía para instructores en derechos humanos para la policía*, United Nations Publications, 2004, p. 12.

La transformación de los derechos humanos que los sitúa como objeto de estudio en el contexto de un pluralismo normativo, obedece como expresé a la existencia de dos grandes jurisdicciones protectoras y de tutela de los derechos fundamentales, la intersección entre estas dos jurisdicciones, repito, no sería posible sin la piedra de toque producto de la constitución de las Naciones Unidas en 1945, con la adopción de la Carta de San Francisco, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos acontecimientos, no fueron meramente actos protocolarios, o declaraciones de buenas intenciones, asentaron el inicio de un nuevo proyecto de escala planetaria, Héctor Fix-Zamudio, lo describe así:

Hasta hace algunos años en la mayoría de los países del mundo, y México no era la excepción, se consideraban a los derechos humanos un asunto doméstico, eran cuestiones que estaban reservadas a cada gobierno respecto de sus nacionales. El panorama ha cambiado radicalmente. Los pueblos del orbe se han sumado de manera abrumadora a la causa de los derechos humanos, misma que ha logrado provocar efectos muy importantes tanto en el orden jurídico interno como en el internacional.³³⁷

A fenómeno se le designa internacionalización de los derechos humanos, aunque en lo que atiene a México corresponde a la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. Como ya expliqué en el primer capítulo el proceso de la internacionalización de los derechos humanos y de su recepción en el derecho interno representó avances significativos consiguientes a reforzar el carácter vinculante del derecho convencional de los derechos humanos con los esfuerzos que para otorgarle obligatoriedad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, para lo cual se procedió a la adopción del derecho convencional de los derechos humanos con la adopción en 1966 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, el primero tuvo la fortuna que desde su inicio se reforzó su carácter vinculante con la adopción de un Protocolo Facultativo, los citados instrumentos convencionales

³³⁷ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, Ed. Porrúa, México, 2012, p. 427.

fueron adoptados y quedaron abiertos a ratificación el 16 de diciembre de 1966, y finalmente entraron en vigor en el año de 1976.³³⁸

La constitución mexicana, en el sistema de fuentes, como texto normativo fundamental del Estado, contiene un catálogo explícito de derechos humanos, de distinto calado, algunos de carácter civil y político, otro de carácter económico, social y cultural, el catálogo de derechos humanos de la constitución de 1917, es una síntesis, con razón, de las generaciones de derechos humanos, y por supuesto es un catálogo amplio y extendido. En virtud del contexto histórico en el que la constitución de 1917, fue gestada, la doctrina constitucional mexicana, apoyándose en Héctor Fix-Zamudio, dio por sentado que: "...la Constitución de 1917 explicitó los derechos sociales y económicos de tercera generación."³³⁹ Esta afirmación, conlleva a recordar que entre los derechos de tercera generación, destaca uno, objeto particular de estudio en la presente investigación que es el derecho al desarrollo.

Lo anterior lo expuse para dar sentido a la cuestión introductoria del enfoque de los derechos humanos en la constitución mexicana, puede comprobarse que el constituyente de 1917, no le dio prioridad al concepto de dignidad de la persona humana, lo cual se explica porque el concepto de dignidad de la persona humana es un concepto tardío y complejo en el derecho positivo, y que fue tremendamente propiciado por el hilo conductor en que se convirtió el fenómeno de la internacionalización de los derechos humanos, que no fue otra cosa, más que el encuentro, la intersección entre dos grandes tradiciones jurídicas, la tradición iusnaturalista y la positivista,³⁴⁰ estas dos visiones han conjuntado el acontecer del moderno concepto de la dignidad de

³³⁸ Véase FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *op. cit.*, pp. 427-428.

³³⁹ *Ibidem.*, p. 431.

³⁴⁰ Carpizo define al positivismo: "...en el positivismo se expresa que es el orden jurídico el que le otorga la calidad de persona al ser humano; es decir, persona es una categoría jurídica que se puede conceder o no, o de la cual se puede excluir a un ser humano o a un grupo de ellos, como pueden ser los esclavos, los extranjeros, las mujeres, por razones de raza o por preferencias sexuales." Entonces el derecho natural o isunaturalismo, a grandes rasgos definido por Carpizo consigna diversas "concepciones...el ser humano, por el solo hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones; o sea el Estado no puede desconocer esta situación, lo único que realiza es el reconocimiento de este hecho, y a partir de él se garantizan diversas series de derechos, a los cuales en la actualidad se les denomina derechos humanos." CARPIZO, Jorge, "Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características," *Cuestiones Constitucionales*, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 25, julio-diciembre 2011, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, p. 4.

la persona humana, como valor jurídico primario del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

En esa línea discursiva, Héctor Fix-Zamudio plantea la complejidad de dicho principio que se introdujo de manera explícita en México, con motivo de la reciente reforma constitucional en el año 2011, en el sistema de fuentes Héctor Fix- Zamudio, destaca que el principio de la dignidad de la persona humana, “principio interpretativo *pro homine*”³⁴¹ tiene su génesis positiva en diversos instrumentos internacionales, pero estos instrumentos son de naturaleza convencional a saber: a) la Convención de Viena, artículos 31 y 32, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, (art. 5º., y en la Convención Americana, artículo, 29.³⁴²

Aunque este no es un trabajo de derecho comparado, debo referirme cuanto, antes de que a partir de la positivación del concepto de dignidad humana en el derecho internacional, el proceso fue emulado en el derecho interno de los Estados. Alemania fue el país en incorporar por vez primera el concepto en su norma fundamental, la Ley de Bonn en el artículo 1º de su ley fundamental, en 1949. También fue el primer país en operativizar el concepto como principio interpretativo, imponiendo obligaciones al juez para tenerlo como un principio hermenéutico susceptible de tener efectos que irradian el ordenamiento jurídico.

A la vorágine de incorporación del principio interpretativo/hermenéutico del concepto de dignidad humana o *pro homine* siguió la constitucionalización del principio en diversos países como Portugal, España; en América Latina en Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En el caso de México nuestra tradición constitucionalista siguió otro camino, que de hecho no es en ningún sentido un equívoco, las normas jurídicas, el derecho requieren de un espacio de maduración, las instituciones jurídicas cobran forma, en la positivación, pero también en su adaptación a los distintos modelos jurídicos, por ello estoy de acuerdo con Carpizo, cuando señala la existencia no explícita del concepto de la dignidad de la persona humana que el apela, se encuentra de manera

³⁴¹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *op. cit.*, p. 527.

³⁴² *Ídem.*

dispersa en diversas normas de la constitución en el articulado: 3° II, c; 25° párrafo 1; 1° párrafo 3.³⁴³

Se hace la aclaración expresa de que el articulado invocado por Carpizo, serían a partir del momento de la publicación de artículo objeto de ambiciosas reformas en los sucesivos años, las más importantes, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la reforma constitucional en materia educativa del año 2013 y la reforma constitucional en materia energética del año 2013, aunque es de destacarse que el articulado sobre el que Carpizo se basó para apreciar el fundamento constitucional del concepto de dignidad humana en México, ha permanecido, si bien, paralelamente se ha robustecido.³⁴⁴

³⁴³ CARPIZO, Jorge, *Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características*, op. cit., p. 10. “La Constitución mexicana no contiene una declaración tan clara y rotunda sobre la dignidad humana como las contenidas en las Constituciones latinoamericanas mencionadas. No obstante, en varios artículos se refiere a ella, y en otros a conceptos muy cercanos. El artículo 3°, II, c, indica los criterios que orientan a la educación: “Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia...” (Reforma de 1946). El artículo 25, párrafo 1, dispone: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional...y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...” (reforma de 1983). El artículo 1°, párrafo 3, indica: “Queda prohibida toda discriminación motivada por...o cualquier otra que atente contra la dignidad humana...” (Reforma de 2001).” *Ibidem*.

³⁴⁴ El artículo 3°, II, c. actualmente dispone: “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos...” El artículo 25, párrafo 1, expresa: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.” Este es el texto final, producto de última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de junio del año 2013. Finalmente aunque es el articulado conductor del presente trabajo, pero seguí el orden establecido por Carpizo en su artículo, se encuentra el artículo 1° que por conducto de la última reforma constitucional, se trasladó al quinto párrafo: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;” así lo estableció la más reciente reforma al texto correspondiente al artículo primero constitucional, comprendida en el paquete de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, el párrafo en comento fue reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio del año 2011.

No es casual que en palabras de Fix-Zamudio y Valencia Carmona: “Las recientes reformas constitucionales en derechos humanos, publicadas el 10 de junio de 2011, entrañan un nuevo paradigma constitucional...Puede afirmarse que tales enmiendas constitucionales han ensanchado el horizonte de los derechos humanos, reforzado las garantías jurisdiccionales y fortalecido de manera decidida el Estado de derecho.”³⁴⁵ La reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, es el inicio de la introducción de una profunda transformación de “...algunas de las concepciones tradicionales que privaban en las materias de derechos humanos y de amparo,”³⁴⁶ así lo expresan correctamente Fix- Zamudio y Valencia Carmona.

La reforma constitucional en comento, entrañó la introducción de “...nuevo paradigma para los derechos humanos y el amparo,”³⁴⁷ entre las instituciones, principios y mecanismos que se introdujeron Fix-Zamudio y Valencia Carmona destacan: “distinción conceptual entre derechos humanos y garantías; normas constitucionales e internacionales de derechos humanos al mismo nivel; cláusula de interpretación conforme; bloque de constitucionalidad; control de convencionalidad; principios interpretativos de los derechos humanos; obligaciones y reparaciones del Estado en derechos humanos; mayor autonomía para las comisiones de derechos humanos; tutela jurisdiccional efectiva para nuevos derechos; declaratoria general de inconstitucionalidad y otros avances en amparo.”³⁴⁸

Indudablemente la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en relación con la introducción explícita del concepto de dignidad humana en el artículo 1º, ostenta un gran acierto, porque lo incorpora como un principio interpretativo, como un criterio hermenéutico, y lo hace en beneficio de la persona humana, al reconocer de forma expresa el principio de dignidad de la persona humana *pro homine*, en esta tesitura Fix-Zamudio asegura sobre la benignidad de la aplicación de este principio: “...para la aplicación de la norma

³⁴⁵ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *op. cit.*, pp. 503-504.

³⁴⁶ FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *op. cit.*, p 505.

³⁴⁷ *Ídem.*

³⁴⁸ *Ídem.*

más favorable a los afectados por la violación de sus derechos fundamentales, es decir, la interna o la internacional.”³⁴⁹

De manera que como síntesis del presente apartado es posible admitir una configuración constitucional del derecho al desarrollo en el ordenamiento constitucional mexicano, aunque el derecho al desarrollo no se encuentre categorizado de manera explícita en la constitución mexicana, tomando en cuenta la introducción del concepto de dignidad de la persona humana como término explícito, como valor y principio interpretativo en el edificio constitucional mexicano; asimismo el derecho al desarrollo se ve reforzado a partir del nuevo paradigma que incorpora la intertextualidad entre el ordenamiento del derecho interno y los textos internacionales en materia de derechos humanos. Esto no es sino consecuencia del interesante: “...fruto del proceso de universalización de los intereses individuales.”³⁵⁰

En este marco la configuración constitucional del derecho al desarrollo en México se inserta naturalmente en el proceso de internacionalización de los derechos humanos, pero también de la universalización de intereses individuales y colectivos, compatibles con el concepto de dignidad humana. Es fruto de nuevas exigencias, de nuevos intereses que históricamente son comprendidos por los procesos generacionales que han dado nacimiento a un elenco cada vez más amplio aunque también explícito de derechos humanos. Estas nuevas exigencias necesariamente deben ir acompañadas de su subsiguiente proceso de positivación que les corresponde, el derecho al desarrollo es fruto

³⁴⁹ FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Las reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011 y sus efectos en el sistema interamericano de derechos humanos*, en GONZALEZ Oropeza, Manuel, FERRER Mac-Gregor, Eduardo, “El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia”, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 426. Carpizo también se inscribe en este nuevo paradigma: “... la dignidad humana, como ya asenté, *singulariza y caracteriza a la persona de los otros seres vivos, debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad*, y considero que desde una perspectiva jurídica, la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad, y se asegura su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que ese Estado ha ratificado. Asimismo la dignidad humana es el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos.” CARPIZO, Jorge, *Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características*, op. cit., p. 12-13.

³⁵⁰ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación*, op. cit., p. 424.

III.1 Los sujetos del Derecho al Desarrollo

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo hace patente este paradigma desde la perspectiva del derecho internacional de asumir en el proceso de internacionalización de los derechos humanos, en todas sus expresiones, el paradigma de la persona humana como sujeto del derecho internacional, nuevamente debo enfatizar la importancia de la progresiva humanización del derecho internacional de los derechos humanos. Así las cosas, en el artículo 2.1, de la declaración en comento, se considera a la persona humana como: "...sujeto central del desarrollo,"³⁵¹ "...participante activo,"³⁵² – lo cual conlleva a la noción de los deberes – y "beneficiario del derecho al desarrollo."³⁵³

Entre las diversas posturas deducidas por la interpretación doctrinal de la declaración, se hace patente que el mencionado instrumento, pretende situar la titularidad de los sujetos del derecho al desarrollo en una postura que es para Gómez Isa: "de equilibrio, de síntesis...un equilibrio entre la faceta individual y colectiva de este derecho humano."³⁵⁴

El artículo 2.2 de la declaración expresa que los "seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo;"³⁵⁵ en esa tesitura se lee de manera positiva, como desde la perspectiva del derecho internacional se van entretejiendo los cimientos para asistir a proceso de universalización de los intereses individuales o colectivos, que darán lugar a los denominados derechos colectivos o derechos difusos que aún han enfrentado polémicas en torno de su titularidad jurídica y obligaciones.³⁵⁶ A mi juicio, en el artículo 2 de la declaración es donde se localiza el fundamento positivo del derecho al

³⁵¹ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, art. 2.1. op. cit.

³⁵² *Ibidem.*

³⁵³ *Ibidem.*

³⁵⁴ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 161. BEDJAOUI, M., *The right to development*, en BEDJAOUI, M., (Ed.), "International law: achievements and prospects," UNESCO-Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, p. 1182. COLLIARD C-A., *L'adoption par l'Assemblée Générale de la Déclaration sur le droit au développement (4 décembre 1986)*, "Annuaire Français de Droit International," Vol. XXXIII, p. 623.

³⁵⁵ *Ibidem.*, art. 2.2.

³⁵⁶ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación*, op. cit., p. 424.

desarrollo desde la perspectiva internacional siendo el sustrato de la persona humana como “sujeto”, “participante” y “beneficiario” del derecho al desarrollo; en su manifestación individual o colectiva, que en ello reside el fin esencial del concepto de la dignidad de la persona humana, en la armonización de la persona como sujeto individual/singular en conexión con otras personas con la misma dignidad, por eso me parece acertado recordar un argumento que en este tenor concede Carpizo:

La concepción de la dignidad humana no conduce a un individualismo; al contrario reconoce el valor de la comunidad: yo exijo respeto a mi dignidad frente al Estado, grupos y otras personas que poseen igual dignidad. Soy consciente de todo lo que debo a los otros y cuanto los necesito. Me comunico mediante un idioma que aprendí de mis semejantes, así como mil otros aspectos y pensamientos que configuran mi personalidad, y cada uno de los demás, tiene su propia dignidad, que debo respetar. Cada persona es un universo que convive con terceros universos, cuya esencia es la misma que la suya: la dignidad humana. En el seno de la comunidad tengo el derecho a ser yo mismo, a mi independencia y a mi individualidad.³⁵⁷

Es justo reconocer que de lo demarcado por la declaración la titularidad de los sujetos al desarrollo aunque aún incompleta se decanta por el individuo como titular preferente del derecho al desarrollo en todas sus expresiones:

Esta aproximación al derecho al desarrollo, desde las necesidades y desde la participación del individuo, “supone un enfoque muy positivo” para autores como Triggs. Esto implica que todo proceso de desarrollo debe contar necesariamente con el individuo, con su participación y con sus expectativas. Acorde con esta importancia del individuo en la concepción del derecho al desarrollo. La declaración asume que no cabe

³⁵⁷ CARPIZO, Jorge, *Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características*, op. cit., p. 7.

un verdadero desarrollo si no se produce un respeto escrupuloso de los derechos y las libertades fundamentales.³⁵⁸

Desde que las Naciones Unidas se vieron en la obligación de prestar especial atención a los derechos de la mujer, es que han ocurrido considerables avances en relación con sus derechos humanos, porque la mujer aunque participa activamente en los procesos económicos, se ha integrado a marchas forzadas al desarrollo económico, no deja de ser palpable que ellas – las mujeres- padecen problemas por: discriminación generalizada de género; las crisis económicas recaen con toda su brutalidad sobre la mujer, colocándola en una situación de vulnerabilidad (en esto consiste el término de acuñación reciente denominado como *feminización de la pobreza*) y si a esto se añade el grave problema de la desigualdad entre los sexos. Por todas estas razones es que la declaración sobre el desarrollo previó un “progresivo reconocimiento del importante papel que la mujer puede desempeñar en los procesos de desarrollo y de la marginación a la que ha estado sometida durante largo tiempo.”³⁵⁹

Dentro de los distintos desarrollos normativos en materia de los derechos de la mujer, algunos previos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979; la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones

³⁵⁸ GÓMES Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, op. cit.*, p. 163.

³⁵⁹ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, op., cit.*, p. 209. “...diversos instrumentos internacionales van a enfatizar, a partir de mediados de los años sesenta, el rol de la mujer en orden al desarrollo económico y social. Uno de los primeros documentos que consagran este nuevo papel de la mujer en el desarrollo es la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, de 7 de noviembre de 1967. En esta importante Declaración, la Asamblea General de las Naciones Unidas se declara “convencida de que la máxima participación tanto de las mujeres como de los hombres en todos los campos es indispensable para el desarrollo total de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” En la misma línea se va a situar la Estrategia Internacional del Derecho para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de 1970, cuando afirma que “debe estimularse la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuerzo en favor del desarrollo.” Siguiendo con estos esfuerzos en aras de la incorporación de la mujer a los procesos de desarrollo, en 1972 la Asamblea General proclama 1975 como Año Internacional de la Mujer, decidiendo dedicar dicho año a “intensificar las medidas encaminadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, asegurar la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuerzo en favor del desarrollo y aumentar la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.” *Idem*.

Unidas para el Desarrollo (1980); la Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985); Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague (1980); era deseable que la declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986:

La Declaración sobre el derecho al desarrollo, aprobada por la Asamblea General en 1986, obviamente, no iba a ser ajena a estos planteamientos, incluyendo en sus disposiciones una referencia explícita a la necesidad de que la mujer participe de forma activa en el proceso de desarrollo. Es el artículo 8.1 de la Declaración el que dispone que: “los Estados deben adoptar en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo.”³⁶⁰

El enfoque de género en el desarrollado, aplicado para hacer la mujer un sujeto/titular participe de los procesos de desarrollo, fue abordado posteriormente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), que culminó con la proclamación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que reconoce:

...la erradicación de la pobreza basada en el crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la justicia social exige la participación de la mujer en el desarrollo económico y social e igualdad de oportunidades, y la participación plena y en pie de igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes y de beneficiarios de un desarrollo sostenible centrado en la persona.³⁶¹

³⁶⁰ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 212.

³⁶¹ *Plataforma de acción de Beijing*.

La participación de la mujer como partícipe no solamente del proceso del desarrollo, sino en conformación con su situación de ser titular/sujeto del derecho al desarrollo, requiere necesariamente de una urgente atención en: el desarrollo integral con un enfoque de género, para abordar de manera paritaria las capacidades de mujeres y hombres por un bien común; una visión del desarrollo desde el enfoque de género, cooperación con miras a combatir problemas estructurales que afectan a ambos géneros como la pobreza, la reducción de los índices de fertilidad y el medio ambiente. Una manera de describir favorablemente los benéficos alcances de este enfoque es:

...la movilización eficaz de la mujer en el desarrollo no puede ser una tarea en la que la mujer se introduzca como un elemento separado de los planes y programas. La incorporación en los asuntos relativos a la mujer en las políticas económicas tampoco se limita a la elaboración de programas de compensación destinados a mitigar efectos negativos imprevistos. Por el contrario, el reconocimiento de que la mujer es un agente de desarrollo socioeconómico debe ser un elemento de la elaboración de políticas que apunten a modificar el funcionamiento de toda la economía.³⁶²

La doctrina ha formulado insistentemente abordar el enfoque de los derechos de los pueblos indígenas y consiguientemente la inclusión de los indígenas como titulares del derecho al desarrollo.³⁶³ Imposible de desvincular la pertinencia de esta avocación, si se recuerda que la declaración afirma en el artículo 1.2 de la declaración: "...el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación."³⁶⁴

³⁶² Informe del Secretario General, *Movilización e integración eficaces de la mujer en el desarrollo*, A/46/464/, 10 de octubre de 1991, p. 14.

³⁶³ FEYTER, K., *The human rights approach to development*, p. 476; COE, P., *The right to development must also address indigenous peoples and economies*, en "Global consultation of the right to development as a human right," Geneva, 8-12, January 1990, HR/RD/1990/CONF.38; BULL, H., *Indigenous peoples and the right to development*, en "Global consultation of the right to development as a human right," Geneva, 8-12 January 1990, HR/RD/1990/CONF.25.

³⁶⁴ Declaración sobre el derecho al desarrollo, art. 1.2, op. cit.

Debo aclarar que los indígenas no son el único sujeto del derecho a la libre determinación, aunque si son un sujeto (individual o colectivo para efectos de titularidad de estos dos derechos interdependientes, indivisibles, progresivos y universales que son el derecho a la libre determinación y el derecho al desarrollo), que por la enorme complejidad ante el proceso de reconocimiento progresivo de sus derechos, algunos de índole diferenciada justifica su inclusión no solo como sujetos/titulares del derecho al desarrollo, si no extenderlo como un enfoque para el abordaje del derecho al desarrollo, en lo que sea de su interés.³⁶⁵

Bajo esta tesitura Gómez Isa le concede a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2007 un voto favorable porque: "...sin ninguna duda, el pronunciamiento más claro en lo concerniente al reconocimiento del derecho al desarrollo a los pueblos indígenas figura en el artículo 23 de la declaración de 2007."³⁶⁶

En lo que concierne a la jurisprudencia los jueces mexicanos, han abordado el principio de dignidad de la persona humana, tomando un papel más activo:

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL

³⁶⁵ SAMBO Dorough, D., *The indigenous human right to development*, "Indigenous affairs," Vol. 1-2, 2010, p. 77.

³⁶⁶ Gómez Isa, se inclina por evaluar favorablemente los aciertos que de manera posterior al reconocimiento internacional del derecho al desarrollo como un derecho humano, han establecido paralelos que son reconocimientos progresivos de los indígenas como sujetos del derechos al desarrollo: "En el fondo el derecho al desarrollo persigue crear las condiciones necesarias en el terreno económico y social para un adecuado ejercicio del derecho autodeterminación por parte de los pueblos indígenas. Como señala el artículo 3 de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, "los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural...La consecuencia lógica del derecho al desarrollo de los pueblos indígenas es que puedan determinar sus prioridades en materia de desarrollo y puedan establecer condiciones en relación con proyectos que se pretendan llevar a cabo dentro de sus territorios." GÓMEZ Isa, Felipe, *op. cit.*, pp. 172-173.

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2.

La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio *pro homine* o *pro personae*, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.³⁶⁷

III.II Elementos del Derecho al Desarrollo

No existe aún un consenso total sobre el derecho al desarrollo, en virtud de que se trata como lo he apuntado de un derecho emergente, y como tal los derechos emergentes todavía se encuentran en un proceso de positivación y codificación; sobre esto Saura comenta: “si hablamos de nuevos derechos humanos, significa que se trata de reivindicaciones que no se hallan recogidas

³⁶⁷ *Tesis VI.1oA.J/2 (10ª.)*, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, Libro XI, agosto 2012, tomo 2, p. 1096.

en el derecho internacional general vigente. Ésta es la aspiración final de los derechos humanos emergentes: formar parte del derecho internacional consuetudinario o convencional de alcance universal.”³⁶⁸ La afirmación en curso no significa que no constituyan derecho de alcance vigente, en cualquiera de las manifestaciones jurídicas pertinentes, Saura, es muy objetivo al comentar que el asunto comprende complejidad porque: “...esta categoría de derechos incluye realidades muy dispares, incluyendo derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico, sea a escala de los estados o incluso internacional-regional.”³⁶⁹

Primeramente, la declaración sobre el derecho al desarrollo consigna una definición de desarrollo: “el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.”³⁷⁰ Esto significa que no acoge un paradigma exclusivo, los paradigmas del modelo de desarrollo se han construyendo paulatinamente, pero en el derecho internacional de los derechos humanos, el modelo de desarrollo es inclusivo, participativo, democrático y global.

Si bien es un derecho emergente, una nueva exigencia, que, constituida en alguna manera a partir en palabras de Saura como: “...un catálogo tan ambicioso en sus objetivos como heterogéneo en su contenido y en cuanto a su viabilidad a corto y medio plazo;”³⁷¹ se trata sin lugar a dudas de un genuino derecho humano, que en comunidad con el resto del elenco de derechos humanos emergentes:

...no son solo deseables y hasta posibles, sino que en algunos casos constituyen una realidad jurídica, siquiera parcial o regional, y por tanto,

³⁶⁸ SAURA Estapá, Jaume, *Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: Una aproximación desde el derecho internacional*, en “Derechos emergentes: Desarrollo y medio ambiente,” Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, p. 24.

³⁶⁹ *Ídem*.

³⁷⁰ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, preámbulo.

³⁷¹ SAURA Estepá, Jaume, *Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: Una aproximación desde el derecho internacional*, op. cit., p. 31.

resultan plenamente viables desde el punto de vista jurídico internacional. Ahora bien, su completo reconocimiento requiere de un proceso de codificación oficial –que puede ser progresivo, si se quiere– del que la Declaración de Derechos Humanos Emergentes podría constituir, lo que no es poco, un excelente anticipo.³⁷²

Los derechos humanos emergentes, encuentran su fundamento total en la noción de la dignidad humana, es verdad que han conocido de un proceso de formalización jurídica no lineal; porque efectivamente: “...el objetivo final es su positivación jurídica;”³⁷³ porque el fundamento de estos derechos no es otro que la dignidad humana, su viabilidad es real, porque pertenecen a un ambicioso proceso normativo internacional y nacional de generalización, especificación y positivación de los derechos humanos que aunque iniciado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos y los instrumentos relativos no ha sido concluso, sobre este contexto expresa Saura: “...cabe afirmar que el fundamento de los derechos humanos emergentes no es otro que el propio dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional, así como la elasticidad de la noción de “dignidad humana”, que permite incorporar progresivamente nuevas necesidades humanas.”³⁷⁴

En esta tesitura es que la declaración sobre el derecho al desarrollo, concede a favor del derecho una definición conceptual del derecho al desarrollo en el artículo 1.1.2., de la declaración en comento, es una conceptualización no muy clara pero que permite la interpretación y aplicación del derecho, consagrándolo, aunque desde la perspectiva del derecho internacional de carácter de *soft law* como un derecho humano:

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que

³⁷² *Ibídem.*, p. 42.

³⁷³ SAURA Estapá, Jaume, *Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: Una aproximación desde el derecho internacional*, op., cit., p. 21.

³⁷⁴ *Ibídem.*, pp. 21-22.

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.³⁷⁵

El derecho al desarrollo, es un derecho humano, la definición invoca además el término de la inalienabilidad de los derechos humanos; es muy importante también comentar que en esta primera aproximación al derecho al desarrollo, se hace una referencia a los pueblos, desde el enfoque colectivo; y hace hincapié en los distintos paradigmas que han caracterizado el desarrollo como proceso histórico, a saber que el desarrollo – como proceso y no como derecho- se manifiesta como modelo económico; social; cultural y político; estos procesos deben tener como fin y no como medio contribuir a la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales; - que son otras denominaciones empleadas para la definición y contextualización de los derechos humanos-.

Por su propia naturaleza, el derecho al desarrollo, conduce a un concepto jurídico – que se ha manifestado como derecho humano, y que dio consistencia por supuesto a la consolidación de las Naciones Unidas que se vio abrumadoramente alcanzada por los procesos de descolonización de los pueblos; por el ejercicio de libre autodeterminación, de naturaleza colectiva, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX; de hecho las Naciones Unidas se consideran como el vaso comunicante, que dio pulso para la lucha contra la descolonización y confirmó el derecho de autodeterminación de los pueblos no solamente como una norma de naturaleza consuetudinaria de *ius cogens*; sino que motivó el enfoque de analizar la autodeterminación de los pueblos como un

³⁷⁵ Declaración sobre el derecho al desarrollo, *op. cit.*, art. 1.1.2.

derecho humano y un principio constitutivo para la paz, la seguridad y la convivencia entre las naciones.

La referencia que hace el artículo 1.2 para fundamentar el derecho al desarrollo en los pactos internacionales de derechos humanos (pacto internacional de los derechos civiles y políticos; pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales); no tiene otra finalidad más que la de confirmar la interdependencia; progresividad; indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos en conjunto con el derecho al desarrollo y contribuir para darle certidumbre jurídica a los beneficiarios y participantes del derecho al desarrollo.

Además, la polémica que ha rodeado a la declaración desde su inicio versa sobre esa relación entre la naturaleza del derecho al desarrollo y los sujetos, estos elementos, son indisociables porque son los que integran el contenido, la noción y el fundamento de uno de los derechos emergentes más destacables y objeto de mi investigación, que es el derecho al desarrollo. La polémica figura acerca de la definición de si el derecho al desarrollo es un derecho individual o si en cambio, se trata de un derecho colectivo. En realidad se está frente a un derecho de naturaleza compleja y bidimensional aunque tiene como centro la dignidad de la persona humana.

- a) El derecho al desarrollo como derecho individual;
- b) El derecho al desarrollo como derecho colectivo;
- c) La postura intermedia entre estas dos clases de derechos.³⁷⁶

Es claro que la postura que concibe al derecho al desarrollo como derecho individual hace constancia a la larga tradición occidental que efectivamente: "...ha concebido históricamente éstos como derechos individuales, es decir, como derechos que pertenecen a la persona humana."³⁷⁷

³⁷⁶ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 143.

³⁷⁷ *Ídem*. "A través de los siglos en los que el concepto de derechos humanos y libertades fundamentales se ha desarrollado y definido, ha sido un axioma de toda la teoría subyacente que los beneficiarios de tales derechos y libertades son seres humanos individuales, los cuales

Así bien, la postura de los derechos individuales repara en que el único titular de derechos humanos, es la persona humana, es decir el individuo., aunque también es una postura que por su carácter evolutivo, tiene un contenido amplio, entre su doctrina no se descarta que los individuos puedan ser titulares de derechos colectivos.³⁷⁸

La concepción del derecho al desarrollo como derecho individual se plantea a nivel doctrinal solo si se entiende la fortaleza de la concepción individualista de los derechos humanos, porque los derechos humanos evidentemente no pueden despojarse porque iría en contra de su naturaleza de su concepción como derechos netamente individuales; no puede soslayarse que el primer supuesto para la protección, reconocimiento y protección de los derechos humanos, pasa irrecusablemente por las condiciones del modelo de estado liberal de derecho que es el espacio que mejor asegura los deseos de libertad, paz y seguridad., el derecho al desarrollo si es concebido como un derecho individual no tiene por qué ser incompatible con: "...el derecho humano de toda persona a participar, individualmente o en entidades establecidas con arreglo al derecho de asociación, en un orden político, social y económico en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos estipulados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, a contribuir a ese orden y a disfrutar del mismo."³⁷⁹

De modo que, es importante abundar en que las delegaciones de los estados citadas no niegan la validez del derecho al desarrollo como derecho humano, en lo que están en desacuerdo es en la concepción del derecho al desarrollo como derecho humano esencialmente colectivo, lo prefieren en la noción de derecho individual algunas de las posturas apelan a justificar su pertinencia como derecho individual, como esta presentada por el gobierno sueco:

en virtud de su humanidad, dignidad e integridad poseen inherentemente e inalienablemente dichos derechos." SIEGHART Paul., *The international law of human rights*, Clarendon Press, Oxford, 1983, p. 367.

³⁷⁸ DONELLY, J., "Third generation rights", en BRÖLMANN, C., LEFEBER, R., ZIECK, M., (Eds.), "Peoples and minorities in international law," Kluwer, The Hague, 1993, p. 134.

³⁷⁹ Propuesta del experto de los Estados Unidos de América, distribuida ya el 23 de junio de 1983, sobre el artículo 1 de la parte dispositiva, en Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo, Relator, Sr. Georges Gautier (Francia), *E/CN.4/1985/11*, de 24 de enero de 1985, Anexo VIII, p. 4.

Los derechos humanos tuvieron su origen en conceptos asociados al Derecho Natural, por lo que los esfuerzos para igualar los derechos colectivos con los derechos humanos tienden a crear confusión entre estos dos conceptos separados y a minar las salvaguardas del individuo contra la opresión y el abuso de poder por parte de las autoridades. Esta confusión, sea o no intencionada, conducirá inevitablemente al debilitamiento del potencial de las Naciones Unidas en su labor de protección de los derechos humanos allí donde sean violados.³⁸⁰

Luego aparece otra concepción muy emparentada con la del gobierno sueco, es la del gobierno italiano, aunque tiene un matiz de textura abierta:

Se debe distinguir entre el derecho al desarrollo de los seres humanos y de los Estados como tales. El ser humano es el centro del proceso de desarrollo, por lo que debe ser el principal sujeto y beneficiario de ese proceso...contra el riesgo de debilitar la protección de los derechos humanos que entraña la vinculación de los derechos del individuo a los derechos y obligaciones de los Estados en materia de desarrollo.³⁸¹

Otra de las posturas que aunque encontradas enriquecieron el debate es la manifestada por el Gobierno de la República Federal de Alemania, quien se abstuvo en la votación:

El derecho al desarrollo, en tanto que concepto amplio de derechos humanos, sólo puede conferirse a seres humanos a título individual. En la Declaración sobre el derecho al desarrollo aprobada en votación por mayoría no se relaciona el contenido material de ese derecho con el individuo, por lo que se le priva de cualquier contenido de derechos humanos. Cabe temer que, como resultado de ello, a la larga se resienta el concepto de derechos humanos individuales que figura en los documentos pertinentes de las Naciones Unidas.³⁸²

Todo parece indicar que el derecho al desarrollo si atiende a la concepción individualista de los derechos humanos: "...no pasaría de ser una

³⁸⁰ A/C.3/41/SR.36, p. 4 (Sr. Ewerlof).

³⁸¹ A/C.3/41/SR.37, p. 11 (Sr. Mezzalama).

³⁸² A/C.3/41/SR.61, pp. 32-33 (Sr. Schwandt).

síntesis de los derechos humanos existentes, sobre todo los de carácter económico, social y cultural.”³⁸³

Frente a esta postura se despliega otra postura, no menos polémica, la postura que concibe al derecho bajo una dimensión distinta: como un derecho esencialmente colectivo.³⁸⁴ Ciertamente la insistencia procedente por parte de delegaciones de países interesadas en el reconocimiento de ese derecho humano, fue determinante para la afirmación del derecho al desarrollo, aunque claro esa se afianzaban sobre la dimensión del derecho al desarrollo como derecho colectivo (o de solidaridad); aunque pienso que no menos interesantes e influyentes con independencia de las opiniones gubernamentales:

...un amplio grupo de internacionalistas que han tratado el tema del derecho al desarrollo apoyan esta visión esencialmente colectiva de este derecho humano. Consideran estos autores que si nos centramos exclusivamente en los aspectos individuales del derecho al desarrollo se contribuye en pequeña medida a la resolución del problema del sub-desarrollo, un problema que hunde sus raíces en causas de tipo colectivo y estructural.³⁸⁵

En el debate que dio luz al esclarecimiento de la naturaleza de ese derecho y para el aseguramiento de su dimensión colectiva, Bedjaoui, insistió en ese matiz colectivo/comunitario pertinente con la naturaleza del derecho al desarrollo:

...una aproximación al derecho al desarrollo partiendo de los derechos humanos como derechos individuales podría oscurecer los aspectos internacionales del problema [...] Ello constituiría una interpretación hipócrita y fraudulenta [...]. No es la interpretación individual del derecho

³⁸³ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, op. cit.*, p. 148.

³⁸⁴ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, op. cit.*, p. 148.

³⁸⁵ *Ibidem.*, p. 150.

al desarrollo, sino la colectiva y comunitaria, la que enmarca la verdadera naturaleza del problema.³⁸⁶

No es una nimiedad admitir que el derecho al desarrollo es considerado por una parte de la doctrina como un derecho colectivo, este matiz es útil para la aproximación conceptual acerca de la naturaleza del derecho en ciernes, en esa corriente Abi-Saab menciona:

...si el derecho al desarrollo como derecho individual no nos lleva muy lejos tenemos que volvernos a la alternativa del derecho al desarrollo como un derecho colectivo. Ello no significa una preferencia en favor de la colectividad sobre el individuo, sino que como cuestión de conveniencia jurídica podremos lograr mucho más para el individuo si consideramos el derecho al desarrollo como un derecho colectivo.³⁸⁷

La dimensión colectiva del derecho al desarrollo entonces se manifiesta en un reforzamiento de la dimensión individual de los derechos humanos; su ámbito de aplicación se direcciona del ámbito internacional al ámbito nacional y viceversa, como lo describe Gómez Isa:

...siendo las dos absolutamente necesarias para garantizar dicho derecho. En cuanto a la dimensión nacional, es el individuo el que ostenta un derecho al desarrollo en relación con su Estado; por su parte, la dimensión internacional conlleva a que son principalmente los pueblos y los Estados subdesarrollados los sujetos que pueden reclamar este derecho frente a la comunidad internacional, en este caso, fundamentalmente frente a los países desarrollados. Por otro lado, no debemos olvidar que todos estos autores otorgan una mayor importancia

³⁸⁶ BEDJAOUI, M., "The right to development," en BEDJAOUI, M., (Ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff, UNESCO, Dordrecht, 1991, pp. 1179.

³⁸⁷ ABI-SAAB, G., "The legal formulation of the right to development (subjects and content)," en DUPUY, René Jean, *Hague Academy of International Law and the United Nations University. The right to development at the international level*, Workshop, The Hague, 16-18 october 1979, Sijthoff & Noordhoff, The Netherlands, 1980, pp. 163-164.

a la dimensión internacional, dado que el subdesarrollo es, ante todo, un fenómeno de carácter internacional.³⁸⁸

El carácter colectivo del derecho al desarrollo puede definirse contextualizando los rasgos que doctrinariamente han generado un consenso para su identificación: articulación del derecho al desarrollo como derecho de los pueblos; capacidad secundaria: los gobiernos poseen una capacidad secundaria de provisión de ese derecho, no son de ninguna forma titulares; comportamiento del Estado solo de calidad de agente jurídico internacional.³⁸⁹

Confíeszan los expertos que de la redacción de la declaración, y analizado el debate entre estas dos fundamentales posturas: la postura individualista y la concepción – o postura- colectivista; es congruente afirmar que la declaración prefiere una postura ecléctica, equilibrada, con un planteamiento sintético: “la declaración sobre el derecho al desarrollo opta por una postura de equilibrio, de síntesis, respecto a los sujetos del derecho al desarrollo, un equilibrio entre la faceta individual y la faceta colectiva de este derecho humano;”³⁹⁰ si la postura es equilibrada a medio camino entre los nuevos derechos, nuevas exigencias y nuevos intereses colectivos o difusos, la pertinencia de la declaración es grande dado que provee de las herramientas epistemológicas para visualizar su objeto y su idea subyacente, que se inclina favorablemente por el reconocimiento, protección y garantía del derecho humano al desarrollo, desde el enfoque o paradigma del desarrollo humano – aunque sin vericuetos ideológicos- porque se centra fundamentalmente en el individuo, en sus expectativas, necesidades, intereses y exigencias fundamentales: en los derechos fundamentales de la persona humana.³⁹¹

³⁸⁸ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., pp. 151-152.

³⁸⁹ CRAWFORD, J., “The rights of peoples: some conclusions”, CRAWFORD, J. (Ed.), *The Rights of Peoples*, Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 167-173. DUPUY, R. J., “Thème et variations sur le droit au développement”, en *Le droit des peuples a disposer d'eux-memes. Méthodes d'analyse du Droit International. Mélanges offerts a Charles Chaumont*, Pedone, París, 1984, p. 271. SIERPINSKI, B., “Droits de l’Homme, droit des peuples: de la primauté a la solidarité”, en *L Homme et la société*, N. 85-86, 1987. Les droits de l'homme et le nouvel occidentalisme, p. 137.

³⁹⁰ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 61.

³⁹¹ *Ibidem.*, p. 163.

El derecho al desarrollo es un derecho humano que paulatinamente ha ganado su independencia dentro del elenco de los derechos humanos; es un derecho de naturaleza compleja, no solo por su dimensión intermedia (individual y colectiva, a medio camino entre los derechos individuales de primera generación y los derechos solidarios y colectivos de segunda, tercera y cuarta generación), también es un derecho de naturaleza abierta y expansiva, específico y autónomo.

La declaración en el preámbulo hace referencia a la paz y a la seguridad como elementos esenciales del derecho al desarrollo.

De poco sirve el estudio particular de un derecho, sino se pretende de manera metodológica establecer un análisis de la noción del derecho al desarrollo, de su fundamento y de su viabilidad,³⁹² por lo que la conceptualización de este derecho necesariamente se construye a través de la focalización de sus elementos:

a) Sujetos

Como beneficiario y participante: la persona humana – dignidad de la persona humana.

b) Elenco de derechos³⁹³

Derecho al medio ambiente;

Autodeterminación-pueblos indígenas-derecho a la ciudad;

Género;

³⁹² SAURA Estepá, Jaume, *Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: Una aproximación desde el derecho internacional*, en "Derechos humanos emergentes: Desarrollo y medio ambiente, op. cit., p. 19.

³⁹³ El derecho al desarrollo no persigue el perverso objetivo de convertirse una isla entre los otros derechos humanos, de hecho lo que lo identifica, como síntesis enfocado en el disfrute de los derechos humanos como conjunto es que: "...establece un vínculo claro y estrecho entre el desarrollo y el respeto del conjunto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, desde la óptica del derecho al desarrollo, no cabe perseguir el derecho anteponiéndolo al disfrute de los derechos humanos, sean estos de carácter civil o político o de carácter económico, social o cultural." El derecho al desarrollo es interdependiente de los demás derechos, así lo proclama la declaración que consagra la interdependencia como un principio directriz para la interpretación y aplicación del derecho al desarrollo, aunque la interdependencia como principio se estudiará en otro apartado de mi investigación. GÓMEZ Isa, Felipe, *La declaración sobre el derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 175.

Derecho al agua;
Derecho a la alimentación;
Derecho a la paz;
Derecho a la seguridad;
Derechos de solidaridad;
Democracia participativa (Estado constitucional-republicanismo).

c) Sistema de protección vinculante de los derechos

Derecho internacional consuetudinario;
Cooperación internacional;
Recepción jurídica en el derecho interno;
Desarme;
Obligaciones jurídicas.³⁹⁴

Acerca del sujeto como elemento del derecho, ciertamente la titularidad de un derecho es un aspecto toral para el reconocimiento, protección y garantía de cualesquier derecho humano, y su encuadre un sujeto, como titular del derecho humano al desarrollo resulta peculiar; en este aspecto regreso por razones de método al articulado previsto en la declaración universal sobre el derecho al desarrollo para revisar la noción, el fundamento y la estructura del derecho al desarrollo que se construye a partir de la explicitación de sus elementos.

Concretamente el artículo 2.1, establece que la persona humana es “sujeto central de desarrollo”; “participante activo” y “beneficiario del derecho al desarrollo;”³⁹⁵ asimismo la declaración es muy enfática al aclarar que el derecho al desarrollo interesa en una responsabilidad de calidad individual y colectiva para los seres humanos;³⁹⁶ en este sentido pareciera que la declaración, hace

³⁹⁴ Felipe Gómez Isa plantea una clasificación de los elementos del derecho al desarrollo que él considera son los elementos que más destacan del derecho al desarrollo, estos son: “1. El respeto de todos los derechos humanos como parte integrante del derecho al desarrollo; 2. Conexión del derecho al desarrollo con el resto de los derechos humanos de la tercera generación; el desarme y su contribución al derecho al desarrollo; la participación popular como elemento fundamental en todo proceso de desarrollo.” GÓMEZ Isa, Felipe, *La declaración del derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 175.

³⁹⁵ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit., art. 2.1.

³⁹⁶ *Ibidem.*, art., 2.2.

una aportación que no reduce el derecho desde el enfoque de la responsabilidad en una calidad individual, sino que también deberá de ser cumplido y sustentado de manera colectiva; es una confirmación, de que el titular de tales derechos si bien es la persona humana, incorpora a la persona humana en dos grandes manifestaciones como individuo, pero también como colectividad, esto armonizado con el principio de libre determinación de los pueblos, que la declaración claramente se pronuncia en tutelar.³⁹⁷

La titularidad de los derechos de tercera generación, tiende a focalizarse en el individuo como sujeto central del desarrollo, aunque no descarta “el ejercicio colectivo.”³⁹⁸

Entre el elenco de los derechos humanos que configuran la conceptualización del derecho al desarrollo, sin lugar a dudas los más determinantes son: derecho al medio ambiente; derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que implica también un derecho emergente denominado derecho a la ciudad; el enfoque de género, en particular con los derechos de la mujer; derecho al agua; derecho a la alimentación, que englobaría tentativamente una relación interesante con la agricultura ecológica y el ecologismo; derecho a la paz, recordando que la paz, se sitúa en un lugar preferencial de la declaración al desarrollo al reconocérsele de manera textual

³⁹⁷ “En el seno de esta categoría, sólo el derecho de autodeterminación de los pueblos se predica explícitamente de grupos concretos o minorías, pudiendo ser este un supuesto de lo que W. Kymlicka ha denominado “protección externa”, ya que se trata de proteger a “un grupo étnico o nacional determinado del impacto desestabilizador de las decisiones de la sociedad de la que forma parte”. Es decir, lo que se pretende es asegurar la igualdad entre los grupos y la libertad e igualdad dentro de los grupos. No parece que ello tenga que conducir necesariamente al establecimiento de restricciones internas que limiten el derecho de disenso de cada uno de sus miembros, su derecho a revisar las prácticas tradicionales y a cuestionar a las autoridades.” RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación*, op. cit., pp. 166-168.

³⁹⁸ Rodríguez Palop, en su estudio sobre los derechos de cuarta generación señala que: “por lo que a su titularidad se refiere, los derechos de cuarta generación se concentran en el individuo (situado o no), si bien, al orientarse a la protección de intereses comunes, parece aconsejable y, en ciertos casos, inevitable, su reivindicación y ejercicio colectivo. Este rasgo no es exclusivo de la categoría que nos ocupa, pues no se le oculta a nadie que algunos derechos reconocidos jurídicamente exigen en su puesta en práctica la acción coordinada de los miembros de un grupo o colectividad, no pudiéndose llevar a cabo su protección fuera de unas determinadas coordenadas. Algunos ejemplos paradigmáticos pueden ser el derecho de huelga, los derechos políticos o la creación de sindicatos, para cuya configuración se ha llevado a cabo un loable y exitoso esfuerzo de distinción entre titularidad y ejercicio.” *Ibidem.*, p. 175.

como elemento esencial, de manera que la paz, como valor, conlleva a la contextualización del sucesivo derecho a la paz.

El derecho a la seguridad, éste derecho también como resultado del reconocimiento expreso de la declaración al valor de la seguridad, como elemento esencial del derecho al desarrollo. Derechos de solidaridad, el derecho al desarrollo como derecho resultante de la tercera generación de los derechos humanos, también considerados derechos de solidaridad, es un derecho integrante y que opera en relación con ese elenco novedoso de nuevos derechos humanos y finalmente democracia participativa que a su vez implica el reconocimiento del estado constitucional y de las virtudes republicanas. Empezaré por describir cada uno de los derechos humanos y su pertinencia con el derecho al desarrollo:

Acerca del derecho al medio ambiente; regreso nuevamente a la declaración sobre el derecho al desarrollo, recuerdo que en el artículo 1.2., el texto señala que: “El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.”³⁹⁹

En efecto, la unión inextricable entre medio ambiente y desarrollo no podría explicarse si no recordase la *Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano*, que fue aprobada en Estocolmo el

³⁹⁹ Declaración sobre el derecho al desarrollo, op cit., art. 1.2. El derecho al medio ambiente puede ser definido a través de la clasificación un conjunto de ideas, tomando como guía las reflexiones de Rodríguez Palop, acerca de la configuración del derecho al medio ambiente: “a) exige sustituir la racionalidad económica por la ecológica; plantear el control colectivo de los recursos; proponer restricciones morales y políticas a las posiciones más egoístas; descentralización económica y política... porque resulta más favorable a la democratización de la esfera pública; requiere también reducir la pobreza y atenuar la brecha Norte/Sur, estimulando la transferencia del primer polo al segundo (cooperación al desarrollo), democratización de las instancias internacionales, y el fortalecimiento del poder local (de ahí que el derecho al medio ambiente no pueda desvincularse del derecho a la autodeterminación de los pueblos); la necesidad de articular un desarrollo autocentrado en el que pueda darse: Adaptación, Autosuficiencia y Respeto por la biodiversidad; autocontención en el consumo bajo el presupuesto de que el consumo excesivo es insostenible y no puede generalizarse.” Rodríguez Palop, María Eugenia, *El ecologismo como referente en la construcción del derecho al medio ambiente*, en “Derechos emergentes: Desarrollo y medio ambiente,” op, cit., pp. 63-64.

16 de junio de 1972 y apelada en la *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo* que fue producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. En esta conferencia internacional, se reafirmaron principios y objetivos que de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, enfatizaba el derecho inalienable y soberano de los Estados tienen el derecho "...de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional."⁴⁰⁰

La declaración confirmó nuevamente "el derecho al desarrollo"⁴⁰¹ y estableció parámetros para la delimitación de su ejercicio, vinculándolo con un deber que debería de ser ejercido: "equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras." El desarrollo es un derecho humano, pero debe interpretarse en relación con: "el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente."⁴⁰²

El derecho a un medio ambiente seguro y saludable, se ha consagrado de manera progresiva en diversos textos internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, La Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, Convención para los derechos de los niños y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y tribales (No.169).

También en diversas conferencias internacionales de las cuales han resultado compromisos gubernamentales, intergubernamentales y de cooperación para proteger, garantizar y tutelar el derecho humano a un medio ambiente seguro y saludable como: compromisos realizados en la Cumbre de

⁴⁰⁰ *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*, principio 2.

⁴⁰¹ *Ibidem.*, principio 3.

⁴⁰² *Ibidem.*, principio 4.

Río, La Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, y la Conferencia Hábitat II en Estambul.

La Constitución mexicana recepcionó el derecho al medio ambiente, que también ha sido denominado: derecho a un medio ambiente adecuado o sano⁴⁰³ de manera formal con la reforma constitucional del año de 1999 que reconoció el derecho a un medio ambiente adecuado y se reforzó con la reforma aprobada en diciembre del año 2001. El 28 de junio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 4º y 25º de la Constitución que consagró el derecho a un medio ambiente adecuado (artículo 4º) y principio de desarrollo integral y sustentable en el sistema nacional de planeación democrática. El 25 de abril de 2001 se turnó y aprobó el dictamen relativo a la adición del apartado C., al artículo 102 de la constitución. Los artículos en comento disponen:

[...] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley[...].⁴⁰⁴

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.⁴⁰⁵

El derecho al medio ambiente, o a un medio ambiente sano, es un derecho de carácter abierto, expansivo y progresivo, invoca una naturaleza

⁴⁰³ *Ídem.*

⁴⁰⁴ *Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., art. 4. Párr. 5.*

⁴⁰⁵ *Ibídem., art. 25, Par. 1.*

equitativa y se refiere a un conjunto de intereses ambientales que serán protegidos a través de numerosos instrumentos del orden nacional e internacional; para Gómez Isa: “el derecho al medio ambiente va a suponer el establecimiento de límites al derecho al desarrollo, es decir, el derecho al desarrollo va a tener que contar necesaria e ineludiblemente con los condicionamientos medioambientales impuestos por el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.”⁴⁰⁶

La declaración sobre el derecho al desarrollo, en el artículo 1. 2 reconoce que el derecho humano al desarrollo: “implica la plena realización de los pueblos a la libre determinación”⁴⁰⁷, de manera que este derecho a la autodeterminación, tiene dos vasos comunicantes que son la referencia hacia los pueblos indígenas y el derecho emergente denominado: derecho a la ciudad. En la declaración la mención hacia esta clase de derecho aparece nuevamente en el artículo 5, de la misma, cuando dispone, la obligación de los estados para adoptar enérgicas medidas para eliminar “diversas violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos,”⁴⁰⁸ entre ellas, la negativa: “a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación,”⁴⁰⁹ precisamente el silencio y la omisión de hacer mención de los pueblos indígenas como sujetos de desarrollo en la declaración se ha calificado de una laguna presente en la declaración sobre el derecho al desarrollo.⁴¹⁰

El derecho a la libre determinación es un derecho que data de viejo cuño en el historial de las Naciones Unidas, la doctrina emanada del análisis de este

⁴⁰⁶ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 189.

⁴⁰⁷ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, art. 1.2.

⁴⁰⁸ *Ibidem.*, art. 5.

⁴⁰⁹ *Ídem.*

⁴¹⁰ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo de los pueblos indígenas*, en “Derechos emergentes: Desarrollo y medio ambiente,” op. cit., p. 160. “Es muy significativo al respecto que la *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986, no realizará ni una sola mención a los pueblos indígenas como sujetos de dicho derecho. Esta situación era una de las principales lagunas de esta declaración. Esta situación era una de las principales lagunas de esta Declaración. Veremos cómo tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989) como, sobre todo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU han venido a colmar con creces esta laguna en el reconocimiento explícito de los pueblos indígenas como titulares del desarrollo.” *Ídem.*

nodal derecho le determina dos vertientes: “una al exterior, por la cual los Estados Miembros de la Comunidad Internacional tienen la obligación de respetar este derecho con respecto a los demás estados y promover su ejercicio; y otra al interior, mediante la cual los pueblos deben decidir sobre su sistema político y determinar su desarrollo económico, social y cultural.”⁴¹¹

Este singular derecho se codificó en el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas; posteriormente el derecho se fue positivando progresivamente en una serie de resoluciones de las Naciones Unidas: 1514; 1541 y 2625. Entre estas resoluciones la resolución 1514, es considerada el documento jurídico más importante que reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos en el derecho internacional, también es conocida como la *carta magna* de la descolonización por su importancia en el impulso al proceso descolonizador.

En México el derecho a la libre determinación de los pueblos, ha tenido por razones históricas un punto nodal que es el concerniente a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Los avances después de todo, no han sido menores, la autodeterminación como derecho en México ha tomado una vía de expresión inacabada, pero valiosa, porque se ha expresado en términos de autonomía:

...La autonomía se reclama, eso sí, en términos de autonomía política real (elección de las propias autoridades con competencias y medios para legislar y administrar en los asuntos propios —incluyendo el acceso a los recursos naturales—), de demarcación de territorio propio y, desde

⁴¹¹ BRENES Rosales, Raymundo, Antología. *Introducción a los derechos humanos*, EUNED, San José, 1993, 95. Esta visualización dual del derecho a la libre determinación, coincide con los procesos políticos contemporáneos que dan lugar a nuevas expresiones de socialización, Francois Houtart expresa: “Nos encontramos frente a una doble presión. Por una parte, hay la necesidad de abandono de los estados-naciones en favor de entidades superiores regionales como en el caso de la Unión Europea, o internacionales en el cuadro de las Naciones Unidas. Por otra parte, las presiones regionales se manifiestan también como forma de resistencia contra una globalización aplastante, permitiendo al mismo tiempo emanciparse de ciertas obligaciones impuestas por los estados-naciones o conservar los frutos integrales del desarrollo económico.” HOUTART, François, *Las autonomías multiculturales en el contexto de la globalización*, en CASAÑAS, Joan, (Ed.), “La autodeterminación de los pueblos,” Icaria, Barcelona, 2008, p. 7.

tal punto de partida, de replanteamiento de las relaciones con las instituciones estatales (y de ahí, en ocasiones, se llega a un replanteamiento de la propia estructura e institucionalidad estatal en su conjunto).⁴¹²

Si bien es cierto que falta mucho por hacer, los cimientos que favorecen el éxito de la libre determinación de los pueblos indígenas por los efectos que tiene para México, son interesantes, porque me brindan la oportunidad de analizar lo que México ha hecho aunque sea desde el enfoque constitucional y desde la perspectiva de los derechos humanos, en este derecho en específico.

México ha optado, y es un gesto congruente por reconocer el derecho de manera explícita en la constitución, esto se ha manifestado de dos maneras, un reconocimiento de manera interna, en relación con los pueblos indígenas, y como reconocimiento de manera externa al integrar el principio de autodeterminación de los pueblos como directriz de su política internacional.

A la luz de los derechos el reconocimiento se ha explicitado de manera total, a raíz de la reforma constitucional del año 2001, que comprendió una reforma total al artículo 2° de la constitución y una reforma constitucional parcial al artículo 115° de la constitución.

Como punto positivo, la autonomía debe funcionar en el marco del derecho a la libre determinación, como un principio a favor de los pueblos indígenas no en demérito de las comunidades, mucho menos de los individuos, debe articularse en una política no de Estado hasta sus últimas consecuencias, sino una política auténtica de derechos humanos que propicie el respeto de la dignidad de la persona humana.⁴¹³

⁴¹² APARICIO WILHEMI, Marco, *La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de México*, "Boletín Mexicano de Derecho Comparado," No. 124, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, enero-abril 2009, p. 14.

⁴¹³ La autonomía es un concepto que se despliega intensamente del ejercicio de la libre determinación, pero su configuración es compleja porque no deja de estar limitado por los derechos fundamentales, por eso Díaz Polanco y Sánchez puntualmente expresan: "Básicamente, es preciso que la autonomía implique un empoderamiento de los sujetos. Es decir, que las colectividades beneficiadas con el régimen de autonomía asuman plenamente los derechos mínimos que supongan, a su vez, adquirir el poder imprescindible para que sus

La constitución mexicana en el artículo 2° dispone:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. [...] A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía.⁴¹⁴

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.⁴¹⁵

De entre todo el elenco de derechos que se interpretan de manera vinculante con el derecho al desarrollo, el enfoque en materia de género, quizás sea el más inteligible; es indudable que cada vez es más creciente la tendencia, de una “necesidad de adoptar una perspectiva de género ante el reto de la cooperación internacional para el desarrollo.”⁴¹⁶

La declaración sobre el derecho al desarrollo no fue la pionera en este enfoque dirigido para la inclusión del papel de la mujer y de su importancia en el desarrollo, una serie de conferencias internacionales, de convenios internacionales, de planes de acción resultantes de diversos eventos de las Naciones Unidas le dieron un renovado pulso, a un acontecer histórico: la

miembros se conviertan en verdaderos ciudadanos: para que germine lo que se ha llamado una “ciudadanía multicultural” o “multiétnica”. Las condiciones y reglas del empoderamiento deben especificarse en el marco constitucional y en las leyes, cuidando sin duda que no provoque disminución o supresión de derechos de otros. La autonomía es un sistema para reconocer o acrecentar derechos de unos grupos o pueblos, no para anular o reducir derechos fundamentales de nadie.” DÍAZ Polanco, Héctor, SÁNCHEZ, Consuelo, *México diverso. El debate por la autonomía*, Siglo XXI editores, México, 2002, p. 153.

⁴¹⁴ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, art. 4°.

⁴¹⁵ *Ibidem.*, art. 115, III, i), par.

⁴¹⁶ CIRUJANO Campano, Paula, *Género, desarrollo y cooperación*, en CARBALLO De la Riva, Marta, (Coord.), “Género y desarrollo.” *El camino hacia la equidad*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Ediciones Catarata, Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, 2006, p. 56.

Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en México en 1975; el Plan de Acción para la Implementación de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer; la Década Internacional de las Mujeres; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres; la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1980 celebrada en Copenhague; la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1985 en Nairobi; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en 1995; con los resultados de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (PAB) de Beijing; el Protocolo Adicional de la CEDAW de 1999; la Cumbre del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Todos estos esfuerzos de cooperación internacional han sido encaminados para lograr la integración de la mujer en el desarrollo. Esto se aplica en relación con el artículo 8.1 de la declaración sobre el derecho al desarrollo que conmina a los estados para adoptar: “medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo.”⁴¹⁷

Por lo que hace a la obligación jurídica en la constitución mexicana en materia de igualdad de la mujer, la *Carta Magna* dispone:

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.⁴¹⁸

Derecho al agua, en el nivel internacional esta clase de derecho fue reconocida desde el año de 1977, existen una serie de declaraciones intergubernamentales que han positivado de manera gradual el derecho al agua como: la Declaración de Durbin en el año de 1992; los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM); Cumbre de Johannesburgo. De manera explícita este derecho se consigna en la Resolución 64/292 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Observación General n° 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

⁴¹⁷ Artículo 8.1., *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op. cit.*,

⁴¹⁸ Artículo 4., Par. 1, *Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos*.

Derecho a la alimentación; este derecho ha seguido otra evolución, primeramente porque fue reconocido expresamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; también se encuentra en el catálogo de derechos organizado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Para darle un seguimiento puntual también se han realizado distintas cumbres, conferencias e iniciativas a propuesta de las Naciones Unidas como: Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma en 1996; en el Comentario General n°12 sobre el Derecho a la Alimentación, establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por la Resolución 2000/10 que a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos adoptó el establecimiento del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación ocurrido esto en el año 2000 y por la adopción en el año 2003 a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de la organización de un grupo de trabajo intergubernamental que conllevó a la adopción en fecha 23 de noviembre de 2004 de las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional.

La constitucionalización del derecho al agua en la norma fundamental mexicana:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.⁴¹⁹

Derecho a la paz; este quizás sea el objetivo prioritario que dio inicio para la constitución de las Naciones Unidas, pero también es el más complejo por las diversas acepciones que tiene. Para empezar porque en la declaración

⁴¹⁹ Artículo 4. Par. 6, *Constitución política de los estados unidos mexicanos*,

sobre el derecho al desarrollo se la considera, a la par que con la seguridad, un elemento esencial “para la realización del derecho al desarrollo.”⁴²⁰ Ningún valor ha sido tan tremendamente precursor de una empresa de tal envergadura, como lo es la universalidad de los derechos como unión supranacional de los Estados, como lo ha sido la búsqueda de la paz. No es casualidad que el anhelo por la paz entre las naciones haya permanecido como el pórtico que abrió los senderos para la construcción de la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos.

Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, este organismo internacional ha dejado patente su principal responsabilidad que es la de: mantener la paz y la seguridad internacionales. Es en ese escenario sobre el que se ha ido delineando este crucial derecho, en el ámbito internacional: la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz (Resolución 39/11) de la Asamblea General de la ONU de 1984.

La seguridad es el segundo pilar que construye las principales responsabilidades de las Naciones Unidas, es por tanto, un valor esencial, y un elemento esencial del derecho al desarrollo, la declaración se encarga de mandatarlo expresamente. Si bien el derecho a la seguridad; es un derecho complejo su relación con el derecho al desarrollo no es obvia ni tampoco es una redundancia retórica, ciertamente es importantísima para la sostenibilidad de las relaciones internacionales, por su delicadeza y cercanía en las relaciones humanas y en la determinación de la individualidad de todos los seres humanos. Y porque en términos del estado de derecho, la seguridad le da certidumbre al edificio jurídico, a esa doctrina elaborada que es el derecho como norma máxima de regulación social.

Los derechos de solidaridad o de tercera generación, que han sido también denominados derechos de colectividades o intereses difusos, porque: “no tienen al individuo, en su singularidad, como su titular ni tampoco a grupos

⁴²⁰ *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op. cit.*

humanos como la familia o colectividades, etc. El titular viene a ser la comunidad humana en su conjunto, dentro o fuera de las fronteras.”⁴²¹

Una característica recurrente en la descripción de esta clase de derechos es que “su vigencia requiere del elemento solidario tanto nacional como internacional”; son derechos necesariamente globales; la segunda característica es que estos derechos de manera esquemática implican derechos y deberes para sus beneficiarios para ser ejercidos en su medio social.⁴²²

El catálogo implícito de los derechos de la solidaridad agrupa derechos tales como: derecho a la asistencia humanitaria; derecho a la autodeterminación de los pueblos – que analicé de manera particular- derecho al desarrollo – objeto de estudio de la presente tesis doctoral-; derecho al medio ambiente saludable – de la misma forma, que también fue analizado de manera singularizada-; derecho a la preservación de los recursos naturales para las nuevas generaciones.⁴²³

Un significativo avance para la positivación y homogenización de los derechos de solidaridad, se refleja en la reciente resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el día 23 de junio de 2013 sobre: los derechos humanos y la solidaridad internacional. Con fundadas esperanzas, a los singulares avances en la materia, se agrega, el reciente Informe de la Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, Virginia Dandan, que contiene una adición: el texto preliminar de un proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional, publicado por conducto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por disposición del Consejo de Derechos Humanos el día 1º de abril del 2014.

⁴²¹ FIGUEROA Pla, Uldaricio, *El sistema internacional y los derechos humanos*, RIL Editores, Santiago, 2012, p. 136.

⁴²² *Ídem.*

⁴²³ *Ídem.*

En materia de democracia participativa (Estado constitucional-republicanismo), la declaración es muy clara, por conducto de la Asamblea General en advertir en el preámbulo la conformidad de la declaración respecto de las “disposiciones del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y del pacto internacional de derechos civiles y políticos.”⁴²⁴ Los derechos civiles y políticos son en coincidencia con su historia: derechos de participación;⁴²⁵ porque son anteriores a los derechos denominados de segunda generación como económicos, sociales y culturales, son derechos que en el proceso de generalización y especificación de los derechos se produjeron en el seno del estado liberal, pero ello no significa que su interdependencia, indivisibilidad y progresividad con los derechos humanos no sea realizable, esto porque:

Desde el punto de vista histórico, y como advierte N. Bobbio, tan sólo cuando se concibió la libertad, no exclusivamente como no interferencia, sino positivamente como autonomía, se alcanzó una participación cada vez más amplia, difundida y frecuente de los miembros de la comunidad en el poder político (o libertad en el Estado), que dio lugar al surgimiento de los derechos políticos. “La concesión de los derechos políticos ha sido una consecuencia natural de la concesión de los derechos de libertad, porque la única garantía al respeto de los derechos de libertad está en el derecho de controlar el poder.”⁴²⁶

Todavía la Asamblea General profundiza más en esta afirmación, es así que el artículo 6.2.3: dispone que: “Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes

⁴²⁴ *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op. cit.*

⁴²⁵ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación, op. cit.*, p. 95.

⁴²⁶ RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos, origen y justificación, op. cit.*, pp. 95-96.

de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.”⁴²⁷

En el artículo 8.2: “Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.”⁴²⁸

En el artículo 9.2: “Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales de derechos humanos.”⁴²⁹

En materia del sistema de protección vinculante de los derechos: que implica la pertinencia del derecho internacional consuetudinario; la iniciativa de la cooperación internacional; la recepción jurídica del derecho al desarrollo en el derecho interno; desarme y las obligaciones jurídicas que asumen los Estados y los gobiernos, los elementos se analizan por la relación tan íntima que guardan para la interpretación y aplicación del derecho humano al desarrollo.

Es imposible dejar de decir que el derecho internacional de los derechos humanos, no desconoce el arraigo que guarda con las normas del derecho internacional consuetudinario; la relación proviene de que uno de los principales vectores del derecho internacional de los derechos humanos, lo es el derecho internacional humanitario, que comprende en su catálogo un conjunto de normas internacionales, algunas de origen convencional y otras de origen consuetudinario.

Una de las principales razones que condujeron a la creación de las Naciones Unidas, era la esperanza de asumir estrategias y relaciones de

⁴²⁷ *Ibídem.*

⁴²⁸ *Ibídem.*

⁴²⁹ *Ibídem.*

cooperación internacional más amplias y elaboradas, que sustituyeran políticas paliativas asistenciales, o la antigua política de dominación internacional del más fuerte; la evolución en este sentido no se podría explicar si no se volviese nuevamente a traer a palestra la piedra de toque en que se convirtió el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos, entre otros procesos de globalización, que han acercado a las Naciones para estrechar sus relaciones de cooperación internacional. A la postre la evolución no ha cesado, ahora se elaboran estrategias complejas como: *Los Objetivos de Desarrollo del Milenio* y su derivación: la *Declaración del Milenio*.⁴³⁰

El régimen internacional de derechos humanos, ha preferido que en lo relativo al proceso de recepción jurídica en el derecho interno del derecho interno, suponga una aceptación que centre el principio de la dignidad de la persona humana, como fin y no como medio para el despliegue de un completo sistema de protección, tutela y garantía de los derechos humanos. Aunque en la práctica, las Naciones Unidas han tenido que enfrentarse a los desafíos del aun incompleto proceso de humanización del derecho internacional de los derechos humanos. En un sistema: "...pensado básicamente en el ámbito de los Estados,"⁴³¹ tiene razón la autora en criticar que esto concreta: "...que los Estados pueden presentar reservas y declaraciones interpretativas a los diferentes textos y pactos internacionales."⁴³²

Dentro del variado elenco de los derechos humanos de tercera generación, el derecho de paz cuenta con una congruencia probada que lo afirma como un derecho muy singular en la generación en comento; la declaración también señala en un punto nodal que la paz y la seguridad son elementos esenciales del derecho al desarrollo, de ahí que necesariamente por la vinculación tan estrecha entre desarrollo, paz, seguridad y desarme (que también aparece explicitado en la declaración) es que el desarme se ha

⁴³⁰ JÍMENEZ Herrero, Luis, *Los objetivos del milenio y el medio ambiente*, en ECHART, Enara, PUERTO, Luis Miguel, SOTILLO, José Ángel, (Coords.), "Globalización, pobreza y desarrollo. Los retos de la cooperación internacional," Instituto Universitario de Desarrollo, Los libros de la Catarata, Madrid, 2005, p. 73.

⁴³¹ FELIU, Laura, *El jardín secreto. Los defensores de los derechos humanos en Marruecos*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Los libros de la Catarata, Madrid, 2004, p. 114.

⁴³² *Ídem*.

ganado a pulso, un sitio, como elemento del derecho al desarrollo.⁴³³ La estrechez entre desarrollo y desarme es necesaria y así lo constata la declaración:

La Declaración sobre el derecho al desarrollo, haciéndose eco de esta perspectiva, incluye el desarme entre los contenidos conceptuales del derecho humano al desarrollo. En este sentido, el mismo preámbulo de la Declaración reafirma “que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los pueblos, y en particular, de los países en desarrollo.”⁴³⁴

Sobre las obligaciones jurídicas que el Estado debe hacer valer para la realización del derecho al desarrollo, debo apuntar que el articulado de la declaración se refiere a los deberes, responsabilidades y obligaciones de manera indistinta y que en los apartados pertinentes me avocaré a la descripción y explicación de este tan importante concepto ya que de su puesta en marcha depende la realización efectiva del derecho al desarrollo para la persona humana; que a través de obligaciones algunas *obligaciones de hacer* y otras *obligaciones de no hacer* determinaran la contextualización del derecho humano al desarrollo. En el derecho esta la respuesta, es por ello que adelanto que para el despliegue se requiere de normas jurídicas que aseguren:

A) Ámbito internacional

- a) Participación en el proceso de desarrollo;⁴³⁵
- b) Creciente tendencia de desmilitarización y desarme;⁴³⁶
- c) Gobernabilidad;⁴³⁷
- d) La cuestión demográfica;⁴³⁸

⁴³³ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como un derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 201. “Desarme y derecho al desarrollo: el dividendo para la paz.”

⁴³⁴ *Ibidem.*, pp. 201-202.

⁴³⁵ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como un derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 253.

⁴³⁶ *Ibidem.*, p. 256.

⁴³⁷ *Ibidem.*, p. 258.

- e) Principio de complementariedad jurídica;⁴³⁹
- f) Evaluación y coordinación de las actividades del derecho humano al desarrollo;⁴⁴⁰
- B) Ámbito Nacional
 - a) Deber de los estados de cooperar internacionalmente;⁴⁴¹
 - b) Necesario y efectivo respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;⁴⁴²
 - c) Igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a los recursos y servicios básicos;⁴⁴³
 - d) Mayor participación en el proceso del desarrollo;⁴⁴⁴
- C) Instancias no estatales⁴⁴⁵
 - a) Participación de las ONGs en la discusión del proceso de desarrollo;⁴⁴⁶
 - b) Papel de empresas transnacionales;⁴⁴⁷
 - c) Los deberes del individuo.⁴⁴⁸

Según el *Informe del Informe sobre Desarrollo Humano 2014* México se encuentra en el índice de desarrollo humano en el lugar 71, con un valor de 0,756 (correspondiente al año 2013), la esperanza de vida al nacer es de 77,5; la media de años de escolaridad es de 8,5; años de escolarización previstos de un 12,8 y un (INB) pér capita de 15 854.⁴⁴⁹ En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad México tiene un valor de 0,583; un coeficiente de desigualdad humana por 22,3; desigualdad en la educación por 21,4; desigualdad de ingresos por 34,6; índice de ingresos ajustado por la desigualdad de 0,500. En el coeficiente de Gini medido entre 2012 y 2013 : tiene un valor de 47,2.⁴⁵⁰

⁴³⁸ *Ibidem.*, p. 259.

⁴³⁹ *Ibidem.*, p. 264.

⁴⁴⁰ *Ibidem.*, p. 281.

⁴⁴¹ *Ibidem.*, p. 291.

⁴⁴² *Ibidem.*, p. 302.

⁴⁴³ *Ibidem.*, p. 304.

⁴⁴⁴ *Ibidem.*, p. 306.

⁴⁴⁵ *Ibidem.*, p. 307.

⁴⁴⁶ *Ídem.*

⁴⁴⁷ *Ibidem.*, p. 310.

⁴⁴⁸ *Ibidem.*, p. 316.

⁴⁴⁹ PNUD, *op. cit.*, p. 177.

⁴⁵⁰ *Ídem.*, p. 185.

II.III Las responsabilidades respecto del Derecho al Desarrollo

En el derecho internacional de los derechos humanos se han diseñado principios operativos tendientes a regular las obligaciones internacionales generales de los estados en materia de derechos humanos. Ciertamente la declaración prefiere el término responsabilidades para determinar las obligaciones y deberes de los sujetos del derecho al desarrollo, entendido que los sujetos implican la titularidad del derecho al desarrollo. Lo que hace la declaración es que esta no asume el concepto de responsabilidad tradicional del Estado;⁴⁵¹ sino que ésta opta, por un modelo de responsabilidad evolucionada:

Así pues, podemos afirmar que junto a la responsabilidad tradicional que poseen los estados en materia de garantía y respeto a los derechos humanos, ha surgido en las últimas décadas una responsabilidad no estatal que afecta a todas las personas y a todos los grupos sociales y que exige de todas ellas una actitud positiva de participación y de aceptación de la responsabilidad.⁴⁵²

A la luz de los derechos de la solidaridad, esta exigirá: "...como mínimo "hacerse cargo", la asunción de nuestras responsabilidades y el cumplimiento de ciertos deberes. De hecho, como se verá más adelante, favorece la imposición de deberes negativos generales y sobre todo, de deberes positivos generales; es decir, no sólo deberes de abstención sino también de deberes de acción, que podrían exigirse con carácter general."⁴⁵³

- a) Deberes negativos generales o deberes de abstención;
- b) Deberes positivos generales o deberes de acción;
- c) Responsabilidades comunes pero diferenciadas;
- d) Acción solidaria o solidaridad;

⁴⁵¹ BERRAONDO López, Mikel, *Los derechos humanos en la globalización*, op. cit., p. 70.

⁴⁵² Ídem.

⁴⁵³ GUTIÉRREZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación*, op. cit., p. 437.

e) Generaciones futuras.⁴⁵⁴

Esta nueva concepción de responsabilidad/obligación/deber, por medio de la operatividad del principio/valor de solidaridad: “obliga a encarar el derecho de los derechos fundamentales desde una perspectiva “temporal” y mirarlo como un derecho entre generaciones...nos obliga a introducir en nuestro discurso el concepto de solidaridad diacrónica.”⁴⁵⁵

El primer documento internacional con valor jurídico que señala los deberes de la persona en el ámbito de los derechos humanos, lo fue la propia declaración universal de los derechos humanos, en el artículo 29:

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.⁴⁵⁶

El pacto internacional de los derechos civiles y políticos consignó los deberes del individuo en el preámbulo del pacto: “Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto.”⁴⁵⁷

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagra un elenco de deberes en su capítulo segundo: deberes ante la sociedad; deberes para con los hijos y los padres; deberes de instrucción;

⁴⁵⁴ *Ibídem.*, pp. 437-439.

⁴⁵⁵ La soledad diacrónica, consiste en: “un concepto que ha de añadirse a los de solidaridad sincrónica, orgánica y mecánica.” *Ibídem.*, pp. 442-443.

⁴⁵⁶ *Declaración universal de los derechos humanos, op. cit.*, art. 29.

⁴⁵⁷ *Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales*, preámbulo.

deber de sufragio; deber de obediencia a la ley; deber de servir a la comunidad y a la nación; deber de asistencia y seguridad sociales; deber de pagar impuestos; deber de trabajo; deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero.⁴⁵⁸

Primeramente el artículo 1.2., que establece el derecho de los pueblos a la libre determinación consagra la primera responsabilidad de sujetarse a las disposiciones de los pactos (pacto internacional de los derechos civiles y políticos y pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.).⁴⁵⁹

La segunda clase de responsabilidad es de naturaleza individual y colectiva va dirigida para los seres humanos; es una responsabilidad que poseen sobre el desarrollo: “teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.”⁴⁶⁰

Las responsabilidades/deberes de los Estados, contenidas por la declaración son las siguientes:

- a) [...] deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste;⁴⁶¹
- b) [...] deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo;⁴⁶²
- c) [...] deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo;⁴⁶³

⁴⁵⁸ *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948*, capítulo segundo.

⁴⁵⁹ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit., artículo 1.2.

⁴⁶⁰ *Ibidem.*, artículo 2.2.

⁴⁶¹ *Ibidem.*, artículo 2.3.

⁴⁶² *Ibidem.*, 3.1.

⁴⁶³ *Ibidem.*, artículo 3.3.

- d) [...] deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo;⁴⁶⁴
- e) [...] deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión;⁴⁶⁵
- f) [...] deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales;⁴⁶⁶
- g) [...] deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo;⁴⁶⁷
- h) [...] deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales;⁴⁶⁸
- i) deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos;⁴⁶⁹
- j) [...] deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la

⁴⁶⁴ *Ibidem.*, artículo 4.1.

⁴⁶⁵ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit., artículo 6.1.

⁴⁶⁶ *Ibidem.*, artículo 6.3.

⁴⁶⁷ *Ibidem.*, artículo 7.

⁴⁶⁸ *Ibidem.*, artículo 8.1.

⁴⁶⁹ *Ibidem.*, artículo 8.2.

formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional.⁴⁷⁰

III.IV Los principios de interpretación respecto del Derecho al Desarrollo

La declaración sobre el derecho al desarrollo en su articulado, consagra en el artículo 6.2., que la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.⁴⁷¹ El artículo 9.1., confirma la indivisibilidad e interdependencia de: “todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente declaración.”⁴⁷²

Desde la enunciación de los valores de indivisibilidad; interdependencia y universalidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, a confirmación de estos principios y características de los derechos humanos, no ha dejado de suceder y de irradiar en la interpretación, aplicación, protección y tutela de los derechos humanos, y también, porque no, de sorprender.

Resumiendo, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, estos, son: “garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana;”⁴⁷³ entonces para hacer efectiva la protección, la tutela y la garantía de esos derechos y garantías jurídicas universales, que son los derechos humanos, se hace pertinente la aplicación y operatividad de una serie de principios y criterios del derecho internacional de los derechos humanos, que ayudan a proveer a los operadores jurídicos en cualquiera de las esferas: nacional e internacional, los

⁴⁷⁰ *Ibídem.*, artículo 10.

⁴⁷¹ *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit., artículo 6.1. Gómez Isa manifiesta que: “La Declaración sobre el derecho al desarrollo es plenamente consecuente con el principio relativo a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos individuales y los derechos colectivos. Es el artículo 1.1 de la Declaración el que expresa cuál es su concepción respecto a los titulares del derecho al desarrollo como derecho humano.” GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo de los pueblos indígenas*, op. cit., p. 160.

⁴⁷² *Ibídem.*, artículo 9.1.

⁴⁷³ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo*, Naciones Unidas, Ginebra, 2006, p. 1.

mecanismos para hacer asequible la protección, tutela y garantía de esos derecho; entre estas serie de principios y características se encuentran:

- a) Universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos;
- b) Dignidad de la persona humana, como criterio central para la protección, tutela y garantía de los derechos;
- c) Igualdad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos;
- d) No son susceptibles de ser suspendidos o retirados: son intemporales, son permanentes;
- e) Son generadores de obligaciones de acción y de omisión, para los Estados y los agentes de los Estados;
- f) Son producto de la comunidad internacional;
- g) Estado de derecho;
- h) Protección individual y colectiva (en los casos que proceda).⁴⁷⁴

La literatura académica ha señalado una admisión de la universalidad; indivisibilidad e independencia de los derechos civiles y políticos y también de los derechos económicos sociales y culturales. Este enfoque luego de la adopción de los pactos, no hubiera sido posible de no ser por el reconocimiento que les fue concedido a través de la Declaración de Teherán formulada en 1968; la Resolución 32/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha diciembre de 1977; por la celebración de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena en 1993.

En México a partir de la reforma constitucional en la materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011: "...la nueva redacción trae consigo el reconocimiento de un abundante cuerpo jurídico de origen internacional y, principalmente, una forma de concebir la relación entre el Estado y las personas y grupos, orientada a ampliar su ámbito de protección."⁴⁷⁵ Esta nueva

⁴⁷⁴ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *op. cit.*, p. 1.

⁴⁷⁵ VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica*, en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro, "La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma," Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 135.

redacción lo que generó fue la recepción en el derecho interno mexicano, de una serie de principios que en colaboración con el principio *pro persona*, explicitado así en la reforma, debía recepcionar también una serie de principios o criterios “de aplicación e interpretación propios del derecho internacional de los de los derechos humanos,”⁴⁷⁶ como lo son los principios universales de universalidad; interdependencia; indivisibilidad y progresividad.⁴⁷⁷

III.IV.I Interdependencia

La pertinencia del principio de interdependencia en los derechos humanos no es casual o producto del ánimo del momento. Obedece a una racionalización muy elaborada en el seno de la teoría de los derechos humanos, no olvido que los derechos humanos, asumen concepciones filosóficas, expectativas, y también porque no decirlo aquí, nuevas exigencias de derechos. Este principio en este sentido, el concepto de interdependencia para su abordaje requiere de la conceptualización de un concepto único, para a partir de ello analizarlo; pues como dice Oliveira Ribeiro, el concepto de interdependencia, aun no aterrizado al tema de los derechos:

Suele tener varias interpretaciones, algunas de ellas son las siguientes: puede ser considerada desde el punto de vista patológico como un desequilibrio psicológico o carencia efectiva de acuerdo con la necesidad de cambio emocional; también puede ser vista como un cambio placentero de afinidades y actividades, además, puede ser una forma de encarar las relaciones entre los individuos y la vida común de la gente. El último es el sentido sobre el cual nos proponemos reflexionar.⁴⁷⁸

⁴⁷⁶ VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica*, op. cit., p. 135.

⁴⁷⁷ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, op. cit., art. 1.

⁴⁷⁸ OLIVEIRA Ribeiro, Cléa Regina, *Interdependencia y responsabilidad*, en AUSÍN, Txetxu, ARAMAYO, Roberto R. (Eds.), “La interdependencia. Del bienestar a la dignidad,” Plaza y Valdés, Madrid, 2008, p. 155.

Desde un punto de vista hermenéutico, esta interpretación de la interdependencia desde el enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, fue asumida en el espíritu de la declaración universal de los derechos humanos, no es banal, que uno de los presupuestos de la abrumadora manifestación del enfoque de los derechos humanos, haya subrayado en la educación de los derechos humanos un ambicioso proyecto para contribuir a la convivencia universal sobre esos supuestos.

La interdependencia en el enfoque de los derechos humanos, transitó: “de la idea de interdependencia del hombre frente a otros hombres y la diversidad de la vida,”⁴⁷⁹ a la idea de la interdependencia de los derechos frente a otros derechos, bajo un único hilo conductor: la dignidad humana. En la cuestión de los derechos la interdependencia evoluciona como valor y como principio hacia una afirmación necesaria: “cada uno es responsable de sí mismo y de los otros. En él, la aptitud humana para la libertad es necesaria, es decir, no hay manera de que el individuo no pueda ser libre.”⁴⁸⁰

Porque la interdependencia: “...no es posible concebirla solamente entre sujetos humanos..., la intersubjetividad significa la relación del sujeto en el mundo mismo, con su entorno, con los otros sujetos, con las cosas y con los contextos emergentes en su vida; y el hombre va constituyéndose a la medida en que así se inter-relaciona.”⁴⁸¹

El principio de interdependencia: “...reconoce la dificultad (y en muchos casos la imposibilidad) de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás.”⁴⁸²

El concepto de interdependencia es afirmado en una serie de declaraciones, convenios, resoluciones de las Naciones Unidas como: la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas⁴⁸³

⁴⁷⁹ OLIVEIRA Ribeiro, Cléa Regina, *op. cit.*, p. 155.

⁴⁸⁰ *Ibidem.*, p. 158.

⁴⁸¹ *Ibidem.*, p. 163.

⁴⁸² Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *op. cit.*, p. 2.

III.IV.II Progresividad

El principio de progresividad de los derechos humanos, también denominado de *desarrollo progresivo*, indica: "...el reconocimiento e inserción de nuevos derechos en las leyes;"⁴⁸⁴ y "...en la expedición de nuevas leyes, normas, y programas que permitan el desarrollo y la garantía de los derechos ya reconocidos."⁴⁸⁵ El régimen de derechos humanos: "...contiene elementos que tienden a asegurar su desarrollo progresivo."⁴⁸⁶

El principio de desarrollo progresivo de los derechos humanos significa: "que los gobiernos tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de tales derechos;"⁴⁸⁷ estos a su vez son:

- a) Marco general, porque son los instrumentos internacionales de derechos humanos los que contienen disposiciones, normas que acentúan y promueven el carácter progresivo de los derechos humanos;⁴⁸⁸ progresividad intencionada y garantía mínima de los derechos humanos.
- b) Interpretación de los derechos humanos: interpretación evolutiva e interpretación humanitaria, con el objeto de conformar la base de un

⁴⁸³ La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Resolución 55/2 de la Asamblea General, de 8 de septiembre de 2000, la Asamblea General formuló aprobó la declaración y consignó: "3. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que han demostrado ser intemporales y universales. A decir verdad, su pertinencia y su capacidad como fuente de inspiración han ido en aumento conforme se han multiplicado los vínculos y se ha consolidado la interdependencia entre las naciones y los pueblos." OACDH, *Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Resolución 55/2*, Asamblea General, en "Derechos humanos. Recopilación de instrumentos internacionales. Volumen I (Primera Parte) Instrumentos de carácter universal," United Nations Publications, 2002, p. 77.

⁴⁸⁴ *Glosario de términos básicos sobre derechos humanos*, Universidad Iberoamericana, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, 2006, p. 61.

⁴⁸⁵ Ídem.

⁴⁸⁶ NIKKEN, Pedro, *La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo*, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987, p. 75.

⁴⁸⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Anuario Interamericano de Derechos Humanos*, Martinus Nuhoff Publishers, Países Bajos, 1993, p. 869.

⁴⁸⁸ NIKKEN, Pedro, *op. cit.*, p. 76.

método humanitario de interpretación, para extender el alcance de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Se subraya como fundamento jurídico la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.⁴⁸⁹

El principio de progresividad atiende a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos civiles y políticos y se extiende “a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y amplían.”⁴⁹⁰

La doctrina también la ha denominado obligación de progresividad, porque se trata de una obligación genérica, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es correlativa a su vez de la prohibición de regresividad. La progresividad. Para su correcta formulación ya que el principio de progresividad de los derechos comprende la obligación de los Estados de generar indicadores que cumplan con la función de verificar el avance y el ejercicio progresivo de los derechos humanos; pero el desarrollo progresivo trae consigo una dualidad, tiene una excepción que ya mencioné que es la prohibición de regresividad, ésta funciona de manera complementaria:

[...] indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales; es decir que los contenidos asignados a su actividad no decrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida cumple el derecho, y, en su caso, como lo

⁴⁸⁹ NIKKEN Pedro, *op. cit.*, p. 92.

⁴⁹⁰ *Ídem.*

amplía. De disminuir su alcance en alguna forma estaremos ante una regresión prohibida.⁴⁹¹

III.IV.III Indivisibilidad

El principio de indivisibilidad de los derechos humanos: "...reconoce que ningún derecho humano es intrínsecamente inferior a ningún otro. Los derechos económicos, sociales y culturales deben ser respetados, protegidos y realizados en las mismas condiciones que los derechos civiles y políticos."⁴⁹²

El principio de indivisibilidad de los derechos humanos, también fue positivizado por vez primera en el derecho internacional de los derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la declaración lo que perseguía era adelantar la adecuada pertinencia de la: "indivisibilidad e interdependencia de las dos categorías de derechos humanos, los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales."⁴⁹³

La indivisibilidad de los derechos humanos se ha consagrado como un principio interpretativo y criterio hermenéutico de los derechos humanos por vocación propia en varios momentos trascendentales en el proceso de generalización y especificación de los derechos humanos, esto apareja afortunadamente un aliciente novedoso para la positivación del derecho al desarrollo, los eventos que dieron lugar a ello fueron en enumeración: la proclamación de la declaración universal de los derechos humanos; la adopción de los pactos internacionales (derechos civiles y políticos y económicos sociales y culturales; la Proclamación de la Conferencia Mundial

⁴⁹¹ VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica*, op. cit., p. 163.

⁴⁹² Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *op. cit.*, p. 2.

⁴⁹³ ORAÁ, Jaime, GOMÉZ Isa, Felipe, *La declaración universal de derechos humanos*, op. cit., p. 68. "Desde la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se discutió la conveniencia de incluir en un solo documento a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El texto de la Declaración da cuenta del acuerdo entre las naciones firmantes respecto a la integración de todos los derechos como una misma aspiración para la humanidad sin reconocer jerarquías ni diferencias entre ellas." VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica*, op. cit., p. 148.

de Derechos Humanos de Teherán de 1968 que fue producto de la Primera Conferencia Mundial de Teherán de 1968; la Resolución 32/130 de 1977 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986 y la Conferencia de Viena de 1993.

III.IV.IV Universalidad

Ningún principio posee quizás la raíz tan dependiente de las concepciones iusnaturalistas del derecho, como se percibe al analizar a profundidad la universalidad de los derechos humanos. La literatura concibe en el inicio de la positivación de este principio: "...en el iusnaturalismo racionalista, subrayando el carácter racional de su fundamentación; siendo el de la racionalidad un elemento que sí que habría de permitir la universalidad de los derechos, por la posible aceptación de su fundamentación por otras culturas."⁴⁹⁴

Desde su formulación por Naciones Unidas, la universalidad ha sido entendida como un "atributo" de los derechos humanos y su principio más difundido. La universalidad de los derechos es inherente a la teoría de la justicia⁴⁹⁵ que apela a la validez universal de los derechos humanos.⁴⁹⁶ La parentela que el concepto de la universalidad de los derechos humanos guarda con el iusnaturalismo racionalista fue transformada con los sucesivos procesos de generalización y de especificación que marcaron los nuevos rasgos de los derechos humanos, en los órdenes nacional e internacional.

En la historia moderna de los derechos humanos, la universalidad como principio interpretativo y criterio hermenéutico de los derechos humanos, se vio reforzada con la genuina vocación universalista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración se interesó por revelar tempranamente su vocación universalista que terminaría asentándose como un principio porque

⁴⁹⁴ CAMPOY Cervera, Ignacio, *El debate sobre la universalidad de los derechos humanos y la inmigración*, en "Una discusión sobre la universalidad de los derechos humanos y la inmigración", Ed. Librería Dykinson, Madrid, 2006, p. 16.

⁴⁹⁵ BARRANCO Avilés, Ma. del Carmen, *Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos*, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2011, p. 13.

⁴⁹⁶ *Ídem*.

pretendía: "...otorgar derechos humanos a todas las personas sin ningún tipo de distinción."⁴⁹⁷

El principio de universalidad no puede explicarse sin hacer referencia a las dos Conferencias Mundiales de Derechos Humanos que reafirmaron a la idea de universalidad como un presupuesto básico de los derechos humanos: la Conferencia de Teherán de 1968 y la Conferencia de Viena de 1993.

Las pretensiones de universalidad de la declaración universal de derechos humanos y de los sucesivos pactos y demás instrumentos internacionales de protección de derechos humanos no han sido en vano, aunque no ha sido una empresa fácil, eventos de gran envergadura como la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993,- y sobre la cual ya he tenido la ocasión de pronunciarme anteriormente- pusieron en la palestra un tema pendiente: "...la universalidad de los derechos humanos."⁴⁹⁸ El texto de la Conferencia ofrece la una reafirmación del carácter universal de los derechos:

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas.⁴⁹⁹

⁴⁹⁷ ORAÁ, Jaime, GÓMEZ Isa, Felipe, *La declaración universal de derechos humanos, op. cit.*, p. 111.

⁴⁹⁸ *Ibidem.*, p. 113.

⁴⁹⁹ *Conferencia Mundial de Viena*, 1.

Segunda Parte

Capítulo IV

Las obligaciones que se desprenden del Derecho al Desarrollo en México

IV. Las obligaciones básicas del Derecho al Desarrollo

La dimensión internacional de los derechos humanos, especialmente del derecho al desarrollo, se encuentra conectada con los procesos de positivación, generalización y especificación de los derechos humanos, con el derecho al desarrollo ocurre así, una vez establecida su titularidad genérica, el tema correspondiente a las obligaciones que el derecho al desarrollo incorpora en relación con sus sujetos. A manera de explicación sobre la metodología particular de este capítulo, aclaro que en lo que corresponde al contenido del capítulo en comento, se volverá a recurrir a los principales instrumentos que de naturaleza convencional y no convencional son las fuentes principales del derecho al desarrollo: la declaración universal de los derechos humanos, los pactos: el pacto internacional de los derechos civiles y políticos; el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales; para concluir el contenido del presente capítulo con la naturaleza de los deberes establecida en la declaración sobre el derecho al desarrollo. Se observará la compatibilidad entre los términos deberes, obligaciones y compromisos, términos que se esclarecerán atendiendo a la especificación que cada instrumento normativo convencional y no convencional les confiere.

Por considerarse un derecho de tercera generación, una generación que se le ha denominado como derechos de solidaridad, es que ha tomado impulso la certeza de que la solidaridad conforma un fundamento más de los derechos humanos, Peces Barba dirá que la solidaridad: "...participa de los rasgos

generales de la cultura jurídica y política en que surgen los derechos humanos.”⁵⁰⁰

El articulado de la declaración prefiere la noción jurídica de deberes, que aparece semánticamente más que la de deberes, pero la finalidad compartida entre las nociones: obligación, deber es común, la declaración incorpora el sentido del término de la solidaridad en su expresión más fiel, considerando que Peces Barba entiende que la dimensión jurídica de la solidaridad no reproduce los enfoques tradicionales de los derechos liberales: “...tiene a la cooperación y a la creación de relaciones jurídicas de integración como medios para alcanzar esos objetivos.”⁵⁰¹

Por estar inscrita en la generación de los derechos de la solidaridad, es que la Declaración hace eco, es decir, que positiva, los atisbos de lo que en palabras de Peces Barba se perfilan como: “cauces de comunicación en la sociedad”,⁵⁰² detallado en el artículo 1º de la Declaración que establece:

Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.⁵⁰³

La noción de deberes que la doctrina distingue que se encuentran centrados en la generación de los derechos de solidaridad y que se extiende por principio de cuentas al derecho al desarrollo, es la noción de los deberes positivos, esta noción que de entrada tiene una connotación ética aunque no es exclusiva de la filosofía, ha sido estudiada desde diversos enfoques, sin duda alguna el que interesa en esta tesis por el campo epistemológico de mi estudio

⁵⁰⁰ PECES Barba, Gregorio, *op. cit.*, p. 279.

⁵⁰¹ *Ibidem.*, p. 280.

⁵⁰² *Ídem.*

⁵⁰³ *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op. cit.*, p. 280.

es la perspectiva jurídica, de los deberes (positivos y negativos, inscritos en la declaración) pero para profundizar en la correlación deber/obligación, debo realizar una circunspección de la noción estudiando de manera muy acotada su enfoque ético, que ha sido incorporado progresivamente en la ciencia del derecho, particularmente en el derecho de los derechos humanos.

Peces Barba, ya advertía, de una precaución imprescindible en el estudio de los derechos fundamentales, - noción que prefiere a la de derechos humanos, - no obstante, la dimensión internacional de los derechos humanos, le ha conferido al término su propia autonomía y legitimidad, en el discurso de los derechos – fundamentales, humanos, etc., el término no únicamente ha tenido que lidiar con las consecuencias de su ambigüedad conceptual; a ello se añade la idea de pretensión ética o moral, que los caracteriza, en ese contexto Peces Barba, previene:

Los derechos fundamentales son una pretensión moral justificada, tendiente a facilitar la autonomía y la independencia personal enraizada en las ideas de libertad e igualdad, con los matices que aportan conceptos como solidaridad y seguridad jurídica, y construida por la reflexión racional en la historia del mundo moderno, con las aportaciones sucesivas e integradas de la filosofía moral y política liberal, democrática y socialista.⁵⁰⁴

Despojarle a la noción su naturaleza cercana al campo de lo ético y de lo moral, no es posible totalmente, es por eso que Peces Barba se decanta por el término de los derechos fundamentales frente a otros como derechos morales,

⁵⁰⁴ PECES Barba, Gregorio, *op. cit.*, p. 109. En ese sentido es que Peces Barba expresa que: “Entendiendo con flexibilidad lo anterior, derechos fundamentales puede comprender tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica.” *Ibidem.*, p. 37. Adela Cortina y Emilio Martínez a la luz de la disciplina ética deducen que: “Las normas auténticamente morales serán aquellas que las personas puedan considerar como válidas para todos, las que representan lo que toda persona querría para toda la humanidad.” Véase CORTINA, Adela, MARTÍNEZ, Emilio, *Ética*, 4ª, Akal, Madrid, 2008, p. 146.

o derechos naturales, que por su connotación de fuerte raigambre ética, dar cauce un derecho moralizado, o moralizante, que se atendería a los excesos que precisamente el derecho como teoría elaborada de convivencia, como punto neutral pretende combatir.

De esa manera los derechos humanos – que es la noción con la cual he trabajado epistemológicamente en esta tesis – tienen por definición dos vectores: primero que son pretensiones ético/morales positivadas y el segundo referente reconocimiento constitucional legal e internacional de los derechos del hombre (en este sector se inscriben los mencionados procesos de generalización, internacionalización y especificación de los derechos humanos).

Una vez que ya se ha apuntado que en efecto los derechos humanos consiguientemente proceden de una raíz común de matiz ético/moral, es comprensible porque las nociones de “autonomía” y de “independencia personal” son tan importantes para el análisis y como se verá para su defensa; protección y tutela, en el origen está el discurso kantiano, que expresa la autonomía de la voluntad, no como un medio, sino como un fin, por eso Adela Cortina, explica aunque a la luz del enfoque ético:

La característica que permite afirmar que las personas tienen dignidad es que solo ellas son seres libres: no sólo por el hecho de que pueden elegir el tipo de conducta que van a realizar, sino porque son seres autónomos, esto es, capaces de darse leyes a sí mismos y regirse por ellas. De este modo, la autonomía de la persona se constituye en el centro de la fundamentación kantiana: hay moral porque los humanos tienen dignidad, y tienen dignidad porque están dotados de autonomía.⁵⁰⁵

Pero la autonomía, eje para el ejercicio de la libertad, no se encuentra separado de la pregunta ética del deber:

⁵⁰⁵ CORTINA, Adela, MARTÍNEZ, Emilio, *Ética*, op. cit., p. 146.

El discurso kantiano...constituye un fundamento para los derechos humanos y para las obligaciones morales, y sirve de orientación moral para la conducta, puesto que de él se sigue que quien desee comportarse racionalmente ha de evitar a toda costa instrumentalizar a las personas, ya que estas no son instrumentos. De este modo el reconocimiento del valor absoluto de la persona se traduce en un principio ético que reza así: "Trata a cada persona como algo absolutamente valioso y no como algo relativamente valioso; es decir, no la instrumentalices."⁵⁰⁶

Es así que en el plano ético aparecen delineados los deberes negativos que consisten en mandatos "en forma de prohibición,"⁵⁰⁷ también se les conoce como deberes perfectos porque invitan a la abstinencia de una conducta considerada en base a la construcción conceptual ético/filosófica de normas morales, como conductas perjudiciales porque atentan en contra de la dignidad de la persona.

La siguiente clase de deberes son los deberes positivos o también denominados deberes imperfectos, también son mandatos, imperativos aunque de diferente naturaleza, son deberes "mucho menos contundentes y precisos, dado que prescriben comportamientos que pueden realizarse de muchas maneras y con diferentes grados de intensidad."⁵⁰⁸

Esta característica los hace a los deberes positivos, también muy próximos al derecho, que incorpora ambas clases de deberes, la primera más cercana a los derechos de libertad, la segunda a los derechos de igualdad y de solidaridad, aunque el feliz término es un equilibrio entre ambas clases de deberes a la luz del derecho de los derechos humanos,⁵⁰⁹ los deberes

⁵⁰⁶ CORTINA, Adela, MARTÍNEZ, Emilio, *Ética, op. cit.*, p. 146.

⁵⁰⁷ *Ídem.*

⁵⁰⁸ *Ibidem.*, p. 147.

⁵⁰⁹ "El reto para una concepción del Estado de Derecho es la combinación de los valores de libertad e igualdad. Las tensiones entre estos dos valores no desaparecen. Puede llegar un punto en que un exceso de deberes positivos para promover la autonomía de los menos autónomos quite a los individuos toda posibilidad de desarrollar autónomamente un plan de

positivos, son por su amplitud más complejos en su comprensión, por eso desde el enfoque ético, Cortina y Martínez abordan que:

Generalmente se entiende que los deberes positivos no exigen a todo ser humano hacer el bien de modo absoluto, llegando incluso a perjudicarse uno mismo, porque estos mandatos pueden entrar en conflicto con otros deberes positivos, y en tal caso ha de ser cada sujeto quien decida con prudencia en qué medida está dispuesto a cumplir cada uno de ellos, dadas las circunstancias y admitiendo que cada persona tiene su propio derecho a gozar del bien de que se trate.⁵¹⁰

Como he mencionado, la postura más favorable, regresando al terreno jurídico abona por una postura intermedia en la concepción de los derechos y de los deberes en materia de derechos humanos por un modelo integral de los derechos humanos,⁵¹¹ que en la teoría de Peces Barba:

Supone finalmente este modelo integral de los derechos humanos una reflexión sobre la realidad social para que los ideales morales y las normas jurídicas de los derechos fundamentales puedan ser eficaces, puedan arraigar en la realidad. Moralidad o Justicia, Normatividad, término que me parece más comprensivo que el de legalidad, y eficacia son tres estratos imprescindibles, inseparables e inexplicables sin una comunicación entre ellos, para evitar reduccionismos y abarcar en toda su complejidad el fenómeno de los derechos fundamentales.⁵¹²

Así las cosas no es ajeno señalar que a la luz de la ética, tal posicionamiento, también es posible, retornando al concepto ético de los deberes, Cortina y Martínez consideran que no existe una oposición frontal

vida. Se pretende acoplar legalidad y legitimidad, por eso la conflictiva relación entre derechos y Estado de Derecho y entre Estado de Derecho y sus modalidades, ALARCÓN Requejo, Gilmer, *Estados de Derecho, Derechos humanos y democracia. Pautas para la racionalidad jurídico-política desde Elías Díaz*, Dykinson, Madrid, 2011, p. 238.

⁵¹⁰ CORTINA, Adela, MARTÍNEZ, Emilio, *Ética*, op. cit., p. 147.

⁵¹¹ PECES Barba, Gregorio, op. cit., p. 58.

⁵¹² *Ídem*.

entre ellos, son complementarios, aunque para ello sea necesario asistir a un ejercicio de elección, que tiene como protagonista a la persona misma:

Admitir que los mandatos morales son principios *prima facie* implica reconocer que no puede establecerse a priori un orden de prioridad entre esos mandatos, sino que en los contextos de acción es la persona que actúa quien tiene que decidir por cuál de los mandatos optará, teniendo siempre en cuenta las circunstancias y las consecuencias de cada situación determinada y asumiendo una responsabilidad que nadie puede asumir por ella. En este sentido la moralidad presenta una doble vertiente: es algo social en la medida en que los mandatos morales generales se han ido generando en la vida social y han sido asimilados por la persona a través del proceso de socialización, pero es también personal en tanto en cuanto es cada cual quien tiene que responsabilizarse de estar a una altura humana en las situaciones concretas, optando por una determinada orientación de las exigencias morales pertinentes.⁵¹³

Lo anterior se engarza para efectos del estudio de la solidaridad como fundamento de los derechos humanos, de los derechos de tercera generación y concretamente del derecho al desarrollo, con una idea expresada por Peces Barba, el considera que la solidaridad, el sentido del término solidaridad: "...permite un diálogo ilustrado entre personas que se respetan y se reconocen, y que contribuyen en ese esquema compartido a poner en común, a discutir y a formar criterios morales que superan la pura individualidad. La solidaridad refuerza así la idea de que un proyecto moral debe poder ser elevado a ley general, puesto que es construido comunitariamente."⁵¹⁴

La solidaridad está claro, se identifica, de entrada, más con la vertiente social, no obstante, su utilidad reside en que la solidaridad no anula la individualidad, aunque reposa en un sentido comunitario, la solidaridad dice Peces Barba: "... a diferencia de los demás valores que fundamentan

⁵¹³ CORTINA, Adela, MARTÍNEZ, Emilio, *Ética*, op. cit., pp. 147-148.

⁵¹⁴ PECES Barba, Gregorio, op. cit., p. 280.

directamente derechos, la solidaridad fundamenta indirectamente derechos, es decir, lo hace por el intermedio de los deberes.”⁵¹⁵

Los deberes con los que la solidaridad se identifica son los deberes positivos. Marks afirma que los: “...derechos humanos en el derecho y en la práctica de las relaciones internacionales no son meramente principios éticos y abstractos, sino también normas legas que implican para los Estados obligaciones de respetar, proteger, promover y completar los derechos en cuestión, deberes para los particulares y otros actores (Non State actors) para contribuir a la realización de esos derechos.”⁵¹⁶

Desde el enfoque de los sistemas internacionales de derechos humanos, el sistema de protección de los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, es el ámbito principal del que deriva la fundamentación jurídica y positiva del derecho al desarrollo, aunque otros sistemas regionales y nacionales también integran el estudio, no obstante por uso del sistema de la jerarquía de fuentes jurídicas, es que comenzaremos una vez vista la reflexión teórica sobre el deber y la solidaridad en líneas anteriores, al estudio de las obligaciones básicas del derecho al desarrollo en el sistema de fuentes jurídicas.

Es así que a la luz del sistema de protección de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, debe considerarse un aspecto mencionado en el primer capítulo, este consiste que el derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional público, reconocen en el tema de la protección de los derechos humanos, dos sistemas de protección, el sistema procedimientos convencionales, el más deseable porque se integra por Pactos; Convenciones y Convenios, a su vez este procedimiento se subdivide en procedimientos no contenciosos y procedimientos cuasicontenciosos; y el

⁵¹⁵ *Ídem.*

⁵¹⁶ Escribe Stephen Marks: “Human rights in the law and practice of international relations are not merely abstract ethical principles but legal norms implying obligations by States to respect, protect, promote and fulfill the rights in question, and duties of individuals and other non-State actors to contribute to the realisation of those rights.” MARKS, Stephen P., “The human rights framework for development: seven approaches,” en SEGUNPTA, Arjun, NEGI, Archana, BASU, Moushumi, *Reflections on the right to development*, Centre for Development and Human Rights, Sage Publications India, New-Delhi, 2005, p. 40.

procedimiento extraconvencional, denominado también como *soft law*, pero que en razón de la validez de las normas de derecho internacional *ius cogens*, son ya ideas-fuerza. Ambos procedimientos interesan, porque constituyen normas, como se ha señalado convencionales y extra convencionales que configuran obligaciones básicas del derecho al desarrollo.

Lo anterior, porque en el preámbulo de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Asamblea General de la ONU considera que conforme a la “Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades,”⁵¹⁷ reconocidos en ella. Asimismo, en el preámbulo la Asamblea General consignó el apego de la declaración sobre el derecho al desarrollo: “a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”⁵¹⁸

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo también refiere la suscripción de la resolución a los: “acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas”⁵¹⁹; también dispone que la declaración se sujeta a las resoluciones: “de sus organismos especializados”⁵²⁰ que sean: “relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos,”⁵²¹ especial referencia disponen los acuerdos, resoluciones, convenciones, recomendaciones y demás relativos a la: descolonización; prevención de discriminaciones; respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales; mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; el fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados”⁵²² citando a la Carta de San Francisco.

⁵¹⁷ *Declaración sobre el derecho al desarrollo, preámbulo.*

⁵¹⁸ *Declaración sobre el derecho al desarrollo preámbulo.*

⁵¹⁹ *Ídem.*

⁵²⁰ *Ídem.*

⁵²¹ *Ídem.*

⁵²² *Ídem.*

La reafirmación de la universalidad, interdependencia, progresividad e interdependencia de los derechos humanos, también contribuye para la interpretación de la Carta de Derechos Humanos, en relación con el derecho al desarrollo, el derecho al desarrollo es interdependiente de los otros instrumentos convencionales, por eso la declaración sobre el derecho al desarrollo señala en su artículo 9.2°: “Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales de derechos humanos.”⁵²³

En el ámbito internacional en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 aparece formulada la noción deberes, aunque muy discretamente, inicialmente la vocación de la declaración por los deberes tuvo algunos ecos, aunque la inclusión no fue tan paradigmática como si sucedió con la Declaración Americana de los Derechos Humanos del 2 de mayo de 1948:

Se pretendía que la Comisión de Derechos Humanos adoptara tres instrumentos: declaración de derechos humanos; un pacto de derechos humanos, y un conjunto de medidas que permitieran llevar a la práctica los derechos humanos. El resultado ante la falta de consenso es historia, la Comisión decidió comenzar por la elaboración de un único instrumento aunque no vinculante, si declarativo: una declaración universal que comprendiera los derechos humanos y las libertades fundamentales, y fue así como se pospuso la elaboración de los documentos convencionales que vendrían a reforzar, y causarían a posteriori una verdadera revolución de los derechos.

Desde el punto de vista formal, el contenido de la declaración que interesa para efectos del presente capitulado, es el relativo a la noción de los deberes, como se ha señalado, la adopción de la declaración se realizó bajo una situación de

⁵²³ Art. 9.2, *Declaración sobre el derecho al desarrollo. Ibídem.*

de la ahora ya extinta confrontación Este y el Oeste, los primeros países alineados con el bloque soviético, países satélites en su mayoría, y el Oeste con Estados Unidos encabezando a Occidente, recordemos que Europa comenzaba a recuperarse de los eventos devastadores de la segunda guerra mundial; en ese momento la organización solo contaba con la adhesión de 58 estados miembros, quienes a su vez eran los únicos Estados facultados para aprobar la declaración universal de los derechos humanos, pese a ello y al estado persistente de la guerra fría, se terminó por obtener un consenso que después de todo es una de las herramientas de persuasión y de presión bajo las cuales opera la dinámica del funcionamiento de las Naciones Unidas; indiscutiblemente que la declaración – analizada en el capitulo anterior -: sin embargo fue un éxito, un sinnúmero de razones morales, políticas y jurídicas le confirieron al texto normativo, la calidad de texto histórico en los procesos de las “luchas por los derechos” en todas sus manifestaciones como la lucha por la libertad y la dignidad humana, comparable con otros textos base del pensamiento jurídico-filosófico occidental de la génesis de los derechos humanos como la *Carta Magna* (1215), el *Bill of Rights* (1689), la *Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia* (1776), o la *Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano* de la revolución francesa (1789).

Ante estas virtudes de la declaración universal de los derechos humanos y su inusitada influencia, la declaración se consolidó más como un documento de carácter moral, la declaración universal de los derechos humanos fue adquiriendo progresivamente un valor jurídico, hasta convertirse en un instrumento de carácter normativo.

Ante estos aciertos que la declaración inauguró la institución jurídica de los deberes/obligaciones en el ámbito internacional en materia de protección de los derechos humanos por parte de los Estados y de particulares, la declaración adoptó un presupuesto discreto, por eso, el artículo 28 dispone: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta

Declaración se hagan plenamente efectivos.”⁵²⁴ Es importante pero es conforme a la Carta de San Francisco, luego, se tiene el artículo 29 que “enuncia deberes a cargo de las personas”: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.”⁵²⁵

Como se ha comentado la Declaración Universal de los Derechos Humanos alcanzó un desarrollo progresivo que aunque desde el punto de vista formal no era vinculante, se posicionó como un estándar de derechos humanos, no obstante era necesario hacerse de un instrumento, que dotara formalmente a los derechos reconocidos de la declaración de fuerza vinculante, con tal motivo y así estaba previsto, fue que se aprobaron los dos primeros instrumentos convencionales en materia de los derechos humanos, y fueron los pactos, de manera que la aportación más concreta de estos instrumentos normativos fue se transformaron en obligaciones jurídicas convencionales en materia de derechos humanos.

Así las cosas, la normativa internacional prefiere de entrada el término de obligaciones convencionales, y el sujeto activo son los Estados partes, para darle certeza jurídica a las acciones y obligaciones los pactos internacionales fueron completados respectivamente en el caso del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y por el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte de 15 de diciembre de 1989; en el caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, éste se completo con la adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 10 de diciembre de 2008.

Para efecto de las obligaciones en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia del pacto de los derechos civiles y políticos

⁵²⁴ Artículo 28, *Declaración Universal de Derechos Humanos*.

⁵²⁵ Artículo 29.1., *Carta de San Francisco*.

(de primera generación), los derechos de segunda generación, según lo estatuido en el pacto los derechos, depende de las obligaciones positivas asumidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

No ocurre así con los derechos de primera generación, en esta categoría, el pacto se caracteriza por derechos de la libertad, dirigidos al individuo en esta tesitura, parece lógico, que la declaración universal de derechos humanos, precedente de estos dos instrumentos normativos, prefiriera ponderar los deberes del individuo, en primacía de los deberes/obligaciones del Estado, mismos que suscribe al orden internacional.

En la materia de obligaciones de los derechos de primera generación, el pacto internacional de los derechos civiles y políticos enuncia los compromisos de las partes – así les denomina- en los numerales 2º y 3º del pacto, en el artículo 2º:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera

otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.⁵²⁶

El artículo 3° dispone: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.”⁵²⁷

En materia de la suspensión de las obligaciones, el artículo 4° señala:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.⁵²⁸

⁵²⁶ *Pacto de los derechos civiles y políticos*, art. 2°.

⁵²⁷ *Ibidem.*, p. 3°.

⁵²⁸ Artículo 4°. *Pacto de los derechos civiles y políticos*.

Merece destacarse la importancia que asume el Comité de Derechos Humanos.⁵²⁹

En materia de mecanismos control del cumplimiento de las obligaciones, se establecieron tres: la presentación de informes (artículo 40);⁵³⁰ presentación de comunicaciones por los Estados (artículo 41);⁵³¹ y presentación de

⁵²⁹ Sobre el Comité de Derechos Humanos: “Artículo 28 1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante. 2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica. 3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.

⁵³⁰ El artículo 40.1 mandata: “Art. 40: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados; b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida. 2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto. 3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia. 4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto. 5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.”

⁵³¹ El proceso para la presentación de las comunicaciones por parte de los Estados: “Artículo 41: 1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente: a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto. b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado. c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la

comunicaciones por individuos (Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966).⁵³²

Abordar la naturaleza de las obligaciones en materia del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, por la cercanía que guardan estos derechos para efectos del estudio del derecho al desarrollo es más complejo, primero, porque aunque ambos pactos fueron aprobados con carácter convencional, y son la “carta de derechos de las Naciones Unidas,” las obligaciones que estatuye el pacto que estatuye los derechos denominados de segunda generación han sido sujetos de cierta controversia,⁵³³ en palabras de Sepúlveda, la misma autora escribe:

Por ratificar o acceder al Convenio, los Estados Partes libremente asumieron un amplio rango de obligaciones contraídas. De todos modos, la naturaleza de las obligaciones impuestas ha sido sujeta de

jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente. d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el presente Pacto. f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b que faciliten cualquier información pertinente. g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso obtendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras. h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual: i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada: ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados. En cada asunto, se enviará el informe los Estados Partes interesados. 2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.”

⁵³² Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966.

⁵³³ SEPULVEDA, Magdalena, *The nature of obligations under the international covenant on economic, social and cultural rights*, Intersentia, Amsterdam, 2003, p.2.

controversia. Después de que el Convenio entró en vigor, este fue interpretado por algunos representantes de los gobiernos y algunos académicos como algo concerniente a una mera declaración de ‘aspiraciones’ o de ‘objetivos logrados’ más que de imponer obligaciones vinculantes a los Estados. La principal provisión concerniente a la naturaleza de las obligaciones impuestas por el Convenio, artículo 2(I) ICESCR, ha estado en el corazón del debate.⁵³⁴

Como se señalará a continuación, los redactores del pacto de derechos económicos, sociales y culturales, asumieron por la naturaleza de los derechos humanos protegidos, una institución de obligaciones, distinta a las obligaciones de los derechos de primera generación, en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de prestación⁵³⁵ y se fue asentando la idea genérica correspondiente a la naturaleza de las obligaciones en la materia, de denominarlas como obligaciones previamente asumidas. La idea tradicional que se formula en la interpretación y aplicación de los dos catálogos de derechos, es que los derechos de primera generación (civiles y políticos), precisan de obligaciones negativas, por el contrario, la otra cara de la dicotomía los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación constituyen obligaciones positivas, “de progresiva realización, fuertemente dependientes de los recursos y formuladas en términos vagos.”⁵³⁶

En materia de derechos de segunda generación, el pacto internacional de los derechos sociales y culturales, cuenta para efectos de obligaciones

⁵³⁴ Magdalena Sepúlveda considera: “By ratifying or acceding to the Covenant, States Parties freely assume a wide range of binding obligations. However, the nature of the obligations that it imposes has been the subject of controversy. After the Covenant entered into force, it was interpreted by some governments, representatives and some scholars as amounting to a mere declaration of aspirations or ‘goals to be achieved’ rather than imposing binding obligations upon States. The key provision regarding the nature of the obligations imposed by the Covenant, article 2(1) ICESCR, has been the heart of the debate.” *Ídem*.

⁵³⁵ HERNÁNDEZ Gómez, Isabel, *Sistemas internacionales de derechos humanos*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 48.

⁵³⁶ Las obligaciones de los derechos de segunda generación fueron formuladas en terminus muy ambiguos: “Traditionally, the difference between the two sets of rights has been presented as dichotomy where civil and political rights, on the other hand, are considered to impose negative obligations which are of an immediate nature, non resource –dependent and are described in precise terms. Economic, social and cultural rights, on the other hand are considered to impose only positive obligations and to be of progressive realisation, highly-resource-dependent and formulated in vague terms.” SEPULVEDA Carmona, María Magdalena, *op. cit.*, p. 3.

también con un articulado extenso para normar los compromisos de las partes, en los artículos 2° y 3° del citado pacto.

El artículo 2° del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales dispone:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.⁵³⁷

El artículo 3° del citado pacto establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto."⁵³⁸

En materia de suspensión de las obligaciones, el pacto atañe a:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado,

⁵³⁷ Artículo 2. *Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.*

⁵³⁸ Artículo 3. *Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.*

éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.⁵³⁹

También se considera la norma dispuesta en el artículo 5.1 del pacto:

Artículo 5.1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.

En materia de mecanismo de control del cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes, se dispone del apartado IV, en el cual se encuadra el mecanismo de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados partes, consistente en la obligación prevista en el artículo 16.1 de presentar “informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos.”⁵⁴⁰

El procedimiento dispone que los informes sean “presentados al Secretario General de las Naciones Unidas,”⁵⁴¹ quien a su vez “transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine”⁵⁴² de conformidad con las disposiciones establecidas en el pacto de los derechos económicos sociales y culturales.

⁵³⁹ Artículo 4°.

⁵⁴⁰ *Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales*, art. 16.1

⁵⁴¹ *Ibidem*. 16.2. a).

⁵⁴² *Ídem*.

Particularmente el derecho al desarrollo apunta al Estado como el primer obligado, porque el Estado: “tiene el deber primario de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho.”⁵⁴³

En lo que interesa a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, el artículo 3.1 dispone: “Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.”⁵⁴⁴

El artículo 3.3 de la declaración dispone: “Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos.”⁵⁴⁵

El artículo 4.1 dispone: “...los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo.”⁵⁴⁶

El artículo 4.2 establece que: “...se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo es indispensable

⁵⁴³ Los Estados siguen siendo los primeros obligados en proveer condiciones adecuadas para la realización del derecho al desarrollo: “While the State is the primary duty holder, the RTD Declaration puts the responsibility for ensuring development on everyone –individuals, national governments and the international community. ‘All human beings have a responsibility for development, individually and collectively’, states Article 4 of the declaration. But States have de *primary* duty to create national and international conditions favorable for the realization of the right.” Centre for Development and Human Rights, *The right of development: a primer*, Sage Publications India, New-Delhi, 2004, p. 62.

⁵⁴⁴ Art. 3.1, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁴⁵ Art. 3.3, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁴⁶ Art. 4.1, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global.”⁵⁴⁷

El artículo 6.1 establece: “todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión.”⁵⁴⁸

El artículo 6.2 dispone que: “todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.”⁵⁴⁹

El artículo 6.3: “Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.”⁵⁵⁰

Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional.

El artículo 5 establece que: “Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.”⁵⁵¹

⁵⁴⁷ Art. 4.2, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁴⁸ Art. 6.1, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁴⁹ Art. 6.2, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁵⁰ Art. 6.3, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁵¹ Art. 5, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

El artículo 7 establece: “todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo.”⁵⁵²

El artículo 8.1 establece que: “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.”⁵⁵³

El artículo 8.2 establece que los “estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.”⁵⁵⁴

IV.1 Obligación de acceso a los recursos básicos

El artículo 8° de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se dispone el deber de los Estados de: “...adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos.”⁵⁵⁵ No es gratuito que la norma internacional en comento utilice la igualdad de oportunidades como medio para el acceso a los recursos básicos, al respecto Christian Faundes considera que: “en el escenario de la post guerra fría, los temas vinculados con el desarrollo y la competitividad de

⁵⁵² Art. 7, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁵³ Art. 8.1, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁵⁴ Art. 8.2, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*.

⁵⁵⁵ Ver. *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, art. 8.

espacios regionales cobran valor en forma notoria, así como la consiguiente capacidad para enfrentar una acelerada globalización.”⁵⁵⁶

La globalización ya es un fenómeno vigente, es nodal que en este apartado antes de abordar completamente la explicación sobre acceso a los recursos básicos, determinar los impactos más evidentes que la globalización ha generado en la noción genérica de recursos básicos, aunque también podríamos dejarlo en *recursos*, -no deseamos confundir a los lectores, más es necesario hacer tales precisiones- la globalización es preponderantemente un proceso económico caracterizado desde la economía por los siguientes elementos: economía global muy competitiva y jerárquica; desregulación; ausencia de controles internacionales sobre los movimientos de capital y las inversiones; generación de una franja periférica de Estados-Nación en el comercio mundial; dualidad: integración y fragmentación de las economías.

Sin embargo, la noción recursos básicos es bastante ambigua, por su parte la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización propone:

Un compromiso internacional que asegure a todo el mundo los recursos básicos y las demás condiciones que garantizan la dignidad humana y que se engloban en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio deberían considerarse como los primeros pasos hacia el establecimiento de unas condiciones socioeconómicas mínimas para la economía global.⁵⁵⁷

De todos modos la literatura académica ha subrayado la trascendencia del artículo 8° de la declaración, con ello se quiere decir que no es casual que se conecten igualdad de oportunidades y acceso a los recursos básicos, la declaración comienza por proponer algunas “provisiones de servicios” que se

⁵⁵⁶ FAUNDES, Cristián, “Recursos naturales y seguridad: aproximación desde un enfoque multidimensional”, en GARAY, Cristián, FAUNDES, Cristián (Eds.), *Recursos naturales. Competencia, cooperación y conflicto en Sudamérica*, RIL editores, Santiago, 2013, p. 15.

⁵⁵⁷ Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, p. 6.

derivan de las disposiciones normativas de la declaración, inclusive también es una señal aunque tímida de la delineación de un derecho al desarrollo con base individual.⁵⁵⁸

Encontramos en la literatura las distinciones para poder advertir el significado del concepto de *acceso a los recursos básicos* en la declaración sobre el derecho al desarrollo. Los recursos básicos comprenden algunas subdivisiones, la primera, aquella referida a los recursos naturales, como la tierra; ríos; hidrocarburos; los recursos capitales: edificios; herramientas, y bienes; tecnología y los recursos humanos.⁵⁵⁹

La literatura académica ha considerado que el artículo 8° de la declaración sobre el derecho al desarrollo comprende un “catálogo de objetivos.”⁵⁶⁰

La redacción no es despreciable, por ejemplo en materia de recursos naturales el derecho a ser provisto de energía adecuado no es contrario a la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos básicos.⁵⁶¹

⁵⁵⁸ Los servicios que pueden ser derivados de la declaración sobre el derecho al desarrollo no aparecen muy claros: “At the World Conference on Human Rights in Vienna in 1993, the Western states finally dropped their reservations about this Declaration. Article 4(1) of the 1986 Declaration, which has no binding force under international law, imposes the following obligations on States: “...to take steps, individually and collectively, to formulate international development policies with a view to facilitating the full realization of the right to development.” It remains unclear, however, precisely what is meant by development on an individual basis, whether any specific provision of services can be derived from this ‘right to development’ and if so, which services they are.” German Advisory Council on Global Change, *World in transition 3: Towards sustainable energy systems*, Routledge, 2013, p. 118.

⁵⁵⁹ Sobre la distinción de los recursos: “Society can function properly when it has the basic resources: natural resources (land, rivers, oil, coal, etc.), capital resources (buildings, tools, goods, etc.), technology (information, knowledge and techniques employed in producing goods and services), and of course, human resources. The latter include the number and composition of the population, its level of education, health status and the specific skills and habits the people have developed. In a society, all the resources are interrelated, but the human resources have a great influence on the development of all others.” KRUMOV, Krum, “Human resource development”, LEONARD, Thomas M. (Ed.), *Encyclopedia of the developing world*. Volume 1 A-E Index, New York, Routledge, 2006, p. 768.

⁵⁶⁰ German Advisory Council on Global Change, *op. cit.*, p. 118.

⁵⁶¹ El artículo 8 de la declaración es la única norma de la declaración de la que se desprende un catálogo más concreto de objetivos: “Only article 8 sets out a catalogue of objectives for ‘equality of opportunity for all in their access to basic resources, education, health services, food, housing, employment and the fair distribution of income.’ A legal entitlement to an adequate energy supply could be derived, at most, from the demand for ‘equality of opportunity for all in their access to basic resources.’ *Idem*.”

En el Diccionario sobre el Desarrollo, el término recursos es elaborado por Vandana Shiva, comienza respondiendo a la palabra recurso, y así escribe que recurso: “originalmente ha implicado vida.”⁵⁶²

Recursos naturales, la noción tradicional se transforma con los procesos de industrialismo y colonialismo. Los recursos naturales se convierten en insumos para producir riqueza y son los principales medios que tienen origen natural, pero son objeto de “producción industrial y comercio colonial.”⁵⁶³

Para Christian Faundes los recursos naturales son: “todos los factores bióticos o abióticos de la naturaleza que puede utilizar el hombre para satisfacer sus necesidades. Generalmente se clasifican de acuerdo con sus posibilidades de recuperación y regeneración, en renovables y no renovables.”⁵⁶⁴

IV.II Obligación de acceso a la educación

En el catálogo de objetivos del artículo 8° de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, el acceso a la educación es también un deber del Estado, asimismo también le aplica su garantía ser realizado en igualdad de oportunidades.⁵⁶⁵ Quizás ningún derecho perteneciente al elenco del derecho internacional de los derechos humanos posea el renombre y la intemporalidad que tiene el derecho a la educación. El derecho humano a la educación se encuentra reconocido por el artículo 26° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que textualmente dice:

⁵⁶² La noción de recurso implica: “originally implied life. Its roots is the Latin verb, *surgere*, which evoked the image of a spring that continually rises from the ground. Like a spring, a ‘re-source’ rises again and again, even if it has repeatedly been used and consumed. The concept thus highlighted nature’s power of self –regeneration and called attention to her prodigious creativity. Moreover, it implied an ancient idea about the relationship between humans and nature – that the earth bestows gifts of humans who, in turn, are well advised to show diligence in order not to suffocate her generosity. In early modern times, ‘resource’ therefore suggested reciprocity along with regeneration.” SHIVA, Vandana, “Resources”, SACHS, Wolfgang (Ed.), *The development dictionary. A guide to knowledge as power*, 12ed., Witwaterstrand University Press, Southern Africa, 2007, p. 206.

⁵⁶³ SHIVA, Vandana, “Resources”, *op. cit.*, pp. 206-207.

⁵⁶⁴ FAUNDES, Christian, “Recursos naturales y seguridad: aproximación desde un enfoque multidimensional”, *op. cit.*, p. 23.”

⁵⁶⁵ *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, artículo 1.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los meritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (...)
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.⁵⁶⁶

La educación es un derecho humano universal: “le otorga un estatuto que reclama progresar hacia su exigibilidad jurídica para todos los ciudadanos en los ámbitos internacional y nacional.”⁵⁶⁷

En una sociedad altamente informatizada y tecnificada, la educación nos parece tan común como los recursos naturales más evidentes, no es así, si leemos documentos de política de la UNESCO como el Documento de política 14: El avance hacia la escolarización de todos los niños se estanca, pero algunos países muestran el camino a seguir, se encuentra datos que atestiguan de profundas brechas en las distintas fases de la educación escolar de los niños algunas como:

- a) 58 millones de niños en edad de cursar enseñanza primaria (edades 6 y 11) no se encuentran escolarizados;
- b) La casi certeza de que muchos de ellos: “posiblemente nunca pisarán un aula”;

⁵⁶⁶ *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, artículo 26.

⁵⁶⁷ *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe*, Naciones Unidas, p. 84.

- c) Estancamiento en el proceso de escolarización de los niños: “la tasa de niños fuera de la escuela primaria en el mundo se ha estabilizado en el 9% desde el 2007;”
- d) India, Indonesia, Níger y Nigeria manejan cifras de aproximadamente más de un millón de niños que no asisten a escuelas;
- e) Asciende la demanda de enseñanza secundaria.⁵⁶⁸

El documento forma parte de los trabajos preparatorios realizados por el Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo y el Instituto de Estadística de la UNESCO.

El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2015 tiene como objetivo la realización del informe sobre los avances conseguidos en el trabajo por los *objetivos mundiales de educación para todos del año 2000* (EPT). Los objetivos de la EPT son:

1. Atención y educación de la primera infancia;
2. Enseñanza primaria universal;
3. Competencias de jóvenes y adultos;
4. Alfabetización de los adultos;
5. Paridad e igualdad de género;
6. Calidad de la educación;⁵⁶⁹

Educación y desarrollo son conceptos recíprocos, en el Informe los autores afirman: “la educación imparte conocimientos y competencias que permiten a las personas desarrollar plenamente su potencial, y se convierte así en un factor catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo.”⁵⁷⁰

⁵⁶⁸ Documento de política 14 /Boletín 28, Junio de 2014, El avance hacia la escolarización de todos los niños se estanca, pero algunos países muestran el camino a seguir. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228184S.pdf>.

⁵⁶⁹ Informe y seguimiento de la EPT en el mundo, Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos, UNESCO, París, 2014.

⁵⁷⁰ *Ibidem*. En términos parecidos se expresa: “Además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, la educación incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia (en relación con la fecundidad y la participación en la actividad económica de sus miembros, entre otros), la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la

La vinculación del derecho humano a la educación con el género y los derechos de la mujer es irrefutable, el Informe insiste: “Educar a las niñas y a las mujeres jóvenes no solo multiplica sus probabilidades de obtener empleo, estar en buena salud y participar plenamente en la sociedad, sino que tiene una neta incidencia en la salud de sus niños y acelera la transición de sus países a un crecimiento demográfico sostenible.”⁵⁷¹

En relación con el desarrollo el Informe plantea:

- a) Que la educación contribuye a la reducción de la pobreza, fomenta el empleo y promueve el crecimiento;
- b) La educación mejora las posibilidades de que la gente tenga una vida más sana;
- c) La educación promueve sociedades sanas.⁵⁷²

En el rubro de educación México tiene valores en la tasa de abandono escolar en educación primaria por 5,0%; un valor de 96% en maestros de primaria formados para enseñar; el rendimiento de los alumnos de 15 años en matemáticas es en porcentajes de 413, en lectura de 424 y en ciencias de 415. La proporción de alumnos por docente es de 28% y el gasto en educación un 5,3 de porcentaje del PIB. En el índice de desigualdad de género del informe

actividad autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado.” *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe, op. cit.*, Naciones Unidas, p. 84.

⁵⁷¹ *Ibidem*. La educación de las niñas es básica para lograr los objetivos de desarrollo del milenio: “Para dinamizar este círculo virtuoso de logros que se potencian es fundamental concentrarse especialmente en la educación de las niñas. Las ventajas que estas conllevan se trasladan de generación en generación y desencadenan procesos multiplicadores de bienestar por sus efectos positivos sobre otros indicadores sociales. El ciclo de vida de las niñas con educación es diferente del de aquellas que no han completado sus estudios. Las investigaciones demuestran que a mayor nivel de instrucción se posterga tanto la nupcialidad como la edad al nacimiento del primer hijo, disminuyendo el embarazo adolescente y las tasas de fecundidad en general. Asimismo, claramente la calidad de la atención y el cuidado de las mujeres con educación contribuye a reducir la posibilidad de que los niños contraigan enfermedades y a aumentar sus posibilidades de superar los cinco años, reduciendo la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantil y, a su vez, constituye un factor de matrícula y permanencia de los hijos e hijas en el sistema educativo. De igual modo, la educación, a escala individual, favorece la autonomía y la autovaloración de las mujeres.” *Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.*

⁵⁷² *Ibidem*.

de desarrollo humano del PNUD 2014, México tiene un índice de desigualdad de género de 0,376 y de 55,7 de mujeres con al menos algún tipo de educación secundaria (2005-2012).⁵⁷³ La media de años de escolaridad de las mujeres es de 8,1.

IV.III Obligación de acceso a los servicios de salud

Entre los fundamentos normativos internacionales del derecho humano a la salud física y mental, uno de los principales textos es el artículo 12.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
 - a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños;
 - b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
 - c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
 - d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.⁵⁷⁴

El derecho a la salud, es un derecho inclusivo:

...pues no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada,

⁵⁷³ PNUD, *op. cit.*, p. 189.

⁵⁷⁴ *Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, art. 12.

condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.⁵⁷⁵

El Estado puede elegir el sistema de asistencia sanitaria que sea más apropiado a sus condiciones económicas y sociales, el modelo que los Estados han acordado en el marco de la OMS, es el modelo de cobertura sanitaria universal, el cual a su vez cuenta con diferentes vías de aplicación:

...el concepto de cobertura sanitaria universal se funda en una visión amplia de los servicios necesarios para gozar de unas buenas condiciones de salud y bienestar. Estos servicios van desde la atención clínica del paciente individual hasta los servicios públicos que protegen la salud de una población entera. Incluyen servicios que proceden tanto del propio sector de la salud como de fuera de él.⁵⁷⁶

1. Acceso a los medicamentos esenciales y los productos sanitarios; ii)
2. Personal de salud motivado y cualificado, accesible a las personas que atiende;
3. Servicios integrados y de calidad, centrados en el paciente, en todos los niveles, desde la atención primaria hasta la terciaria;
4. Combinación de programas prioritarios de promoción de la salud y control de las enfermedades, incluidos los métodos de prevención y tratamiento, integrados en los sistemas de salud;
5. Sistemas de información que generaran datos oportunos y precisos para la adopción de decisiones;
6. Sistemas de financiación.⁵⁷⁷

En los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), el Informe 2014, en los objetivos relacionados con la salud integra diferentes objetivos: objetivo 4

⁵⁷⁵ VILLÁN Durán, Carlos, “Los derechos humanos ante la epidemia del Sida,” en GÓMEZ Isa, Felipe (Dir.), PUREZA José Manuel, *La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 788.

⁵⁷⁶ *Informe sobre la salud en el mundo 2013. Investigaciones para una cobertura sanitaria universal*, Organización Mundial de la Salud, Luxemburgo, 2013.

⁵⁷⁷ *Ibídem*.

reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; objetivo 5 mejorar la salud materna; objetivo 6 combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.⁵⁷⁸

El Informe sobre la salud en el mundo 2013: investigaciones para una cobertura sanitaria universal. Comienza recordando el acuerdo en el año 2005 de todos los miembros de la OMS para la instauración de un sistema sanitario universal. ¿Qué relación guarda ello con el derecho humano al desarrollo?

Las garantías específicas del derecho a la salud, en México es una garantía constitucional. Su afirmación como garantía depende de su exigibilidad y de su judiciabilidad por medio del juicio de amparo.

IV.IV Obligación de proveer seguridad alimentaria

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada del 13 al 17 de noviembre de 1966, en Roma Italia los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, elaboraron una Declaración sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.⁵⁷⁹

La seguridad alimentaria guarda un vínculo especial con el derecho a la alimentación, si recordamos, el derecho a una alimentación adecuada y a no padecer hambre, se encuentra anclado en el sistema internacional de derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el artículo 25.1; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 artículo 11.1, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 artículo 24.1.

⁵⁷⁸ *Objetivos de Desarrollo del Milenio*, Informe de 2014, Naciones Unidas, Nueva York, 2014.

⁵⁷⁹ *Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial*.

La seguridad alimentaria deriva como una garantía para hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada, así lo dispone la Observación General 12 que fue elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”⁵⁸⁰

Los compromisos internacionales en el tema alimentario, han ocupado un lugar preferente en la agenda del Sistema de las Naciones Unidas, entre las distintas estrategias y acciones se han establecido la celebración de: *Cumbres Mundiales sobre la Alimentación*, eventos que hasta el momento han sucedido solo dos veces la primera ya aludida, que es la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, efectuada del 13 al 17 de noviembre de 1996 y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, realizada en la ciudad de Roma, del 10 al 13 junio de 2001.⁵⁸¹

Generalmente estos esfuerzos internacionales son vistos con reservas, no obstante los procesos económicos, políticos y sociales, agravados por el fenómeno de la globalización han empujado a los gobiernos nacionales para buscar juntos la solución de los problemas globales:

A mediados del decenio de 1970, se consideraba que el mundo se hallaba en medio de una grave crisis alimentaria. El clima adverso en Asia meridional, Europa, América del Norte y la ex – URSS perjudicó los suministros de cereales. Esta situación, asociada a la modificación de la política ganadera de la URSS, que aumentó la demanda de cereales importados, creó grandes dificultades en los mercados mundiales de

⁵⁸⁰ *Observación General 12*, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el PIDESC.

⁵⁸¹ Acerca de la seguridad alimentaria: “Alcanzar una seguridad alimentaria mundial sostenible forma parte de los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y humano convenidos en las últimas conferencias internacionales. El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se funda en el consenso alcanzado en esos foros y se basa en la convicción de que, si bien el mundo se enfrenta con graves situaciones de inseguridad alimentaria, existen soluciones a esos problemas. Si todas las partes a nivel local, nacional e internacional realizan esfuerzos decididos y constantes, podrá conseguirse el objetivo general de asegurar la disponibilidad en todo momento de alimentos para todos.” *Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación FAO*.

cereales. La subida de los precios del petróleo de la OPEC en 1973 provocó un aumento de los precios de la energía y otros insumos del sector agrícola, como los fertilizantes. Se preveía que esta alza exacerbaría en mayor grado la crisis alimentaria mundial.⁵⁸²

La seguridad alimentaria es compleja, porque sus implicaciones económicas son directas para los países: “las cifras relativas al suministro global ocultan el modo en que se obtiene el suministro alimentario.”⁵⁸³ Existen dos mecanismos para responder a la demanda alimentaria nacional, la vía de la producción interna y la vía de la importación de alimentos,⁵⁸⁴ y las consecuencias de la elección no deben ser subestimadas, puede ser riesgoso: “la estrategia que se adopte puede afectar la seguridad alimentaria dentro de los países, mientras se adaptan los canales de distribución interna.”⁵⁸⁵

Una de las consecuencias tiene que ver con la respuesta de los mercados: “las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria nacional cambiarán de carácter cuando los países pasen a depender en mayor grado de los mercados internacionales para atender sus necesidades alimentarias.”⁵⁸⁶

La seguridad alimentaria no debe considerarse sinónimo del derecho a la alimentación, sino más bien, consiste en una garantía para la realización del derecho y de los objetivos inherentes al derecho a la alimentación. Si bien es cierto que históricamente se pueden encontrar antecedentes de la seguridad alimentaria como política de Estado,⁵⁸⁷ la seguridad alimentaria en el sistema

⁵⁸² THOMSON, Anne, METZ, Manfred, *Implicaciones de las políticas económicas en la seguridad alimentaria, Manual de capacitación, Materiales de capacitación para la planificación agrícola*, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 1999, p. 13.

⁵⁸³ *Ibidem.*, p. 15.

⁵⁸⁴ *Ídem.*

⁵⁸⁵ *Ídem.*

⁵⁸⁶ *Ídem.*

⁵⁸⁷ En la historia humana ya existen antecedentes de políticas aunque muy primigenias sobre la seguridad alimentaria, es una característica del poder político distribuir producción y los alimentos son una de esas materias primas: “El estado tiene un largo historial de aplicación de medidas de asistencia pública para proteger a sus ciudadanos de la inanición y la indigencia extrema, historia que no puede reducirse simplemente a motivos de generosidad. Uno de los fundamentos en que el estado se ha basado para afirmar su derecho al poder es su capacidad para mejorar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Esta función a menudo ha sido esencial a la noción de legitimidad del estado, y sin duda es una de las que más esperanzas

internacional de las Naciones Unidas, adquiere una connotación diferente porque se entronca con el discurso de los derechos humanos y las políticas del Estado contemporáneo y ahora global:

Un enfoque basado en los derechos realza la autonomía de los titulares de los derechos al permitirles participar activamente en la realización de del derecho a la alimentación. Un enfoque de este tipo exige que todos los participantes en el proceso de realización del derecho a la alimentación rindan cuenta de sus actos. Esto puede lograrse mediante mecanismos jurídicos, administrativos o políticos. Los titulares de los derechos, ya sean individuos o grupos en determinadas circunstancias, pueden exigir a sus gobiernos el respeto, la protección y la realización de sus derechos.⁵⁸⁸

Una primera aproximación al concepto de seguridad alimentaria, es la que la FAO ha proporcionado contantemente: “garantizar a todos los seres humanos el acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan.”⁵⁸⁹

La seguridad alimentaria pretende operacionalizar tres dimensiones básicas para la realización del derecho humano a la alimentación:

públicas suscita. Hace varios miles de años, en Egipto, en la época de los faraones, el estado organizó una suerte de almacén de existencias reguladoras para almacenar cereales en los buenos años con miras a venderlos a precios subvencionados a las personas necesitadas durante los años de escasez. En Roma y en la Grecia antigua se distribuían raciones de cereales y pan a los pobres en épocas de escasez causadas por malas cosechas o guerras, o cuando se temía que se produjesen desórdenes públicos. En China, durante la dinastía Manchu, se prestaba socorro de urgencia en forma de dinero o alimentos, ventas de cereales a bajo precio y préstamos de alimentos, como medidas para aumentar la seguridad alimentaria en épocas de crisis. Varios gobiernos también han utilizado planes públicos de empleo para mejorar la seguridad alimentaria. Los gobernantes de la India fueron los primeros en aplicarlos en el siglo IV a C. En el decenio de 1840, durante la hambruna de la patata en Irlanda y las Tierras Altas de Escocia, se prestó socorro en forma de lo que ahora se llamaría proyectos de alimentos por trabajo, en que personas aptas para el trabajo participaron en programas de obras públicas a cambio de raciones de alimentos. A los pobres (que no eran admitidos en los asilos de caridad) se les prestó socorro fuera de estas instituciones a cambio de la aportación de su fuerza de trabajo para obras públicas. Estos ejemplos pueden considerarse como precursores de los sistemas actuales de seguridad social.” THOMSON, Anne, METZ, Manfred, *op. cit.*, p. 19.

⁵⁸⁸ *Las directrices sobre el derecho a la alimentación. Documentos informativos y estudios de casos*, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2006, p. 165.

⁵⁸⁹ THOMSON, Anne, METZ, Manfred, *op. cit.*, p. 3.

disponibilidad; estabilidad y acceso de los alimentos. De no ser así, estaríamos solo ante buenas intenciones, en este sentido es muy importante focalizar la seguridad alimentaria y su relación con los Estados-nacionales.⁵⁹⁰ De allí deriva que la seguridad alimentaria: “no solo se refiere al problema de asegurar que los alimentos de una nación existan sino que tiene que ver, sobre todo, con donde se producen y si se puede garantizar que lleguen al lugar al que deben de llegar.”⁵⁹¹

Uno de los aspectos/dimensiones principales de la estructura de la seguridad alimentaria es la disponibilidad de los alimentos, que para la literatura especializada se determina por la organización de la cadena alimentaria.⁵⁹²

Para la FAO, la disponibilidad es una de las tres “dimensiones o atributos substantivos importantes del derecho a una alimentación adecuada.”⁵⁹³

La “disponibilidad” de los alimentos tiene que ver con el suministro sostenible de alimentos adecuados en el marco de sistemas alimentarios

⁵⁹⁰ Las economías de dirección planificada no son la alternativa, debe estimularse la liberalización de los mercados: “Durante el último decenio, en el mundo desarrollado y en las ex economías de planificación centralizada los gobiernos han sido objeto de importantes presiones para que limitasen sus intervenciones en la economía a aquellas esferas en que, por razones de disfunción del mercado o por necesidad de alguna forma de acción colectiva, podían ser más eficaces que los mercados en la organización de la actividad económica y el suministro de bienes y servicios. En general, se ha reconocido que las economías de dirección centralizada y las economías en las que los gobiernos han cumplido un papel importante en el suministro de bienes y servicios han tenido estructuras y precios de incentivo distorsionados, que en general no han beneficiado a los grupos más vulnerables de la sociedad y han tenido repercusiones negativas en las tasas de crecimiento económico.” *Ibidem.*, p. 18.

⁵⁹¹ ROBLEDO Castillo, Jorge Enrique, *Globalización y seguridad alimentaria, en Desarrollo rural y seguridad alimentaria: un reto para Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, Colombia, p. 33.

⁵⁹² “Es el término utilizado para referirse a las diferentes transformaciones de que son objeto los alimentos desde el momento en que el agricultor siembra la semilla hasta la última etapa en que se venden al consumidor final. Puede tratarse de una cadena sumamente simple, en la que el agricultor cultiva los cereales, y la familia campesina los trilla, elabora y cocina para que sus miembros los consuman. También puede tratarse de una cadena sumamente complicada, en la que el trigo procede de un importante exportador de cereales, como los Estados Unidos, se transforma en harina en el país, se vende a una empresa comercializadora de harina y de ahí se distribuye a través de una cadena de supermercados.” THOMSON, Anne, METZ, Manfred, *op. cit.*, p. 75.

⁵⁹³ *Las directrices sobre el derecho a la alimentación. Documentos informativos y estudios de casos, op. cit.*, p. 30.

sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico. La sostenibilidad es índice de disponibilidad y accesibilidad a largo plazo en lo que respecta a una alimentación adecuada. En las Directrices voluntarias figuran los ámbitos decisivos de la mejora general de la disponibilidad de alimentos, como, por ejemplo, las tierras, el agua, la agricultura, la tecnología, la extensión y la disponibilidad de crédito. La cooperación internacional también contribuye al incremento de la disponibilidad de alimentos.⁵⁹⁴

Accesibilidad de los alimentos, el criterio de la FAO:

La “accesibilidad” a los alimentos supone un acceso estable a una alimentación adecuada. Se refiere al acceso a los alimentos, tanto físico como económico, en el marco de la subsistencia de un hogar. También comporta una accesibilidad a los alimentos que no dificulte el goce de otros derechos, y se corresponde con las Directrices voluntarias encaminadas a mejorar la gestión de los recursos.⁵⁹⁵

La estabilidad también es también una dimensión de la seguridad alimentaria que hace referencia a: “las variaciones de la producción, los suministros y/o la demanda de alimentos a lo largo del tiempo y al riesgo de que se produzcan déficit en ellos.”⁵⁹⁶ Se relaciona con variables macroeconómicas; crecimiento sostenible; eliminación del proteccionismo e integración económica y regionalización económica; buena gobernanza; recursos naturales; inversión en investigación y desarrollo.⁵⁹⁷

El grupo de trabajo ha formulado criterios en materia de seguridad alimentaria.⁵⁹⁸

⁵⁹⁴ *Ídem.*

⁵⁹⁵ *Ibidem.*, p. 31.

⁵⁹⁶ THOMSON, Anne, METZ, Manfred, *op. cit.*, p. 304.

⁵⁹⁷ MATTHEWS, Alan, *Integración regional y seguridad alimentaria en países en desarrollo, Materiales de capacitación para la planificación agrícola*, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2003, p. 62.

⁵⁹⁸ “Food security and nutrition, indicator should not only focus on Child stunting rates but should also include food security in terms of the general population since the right to be free from hunger and malnutrition is a fundamental human right of every woman, man, youth and

En otra contribución se observaba que casi todos los artículos sustantivos del 1 al 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estaban relacionados en el fondo con el derecho al desarrollo, sobre todo el artículo 11, que se refería al derecho a un nivel de vida adecuado. También se señalaba que los criterios y subcriterios relativos al derecho al desarrollo se apoyaban en los derechos consagrados en el Pacto aportando así un conjunto de criterios que podrían usarse para evaluar la forma en que los Estados partes respetaban esos derechos.⁵⁹⁹

En el Informe preparado por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo en cumplimiento de la resolución 15/25 del Consejo de Derechos Humanos, Recopilación de las comunicaciones recibidas de partes interesadas que no son Estados Miembros, aparece una aportación que merece ser subrayada:

En relación con el concepto de pobreza y el artículo 8 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo se subrayó que los conceptos de desarrollo y alivio de la pobreza debían interpretarse con amplitud para incluir más variables que el ingreso, como la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios de educación y salud. Se hizo referencia al índice multidimensional más completo de pobreza elaborado por la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y Desarrollo Humano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Comprender cómo el fortalecimiento de los derechos civiles y políticos podría repercutir en muchas situaciones de privación y la forma en que ambas cuestiones se

child. Universal and sustainable food security is an imperative part of achieving the social, economic and human development objectives of societies and is an important element in promoting the socio-economic well being of any state.” Human Rights Council, Working Group on the Right to Development, Thirteenth session, 7-11 May 2012, Item 4 of the provisional agenda, Review of progress in the implementation of the right to development: consideration, revision and refinement of the right to development criteria and operational criteria (A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2).

⁵⁹⁹ Informe preparado por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo en cumplimiento de la resolución 15/25 del Consejo de Derechos Humanos, Recopilación de las comunicaciones recibidas de partes interesadas que no son Estados Miembros, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, 12º período de sesiones, Ginebra, 14 a 18 de noviembre de 2011, A/HRC/WG.2/12/3.

superponían permitiría tener una visión más sutil y compleja de la realidad concreta de la pobreza y de las posibles soluciones para aliviarla. Se planteó la cuestión de la distribución y las desigualdades del ingreso, y, en términos más generales, de la justicia distributiva.⁶⁰⁰

IV.V Obligación en materia de vivienda

Si algo ha caracterizado a las civilizaciones es la creación y formación de asentamientos humanos algunos muy complejos como grandes ciudades, megalópolis, otros de extensiones menores, rurales, villas. La segunda mitad del siglo XX ha visto como las ciudades se han transformado en zonas metropolitanas, como consecuencia de los procesos de emigración urbana.⁶⁰¹

La declaración sobre el derecho al desarrollo en el artículo 8° habla sobre vivienda no sobre derecho a la vivienda, aunque puede entenderse que el artículo 8° también pretende introducir una garantía en el sistema internacional de los derechos humanos para la realización del derecho humano a la vivienda, para ser más concretos: “el de la vivienda, como el resto de los derechos, en realidad, requieren una interpretación sistemática.”⁶⁰²

El derecho a la vivienda forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado,⁶⁰³ Según Pisarello:

⁶⁰⁰ *Informe preparado por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo en cumplimiento de la resolución 15/25 del Consejo de Derechos Humanos, Recopilación de las comunicaciones recibidas de partes interesadas que no son Estados Miembros*, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, 12º período de sesiones, Ginebra, 14 a 18 de noviembre de 2011, A/HRC/WG.2/12/3.

⁶⁰¹ “En 1950, la ciudad de Nueva York era la única zona metropolitana con más de 10 millones de habitantes. En 2005 había 20 ciudades que superaban esa marca, de las cuales sólo cuatro no estaban en países en desarrollo. En 1950 solo el 30% de la población mundial era urbana. Hoy, más de la mitad de los 6,500 millones de habitantes del planeta reside en centros urbanos. Casi 1.000 millones de habitantes del planeta reside en centros urbanos. Casi 1.000 millones de personas viven en barrios marginales; en los países en desarrollo casi el 42% de la población urbana vive en esos barrios.” *Las Naciones Unidas. Hoy, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas*, Nueva York, 2007, p. 222.

⁶⁰² GONZÁLEZ Ordovás, Ma. José, *El derecho a la vivienda. Reflexiones en un contexto socioeconómico complejo*, Universidad Zaragoza, Dykinson, Madrid, 2013, p. 70.

⁶⁰³ ÁNGULO Sánchez, Nicolás, *El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, concepto, contenido, objetivos y sujetos*, IEPALA Editorial, Madrid, 2005, p. 113.

...una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida segura, independiente y autónoma. Precisamente por su centralidad en la vida de las personas, porque consume gran parte de sus presupuestos y condiciona su auto-estima, la de sus familias y el bienestar de la comunidad donde habitan, es amplio el consenso en torno a la conveniencia de concebir el acceso a la vivienda como un derecho exigible frente a los poderes públicos y frente al resto de la sociedad.”⁶⁰⁴

Fernández de Oliveira considera también que el derecho a una vivienda: “está vinculado a otras dimensiones de los derechos económicos y sociales, es decir, sin un lugar adecuado para vivir, la educación y la salud, por ejemplo, se ven comprometidas.”⁶⁰⁵ Escribe Pisarello que el derecho a la vivienda se relaciona con algunos derechos procedimentales como: el derecho a la libertad de expresión o el derecho de asociación; derecho a hacer valer los intereses de inquilinos o de ocupantes precarios; derechos de participación; en una “dimensión procesal” el derecho a la vivienda se acoge estrechamente con el moderno “derecho a la información”, el derecho de petición, derecho de audiencia, derecho de consulta anticipada y razonable; derecho a la seguridad jurídica, y por supuesto con el derecho al debido proceso.⁶⁰⁶

Esta ha sido la opinión expresada y compartida por el Comité:

...el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los

⁶⁰⁴ PISARELLO, Gerardo, *Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción, El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible*, Icaria, Barcelona, 2003, p. 25.

⁶⁰⁵ FERNÁNDEZ de Oliveira, Michelle Vieira, *La ciudadanía incompleta. Derechos económicos y sociales en la periferia urbana de Brasil*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2014, p. 100.

⁶⁰⁶ PISARELLO, Gerardo, *op. cit.*, pp. 82-83.

principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.⁶⁰⁷

No obstante, para la literatura académica no ha pasado desapercibida, que la vivienda en relación con la dimensión posesión de la tierra poseen en palabras de Pisarello una: "indeterminación jurídica;"⁶⁰⁸ efectivamente Pisarello observa que la vivienda:

...como la mayoría de los derechos sociales...el derecho a una vivienda adecuada es un derecho vago, evanescente, que promete demasiado, que especifica muy poco o, en el peor de los casos, ambas cosas a la vez. De esa indeterminación, se agrega, puede deducirse acaso un principio programático, una guía genérica de actuación para los poderes públicos. Pero no un derecho en toda regla, capaz de generar obligaciones concretas cuyo incumplimiento comporte algún tipo de sanción o control que al menos exponga al poder a la pérdida de legitimidad ante los ciudadanos.⁶⁰⁹

Lo anterior coincide con el Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, elaborado por Miloon Kothari, en el que destaca – el relator- una laguna normativa: "la falta de reconocimiento en el derecho internacional relativo a los derechos humanos del derecho a la tierra."⁶¹⁰

⁶⁰⁷ *Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 7).*

⁶⁰⁸ *Ibidem.*, p. 41.

⁶⁰⁹ PISARELLO, Gerardo, *op. cit.*, p. 41.

⁶¹⁰ *Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado*, Miloon Kothari, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos humanos", A/HRC/4/18, 5 de febrero de 2007, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos.

Aunque la constitucionalización de los derechos y en este caso del derecho a la vivienda es un signo importante en el avance en la realización del reconocimiento y garantía del derecho en cuestión, en virtud del método empleado en el presente trabajo nos referiremos de manera deductiva atendiendo primero al marco normativo internacional en materia del derecho a la vivienda, sin embargo la previsión constitucional⁶¹¹ es indispensable para la determinación jurídica del derecho, aunque quisiera aclarar que para ser muy específicos y concretos nos guiamos por la temática que implica la declaración sobre el derecho al desarrollo, que profundiza más en las garantías inherentes al derecho a la vivienda.

El derecho humano a la vivienda no es solo un principio programático,⁶¹² es un derecho convencional (el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales); susceptible de generar obligaciones jurídicas: “El derecho a la vivienda, como se verá, puede generar mandatos vinculantes al legislador que éste deberá desarrollar, con medidas inmediatas, de acuerdo al máximo de recursos disponibles. Pero también puede dar lugar a derechos subjetivos *prima facie* susceptibles de imponerse a otros derechos y a otros principios en casos de urgencia y necesidad constitucional.”⁶¹³

Luego, las políticas de vivienda no pueden ser las mismas en todos los países del mundo:

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/InfRE_DerVivienda.pdf.

⁶¹¹ Acerca de los derechos habitacionales: “De igual modo, la ausencia de derechos habitacionales en la Constitución de un Estado no presupone necesariamente su mala fe o su falta de disposición en la materia. Países que no reconocen el derecho a la vivienda en sus textos constitucionales pueden exhibir un razonable desempeño en el terreno de su satisfacción legislativa o administrativa. Lo cierto es que la constitucionalización representa un punto de partida positivo para hacer visible, para delimitar el “núcleo de certeza” que integra el contenido del derecho. Los derechos positivos, como es sabido, pueden distinguirse de acuerdo al tipo de fuente de la que provengan. Pueden ser derechos constitucionales, cuando derivan de la Constitución, pueden ser derechos legales, cuando provienen de la ley, o pueden ser derechos contractuales, cuando nacen de contratos o de actos semejantes de autonomía privada.” PISARELLO, Gerardo, *op. cit.*, p. 45.

⁶¹² PISARELLO, Gerardo, *op. cit.*, p. 41.

⁶¹³ *Ibidem.*, p. 42.

Merece especial atención la tendencia en la política de vivienda en estos países, puesto que la dinámica de los sistemas de vivienda incorpora un componente importante de intervención pública. La panorámica actual es pues, y especialmente en este ámbito, el producto de sucesivas políticas y de su impacto tanto en el ámbito de la demanda (por ejemplo, subsidios a la compra de vivienda) como en el ámbito de la oferta (por ejemplo, ayudas a la piedra).⁶¹⁴

En la normativa internacional el derecho a la vivienda o el conjunto de los derechos habitacionales, se encuentra disperso, aunque es destacable que si se han generado instrumentos internacionales que permiten distinguir un derecho humano a la vivienda, el catálogo engloba los siguientes textos en el ámbito normativo internacional:

1. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17);
2. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11);
3. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5);
4. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 14.2.h.);
5. Convención de los Derechos del Niño (artículo 2.3.);
6. Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias (artículo 43.1.d.);
7. Convención Internacional Relativa al Estatuto de los Refugiados (artículo 21).⁶¹⁵

En el marco de las agencias de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo: Recomendación No. 115 de la OIT de 1961; Recomendación No. 162 de la OIT de 1980; el Convenio 169 de la OIT.⁶¹⁶

⁶¹⁴ PAREJA Eastaway, Montserrat, TURMO Garuz, Joaquín, “Las políticas de vivienda y el estado de bienestar,” en DÍAZ Orueta, Fernando, LOURES Seoane, Ma. Luisa, *Desigualdad social y vivienda*, Ed. Club Universitario, Alicante, 2005, p. 12.

⁶¹⁵ Ver PISARELLO, Gerardo, *op. cit.*, p. 61.

⁶¹⁶ *Ídem.*

En el sistema regional europeo de protección de derechos fundamentales:

1. Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 8.1.);
2. Protocolo I del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 1);
3. Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 2.1.);
4. Carta Social Europea de 1961 (artículo 31).⁶¹⁷

Acerca del reconocimiento internacional del derecho humano a una vivienda digna, el Comité es contundente en señalar que: "...el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto es la más amplia, y quizás la más importante, de todas las disposiciones pertinentes."⁶¹⁸

Entre las características que debe englobar el derecho a la vivienda se encuentra según las observaciones relativas a la aplicación del pacto en materia de derecho a la vivienda: seguridad jurídica de la tenencia;⁶¹⁹ disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura;⁶²⁰ gastos soportables;⁶²¹ habitabilidad;⁶²² asequibilidad;⁶²³ lugar;⁶²⁴ adecuación cultural.⁶²⁵

⁶¹⁷ *Ídem.*

⁶¹⁸ *Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 3).*

⁶¹⁹ Sobre la tenencia de la tierra: "La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados." *Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 8 a)).*

⁶²⁰ Los servicios indispensables de una vivienda: "Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el

alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.” Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, *El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)*, (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 8 b)).

⁶²¹ Gastos personales o de hogar: “Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.” Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, *El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)*, (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 8 c)).

⁶²² Habitabilidad: “Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda (5) preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.” Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 4, *El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)*, (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 8 d)).

⁶²³ Asequibilidad: “La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.” Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, *El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)*, (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 8 e)).

⁶²⁴ Lugar: “La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.” Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, *El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)*, (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991). (par 8 f)).

⁶²⁵ Adecuación cultural: “La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la

La Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada, da cuenta del problema internacional de las personas en materia de tenencia de la tierra, por ello el Comité enfatiza la necesidad de: “protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas”⁶²⁶

El Comité admite que la expresión “desalojos forzosos” puede ser problemática, por ello determina que la comunidad internacional ha consensuado una definición genérica del término, así las cosas el Comité en la Observación:

...ha optado por la expresión "desalojos forzosos" sobre todo teniendo en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecían también de muchos de esos defectos. Tal como se emplea en la presente Observación general, el término "desalojos forzosos" se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.⁶²⁷

El Comité subraya que los Estados se encuentran obligados con fundamento en el párrafo 1 del artículo 2 a adoptar medidas legislativas conducentes para la promoción de los derechos protegidos por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, por lo que insiste en la generación de un sistema de protección eficaz,⁶²⁸ la legislación deberá regular

expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por qué se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.” *Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991).* (par 8 g)).

⁶²⁶ Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada, (par 1).

⁶²⁷ Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada, (par 3).

⁶²⁸ Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada, (par 9).

los siguientes aspectos: seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y tierras; las medidas deben ser congruentes con el pacto; regulación estricta de las circunstancias que admitan desalojos.⁶²⁹

Asimismo admite la cláusula de vulnerabilidad en lo que respecta al derecho a la vivienda en el que integra a: mujeres; niños; jóvenes; ancianos; pueblos indígenas; minorías étnicas y de otro tipo y grupos vulnerables.⁶³⁰

Como señaló el Comité la expresión desalojo forzoso es problemática, por ello establece que el desalojo forzoso solo es admitido en los siguientes casos:

...aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el Pacto y que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados.⁶³¹

Debida protección procesal y debido proceso, son garantías procesales que deben ser provistas en los procesos relativos a los desalojos forzosos, el Comité considera que el proceso de desalojo forzoso debe contemplar las siguientes garantías procesales:

- a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;
- b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;

⁶²⁹ *Ídem.*

⁶³⁰ Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada, (par 10). Pisarello expresa: “Del mismo modo, los tratados internacionales han modificado la percepción de los propios titulares del derecho. Por un lado, ya no sólo comprende a los individuos sino también a las familias y otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad: desde las mujeres y los niños hasta las comunidades y pueblos indígenas. Por otro lado, ya no sólo alcanza a los ciudadanos del estado en cuestión sino también, cada vez más, a los inmigrantes, a los residentes estables o a los miembros de minorías nacionales o culturales.” PISARELLO, Gerardo, *op. cit.*, p. 83.

⁶³¹ Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada, (par 14).

- c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas;
- d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas;
- e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;
- f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento;
- g) ofrecer recursos jurídicos;
- h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.⁶³²

El sistema internacional de las Naciones Unidas ha creado: el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), que sustituyó un anterior organismo que llevaba por nombre: Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat: “es el principal organismo de del sistema de las Naciones Unidas que se ocupa de esta situación. La Asamblea General le encomendó el mandato de promover la creación de centros urbanos sostenibles desde el punto de vista social y ecológico, con el objetivo de proporcionar una vivienda adecuada para todos.”⁶³³

El programa comprende dos campañas mundiales: Campaña mundial en pro de la buena gestión de los asuntos urbanos y la Campaña mundial de afianzamiento del derecho de tenencia de la tierra.

La Campaña mundial en pro de la buena gestión de los asuntos urbanos: “tiene por objetivo aumentar la capacidad local en materia de gestión pública urbana, es decir, de proporcionar una respuesta eficiente y eficaz a los problemas urbanos gracias a la labor que los gobiernos locales elegidos

⁶³² *Observación general N° 7: El derecho a una vivienda adecuada*, (par 15).

⁶³³ *ABC de las Naciones Unidas*, op. cit., p. 222. “el Programa tiene unos 95 proyectos y programas técnicos en 60 países, la mayoría de ellos en los países menos adelantados.”Ídem.

democráticamente y responsables realizan en colaboración con la sociedad civil.”⁶³⁴

La Campaña mundial de afianzamiento del derecho de tenencia de la tierra: “esta campaña parte de la idea de que el afianzamiento del derecho de tenencia de la tierra es fundamental para una estrategia sostenible en materia de vivienda y para la promoción de los derechos relativos a la vivienda. Con ella se pretende lanzar una estrategia de vivienda que promueva los derechos e intereses de los pobres y promover los derechos y el papel de la mujer en la elaboración de una política de vivienda eficaz.”⁶³⁵

ONU-Hábitat también conduce los siguientes programas: Programa de promoción de las mejores prácticas y formación de dirigentes locales; Programa sobre el Derecho a la Vivienda; Elaboración rápida de perfiles para la sostenibilidad; Programa de ciudades sostenibles; Programa de aplicación local del programa 21; Programa de ciudades más seguras; Programa de gestión urbana; Programa de abastecimiento de agua y saneamiento.

IV.VI Obligación en materia de empleo

La Organización de las Naciones Unidas ha instituido un organismo especializado en la protección de los derechos de los trabajadores: la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT es incluso anterior a las Naciones Unidas, fue creada por el Tratado de Versalles en 1919,⁶³⁶ y como acertadamente escribe Héctor Gros Espiell: “...ha tenido desde 1919 hasta hoy

⁶³⁴ *ABC de las Naciones Unidas, op. cit.*, p. 222.

⁶³⁵ *Ibidem.*, pp. 222-223.

⁶³⁶ La internacionalización de las relaciones laborales: “Esta misma triple perspectiva-humanitaria, política y económica- de la internacionalización normativa de las relaciones laborales, vinculada a la vía reformista es defendida por aquellos gobiernos europeos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX impulsaron iniciativas dirigidas en este sentido; muy significativas las propuestas lanzadas desde Alemania, Francia, Reino Unido o Suiza. Tras la conferencia intergubernamental de Berlín (1890), en la que por primera vez se debatió de modo oficial la posibilidad de adoptar una legislación internacional del trabajo, se da un paso más significativo tras la convocatoria y reunión, en Bruselas y en París, respectivamente, del Primer y del Segundo Congreso Internacional de Legislación del Trabajo (1897 y 1900).” BÓNET Pérez, Jordi, “Las relaciones laborales como objeto de reglamentación jurídica internacional: origen y evolución”, en BÓNET Pérez, Jordi, OLESTI Rayo, Andreu, *Nociones básicas sobre el régimen jurídico internacional del trabajo*, Huygens Editorial, Barcelona, 2010, p. 29.

una vida ininterrumpida que le ha permitido pasar por sobre la crisis de la Segunda Guerra Mundial, superar la desaparición de la Sociedad de Naciones, con la que estaba unida desde su nacimiento, pero de la que había ido paulatinamente independizándose, e incluirse luego en el sistema de las Naciones Unidas.”⁶³⁷ En 1945 la OIT cumple con las enmiendas a su constitución para poder integrarse como organismo especializado en el sistema de las Naciones Unidas.⁶³⁸

Hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la historia de los derechos humanos en la OIT se limitaba a la elaboración y promoción de normas. Durante los primeros quince años de posguerra, la OIT adoptó o actualizó casi todas sus normas relativas a los derechos humanos fundamentales, y sentó asimismo las bases para la elaboración de normas sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, al tiempo que iniciaba la labor en el terreno por medio de la cooperación técnica; en los últimos treinta años ha establecido vínculos más estrechos entre la acción normativa y la acción en el terreno.⁶³⁹

El marco jurídico de la OIT se desprende de su texto principal denominado: Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; asimismo la mencionada constitución cuenta con un Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo.

⁶³⁷ GROS Espiell, Héctor, *La Organización Internacional del Trabajo y los derechos humanos en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1978, p. 11.

⁶³⁸ La OIT antes de su incorporación al sistema de naciones unidas no había asumido la relación derechos de los trabajadores/derechos humanos desde el ángulo del sistema universal de derechos humanos: “aunque las normas del trabajo adoptadas antes de la creación de la OIT, o por la OIT a partir de 1919, tenían por objetivo la protección de los derechos de los trabajadores, casi nunca se enunciaban en términos de derechos como los que empezaron a utilizar las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Más bien hablaban en términos de obligaciones de los gobiernos para garantizar ciertos resultados o procesos. El hecho de que se tradujeran en una mayor protección de los derechos humanos rara vez aparecía reflejado en el propio instrumento, ni siquiera en los convenios fundamentales de la OIT sobre derechos humanos.” RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009*, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2009, p. 44.

⁶³⁹ *Ibidem.*, p. 45.

En el Preámbulo de su constitución, se hace referencia a la búsqueda de la justicia social; como objetivos generales para mejorar las condiciones de trabajo, que a grandes rasgos son: “los principios en los que la Organización se funda y los objetivos que ésta busca obtener,”⁶⁴⁰ como las siguientes líneas que aparecen en el Preámbulo:

...reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas.⁶⁴¹

La Constitución comprende 40 artículos relativos a la organización y funcionamiento de la OIT; prescripciones generales y disposiciones diversas. Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Reglamento de la conferencia internacional del trabajo, Que a su vez integra reglamento sobre cuestiones generales y Reglamento sobre cuestiones generales, la constitución tiene como objetivos:

1. La mejora de la calidad de vida y la promoción del pleno empleo en ocupaciones en las cuales los trabajadores puedan aplicar sus capacidades y contribuir al bienestar común, unido a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres para lograr este fin, y facilitando la formación y la movilidad de los trabajadores.

⁶⁴⁰ GROS Espiell, Héctor, *La Organización Internacional del Trabajo y los derechos humanos en América Latina*, op. cit., p. 17.

⁶⁴¹ Preámbulo, *Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo*, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2003.

2. La provisión a todos los trabajadores de salarios que constituyan un sustento adecuado, calculados de forma que se garantice la distribución justa entre todos de los frutos del progreso.
3. La reglamentación de las horas de trabajo, entre otras cosas estableciendo los límites de la jornada de trabajo y de los horarios semanales, que han de incluir períodos de descanso.
4. La protección de los niños, los jóvenes y las mujeres, lo cual implica la eliminación del trabajo infantil, así como el establecimiento de límites para el trabajo de los jóvenes, y la protección del bienestar infantil y de la maternidad.
5. La protección de los intereses económicos y sociales de los trabajadores empleados en el extranjero.
6. La adecuada protección de todos los trabajadores contra la enfermedad, la muerte o los accidentes derivados del trabajo.
7. La ampliación de la seguridad social con el fin de prever, para la vejez y la enfermedad, unos ingresos básicos a todos aquellos que necesiten dicha protección, así como una asistencia médica completa.⁶⁴²

Se les denomina normas internacionales del trabajo a los instrumentos normativos que son preparados por los miembros de la OIT, las normas comprenden una serie de principios y derechos básicos en el trabajo. Algunas de estas normas son convenios y recomendaciones.⁶⁴³ Es el sistema de las normas internacionales del trabajo: “las normas que adopta y el modo en que supervisa su aplicación, un sistema que suele calificarse como la piedra angular de la Organización. En estas normas se establecen medidas que deben adoptar o principios que han de respetar los gobiernos y otros actores en los principales ámbitos de acción de la OIT.”⁶⁴⁴ La Organización

⁶⁴² RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009, op. cit.*, p. 9.

⁶⁴³ La ratificación de los convenios es opcional: “Las negociaciones de la Comisión del Trabajo desembocaron finalmente en un acuerdo por el que se preveía la adopción tanto de convenios como de recomendaciones que serían sometidos a los órganos nacionales competentes para la adopción de medidas o la ratificación (en el caso de los primeros). La fórmula está lejos de garantizar cualquier aplicación, ya que la ratificación es opcional, pero el acuerdo exigió también el examen de cualquier nuevo instrumento por todos los Estados.” RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009 op. cit.*, p. 21.

⁶⁴⁴ *Ibidem.*, p. 20.

Internacional del Trabajo ha adoptado 188 convenios y 199 recomendaciones.⁶⁴⁵

En las normas internacionales del trabajo del OIT se cuenta con ocho convenios que son denominados fundamentales:

1. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87);
2. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98);
3. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29);
4. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105);
5. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138);
6. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182);
7. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100);
8. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).

La OIT también ha adoptado cuatro convenios denominados instrumentos "prioritarios", a estos convenios se les designa Convenios de gobernanza:

1. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81);
2. Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122);
3. Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129);
4. Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).

Recientemente la OIT adoptó la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa en el documento la Conferencia

⁶⁴⁵ *Ídem*. Entre los convenios adoptados por la OIT se encuentran los siguientes: "Sobre el trabajo forzoso (1930); sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948); sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949); sobre igualdad de remuneración (1951); sobre igualdad de remuneración (1951); sobre la discriminación (1958); sobre la edad mínima (1973); sobre las peores formas de trabajo infantil (1999)." *ABC de las Naciones Unidas, op. cit.*, pp. 295-296.

Internacional del Trabajo en Ginebra en el 2008 dejó patente que: “El contexto actual de la globalización, caracterizado por la difusión de nuevas tecnologías, los flujos de ideas, el intercambio de bienes y servicios, el incremento de los flujos de capital y financieros, la internacionalización del mundo de los negocios y de sus procesos y del diálogo, así como de la circulación de personas, especialmente de trabajadoras y trabajadores, está modificando profundamente el mundo del trabajo.”⁶⁴⁶

- a) proceso de cooperación e integración económicas;
- b) grandes desafíos en lo relativo a la desigualdad de ingresos, los altos niveles de desempleo y pobreza persistentes, la vulnerabilidad de las economías ante las crisis externas y el aumento tanto del trabajo no protegido como de la economía informal.⁶⁴⁷

El contexto de la globalización ha alcanzado al mercado laboral, la inversión, el comercio y los mercados de trabajo se están integrando, pero están avanzando tan aceleradamente por lo que el sistema multilateral de cooperación internacional tiene que hacer frente a una serie de desafíos como: normas equitativas para el comercio; las desventajas económicas, financieras y tecnológicas de los países menos desarrollados; los precios inestables de las mercancía y el acceso a mercados competitivos:

Estos cambios en las estructuras de trabajo y producción se reflejan en las pautas de pobreza y exclusión, con respecto a las cuales no cabe duda de que los avances son muy dispares. A pesar del crecimiento económico, el número total de personas en la pobreza disminuye escasamente, e incluso está aumentando fuera de China y de la India, tendencia que sin duda está siendo exacerbada por la crisis económica mundial que se estaba produciendo en el momento de escribir el presente libro. El desnivel entre el máximo y el mínimo de la escala de

⁶⁴⁶ *Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa*, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008, p. 5.

⁶⁴⁷ *Ídem*.

ingresos está aumentando tanto dentro de cada país como entre países, y el sector informal, junto con la persistencia del empleo precario e inestable, refuerza las pautas de exclusión. Superar estos problemas es un objetivo político central en gran parte del mundo, lo cual pone de manifiesto que la acción de la OIT en pro del empleo y del trabajo decente sigue teniendo sentido y es necesaria.⁶⁴⁸

La OIT después de su incorporación al sistema de las Naciones Unidas ha ido adaptando su marco normativo hacia la exigencia del discurso de los derechos humanos: “...en sentido más amplio, la expresión «derechos humanos» incluye todos los conceptos que conforman lo que la OIT denomina «trabajo decente». En las leyes internacionales de derechos humanos está firmemente asentada la idea de que todos tenemos derecho a una vida laboral digna.”⁶⁴⁹ Cada vez más normas internacionales de la OIT se entroncan con la normativa internacional de los derechos humanos:

Un argumento sólido para defender que la mayoría de las normas que establece la OIT pertenecen a la categoría de los derechos humanos es que los artículos 6 a 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adoptado en 1966, constituyen una reafirmación abreviada de las normas de la OIT adoptadas hasta ese momento. De hecho, esos artículos hacen referencia a una serie de temas relevantes para el ámbito del trabajo, y en concreto a los derechos relativos a las condiciones de trabajo y de vida (la seguridad y la salud en el trabajo, los salarios, el descanso y la protección de la familia). El pacto confiere el estatuto de derecho a todos ellos.⁶⁵⁰

Los temas que vinculan la legislación internacional de la OIT con los derechos humanos versan en: libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva; igualdad; el apartheid y la OIT; Territorios árabes

⁶⁴⁸ RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009*, op. cit., p. 38.

⁶⁴⁹ *Ibidem.*, p. 42.

⁶⁵⁰ *Ibidem.*, p. 43.

ocupados; género; trabajo forzoso u obligatorio; trabajo infantil; proteger y promover a ciertas categorías de trabajadores; pueblos indígenas y tribales. A continuación explicaremos porque estos temas tienen relación con el derecho humano al desarrollo:

La libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva, Convenios internacionales del trabajo números 87 y 98, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. En el Informe del Director General, titulado: *La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones extraídas*, se proporciona una definición sobre el derecho a la negociación colectiva: “El reconocimiento del derecho a la negociación colectiva es esencial para la representación de los intereses colectivos. Esta negociación se basa en la libertad sindical y da cuerpo a la representación colectiva. Además, puede desempeñar un papel importante para mejorar los resultados de las empresas, gestionar el cambio y desarrollar relaciones laborales armoniosas.”⁶⁵¹

La OIT guarda una importante aportación en la lucha por: “eliminar la discriminación y promover la igualdad en el mundo laboral,”⁶⁵² para lo cual introdujo el principio de la eliminación de la discriminación en el empleo y la vida profesional como un pilar de acción:

...el cambio fue radical tras la redefinición del mandato de la OIT en la Declaración de Filadelfia, que afirmaba claramente que «todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades». El Preámbulo de la Constitución enmendada mencionaba también el

⁶⁵¹ Informe del Director General, *La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones extraídas*, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo 97.ª reunión, 2008, Informe I (B), Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2008, p. 5.

⁶⁵² *La hora de la igualdad en el trabajo*, Informe Global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2003, p. 89.

«reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor»⁶⁵³

La OIT brindó asistencia técnica a Sudáfrica para eliminar la discriminación en el empleo tras la caída del régimen de apartheid.⁶⁵⁴

La acción concertada y cada vez más eficaz de la OIT contra el apartheid duró muchos años, y supuso el primer gran test de sus políticas de igualdad. Tras la victoria electoral en 1948 del Partido Nacional, que supuso el inicio de una época de intensa discriminación jurídica en Sudáfrica, la OIT se unió al resto de la comunidad internacional dirigiendo su atención al apartheid, al comienzo con las conclusiones de sus órganos de supervisión y participando en distintas reuniones.⁶⁵⁵

En lo que respecta a los Territorios árabes ocupados: “La acción de la OIT contra el apartheid constituyó un modelo parcial para su intento de proteger a los trabajadores de los territorios árabes ocupados bajo el estandarte general de la igualdad de trato, aunque con mucho menos éxito. La resolución de la Conferencia de 1974, que condenaba a Israel por el trato dispensado a estos trabajadores, provocó la notificación de retirada de los Estados.”⁶⁵⁶

Es evidente que el género, es uno de los temas prioritarios en materia de derecho al desarrollo, ello también aplica en el empleo, en lo que concierne respecto de los derechos de la mujer, los avances en materia laboral han sido graduales, se ha comenzado por la adopción de diversos convenios internacionales que han comenzad por adoptar el enfoque de género: Convenio

⁶⁵³ RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009, op. cit.*, p. 59.

⁶⁵⁴ *La hora de la igualdad en el trabajo, Informe Global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, op. cit.*, p. 90.

⁶⁵⁵ RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009, op. cit.*, p. 60.

⁶⁵⁶ *Ibíd.*, p. 62.

sobre igualdad de remuneración (núm. 100), adoptado en 1951; Convenio núm. 111, de 1958; el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122);

La OIT considera formas de trabajo forzoso u obligatorio y que continúan en la actualidad:

1. esclavitud y el secuestro;
2. participación obligatoria en proyectos de obras públicas;
3. trabajo forzosos en la agricultura y en zonas rurales remotas (sistemas de contratación coercitiva);
4. trabajadores domésticos en situaciones de trabajo forzoso;
5. servidumbre por deudas;
6. trabajo forzoso impuesto por los militares;
7. trabajo forzoso en el tráfico de personas;
8. aspectos del trabajo en los establecimientos penitenciarios y de la rehabilitación por medio del trabajo.⁶⁵⁷

En materia de trabajo infantil, la OIT ha avanzado considerablemente en la regulación de un problema que tiene especial importancia en materia protección de los derechos humanos:

En 1973, con la adopción del Convenio sobre la edad mínima (núm. 138), se abandonó la normalización sobre trabajo infantil por sectores en favor de un instrumento general que cubría a todos los niños en situación de empleo u ocupación. Dahlén considera la adopción de este Convenio como «parte de las estrategias para vencer o paliar el desempleo y el descontento social en tiempos de crisis económica y política».⁶⁵⁸

⁶⁵⁷ Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. *Alto al trabajo forzoso*, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2001, p. 2.

⁶⁵⁸ RODGERS, Gerry, LEE, Eddy, SWEPSTON, Lee, VAN DAELE, Jasmien, *La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009*, op. cit., p. 78.

La OIT también comprende una serie de normas dirigidas a proteger a ciertas categorías de trabajadores: “personas discapacitadas, categorías profesionales⁶⁵⁹ y migrantes.

Por lo que hace a los pueblos indígenas y tribales el Convenio No. 169 de la OIT, establece en el artículo 1 (1) y 1(2):

1(1) El presente Convenio se aplica: (a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; (b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.⁶⁶⁰

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.⁶⁶¹

La OIT considera que tienen la condición de pueblos tribales: “condiciones económicas, culturales, organización social y forma de vida que los distingan de los otros segmentos de la población nacional, por ejemplo en la forma de ganarse el sustento, el idioma, etc.; y tener tradiciones y costumbres y/o un reconocimiento legal especial.”⁶⁶²

⁶⁵⁹ *Ibidem.*, p. 79.

⁶⁶⁰ *Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía sobre el convenio Núm. 169 de la OIT*, Programa para promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Ginebra, 2009, p. 9.

⁶⁶¹ *Ídem.*

⁶⁶² *Ídem.*

Por pueblos indígenas la OIT entiende: “Continuidad histórica, es decir que son sociedades anteriores a la conquista o la colonización; conexión territorial (sus ancestros habitaban el país o la región); instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas (retienen algunas o todas sus instituciones propias).”⁶⁶³

Los Miembros reconocen, en el cumplimiento del mandato de la Organización, la importancia y el significado especiales de los derechos fundamentales, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.⁶⁶⁴

La OIT ha discutido el papel de la OIT para conseguir una globalización justa y no quedarse rezagada en distintas conferencias internacionales como: la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 1995, y la Cumbre Mundial 2005 de las Naciones Unidas.

Finalmente en el tema del empleo, se ha demostrado que los trabajadores mexicanos son vulnerables, según datos del PNUD en el informe del año 2014, las secuelas de la crisis económica del 2008 provocaron en México una pérdida aproximada de 75.000 empleos.⁶⁶⁵ Además de que México se encuentra entre los países con empleo más bajo y mayor incidencia de los trabajos no estándar (categoría 4), en el periodo medido entre 2007 y 2010.⁶⁶⁶

IV.VII Obligación de justa distribución de los ingresos (igualdad de oportunidades)

Esta dimensión del derecho al desarrollo también se encuentra en el elenco consignado en el artículo 8° de la Declaración, aunque abordaremos la

⁶⁶³ *Ídem.*

⁶⁶⁴ *Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, op. cit., p. 7.*

⁶⁶⁵ PNUD, *op. cit.*, p. 136.

⁶⁶⁶ *Ídem.*, p. 75.

dimensión en base a dos variables: obstáculos de carácter internacional a derecho al desarrollo y obstáculos internos al derecho al desarrollo. Como se ha insistido en el trabajo los procesos de globalización han generado una integración mundial de las economías cada vez más estrecha, favorable desde el enfoque de la universalidad de los derechos humanos pero que también genera desafíos, muchos de ellos se resienten mucho en el mercado laboral.

De allí que en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo la justa distribución de los ingresos haya merecido un sitio en el catálogo de medidas a las que los Estados son motivados para llevar a cabo en sus ámbitos internos, de tal manera que son muy puntuales los razonamientos de Gómez Isa en esta tesis: ...el derecho al desarrollo cuenta con importantes obstáculos en la esfera internacional, también en los propios países en desarrollo se levantan barreras que pueden llegar a hacer verdaderamente difícil una aplicación efectiva de este derecho.⁶⁶⁷

Entre los obstáculos de carácter internacional del derecho al desarrollo Gómez Isa propone que el desorden económico internacional es un obstáculo para la realización del derecho al desarrollo; considera que por ser un derecho emergente al que la literatura académica ha identificado con el nuevo orden internacional, Gómez Isa plantea una doble relación:

...se desprende una doble relación entre el derecho al desarrollo y el Nuevo Orden Económico Internacional. Por un lado, el actual orden económico internacional pasa a ser uno de los obstáculos más relevantes que tiene que superar el derecho al desarrollo en orden a su efectiva realización. Por otro, el derecho al desarrollo aporta nuevos enfoques y nuevas perspectivas al Nuevo Orden Económico Internacional: además de los aspectos estrictamente de contenido económico, el derecho humano al desarrollo permite introducir elementos de índole social, cultural, de respeto de los derechos humanos...en el esquema tradicional del Nuevo Orden Económico

⁶⁶⁷ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 224.

Internacional, contribuyendo, en cierta medida, a su humanización a la superación del marco exclusivamente económico.⁶⁶⁸

El segundo obstáculo que Gómez Isa incluye como obstáculo para la realización del derecho al desarrollo es: la carrera de armamentos que despliegan dos problemas transversales: “la existencia de una relación de competencia entre la carrera de armamentos y desarrollo”⁶⁶⁹ y “los países en desarrollo se encuentran entre las principales víctimas de la carrera de armamentos y de los procesos de militarización.”⁶⁷⁰

En el sistema de las Naciones Unidas se ha promovido iniciativas para el desarme como la Conferencia Internacional sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo efectuada en 1987.⁶⁷¹ Asimismo en 1999 se estableció un Grupo Directivo de Alto Nivel sobre Desarme y Desarrollo en la Secretaría de las Naciones Unidas.

El sistema de Naciones Unidas apoya una serie de iniciativas regionales y subregionales sobre desarme: desarme de África (Lomé, Togo), Asia y el Pacífico (Katmandú, Nepal) y América Latina y el Caribe (Lima, Perú), también colabora con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales regionales como: la Organización de la Unidad Africana; la Liga Árabe y la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo, se propuso que:

Al controlar o reducir la disponibilidad y el uso de los instrumentos de la violencia armada y los conflictos armados, las políticas y programas de

⁶⁶⁸ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 226.

⁶⁶⁹ *Ibidem.*, p. 232.

⁶⁷⁰ *Ídem.*

⁶⁷¹ Una breve introducción al término desarme: “Desde la primera guerra mundial el término desarme surgió en la literatura y viene siendo empleado desde entonces. En principio desarme puede ser descripto como una limitación de la capacidad militar con el propósito de prevenir la guerra y de crear condiciones para el mantenimiento de la paz internacional.” VALLE Fonrouge, Marcelo, *Desarme Nuclear. Regímenes internacional, latinoamericano y argentino de no proliferación*, Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme UNIDIR, Naciones Unidas, 2003, p. 5.

desarme pueden facilitar la reducción del gasto militar, aplacar las tensiones y fomentar la confianza en las relaciones internas e internacionales, ayudar a impedir el desarrollo de nuevas armas y los gastos que ello supone y disminuir los riesgos, la frecuencia y la gravedad de la violencia armada y los conflictos armados, con lo que mejora la estabilidad y se liberan recursos para otras actividades, como el desarrollo económico y social.⁶⁷²

En este orden de ideas Gómez Isa sugiere que el gasto militar o gasto en defensa: "...pueden tener efectos positivos en lo que concierne al crecimiento económico, pero supone desviar recursos económicos que resultan muy necesarios en campos como la sanidad, la educación, la satisfacción de necesidades básicas."⁶⁷³ En resumidas cuentas la relación que guarda con el desarrollo el gasto militar o en armamento es: "...una relación de tipo completamente competitivo."⁶⁷⁴

Los países en desarrollo son más vulnerables a los procesos de militarización, Gómez Isa describe: "en los últimos años se ha constatado que los países más pobres se han embarcado en importantes procesos de rearme, desviando una parte muy importante de sus exiguos recursos a la satisfacción de las necesidades básicas de la población a los gastos relacionados con el armamento."⁶⁷⁵

La carga excesiva de la deuda externa, también figura entre los obstáculos que Gómez Isa propone como reticentes para la realización del derecho al desarrollo: "...con un monto creciente de deuda externa al cual muchos países no pueden hacer frente, el problema de la carga de la deuda se ha convertido en uno de los escollos más significativos a la realización del

⁶⁷² *La relación entre desarme y desarrollo en el contexto internacional contemporáneo, Informe del grupo de expertos gubernamentales sobre la relación entre desarme y desarrollo*, Naciones Unidas, 2005, pp. 7-8.

⁶⁷³ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 234.

⁶⁷⁴ *Ibíd.*

⁶⁷⁵ *Ídem.*

derecho humano al desarrollo, dado que su pago “puede llegar a poner en peligro la propia existencia de un pueblo.”⁶⁷⁶

Es significativa la contribución de la Comisión de Derechos Humanos y de la Asamblea General de las Naciones Unidas para resaltar que la deuda externa no puede ser menoscabada como obstáculo para la realización del derecho al desarrollo, en esta tesitura Gómez Isa describe: “con posterioridad a la aprobación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Asamblea General de las Naciones Unidas han seguido volcando su atención a la deuda externa como obstáculo al disfrute efectivo del derecho al desarrollo, dedicándole a este tema resoluciones específicas.”⁶⁷⁷

Gómez Isa también clasifica como obstáculos del derecho al desarrollo los programas de ajuste estructural auspiciados por las instituciones de Bretton Woods que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional instituciones financieras del sistema de Naciones Unidas que han promovido desde su creación: “planes de estabilización y de ajuste por parte de los países deudores si querían seguir siendo destinatarios de fondos adicionales para su desarrollo.”⁶⁷⁸ Son los programas de ajuste estructural que se caracterizan por medidas como la deflación, la devaluación y la desregulación.⁶⁷⁹

Entre los aspectos menos favorecedores de estos programas se encuentran algunas evidencias que han sido seguidas de cerca por investigadores sociales y organismos internacionales de que estos programas son especialmente agresivos con los sectores más vulnerables de la sociedad, en este sentido Gómez Isa expone: “los costes económicos y sociales del ajuste y la estabilización han sido sufridos principalmente por los sectores más

⁶⁷⁶ GÓMEZ Isa, Felipe, El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, *op. cit.*, p. 236.

⁶⁷⁷ *Ibidem.*, p. 240.

⁶⁷⁸ *Ibidem.*, p. 241.

⁶⁷⁹ Y agrega Gómez Isa: “Los elementos más comunes a los programas de ajuste estructural y de estabilización aplicados a los países en desarrollo vienen caracterizados por lo que José Antonio Sanahuja ha denominado “la política de las 3 D: deflación, devaluación y desregulación.” *Ibidem.*, p. 242.

vulnerables de la sociedad, incrementando la pobreza y la vulnerabilidad, así como un deterioro progresivo del medio ambiente.”⁶⁸⁰

Por lo que hace a los obstáculos internos al derecho al desarrollo, Gómez Isa indica como el primero: la distribución desigual de los beneficios del desarrollo. Gómez Isa enfatiza que: “las desigualdades existentes en muchas ocasiones están arraigadas en el propio sistema, siendo un reflejo claro de las estructuras dominantes.”⁶⁸¹ No es casual que los principales ejemplos de estos procesos estructurales de desigualdad sean los pueblos indígenas, la mujer, las minorías y sectores más vulnerables de la sociedad, apunta Gómez Isa.⁶⁸²

El segundo obstáculo interno en la realización del derecho al desarrollo es la falta de participación en el proceso de desarrollo, en realidad es muy compleja porque se vincula con los derechos de participación y la propia declaración hace patente la estrecha relación desarrollo/participación, Gómez Isa indica algunos problemas estructurales que son los causantes de este abrumador escollo para la realización del derecho:

El problema es que la población ha sido vista más como un objeto del desarrollo que como un sujeto con capacidad para determinar y decidir, y en última instancia configurar, sus propias expectativas e intereses en el proceso de desarrollo. Como consecuencia de esta estrecha y miope perspectiva se han tratado de habilitar cauces apropiados para que los individuos y los grupos expresen sus opiniones y participen de una forma real y significativa en la propia realización de su derecho al desarrollo.⁶⁸³

Pero los procesos para convergir en participación en el proceso del desarrollo y por lo tanto de hacer efectivo el derecho humano al desarrollo, poco sirven si no están afianzados en instituciones democráticas, lo cual conlleva a reforzar una dimensión del derecho humano al desarrollo que ya se

⁶⁸⁰ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 246.

⁶⁸¹ *Ibidem.*, p. 251.

⁶⁸² *Ídem.*

⁶⁸³ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 253.

ha mencionado en los primeros capítulos de la tesis que nos ocupa y es que el derecho humano al desarrollo es un derecho para un contexto político democrático, es por ello que la declaración no omite señalar los derechos de participación, estas circunstancias permiten inferir una vez más el inmenso papel que la democracia puede ejercer en el desarrollo de los pueblos y sobre todo de las personas:

Esta falta de participación en el proceso de desarrollo está muy relacionada con la ausencia de una verdadera democracia política en muchos países en desarrollo, democracia que, para el concepto de participación que estamos manejando, es esencial. Es esta falta de madurez democrática el elemento que nos ayuda a explicar el hecho de que en muchos países todavía no se hayan instalado los principios básicos de un Estado de Derecho con un poder judicial de carácter independiente.⁶⁸⁴

El tercer obstáculo interno que compendia Gómez Isa son las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, este indicador sin duda es polémico, de entrada estamos de acuerdo con Gómez Isa cuando apuntala que: “allí donde se vulneran flagrantemente los derechos humanos fundamentales se hace muy difícil la plasmación del derecho al desarrollo en toda su integridad.”⁶⁸⁵

Entre las violaciones a los derechos humanos a las que hace referencia directa la declaración sobre el derecho al desarrollo se encuentran quizás las más graves y dolorosas que ocurrieron de manera sistemática en el siglo XX y algunas todavía se extienden ahora al siglo XXI, no olvidemos que el discurso de derechos humanos y la consiguiente lucha contra las violaciones a los derechos humanos, la estudiamos desde el enfoque universalista de los derechos humanos que hunde sus raíces en el derecho internacional de los derechos humanos de la posguerra, así las cosas tenemos una serie de

⁶⁸⁴ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 254.

⁶⁸⁵ *Ibídem.*, p. 255.

conductas que la declaración sobre el derecho al desarrollo menciona expresamente como destinatarias para ser desterradas como prácticas habituales en las relaciones humanas: colonialismo; neocolonialismo; apartheid; formas de racismo y discriminación racial; dominación y ocupación extranjeras; agresión; amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial; amenazas de guerra.

Para Gómez Isa resulta obvio clasificar al militarismo como un obstáculo interno más para la realización del derecho al desarrollo, y ciertamente es muy apropiado porque: “la militarización y todo lo que lleva aparejado, impregna casi todos los aspectos de la vida de una sociedad, incluyendo como no podría ser de otra forma, el desarrollo económico y social y el respeto de los derechos humanos.”⁶⁸⁶

Concretamente la distorsión que genera los procesos de militarización pretextando responder con el uso de la fuerza a la violencia solo propicia más violencia:

La solución, en la mayoría de las ocasiones, supone la famosa espiral de la violencia o círculo vicioso de la violencia, es decir, ante una situación de caos generalizado y desorden público suele surgir como respuesta una salida militar; ante ello, determinadas fuerzas sociales y políticas pueden optar por un enfrentamiento directo con la fuerza militar, lo que a su vez, desemboca en una respuesta aun más violenta y más represiva por parte del estamento militar, alimentando una imparable escalada de la violencia.⁶⁸⁷

El cuarto obstáculo interno que clasifica Gómez Isa para la realización del derecho al desarrollo es la falta de gobernabilidad.

⁶⁸⁶ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 257.

⁶⁸⁷ *Ídem*.

El quinto obstáculo interno para la realización del derecho al desarrollo es el crecimiento demográfico excesivo, al respecto son encomiables los esfuerzos internacionales como la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán en 1968; la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo; Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo celebrada en 1994.

Capítulo V

Obligaciones prospectivas del derecho al desarrollo

V.I. Obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos

Una de las principales características del derecho internacional de los derechos humanos es su textura abierta, al desarrollo progresivo de los derechos humanos, también se le denomina progresividad, en el derecho internacional de los derechos humanos se hace referencia a las obligaciones de progresividad de los derechos humanos. Esta obligación en el ámbito internacional ha sido engendrada por la práctica jurídica en los tratados internacionales de derechos humanos.⁶⁸⁸ La doctrina también las denomina obligaciones de progresiva realización: “el concepto reconoce la realidad de que el cumplimiento no puede ser alcanzado de la noche a la mañana y que los gobiernos deberán encarar limitaciones, particularmente encarecimiento de recursos y capacidad.”⁶⁸⁹

En este apartado es conveniente precisar en un aspecto en el que por metodología no se abundó en capítulos anteriores, y es el concerniente al carácter histórico de los derechos humanos, porque es debido a su naturaleza histórica, que se produce la idea del desarrollo progresivo de los derechos humanos. Para clarificar con más precisión lo apuntado, conviene detallar que en la teoría política internacional, los derechos humanos son producto de la historia, y ello se explica a través de tres derivaciones que pone de relieve Anthony Lang: evolutiva; pluralista y genealógica.⁶⁹⁰ A propósito de lo anterior, este reconocimiento del carácter histórico de los derechos humanos era reconocido por el jurista Gregorio Peces Barba quien mencionaba: “los

⁶⁸⁸ RAMCHARAN, Bertrand, *The fundamentals of international human rights treaty law, International Studies in Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 2011, p. 31.

⁶⁸⁹ FAKUDA-PARR, Sakiko, GREENSTEIN, Joshua, “Monitoring MDGs: A human rights critique and alternative”, LANGFORD, Malcolm, SUMNER, Andy, YAMIN, Alicia Ely, Cambridge University Press, United States of America, 2013, p. 443.

⁶⁹⁰ LANG, Anthony F., *International Political Theory. An Introduction*, Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2015, p. 76.

derechos fundamentales son un concepto histórico del mundo moderno que surge progresivamente a partir del tránsito a la modernidad.”⁶⁹¹

Si bien es cierto que existe un consenso en determinar que los derechos humanos se constituyen como un concepto histórico. La tesis no escapa a la controversia, al respecto expone Ishay que: “a través de los siglos, tradiciones políticas conflictivas han elaborado diferentes componentes de los derechos humanos o diferido sobre los elementos que tienen prioridad.”⁶⁹² Para Ishay los “múltiples significados”⁶⁹³ demuestran que los derechos humanos “reflejan el proceso de histórica continuidad y cambio;”⁶⁹⁴ proceso que adoptó sustancia con el paradigma que se asentó al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El estudio de los derechos humanos en perspectiva histórica, o mejor dicho, admitir que los derechos humanos se han formado como concepto a raíz de procesos históricos, no significa desvirtuar su significado actual, o atribuirle un argumento historicista o reduccionista. Antes bien, esta tesitura solo es concebible si se considera que la perspectiva histórica, hace las veces de una dimensión de los derechos humanos, la dimensión histórica, que más allá de las pretensiones eruditas sobre la historia o el origen de los derechos humanos, ha constituido las características de los derechos humanos, que son su universalidad; indivisibilidad; interdependencia y progresividad.⁶⁹⁵ En efecto, que en el capitulado precedente, ya se abordó el contenido de los mencionados principios, no obstante; la progresividad no solo se conforma como un principio de los derechos humanos, concierne, en relación con el contenido de los derechos humanos y particularmente por lo que atañe del derecho al desarrollo una obligación: la obligación del desarrollo progresivo de los derechos humanos.

⁶⁹¹ PECES-BARBA Martínez, Gregorio, “Introducción general,” en PECES-BARBA Martínez, Gregorio (Ed.), *Derecho positivo de los derechos humanos*, Colección Universitaria Editorial Debate, Madrid, 1987, p. 11.

⁶⁹² ISHAY, Micheline, *The history of human rights. From ancient times to the globalization era*, University of California Press, Los Angeles, 2008, p. 3.

⁶⁹³ *Ídem.*

⁶⁹⁴ *Ídem.*

⁶⁹⁵ PECES-BARBA Martínez, Gregorio, “La universalidad de los derechos humanos”, *Doxa*, 15-16, vol. II.

La universalidad de los derechos humanos según Peces Barba, plantea una formulación muy abstracta de los derechos, por lo que el tema de las obligaciones guarda especial importancia.⁶⁹⁶

Las obligaciones de progresiva realización, derivan de la pertinencia de “intentar determinar cuáles de las obligaciones de derechos humanos de los Estados son más urgentes, más inmediatas o más convincentes.”⁶⁹⁷

De manera que la estructura teórica del progresivo desarrollo del derecho internacional se orienta hacia “una evolución consciente y gradual del derecho internacional, hacia normas claras y vinculantes.”⁶⁹⁸ En tal sentido la progresividad en su significación de principio recoge dos bifurcaciones: “gradualidad y progreso.”⁶⁹⁹ No obstante, en este apartado, la progresividad no se abordará desde la perspectiva de principio sino bajo el esquema de obligación progresiva para la realización de los derechos humanos, aunque los procedimientos de realización; cumplimiento, implementación y evaluación de las obligaciones con sus subsecuentes planes, programas y medidas, requiere apelar constantemente al principio de progresividad de los derechos humanos.

Debe entenderse que el desarrollo progresivo de los derechos humanos, implica un desarrollo normativo e institucional. Ciertamente, la doctrina

⁶⁹⁶ En el artículo la universalidad de los derechos humanos, Gregorio Peces Barba enumera seis aspectos que representan a la universalidad de los derechos humanos: el requisito de ser humano; los derechos humanos no se circunscriben a un ámbito jurídico concreto; la denominación de derechos morales; están “desvinculados” de instituciones éticas; culturas históricas concretas y de escuelas filosóficas o religiosas; los seres humanos son agentes morales; como lo anterior supone una abstracción en la “formulación de los derechos” humanos, para concretarse se exige la generación de obligaciones generales. Emplea el término de “obligaciones para todos.” *Ibidem*, p. 616.

⁶⁹⁷ “Tries to identify whether some of the state’s humans rights obligations are more burning, more immediate or more compelling than some others.” SCHEININ, Martin, “Core rights and obligations”, SHELTON, Dinah (Editor), *The Oxford hand book of international humans rights law*, Oxford University Press, Great Britain, 2013, p. 536.

⁶⁹⁸ International Council of Human Rights Policy, *Beyond voluntarism. Human rights and the developing international legal obligations of companies*, Switzerland, 2002, p. 75.

⁶⁹⁹ VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, “Contenido esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles,” en CERVANTES Alcayde, Magdalena, EMMANUELLI, María Silvia, GÓMEZ Trejo, Omar, SANDOVAL Terán, Areli (Coords.), *¿Hay justicia para los derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2014, p. 205.

entiende por desarrollo progresivo de los derechos humanos los procesos de: “...expansión progresiva de la protección internacional de los derechos humanos.”⁷⁰⁰ No se debe confundir el desarrollo progresivo de los derechos humanos que se enfoca al aspecto técnico de producción de las normas, de uno de los contenidos principales de las normas de DIDH que son las obligaciones que el DIDH particularmente, confiere a los Estados de proteger y garantizar los derechos humanos.⁷⁰¹

Desde luego que entre los contenidos de los derechos humanos como se abordó en el capítulo 2, en el tema correspondiente a las responsabilidades de los Estados en cuanto al derecho al desarrollo, no hay duda de que los derechos humanos generan un elenco amplio de obligaciones para los Estados, siendo la fuente de ellas la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Para hacer más efectivo el cumplimiento de esta obligación general los Estados tienen que satisfacer una serie de obligaciones básicas: “Así, por ejemplo, en los derechos a la educación, a la salud o a la integridad personal, se tendrán obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover derechos humanos que estarán informadas por otras obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.”⁷⁰²

Debe insistirse que en el tema de las obligaciones de los derechos humanos, no debe confundirse el proceso de desarrollo progresivo de los derechos humanos, de las obligaciones de cumplimiento progresivo de los derechos humanos. Son dos conceptos distintos pero interdependientes. En el amplio catálogo de estándares internacionales de derechos humanos, los estándares cumplen la función de determinar los contenidos esenciales de los derechos humanos.⁷⁰³ Por lo que las obligaciones progresivas de realización de

⁷⁰⁰ Nikken, Pedro, *op. cit.*, p.

⁷⁰¹ “Under international law, obligations for human rights are primarily held by states. When states seek to implement these obligations in international law, they are required to impose duties on persons subject to their jurisdiction. Duties to respect the right of other persons and duties to contribute to the common welfare make it possible for the state to assist and to provide in ways which enable everyone to enjoy their economic, social and cultural rights.” EIDE, Asbjørn, “Economic, social and cultural rights as human rights,” *op. cit.*, p. 175.

⁷⁰² VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, “Contenido esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles,” *op. cit.*, p. 205.

⁷⁰³ “El fortalecimiento de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos, no sólo como última instancia de reclamo cuando han fracasado los sistemas de administración de

los derechos humanos, a partir de la estandarización internacional de las obligaciones de los estados, determina principios generales que guiarán a los Estados para la realización progresiva, y consiguientemente para realizar la obligación de cumplimiento.⁷⁰⁴ Estas obligaciones son subsecuentes con las obligaciones de garantía de asequibilidad; disponibilidad; accesibilidad y aceptabilidad.

En cuanto a las bases en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el desarrollo progresivo, de forma genérica se desprenden comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el preámbulo constituye la fuente declarativa del principio de progresividad de los derechos humanos al formular la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como:

...ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.⁷⁰⁵

En efecto, la declaración emplea la denominación de medidas progresivas enfocadas en los dos grandes ámbitos que son el nacional y el internacional para el reconocimiento y aplicación de los derechos humanos contenidos en la declaración; como ya se tuvo oportunidad de señalar en lo concerniente a la validez jurídica de la declaración universal de los derechos

justicia nacionales, sino como un ámbito para establecer estándares uniformes en relación con los derechos consagrados en los tratados. Estos estándares serían aplicados posteriormente por los sistemas de justicia nacionales, y contribuirían a fortalecer las instituciones democráticas a nivel local.” Ver: ABRAMOVICH, Victor, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo,” *Revista de la CEPAL*, Número 88, abril 2006, Santiago de Chile, p. 49.

⁷⁰⁴ DE SCHUTTER, Olivier, *International human rights law*, 2ª ed., Cambridge University Press, United Kingdom, 2014, p. 527.

⁷⁰⁵ Preámbulo, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, op. cit.

humanos, esta no se constituyó como un texto convencional de carácter vinculante.

La obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos, en la normativa internacional de los derechos humanos, se consignó de forma convencional en el PIDESC, artículo 2: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”⁷⁰⁶ Retornaremos a este precepto posteriormente en virtud de que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo vincula los contenidos del derecho al desarrollo con las obligaciones del PIDESC.⁷⁰⁷

Según Pedro Nikken es posible observar que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, formuló una instauración progresiva⁷⁰⁸ de los derechos humanos al contemplar, también en el preámbulo la consideración ue expresan la realización de “medidas propicias” para la protección de los derechos del hombre, en los regímenes nacional e interno en el ámbito del sistema interamericano de los derechos humanos:

...Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución;

...Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el

⁷⁰⁶ Artículo 2, *Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, op. cit.

⁷⁰⁷ *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, op. cit.

⁷⁰⁸ NIKKEN Pedro, op. cit., p. 79.

campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias.⁷⁰⁹

En el ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos en el Pacto San José, en el capítulo III, sobre los derechos económicos, sociales y culturales estatuye en el artículo 26: el desarrollo progresivo:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.⁷¹⁰

Por otra parte en el sistema europeo de protección de los derechos humanos, en el preámbulo se contempló en el preámbulo la enunciación de una “instauración progresiva” de los derechos humanos:

Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ella enunciados;

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.⁷¹¹

⁷⁰⁹ Preámbulo, *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*, op. cit.

⁷¹⁰ Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José, artículo 26.

⁷¹¹ Preámbulo, *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*, op. cit.

Otra de las bases normativas que despliegan una progresividad intencionada⁷¹² se encuentra en la Carta Social Europea que recoge en la parte I: “Las Partes reconocen como objetivo de su política, que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios[...].”⁷¹³

En el Caso Acevedo Buendía y otros la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) estimó que los derechos humanos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, son interdependientes y no guardan jerarquía entre sí, arguyendo de esto modo un concepto integral de los derechos humanos, que los hace exigibles frente a las autoridades competentes. La CIDH estimó que la aprobación del artículo 26 en la Convención Americana de Derechos Humanos tuvo el propósito de concederles a estos derechos (económicos, sociales y culturales) la “máxima protección posible.”⁷¹⁴ Hizo un recuento de que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha presentado sendos pronunciamientos por la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Constata que esté “desarrollo progresivo” se da en el contexto de una necesaria flexibilidad aplicable frente a los presupuestos de plazo y modalidades.

Es en resumidas cuentas según el criterio de la CIDH una obligación que el Estado tiene esencialmente, aunque no la considera exclusiva de acoger providencias; medios y elementos necesarios para dar respuesta a las exigencias en esta clase de derechos, indica que la obligación general de protección de estos derechos y por ende el desarrollo progresivo de los derechos humanos depende siempre de la disponibilidad de los recursos económicos y financieros, para poder cumplir con los compromisos internacionales adquiridos. La CIDH también estimó que la implementación progresiva de las medidas para la protección de los derechos económicos,

⁷¹² NIKKEN, Pedro, *op. cit.*, p. 76.

⁷¹³ *Carta Social Europea*.

⁷¹⁴ Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú Sentencia de 1 de julio de 2009, *op. cit.*

sociales y culturales podría ser objeto de rendición de cuentas, dejó constar la posibilidad de que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en estas materias pudiera ser exigido “ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.”⁷¹⁵ La CIDH contempló que cláusula de no regresividad es un deber que consiste en la prohibición de: “medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho.”

Hizo mención de que en base a los criterios proporcionados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones las medidas que ostente un carácter regresivo deberán tramitarse de manera esmerada y justificando plenamente su pertinencia. Alega que está cláusula solo podrá ser válida su justificación en el argumento “del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos” disponibles para el Estado. Por lo que colige que en base de los argumentos proporcionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda medida regresiva es conveniente que sea evaluada para revisar si esta medida regresiva guarda compatibilidad con la Convención Americana, aduciendo razones de “suficiente peso”. De este modo concluye que es viable justificar la regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.⁷¹⁶

En su justa dimensión la obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos, prevista en el artículo 26 de la Convención es según este criterio reseñado de la CIDH un compromiso consistente en: “la adopción de providencias, especialmente económicas y técnicas,” con el requisito de implementar las obligaciones en la medida de los recursos disponibles (disponibilidad), la implementación puede ser de tipo legislativa o por otros medios apropiados, para que de este modo se logren: “progresivamente la plena efectividad de ciertos derechos económicos, sociales y culturales.”⁷¹⁷

La obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos del derecho humano al desarrollo deriva del principio de progresividad, que en su

⁷¹⁵ Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú Sentencia de 1 de julio de 2009, op. cit.

⁷¹⁶ *Ídem.*

⁷¹⁷ *Ídem.*

momento asentamos que consiste en un principio desplegado en dos dimensiones, una de ellas, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos reconocido en los diversos textos internacionales de los derechos humanos, de los que emana como principio de progresividad de los derechos humanos y de esta suerte deriva una obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos, la siguiente dimensión se explica a la luz del derecho constitucional mexicano, el artículo 1° de la constitución mexicana reconoce el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que es viable manifestar que la obligación de desarrollo progresivo de los derechos que es aplicable en este supuesto al derecho humano al desarrollo.

En este contexto, es clave entender que la obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos que recoge el derecho al desarrollo debe interpretarse de conformidad con el principio o cláusula de progresividad consagrado en los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos de 1966, lo anterior se sostiene de acuerdo con la definición que proporciona el profesor Milan Bulajić del derecho humano al desarrollo:

El derecho al desarrollo es al mismo tiempo un derecho humano independiente y un prerequisite para el disfrute de otros derechos humanos. Se puede ver, tanto para los individuos como para los Estados, como un derecho de acceso a los medios necesarios para la realización de los derechos humanos tal como se definen en los instrumentos internacionales, tales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como corolario del derecho a la autodeterminación.⁷¹⁸

En sentido amplio la obligación de progresividad de los derechos humanos, inherente al derecho humano al desarrollo deriva de la incorporación del principio de progresividad al derecho al desarrollo, que denota la realización

⁷¹⁸ BULAJIĆ, Milan, "Principles of international development law: the right to development as an inalienable human right," *op. cit.*, p. 359.

progresiva de los derechos humanos, este principio de progresividad, que se traduce en una obligación del derecho humano al desarrollo correspondiente a los Estados, como principales obligados, proviene como ya se mencionó en el inicio del tema que nos ocupa de un mandato de instauración progresiva de los derechos humanos desplegado desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta la aprobación de los dos Pactos de 1966. Nótese que a su vez, la adopción de estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se inscribe en los procesos de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, es en estos procesos en los que se cierne la génesis del derecho humano al desarrollo.

Esta obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos, requiere para la realización de los objetivos del derecho humano al desarrollo efectuarse de conformidad con los pactos internacionales de 1966, primeros depositarios del principio de progresividad de los derechos humanos en el ámbito internacional, que después se trasladaría a los derechos humanos ulteriores.

Se afirma, con justa razón que el derecho al desarrollo se relaciona de forma directa con los derechos de segunda generación y que su interpretación no puede ser aislada de del PIDCP y del PIDESC, conforme al artículo 9.2 de la Declaración sobre el derecho al Desarrollo que mandata: “Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales de derechos humanos.”⁷¹⁹

Originariamente el PIDESC en 1966 retomó el compromiso de la obligación progresiva de los derechos humanos en el artículo 2 del mencionado

⁷¹⁹ Artículo 9.2, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, op. cit.

texto convencional. La noción de progresividad de los derechos humanos se interpreta con relación al principio de no regresión de los derechos humanos.⁷²⁰

Una interpretación restrictiva del principio de progresividad de los derechos humanos los restringiría únicamente a los derechos de segunda generación, esto es, circunscritos en el elenco de los derechos económicos, sociales y culturales, contrariamente no es así, pues los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.⁷²¹ Esta fue la reiteración en la Declaración de Viena de 1993.⁷²² La universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos son los principios más recurrentes porque imprimen el carácter armónico de los derechos humanos, de ahí que tales principios contribuyan no solo para fortalecer la viabilidad del principio de progresividad de los derechos humanos, sino además para robustecer la pertinencia de una obligación en materia de desarrollo progresivo de los derechos humanos. Esto significa que los derechos humanos no solamente son progresivos, como signo de identificación, sino que de su progresividad se desprende una auténtica obligación por parte de los Estados, es decir que se constituye una relación jurídica respecto de los titulares de los derechos. Y esto, es extensivo para efectos del derecho humano al desarrollo.

El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) tiene la facultad de vigilar la aplicación del PIDESC, ha formulado en un significativo número de observaciones concluyentes en los periodos de sesiones observaciones y comentarios sobre la aplicación del PIDESC, pronunciando criterios en materia de la progresividad de los derechos humanos. Es significativo que entre sus conclusiones el CESCR haya determinado que el deber de los Estados de realizar progresivamente los

⁷²⁰ SHELTON, Dinah L., *Regional protection of human rights*, Oxford, United States of America, 2010, p. 211.

⁷²¹ "Las divergencias son profundas y de poco valen las fórmulas diplomáticas con las que se ha intentado, en la documentación, superar las distancias entre las orillas opuestas. Una de esas fórmulas habla de indivisibilidad e interdependencia. Como slogan que sirve para aplacar la discusión dejando las cosas tal como estaban. En realidad, los problemas perduran y los choques políticos e ideológicos tan sólo se postergan, para reproducirse con mayor aspereza a la primera ocasión." CASSSESE A., *Los derechos humanos en el mundo contemporáneo*, op. cit., p. 72.

⁷²² Párrafo 1.5., *Declaración y Programa de Acción de Viena*, 25 de julio de 1993.

derechos económicos, sociales y culturales, existe independientemente del incremento de los recursos.⁷²³ Según el criterio adoptado por el CESCR La realización progresiva que reconoce el pacto, no es justificación para eludir obligaciones inmediatas.⁷²⁴ El CESCR ha manifestado la progresividad de derechos sociales tales como el derecho a la educación superior gratuita;⁷²⁵ enseñanza obligatoria y gratuita para todos;⁷²⁶ derecho a la vivienda;⁷²⁷ derecho a la salud.⁷²⁸

El Comité, aunque desea expresar su pleno apoyo a estas propuestas, quisiera señalar que, si no se integran los derechos económicos y sociales en el proyecto de Carta en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos, se dará una señal regional negativa que sería altamente perjudicial para la plena realización de todos los derechos humanos en los planos nacional e internacional y se consideraría necesariamente un retroceso por cuanto infringe las obligaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En tal caso, el Comité tendría quizá que plantear esta cuestión, cuando examine los informes de los Estados Partes, como una violación de la obligación contraída en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, a saber, "lograr

⁷²³ [265], *Report on the fourth session (15 January-2 February 1990)*, Supplement 3, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations, New York, 1990.

⁷²⁴ [496], *Ibidem*.

⁷²⁵ [126], *Report on the sixth session (25 November-13 December 1992)*, Supplement 3, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations, New York, 1992; [246] Informe sobre el cuarto período de sesiones (15 de enero a 2 de febrero 1990), 1990; [126], Informe sobre el sexto período de sesiones, (25 de noviembre a 13 de diciembre de 1991), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

⁷²⁶ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1/Add.74, 6 de diciembre de 2001.

⁷²⁷ [24], Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1994/15, 19 de diciembre de 1994

⁷²⁸ [361], "El Comité insta al Estado Parte a que continúe sus esfuerzos para hacer frente a los problemas que amenazan a la salud, y que progresivamente destine recursos específicamente a los servicios de salud. El Comité pide al Estado Parte que, en su segundo informe periódico, facilite información sobre la forma de aplicar las leyes y políticas adoptadas recientemente en materia de salud. El Comité también desearía contar con estadísticas sobre los progresos logrados por el Gobierno en sus esfuerzos en favor del ejercicio del derecho de su población a la salud, y que presente estadísticas comparativas en relación con la información proporcionada en su informe inicial." *Informe sobre los Períodos de Sesiones Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto, (25 de abril a 12 de mayo de 2000, 14 de agosto a 1.º de septiembre de 2000 y 13 de noviembre a 1.º de diciembre de 2000)*, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Suplemento N.º 2, Naciones Unidas, Nueva York, 2001.

progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos" reconocidos en dicho Pacto, es decir, la adopción de medidas encaminadas a la realización progresiva y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.⁷²⁹

En sentido estricto, la obligación de desarrollo progresivo del derecho humano al desarrollo deriva de una interpretación extensiva del artículo 8.1 y del artículo 10 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, el primer precepto mandata:

Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.⁷³⁰

Por su parte, en un sentido amplio, el artículo 10 obliga a la adopción de: "...medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional."⁷³¹

Una vez ya revisitado lo relativo a las bases genéricas de la obligación del desarrollo progresivo de los derechos humanos, nos referiremos de forma específica a la obligación de progresividad que se desprende en el derecho al desarrollo deriva de la interpretación de los siguientes aspectos, el primer elemento que permite distinguir la obligación progresiva del derecho al desarrollo se encuentra en el preámbulo de la declaración, concretamente en el tercer párrafo que manifiesta una consideración de la Asamblea General:

⁷²⁹ [4], *Ibídem*.

⁷³⁰ Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 8.1., *op. cit.*

⁷³¹ Artículo 10, *Ibídem*.

“Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo orden económico internacional.”⁷³² A continuación procederemos a exponer de forma muy metodológica y con suma precaución con el objeto de no recurrir en digresiones innecesarias los argumentos que explican la relación entre derecho al desarrollo y nuevo orden económico internacional y que responden al basamento sobre el que se ha fundamentado el estado del arte de este derecho.

La relevancia que guarda la noción de nuevo orden económico internacional, para los derechos humanos y por supuesto en relación con el derecho al desarrollo, descansa en unas consideraciones muy sencillas. Una de ellas, que el derecho al desarrollo se inscribe en el campo temático del derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez ha derivado del progresivo desarrollo del derecho internacional, sin embargo, esto corresponde a otro tema de estudio que por razones de método no se abordará en la presente investigación, aunque si dedicaremos algunas líneas para explicar la relación entre derecho humano al desarrollo, nuevo orden económico internacional y obligación de desarrollo progresivo de los derechos humanos.

Probablemente la referencia inmediata sobre el “nuevo orden económico internacional,” provoque la idea de pensar una interpretación economicista y reduccionista del derecho al desarrollo, y no es así; ciertamente se formula como una noción demasiado abstracta, como afirma Héctor Cuadra:

Bordar sobre el nuevo orden económico internacional es construir una utopía – en el sentido estricto de la palabra-. Para poder irlo perfilando se tiene que detectar y hacer un censo de los problemas existentes; estudiarse igualmente las causas de dichos problemas y establecer las principales relaciones estructurales y funcionales entre los mismos;

⁷³² *Preámbulo, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, op. cit.*

visualizar las alternativas más idóneas –óptimas y subóptimas- para resolverlos.⁷³³

Las acciones orientadoras para la instauración de un nuevo orden económico internacional se formularon alrededor de la década de los setenta encabezadas por Naciones Unidas, mediante la adopción de algunos textos declarativos, de índole de *soft law*, encaminados para auxilias a los nuevos estados en el acceso de las condiciones económicas que les permitiera ser competitivos en la economía internacional, efectivamente que no se puede dejar de lado que esto fue influenciado por la internacionalización de las relaciones económicas y la globalización, entre los textos adoptados los más significativos fueron la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, adoptada por conducto de la Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General de Naciones Unidas; el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la Carta de derechos y deberes económicos de los Estados de 1974. Por su parte, la Declaración en comento, manifestó que el nuevo orden económico internacional se basaría en: "...la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados, cualesquiera sean sus sistemas económicos y sociales."⁷³⁴ Se debe reconocer

⁷³³ CUADRA, Héctor, "El derecho internacional y el nuevo orden económico internacional," en SOBERANES F., José Luis (Coord.), *Comunicaciones mexicanas al x congreso internacional de derecho comparado (Budapest, 1978)*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1980, p. 47.

⁷³⁴ *Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, Resolución 3201 (S-VI)*, Asamblea General de Naciones Unidas, 1º de mayo de 1974. a) Igualdad soberana de los Estados; libre determinación de todos los pueblos; inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la fuerza; integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados; b) Amplia cooperación entre todos los Estados miembros de la comunidad internacional basada en la equidad; c) Plena y efectiva participación, sobre una base de igualdad, de todos los países en la solución de los problemas económicos mundiales; d) El derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que considere más apropiado para su propio desarrollo; e) Soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; f) el derecho de los Estados a la restitución de sus recursos naturales; g) reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas transnacionales; h) derecho de los países a recuperar el control de sus recursos naturales y de sus actividades económicas; i) asistencia a los países en desarrollo; j) establecimiento de relaciones justas y equitativas en los precios de las materias primas; k) asistencia activa a países en desarrollo sin condiciones políticas ni militares; l) garantía del progreso de los países en desarrollo; m) carácter competitivo de los recursos naturales; n) trato preferencial y sin reciprocidad a los países en desarrollo en esferas de cooperación económica internacional; o) condiciones favorables para la transferencia de recursos financieros para países en desarrollo; p) acceso a los adelantos de ciencia y tecnología; q) fin del despilfarro de los recursos naturales; r) recursos

que inicialmente todas estas acciones formuladas para el progreso económico y social se dieron en un contexto mediado según las expresiones de Juste Ruiz por: "...la emergencia de nuevos Estados que accedieron a la vida internacional en condiciones precarias como resultado del proceso descolonizador."⁷³⁵

En realidad el nuevo orden económico internacional aparece una visión demasiado restringida, insuficiente para abarcar la complejidad de las relaciones sociales y económicas, los redactores de la declaración fueron conscientes de ello, aunque tampoco supieron ser demasiado explícitos, en el preámbulo al manifestar: "*Considerando* que, conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciados en esa Declaración."⁷³⁶

Nos identificamos más con la postura de Philip Alston quien reitera: "el derecho al desarrollo sirve para recalcar la necesidad de un nuevo orden internacional, tanto en términos económicos, como en términos sociales y culturales."⁷³⁷

En una resolución reciente aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, la resolución 27/2, se han confirmado los principios del derecho al desarrollo: "Poniendo de relieve que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son universales, indivisibles, independientes y están relacionados entre sí."⁷³⁸

a la causa del desarrollo; s) medidas individuales y colectivas de cooperación económica, comercial, financiera y técnica mutua entre los países en desarrollo; facilitación del papel que las asociaciones de productores pueden desempeñar. *Ídem*.

⁷³⁵ JUSTE Ruíz, José, "El desarrollo sostenible y los derechos humanos," en RODRÍGUEZ Carrión, Alejandro, PÉREZ Vera, Elisa (Coord.), Soberanía del Estado y derecho internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Tomo II, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, España, 2005, p. 758.

⁷³⁶ *Preámbulo, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, op. cit.*

⁷³⁷ ALSTON, Philip, "Prevention versus cure as a human rights strategy," en *Development, human rights and the rule of law, Report of a Conference held in the Hague on 27 april – 1 may 1981, convened by the International Commission of Jurists*, Pergamon Press, Great Britain, 1981, p. 99.

⁷³⁸ Consejo de Derechos Humanos, *Resolución A/HRC/RES/27/2*.

Porque es pertinente conceder viabilidad y certidumbre jurídica a las obligaciones progresivas que derivan de la aprobación y ratificación de los pactos y compromisos internacionales, es que se han establecido mecanismos de acción y seguimiento, es en esa línea que se inscriben los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs en inglés) y (ODM en español).

La adopción de la Declaración del Milenio del 2000,⁷³⁹ la Cumbre del Milenio, la Conferencia Mundial del 2005, la cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2010, se establecieron los acuerdos para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ocho objetivos: erradicar la extrema pobreza⁷⁴⁰ y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; mejorar la salud materna; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

⁷³⁹ En la declaración del milenio, se reconocieron los valores fundamentales para el siglo XXI: libertad; igualdad; solidaridad; tolerancia; respeto de la naturaleza; responsabilidad común. Por el valor de la libertad: Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular.” En el valor de la igualdad: “No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.” La solidaridad: “Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.” La tolerancia. “Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de la humanidad. Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones.” El respeto de la naturaleza. “Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las incommensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes.” Responsabilidad común: “La responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. Por ser la organización más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto.” Declaración del desarrollo del milenio.

⁷⁴⁰ En el tema de pobreza según el informe del PNUD 2014, México se encuentra en la categoría en la que las personas de edad avanzada que para el conjunto el población y también más elevada entre las mujeres que entre los hombres, véase PNUD, *op. cit.*, p. 78.

En el Informe del Secretario General: Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI:

No obstante, las Naciones Unidas son más que un mero instrumento. Como indica claramente la Carta, el objeto de las Naciones Unidas era introducir principios nuevos que influyeran positivamente en el desarrollo diario de las relaciones internacionales. Ya en el Artículo 1 de la Carta se definen nuestros propósitos: lograr por medios pacíficos el arreglo de controversias; realizar la cooperación en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario; y promover en general un comportamiento acorde con los principios de la justicia y del derecho internacional. En otras palabras, aparte de las tareas prácticas que estén llamadas a realizar, las Naciones Unidas tienen el propósito declarado de transformar las relaciones entre los Estados y los métodos por los que se gestionan los asuntos mundiales.⁷⁴¹

El artículo 1 de la Constitución mexicana asigna a todas las autoridades las cuatro clases de obligaciones generales⁷⁴² que son: “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.”⁷⁴³ En este artículo también se integra la concepción de que estas obligaciones se deberán suscribir de conformidad con los principios de “universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”⁷⁴⁴

V.II Obligación de medidas progresivas contra la violación de los derechos humanos

En el preámbulo de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, los redactores fieles al propósito de la naturaleza del derecho, vincularon la declaración con los instrumentos normativos internacionales atinentes a la descolonización; prevención de discriminaciones; mantenimiento de la paz y

⁷⁴¹ Naciones Unidas, Asamblea General, *Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI Informe del Secretario General*, 27 de marzo de 2000, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan004567.pdf>.

⁷⁴² SERRANO, Sandra, VÁZQUEZ, Daniel, *op. cit.*, p. 62.

⁷⁴³ Artículo 1, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, *op. cit.*

⁷⁴⁴ *Ídem*.

seguridad internacionales y en fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de San Francisco, aunque esta última materia concierne principalmente al sector temático del nuevo orden económico internacional y corresponde a otra gran dimensión del desarrollo no solamente como derecho humano, sino en su manifestación de “proceso global económico, social, cultural y político,”⁷⁴⁵ de este modo en el preámbulo textualmente se manifiesta:

Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta.⁷⁴⁶

Se corresponde con una característica particular del derecho internacional de los derechos humanos consistente en el desarrollo progresivo de los derechos humanos, mismo que no debe confundirse con la obligación de realización progresiva de los derechos humanos. El desarrollo progresivo de los derechos humanos es un proceso de generación de las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Es así como fue sucediéndose el magno proceso de codificación de textos convencionales y de *soft law* de los derechos humanos de los que se desprendió en su momento la adopción particular de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como una acción necesaria para aterrizar las necesidades del nuevo orden económico internacional, que en este tema solo interesa de forma transversal.

⁷⁴⁵ Preámbulo, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, *op. cit.*

⁷⁴⁶ Preámbulo, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, *op. cit.*

Sucesivamente en la declaración se continuó reafirmando la pertinencia de vincular desarrollo con la obligación de proveer de medidas progresivas contra las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos, entre estas violaciones nuevamente se manifiesta que son el resultado de los procesos colonialismo; neocolonialismo; *apartheid*; racismo y discriminación racial; dominación y ocupación extranjeras; agresión y amenazas contra la soberanía nacional, unidad nacional, integridad territorial; amenazas de guerra:

Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones tales como las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el *apartheid*, todas las formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, y las amenazas de guerra, contribuiría a establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad.⁷⁴⁷

Es en el artículo 5° de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo es el fundamento de esta obligación prospectiva que hemos denominado medidas progresivas contra la violación de derechos humanos:

Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por situaciones tales como las resultantes del *apartheid*, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.⁷⁴⁸

⁷⁴⁷ Preámbulo, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, *op. cit.*

⁷⁴⁸ Artículo 5, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, *op. cit.*

Contrario a la opinión de Gómez Isa, el articulado de la declaración que en el derecho al desarrollo reitera la dicotomía derechos humanos/desarrollo, no solo denota: “el vínculo indisoluble entre el desarrollo y el resto de los derechos humanos;”⁷⁴⁹ la declaración constituye en la interrelación entre este y demás articulado una obligación prospectiva en materia de medidas progresivas contra las violaciones masivas y patentes de derechos humanos, que permite que se pueda admitir la expresión de Isabella D. Bunn quien propone la noción: titulares de obligaciones en virtud del derecho al desarrollo; esto es bajo los auspicios de la (DNUDR).⁷⁵⁰

Esta obligación en el marco de las jurisdicciones nacionales se extiende en este tema hacia la formulación de políticas públicas nacionales según lo dispuesto en el artículo 2.3⁷⁵¹ de emprender medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos; estas violaciones como se ha insistido pueden adquirir por desgracia numerosas expresiones que se han tipificado en diferentes instrumentos normativos de derechos humanos internacionales a fin de ser eliminadas, erradicadas y castigadas, las conductas de violación graves que desglosa la declaración y que son las que corresponden a este apartado se interrelacionan en conductas como: apartheid; formas de racismo y discriminación racial; colonialismo; dominación y ocupación extranjeras; agresión; injerencia extranjera; amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial; amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.⁷⁵²

No es posible descartar la relevancia que guarda el tema concerniente a las violaciones de derechos humanos, pues el resultado de la constitución de organismos internacionales de gobernanza como Naciones Unidas y sus agencias, es en parte, el resultado de un contexto de violaciones graves de

⁷⁴⁹ GÓMEZ Isa, Felipe, El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional, op. cit., p. 177.

⁷⁵⁰ BUNN, Isabelle D., op. cit., p. 111.

⁷⁵¹ Artículo 2.3, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, op. cit.

⁷⁵² Artículo 5, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, op. cit.

derechos humanos.⁷⁵³ A continuación evocaremos algunos detalles sobre este tema acuciante, que contribuirán para comprender porque las violaciones graves de derechos humanos confluyen para considerar la viabilidad de que los Estados son sujetos titulares de la obligación de emprender medidas progresivas contra la violación de derechos humanos, especialmente cuando estos se tipifican como violaciones graves.⁷⁵⁴

Los derechos humanos adquieren notoriedad en la comunidad internacional como producto de un proceso histórico de universalización, internacionalización y especificación de los derechos humanos.⁷⁵⁵ Son sin duda, algunas causas las que como reseña Forsythe contribuirán en los ciernes de la postura internacional de los derechos humanos, las causas tristemente se extienden entre la guerra y la esclavitud.⁷⁵⁶

Es factible repasar entonces la contextualización que recoge Forsythe de los supuestos que determinaron el concepto legal de los derechos humanos y su promoción: conflicto armado; el trabajo de la Liga de las Naciones; derechos y el contexto de la esclavitud.⁷⁵⁷

⁷⁵³ BUNN, Isabelle D., *op. cit.*, p. 16.

⁷⁵⁴ MEDINA Quiroga, Cecilia, *The battle of human rights. Gross, systematic violations and the Inter-American System*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 1988, p. 7.

⁷⁵⁵ "The period since the formation of the United Nations in 1945 has witnessed an unprecedented expansion in the internationally recognized rights of all people with acceptance of a human rights dimension to the quest for international peace and security. In a comparatively short period of time, the United Nations has styled itself as protector of the proclaimed rights for all." SMITH, Rhona K.M., *Textbook on international human rights*, Oxford University Press, United States of America, 2012, p. 1.

⁷⁵⁶ FORSYTHE, David P., *Human rights and world politics*, 2º, University of Nebraska, United States of America, 1989, p. 7.

⁷⁵⁷ FORSYTHE, David P., *op. cit.*, pp. 7-10. "El colonialismo se identifica a partir de los diferentes momentos históricos de su evolución ligado a desarrollo y expansión del capitalismo. En estas circunstancias la descripción de sus diferentes modalidades responde a las características de las metrópolis y de la relación que guardaron con respecto a sus colonias." REYES, Jesús, VÁZQUEZ, Martín, *Geografía política del mundo*, Limusa, México, 2008, p. 37. Los derechos humanos en los conflictos armados: "Poco más de una década después de la aprobación de los *Convenios de Ginebra de 1949*, las guerras de los años sesenta y setenta (Vietnam de 1964 a 1975, y la Guerra de los Seis días en Oriente Medio en 1967, entre otras) así como la multiplicación de las guerras civiles en los países sometidos a dominación colonial (Katanga en 1960, Yemen en 1962), pusieron en evidencia las lagunas del derecho existente. Así, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Teherán en 1968 marcó el inicio de una mayor preocupación por el Derecho Internacional Humanitario por parte de las Naciones Unidas. En la misma se reconoció la necesidad de proteger los derechos humanos en todas las circunstancias y se impulsó la elaboración de los dos *Protocolos de 1977*, adicionales a los *Convenios de Ginebra de 1949*." ABRISKETA, Joana, *Derechos humanos y acción humanitaria*, Alberdania, Departamento para los Derechos

Debe puntualizarse que a continuación proporcionaremos información relativa a los aspectos generales que distinguen el desarrollo normativo internacional para castigar, eliminar y sancionar violaciones graves de derechos humanos que le han preocupado a Naciones Unidas, estas expresiones se han llevado a cabo bajo conductas de *apartheid*; formas de racismo y discriminación racial; colonialismo; dominación y ocupación extranjeras; agresión; injerencia extranjera; amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial; amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación. Así las cosas proseguiremos a explicar las principales medidas de protección convencionales y de *soft law* que Naciones Unidas ha desplegado para proteger los derechos humanos en situaciones de violaciones graves, posteriormente se relacionará estas violaciones graves y sus efectos en el desarrollo, por lo que se estará en condiciones de relacionar la vinculación entre el derecho humano al desarrollo y medidas progresivas contra las violaciones graves de derechos humanos.

Esa relación es consecuencia del discurso de Naciones Unidas quien se apropia de la protección universal de los derechos humanos, por lo que tiene que ver con una idea con una tendencia internacional de una universalización de los derechos humanos y de la dignidad humana, pero esa dimensión ya ha sido explicada en un capítulo anterior, sin embargo no queremos dejar pasar que los derechos humanos constituyen un lenguaje benigno, que influirá en un cambio de paradigma en el siglo XX y XXI.⁷⁵⁸ Además debe repararse en que el complejo proceso de codificación y de desarrollo normativo de los derechos humanos va a derivar en la generación del derecho humano al desarrollo, pero el derecho humano al desarrollo se inscribe en una posición que desde un

Humanos, el Empleo y la Inserción Social de la Diputación Foral de Gipuzcoa, España, 2004, p. 50.

⁷⁵⁸ "Nussbaum sees crucial advantages in the language of rights, so that there is reason to preserve it: For examples, rights talk stresses the strongness of normative claims, and it highlights a common basis of agreement between diverse ethical theories." BRUKAMP, Kirsten, "Elements of eudaimonia: capabilities and functionings," en KALLHOFF, Angela (Ed.), *Martha C. Nussbaum: ethics and political philosophy. Lecture and colloquium in Münster 2000*, Lit Verlag, Münster, 2001, p.102.

principio adoptó Naciones Unidas y que era su oposición a los procesos de colonización y de esclavitud.⁷⁵⁹

En la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 1.3 determinó como uno de los propósitos: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.”⁷⁶⁰ En este precepto se puede distinguir que en su Carta fundacional Naciones Unidas comprendió la dimensión de: “integrar la protección de los derechos humanos en el ámbito de la cooperación.”⁷⁶¹

El siguiente propósito se consigna en el artículo 1.1 de la Carta que dispone:

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.⁷⁶²

⁷⁵⁹ “Desde su creación en 1945 las Naciones Unidas han atravesado por un proceso de cambio que refleja el equilibrio de poder y las tendencias de la política mundial. En 1947, el Senado de Estados Unidos recomendó llevar a cabo reformas conducentes a reducir los gastos administrativos, recortar salarios y minimizar la duplicación de funciones entre los distintos órganos de la ONU. En la década de los sesenta en pleno proceso de descolonización, el notorio aumento de miembros (de 51 a 114 en 1963) derivó en enmiendas a la carta, entre las que destacan el incremento de los miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social (Ecosoc) que pasaron de 11 a 15 y de 18 a 27, respectivamente.” VALDÉS Ugalde, José Luis, CASCANTE, Jéssica, *El multilateralismo, la reforma de la ONU y los desafíos del siglo XXI*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2007, p. 15.

⁷⁶⁰ Artículo 1.1. *Carta de las Naciones Unidas*.

⁷⁶¹ PIGRAU Solé, Antoni, “Preámbulo, Comentarios al texto de la declaración universal de derechos humanos”, en Asociación para las Naciones Unidas en España, *La declaración universal de los derechos humanos. Comentario artículo por artículo*, Icaria Antrazyt, Barcelona, 1998, p. 95.

⁷⁶² Artículo 1.3., *Ibídem*.

En estos dos preceptos la ONU se articulan los propósitos con los que Naciones Unidas iniciaría su labor de protección de los derechos humanos, en base al principio de estado de derecho consagrado en la Carta fundacional de Naciones Unidas, de este modo la protección de los derechos humanos se constituirá en un tema, que de forma significativa en sus derivaciones humanitarias centrarán una especial atención para las Naciones Unidas y sus órganos, en lo concerniente a las “situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.”⁷⁶³ Pues es en las situaciones de conflictos armados y de amenazas⁷⁶⁴ en las que las personas se ven más seriamente amenazadas en su derecho a la vida, su integridad, en suma se ven vulnerados en su derechos humanos básicos.

En la Declaración y el Programa de Acción de Viena se subrayó que es obligación de los Estados: “...reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos.”⁷⁶⁵

Entre las medidas progresivas contra las violaciones de derechos humanos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena subrayan que son esenciales los órganos de administración y procuración de de justicia.⁷⁶⁶

⁷⁶³ “Human rights have roots deep in the mists of time yet the term itself dates back barely sixty years to international discussions preceding the founding of the United Nations. Since 1945, the scope of human rights has been elaborated and the concept now permeates the fabric of international society. The origins of international human rights lie in philosophical discussions evolved through the centuries. Indeed, human rights represents the modern interpretation (and an expansion of) the traditional concept of the rule of law.” SMITH, Rhona K.M., Textbook on international human rights, op. cit., p. 5. Artículo 1.3., *Carta de Naciones Unidas*, op. cit.

⁷⁶⁴ “Los tratados internacionales de derechos humanos no ignoran ni son indiferentes a la existencia de situaciones de hecho que, conforme a criterios inicialmente ajenos al DIDH, son calificadas como crisis: la comprensión hacia la responsabilidad que asumen las autoridades en el ejercicio soberano de las competencias estatales –sin perjuicio de su supervisión por órganos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales internacionales-, fundamenta la existencia en el DIDH de mecanismos que habilitan al Estado para abordar una necesidad objetiva y que, frente a las dificultades para preservar la convivencia social y el adecuado funcionamiento de las instituciones políticas y/o económicas, le permiten adoptar medidas que repercuten en el alcance del goce y disfrute de los derechos y libertades especialmente reconocidos.” BONET Pérez, Jordi, “Introducción general: las situaciones de crisis y el derecho internacional de los derechos humanos,” en BONET Pérez, Jordi, SAURA Estapà, Jaume, *El derecho internacional de los derechos humanos en periodos de crisis. Estudios desde la perspectiva de su aplicabilidad*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 9.

⁷⁶⁵ [27], Declaración y Programa de Acción de Viena.

⁷⁶⁶ [27], “Cada Estado debe prever un marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos. La administración de justicia, en particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento así como un poder judicial y una abogacía independientes, en plena conformidad con las normas contenidas en los

Identificada así el estado del arte que justifica la obligación del derecho al desarrollo de medidas progresivas contra violaciones graves de derechos humanos, haremos un recorrido de forma particular por cada una de las violaciones graves a las que hace referencia la DNUDD para entender de una forma más cercana como se fue gestando una codificación de derechos humanos más extensa y protectora de los derechos humanos.⁷⁶⁷ En las líneas precedentes abordaremos cada una de las violaciones que la DNUDD califica como graves y sobre las cuales se identificará el contexto y la naturaleza que el derecho al desarrollo.

Como se sabe, la DNUDD no escapa de un matiz anticolonialista, consistentemente impulsado por la reconfiguración en el orden internacional de la política mundial que se vio transformada por el ascenso del nacionalismo y los procesos descolonización, la descolonización claramente justificada por el principio de igualdad entre las personas, que a su vez se vio reflejado en la Carta de Naciones Unidas.⁷⁶⁸ El curso de las explicaciones será en un orden meramente explicativo, atendiendo al hecho de que todas han sido clasificadas como graves, tanto por la Declaración, como en los diversos instrumentos normativos de naturaleza convencional y no convencional. De las violaciones graves enumeradas en la declaración, el colonialismo destaca como una preocupación genuina de la Asamblea General.⁷⁶⁹ La magnitud de esta

instrumentos internacionales de derechos humanos, son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos de democratización y desarrollo sostenible. En este contexto, las instituciones que se ocupan de la administración de justicia deben estar adecuadamente financiadas, y la comunidad internacional debe prever un nivel más elevado de asistencia técnica y financiera. Incumbe a las Naciones Unidas establecer con carácter prioritario programas especiales de servicios de asesoramiento para lograr así una administración de justicia fuerte e independiente." *Ídem*.

⁷⁶⁷ [26], "La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebra el progreso alcanzado en la codificación de los instrumentos de derechos humanos, que constituye un proceso dinámico y evolutivo, e insta a la ratificación universal de los tratados de derechos humanos. Se pide encarecidamente a todos los Estados que se adhieran a esos instrumentos internacionales; se exhorta a todos los Estados a que en lo posible se abstengan de formular reservas." *Ídem*.

⁷⁶⁸ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 22.

⁷⁶⁹ "Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones tales como las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, y las amenazas de guerra,

preocupación se refleja en los tres decenios que la Asamblea General ha proclamado para denunciar la situación de la colonización.⁷⁷⁰ Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo (1990-2000);⁷⁷¹ Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo (2001-2010)⁷⁷² y Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo (2011-2020).⁷⁷³

Desde su fundación Naciones Unidas adoptó una posición “anticolonialista”⁷⁷⁴ el artículo 1º párrafo segundo de la Carta dejó patente este propósito al articular los dos principios fundamentales de la descolonización, el primero el principio de igualdad de derechos y el segundo el principio de libre determinación de los pueblos, esto de conformidad con el artículo en comento que dispone: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.”⁷⁷⁵

Contribuyó de forma determinante, la adopción el 14 de diciembre de 1960 de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales, que también reafirmó los dos principios de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.⁷⁷⁶ En esta declaración se describió la magnitud del proceso de descolonización de los pueblos: “Creyendo que el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin

contribuiría a establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad.” Preámbulo, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁷⁷⁰ Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas.

⁷⁷¹ Resolución 43/47.

⁷⁷² Resolución 60/120 y Resolución 46/181.

⁷⁷³ Resolución 65/19.

⁷⁷⁴ ARACIL, Rafael, OLIVER, Joan, SEGURA, Antoni, *El mundo actual. De la segunda guerra mundial a nuestros días*, Edicions Universitat de Barcelona, España, 1998, p. 128.

⁷⁷⁵ Artículo 1, párr. 2., *Carta de las Naciones Unidas*, op. cit.

⁷⁷⁶ Preámbulo, *Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales*.

de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan.”⁷⁷⁷

Ahora bien, la colonización no se limita solamente a la expansión económica de las potencias, ciertamente Ferro tiene razón al recordar que la colonización: “...adquirió formas que pudieron diferir, pero que asimismo se superpusieron unas a otras.”⁷⁷⁸ Es la percepción que recoge la DNUDD en el preámbulo cuando la Asamblea General reitera eliminar para: “establecer circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad”⁷⁷⁹ las violaciones masivas y patentes de los derechos humanos resultantes por situaciones como el colonialismo el neocolonialismo.⁷⁸⁰ Se adoptó la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales el 27 de noviembre de 1978,

Además del preámbulo la Declaración se integró por siete artículos, entre los que se declara que cualesquier clase de colonización contraviene la causa de la paz y la causa de la cooperación mundial; las tres opciones para los territorios que no sean autónomos.⁷⁸¹

La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid determinó: “Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheid es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial...”⁷⁸²

Entre las medidas: a) las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen; b) medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a

⁷⁷⁷ Preámbulo, *Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales*.

⁷⁷⁸ FERRO, Marc, *La colonización. Una historia global*, Siglo XXI Editores, México, 2000, p. 38.

⁷⁷⁹ Preámbulo, *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*, op. cit.

⁷⁸⁰ *Ídem*.

⁷⁸¹ *Ídem*.

⁷⁸² Artículo I, *Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid*.

las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas.⁷⁸³

Se desprende la obligación de presentar periódicamente informes al grupo establecido con arreglo al artículo IX sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones de la Convención.⁷⁸⁴

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier órgano competente de las Naciones Unidas que adopte, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todas las medidas que considere indispensables para la prevención y represión del crimen de apartheid.⁷⁸⁵

La Asamblea General por medio de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial adoptada el 21 de diciembre de 1965, afirmó su convencimiento de que toda “doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial.”⁷⁸⁶ En la Convención se señalaron las preocupaciones concernientes de que la discriminación por motivos de raza, color o etnia, pudiese convertirse en: “...un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado.”⁷⁸⁷ En la Convención se afirmó que la existencia de barreras raciales no puede ser compatible con los ideales de la humanidad.⁷⁸⁸

⁷⁸³ Artículo IV, *Ibídem*.

⁷⁸⁴ Artículo VII, *Ibídem*.

⁷⁸⁵ Artículo VIII, *Ibídem*.

⁷⁸⁶ Preámbulo, *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*.

⁷⁸⁷ *Ídem*.

⁷⁸⁸ *Ídem*.

En lo que concierne a la discriminación racial, la Convención mandata que los Estados están comprometidos:

- a) No deberán infringir: “ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación.”
- b) No fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
- c) Tomar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;
- d) Prohibir y hacer cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones;
- e) Estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.

Respecto de la segregación racial y el apartheid, los Estado tienen la obligación de garantizar el derecho de igualdad de toda persona ante la ley, no se deberá distinguir por condición de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de unos derechos específicos que son:

- a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia;
- b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;

- c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;
- d) Otros derechos civiles, en particular:
 - i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;
 - ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;
 - iii) El derecho a una nacionalidad;
 - iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;
 - v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;
 - vi) El derecho a heredar;
 - vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
 - viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;
 - ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;
- e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
 - i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria;
 - ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;
 - iii) El derecho a la vivienda;
 - iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;
 - v) El derecho a la educación y la formación profesional;
 - vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales;

Finalmente la convención reconoce el derecho y la garantía de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de

transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.⁷⁸⁹ Hay que puntualizar que el elenco de derechos mencionados son esencialmente, derechos humanos de la persona, lo que hace la convención no es sino garantizar de forma específica estos derechos dirigida a las personas o grupos que han padecido prácticas de discriminación racial, segregación racial y apartheid.

No hay que perder de vista que el artículo 1.1 de la Carta de Naciones Unidas es muy relevante porque originó el primer propósito de Naciones Unidas dirigido a mantener la paz y la seguridad internacionales.⁷⁹⁰ Este artículo siguiendo la opinión formulada por Cano Linares es la fuente primaria de los dos “procedimientos específicos”⁷⁹¹ para el mantenimiento de la paz, así lo interpreta Cano Linares: “medidas colectivas eficaces”⁷⁹² y el segundo que subyace a “medios pacíficos y de acuerdo con los principios de justicia y derecho internacional, el ajuste o el arreglo de las controversias o situaciones susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.”⁷⁹³

Este tema complejo se manifiesta en un contexto de diferentes campos temáticos: derechos humanos en los conflictos armados; derechos del personal de Naciones Unidas; el derecho a la paz entre otros.

La Carta de Naciones Unidas faculta en el artículo 39 al Consejo de Seguridad en el supuesto de que determine la existencia de amenaza a la paz; quebrantamiento de la paz o acto de agresión, para que formule recomendaciones o en su caso decida la adopción medidas que deberá tomar en base a los Artículos 41 y 42 de la Carta para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional.⁷⁹⁴

⁷⁸⁹ Artículo 5, *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*.

⁷⁹⁰ Artículo 1.3., *Carta de Naciones Unidas*.

⁷⁹¹ CANO Linares, María de los Ángeles, *Orígenes y fundamentos prácticos del mantenimiento de la paz en Naciones Unidas (Las posiciones durante la guerra fría)*, Dykinson, Madrid, 2011, p. 21.

⁷⁹² *Ídem*.

⁷⁹³ *Ídem*.

⁷⁹⁴ Artículo 39, *Carta de Naciones Unidas*.

El artículo 40 de la Carta de Naciones Unidas mandata al Consejo de Seguridad a instar a las partes interesadas de que cumplan con las medidas provisionales que el Consejo estime “necesarias o aconsejables”. Estas medidas provisionales no se harán en perjuicio de los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas en el conflicto. Esto con el fin de evitar el agravamiento de la situación y no tener que recurrir a los mecanismos preestablecidos en el artículo 39.⁷⁹⁵

El Consejo de Seguridad tiene la facultad si las medidas propuestas en razón del artículo 40, resultan inadecuadas, de ejercer: “la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.” El artículo dispone que la acción de mantenimiento de paz comprenda si aplica, demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.⁷⁹⁶

El artículo 43 es el numeral más delicado, mandata que la totalidad de los Miembros de las Naciones Unidas, contribuyan al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; para lo cual según la Carta se deberán comprometer a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse.

Este compromiso deberá adoptar la forma de convenio o convenios, la Carta plantea que la facultad de negociación de estos le corresponde al Consejo de Seguridad; estos convenios serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, en el marco del estado de derecho internacional, el artículo 43

⁷⁹⁵ Artículo 40, *Ibídem*.

⁷⁹⁶ Artículo 42, *Ibídem*.

ordena que estos convenios deberán ser ratificados por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, sólo de esa manera será válido el convenio de operación de paz.⁷⁹⁷

Este artículo es el más relevante para las medidas coercitivas del Consejo de Seguridad,⁷⁹⁸ pero también el de aplicación más problemática.⁷⁹⁹

Entre otros de los textos normativos, destaca uno de corte convencional, se trata de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado, fue adoptada el 9 de diciembre de 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas.⁸⁰⁰ El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.⁸⁰¹

Se rigen además por el Acuerdo sobre el Estatuto de las fuerzas, que se concierta entre la ONU y el Estado en el cual se ejerce la operación de paz. Reglamento de la Fuerza de emergencia de las Naciones Unidas (FENU); Modelo de Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Miembros que aporta n personal y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de Mantenimiento de la Paz.

Operaciones de asistencia humanitaria, operaciones para el mantenimiento de la paz (OMP); operaciones híbridas de la ONU.

Otros instrumentos normativos del Derecho internacional humanitario (DIH): Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I del 12 de Agosto de 1949); Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II del 12

⁷⁹⁷ Artículo 43, Carta de Naciones Unidas, *op. cit.*

⁷⁹⁸ SEGURA Serrano, Antonio, *El derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas*, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2007, p. 22.

⁷⁹⁹ *Ídem.*

⁸⁰⁰ *Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado.*

⁸⁰¹ *Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.*

de agosto de 1949); Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III del 12 de agosto de 1949); Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV del 12 de agosto de 1949). Convención de la Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, del 14 de mayo de 1954 y la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados del 19 de octubre de 1980.

Son aplicables en este rubro los protocolos de los convenios: Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I del 8 de junio de 1977); Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II del 8 de junio de 1977).

El artículo 7 de la DNUDD: “Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo.”⁸⁰²

V.III Obligación en materia de libre determinación de los pueblos

Para lograr los objetivos del derecho humano al desarrollo no basta la proclamar la inhumanidad que encierra cualquier forma de colonización, neocolonialismo, racismo, discriminación entre otras conductas de esta negativa naturaleza. Uno de los principios rectores de la Carta de Naciones Unidas es el principio de libre determinación de los pueblos y ha sido invocado como principio regulador de los procesos de descolonización.⁸⁰³ La descolonización fue un proceso que se sucedió a una serie de

⁸⁰² Artículo 7, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁸⁰³ *Carta de Naciones Unidas*.

reconfiguraciones en la política mundial, que aparejó entre otras consecuencias la aparición de naciones emergentes. En efecto, fue posible como consecuencia de una revisión de la cuestión colonial.⁸⁰⁴ Queremos en este apartado desglosar algunas reflexiones sobre la obligación que tienen los Estados de respetar la libre determinación de los pueblos derivada de la DNUDD.

Se justifica esta obligación de respetar la libre determinación de los pueblos, en razón de algunos argumentos que se ya se abordaron en su oportunidad desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos del derecho humano al desarrollo y de su configuración constitucional y jurídica, por lo tanto intentaremos dar cuenta de la viabilidad de la obligación de respetar la libre determinación de los pueblos en razón del marco teórico del derecho al desarrollo como derecho humano.

En consecuencia debemos remontarnos al carácter colectivo que reviste el derecho humano al desarrollo.⁸⁰⁵ La problematización del derecho al desarrollo como derecho humano ha versado precisamente en su dimensión colectiva, que se ha visto reflejada en la vieja pugna entre los derechos individuales y los derechos colectivos entre los cuales se sitúa el derecho humano al desarrollo en una postura intermedia. Pues el derecho al desarrollo implica también derechos colectivos, así lo ha reconocido el artículo 1º de la DNUDD.⁸⁰⁶ Esta problematización se extiende por supuesto al derecho a la libre determinación de los pueblos para alcanzar grados de autonomía debido a su soberanía. Es un derecho correspondiente a la clasificación de los derechos colectivos, frecuentemente invocado como el más relevante de los derechos

⁸⁰⁴ “Entre la acuñación de la palabra genocidio por Raphael Lemkin en 1944 y su adopción por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en el marco de una reformulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se abrió un amplio debate que dio lugar a un nuevo enfoque del fenómeno colonial y de todas las formas anteriores de destrucción masiva de personas y culturas.” ROUDINESCO, Élisabeth, *A vueltas con la cuestión judía*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2011.

⁸⁰⁵ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 149.

⁸⁰⁶ Artículo 1, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit. “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.”

colectivos o derechos de solidaridad según apunta Philip Alston.⁸⁰⁷ Ese fue el sentido que le imprimió la DNUDD en su momento a la libre determinación de los pueblos, reparó en el carácter colectivo de la libre determinación para traslaparla no únicamente como un principio sino engendrando una auténtica obligación de respeto de la libre determinación de los pueblos. Semejante inclusión no puede concebirse si no se entiende de antemano la génesis del derecho humano al desarrollo que sucedió en el contexto de los procesos de descolonización y de emergencia de nuevas naciones,⁸⁰⁸ que aumentaron el número de Estados miembros de Naciones Unidas en aproximadamente 159, estos eventos son objeto de una temática particular de la vocación anticolonialista de Naciones Unidas sobre la que ya hemos reparado con prudente insistencia,⁸⁰⁹ pues el discurso anticolonialista, se robusteció por medio de la defensa de los derechos humanos.

Pero el planteamiento de que el derecho a la libre determinación de los pueblos reviste de ser un derecho colectivo, no impide que la titularidad de la libre determinación también pueda ser atribuida a personas, constituyéndose así como un derecho individual.⁸¹⁰

De allí que se haya hecho hincapié de la salvaguarda de la libre determinación de los pueblos formulado por primera vez en el marco de la comunidad internacional organizada en la Carta de Naciones Unidas en el párrafo dos del artículo primero; en el artículo 55 y en el artículo 73.⁸¹¹

⁸⁰⁷ STERIO, Milena, *The right to self-determination under international law. "Selfistans," secession, and the rule of the great powers*, Routledge, New York, 2013, p. 9. ALSTON, Philip, "Introduction," en ALSTON, Philip (Ed.), *People's rights*, Oxford University Press, United States of America, 2001, pp. 2-3.

⁸⁰⁸ "Another key feature of the post-war period was the process of decolonization, including the dismantling of the British Empire. As peoples in Africa, Asia and elsewhere secured their independence, the dynamics of international, political and economic relations changed dramatically." BUNN, D. Isabelle, *op. cit.*, p. 14.

⁸⁰⁹ "The right to development was promoted both by the Third World protagonists and First World critics as a collective right of states and peoples for development. We have argued that is perfectly logical to press for collective rights to be recognized as human rights." SENGUPTA, Arjun, "The right to development", en CLAUDE, Richard Pierre, WESTON, Burns H., *Human rights in the world community. Issues and action*, 3a. ed., University of Pensilvannia Press, United States of America, 2006, p. 254.

⁸¹⁰ GROSS Espiell, Héctor, *Estudios sobre derechos humanos II*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1995, p. 195.

⁸¹¹ Artículo 1.2. "Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros

La Asamblea de Naciones Unidas contribuyó para la consolidación de este derecho y principio fundamental de los procesos de descolonización al desplegar una serie de resoluciones, entre la que destacan: 2131 (XX), 21 de diciembre de 1965; Resolución 2625 (XXV) 24 de octubre de 1970.

El artículo 1.2: “El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.”⁸¹²

V.IV Obligación de fomentar la democracia participativa (art. 8.2 de la declaración)

medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.” Artículo 55: “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.” Artículo 73 “Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan: a) a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; b) desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto; c) a promover la paz y la seguridad internacionales; d) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.”

⁸¹² Artículo 1.2, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

El derecho al desarrollo requiere necesariamente de ser dotado de un significado que lo engarce con el valor de la democracia. No tenía por qué ser de otro modo y la voluntad de reflejar un contenido democrático en la declaración se hizo en el contexto de los valores fundadores que identifican a Naciones Unidas como órgano impulsor y protector de los derechos humanos, desde luego esto se origina por el propio reconocimiento nacional de la democracia como el más óptimo sistema de gobierno en los ámbitos nacionales. Desde modo, la titularidad de la obligación es impuesta de forma primaria a los Estados en el artículo 3.1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo.⁸¹³

Ahora bien reculemos algunas líneas para proporcionar someras reflexiones sobre la democracia, su incidencia en el DIDH, posteriormente su incorporación a la teoría del derecho humano al desarrollo y la razón de que sea precisamente la noción de democracia participativa, la que en la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo se escogió. De este modo se pueden desplegar los elementos que instituyen la obligación de democracia participativa, cuya titularidad les corresponde en primer sitio a los Estados. Por su parte, Isabella Bunn, manifiesta que la declaración despliega dudas sobre la titularidad de las obligaciones adyacentes a organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales y empresas transnacionales,⁸¹⁴ dicha cuestión no puede ser dejada de lado, debido a que no únicamente refleja la extensión de la titularidad de la obligación de fomentar la democracia participativa hacia otro sujeto que no sean los Estados; esta titularidad claro se puede extender a las otras clases de obligaciones que se desprenden de la declaración; sino que además estas preguntas que la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo despliega son medulares para la comprensión no solo de su mensaje coincidente con la democracia, sino con el particular modelo de democracia que propone aplicar.

⁸¹³ “Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.” Artículo 3.1. Declaración sobre el derecho al desarrollo, *op. cit.*

⁸¹⁴ BUNN, Isabella D., *op. cit.*, p. 111.

En realidad la declaración sobre el derecho al desarrollo no menciona de forma textual la palabra democracia, sin embargo; en sentido amplio Naciones Unidas ha reconocido a la democracia como un valor básico, convirtiéndose así no únicamente en un léxico recurrente en el DIDH, sino además en un valor inseparable en las actividades de protección y defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento del estado de derecho, este enfoque fue recogido en la Declaración del Milenio, que dejó patente el compromiso de los Jefes de Estado y de Gobiernos reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas de no escatimar: “esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.”⁸¹⁵

Puede afirmarse que aunque la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo no mencione expresamente la palabra democracia, si existe implícitamente una referencia a la misma, baste resaltar su posicionamiento frente a los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos de 1966, aduciendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y en su fundamento jurídico que reposa en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Estos son los tres principales textos que constituyen los antecedentes más notables del derecho humano el desarrollo y por supuesto son los textos internacionales de derechos humanos donde se dejó patente el valor de la democracia como eje direccional del DIDH, así las cosas, la noción de democracia es aplicable al derecho humano al desarrollo, pues de lo contrario estaría contraviniendo su naturaleza jurídica.

De forma específica, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, consagró el concepto de democracia, al dedicarle el hacer mención de que: “la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno.”⁸¹⁶

⁸¹⁵ [24], Declaración del Milenio, Resolución 55/2.

⁸¹⁶ Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión;” Artículo 20: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de

Posteriormente esta declaración adquirió un verdadero carácter convencional al integrarse en el PIDCP en 1966, un conjunto de libertades civiles y políticas.⁸¹⁷

Asimismo la democracia tendría incidencia en las reivindicaciones de los derechos de la mujer, lo que correspondería a otra gran dimensión de la democracia, que se sustenta en el principio de igualdad y no discriminación convergería con la consagración de la democracia como valor básico en la

asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación;" Artículo 21: "1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto." *Declaración Universal de los Derechos Humanos, op., cit.*

⁸¹⁷ Libertad de expresión, artículo 19: "1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas." Libertad de reunión pacífica, artículo 21: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás." Derecho a la libertad de asociación con otras personas, artículo 22: 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías." Derecho y la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente, o por conducto de representantes libremente elegidos, artículo 25 a) y c): "Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país." Derecho al voto y a ser elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores, artículo 25 c): "(b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores." *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, op., cit.*

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a través del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer.⁸¹⁸

Entre los signos que reiteran el esfuerzo por promover el valor democrático en el ámbito de Naciones Unidas y del DIDH resaltan distintas resoluciones que la Asamblea General ha aprobado en el gran tema de la democracia. Reiterando preocupaciones concernientes acerca de las dimensiones relacionadas con la democracia, a saber: educación; participación de la mujer en la política; elecciones auténticas y periódicas; promoción de la democratización; consolidación de las democracias nuevas o restauradas; derechos humanos; estado de derecho; fortalecimiento de las funciones de organizaciones y mecanismos regionales, subregionales y consolidación democrática.⁸¹⁹

El andamiaje institucional que en la arquitectura de Naciones Unidas se ha implementado para la realización de los objetivos de las instituciones democráticas, es extenso y se encuentra diseminado entre los siguientes organismos: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia; Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz; Departamento de Asuntos Políticos,

⁸¹⁸ Artículo 7: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.” *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, op., cit.*

⁸¹⁹ A/67/L.25, Resolución de la Asamblea General sobre Educación para la democracia, 2012; A/RES/66/130, Resolución de la Asamblea General sobre la participación de la mujer en la política, 2012; A/RES/66/163, Resolución de la Asamblea General sobre Fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones periódicas y auténticas y la promoción de la democratización, 2011; A/RES/64/12, Resolución aprobada por la Asamblea General. Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para promover y consolidar las democracias nuevas o restauradas, 2009; A/RES/62/7; Resolución aprobada por la Asamblea General. Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para promover y consolidar las democracias nuevas o restauradas, 2007; A/RES/59/201, Resolución aprobada por la Asamblea General. Fortalecimiento de la función de las organizaciones y mecanismos regionales, subregionales y de otro tipo en la promoción y consolidación de la democracia, 2004; A/RES/55/96, Resolución aprobada por la Asamblea General. Promoción y consolidación de la democracia, 2000.

y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). A su vez estos órganos se encuentran estrechamente relacionados con los temas concernientes al derecho humano al desarrollo. También se puede apuntar que la configuración de una arquitectura institucional encabezada por Naciones Unidas contribuye para el fortalecimiento de la obligación de fomentar las instituciones democráticas que tienen los Estados, misma que corresponde en el marco del derecho humano al desarrollo a la obligación del fomento de la democracia en su dimensión participativa.

Si la declaración consagra la obligación de los Estados en el artículo 8.2 de la Declaración de: "...alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos."⁸²⁰ Es debido a un propósito y originada por un contexto. Sobre lo segundo ya hemos reparado, la cuestión colonial y la descolonización; la consiguiente emergencia de nuevos Estados, y por supuesto de necesidades de estos de financiamiento y ayuda para el desarrollo. El desencanto porque en estos nuevos Estados se reprodujeron patrones de dominación autoritaria, vulneración de los derechos humanos y explotación económica. Indubitablemente, que una vez que una sociedad ejercita su derecho de libre determinación y pone en marcha el proceso de descolonización, de ser el caso. Toda sociedad en transición, si su posición se califica como saliente de un conflicto⁸²¹, debe centrar sus acciones en torno a la formación de una democracia electoral y representativa,⁸²² es en esa senda en la que procuraremos las ulteriores reflexiones, pues entre la demagogia y las buenas intenciones se cierne una línea muy delgada.

⁸²⁰ Artículo 8.2, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁸²¹ *Governance for peace. Securing the social contract*, United Nations Development Programme, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, New York, 2012, p. 20.

⁸²² "Pero el edificio que ha resistido la prueba es el edificio de la democracia representativa. En ésta, el demos ejercita su poder eligiendo a quien ha de gobernarlo. En tal caso, el pueblo no decide propiamente las *issues* -cuál será la solución de las cuestiones que hay que resolver- sino que se limita a elegir quién las decidirá. El problema es que la democracia representativa ya no nos satisface, y por ello reclamamos «más democracia», lo que quiere decir, en concreto, dosis crecientes de directismo, de democracia directa." SARTORI, Giovanni, *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Trad. Ana Díaz Soler, Taurus, Buenos Aires, 1998, p. 124.

Por ello la democracia participativa en las instituciones hijas de la democracia occidental solo puede ser aplicada exitosamente, y con naturalidad una vez que se ha sorteado y culminado un proceso de democracia electoral, a su vez la instauración de elecciones no es el único signo de que se ha logrado una transición electoral completa, aunque su celebración contribuye esencialmente a ello, es la orientación que acoge la Asamblea General en la resolución 66/163: “Reconociendo la importancia de que se celebren elecciones limpias, periódicas y auténticas, en particular en democracias nuevas y en países en proceso de democratización, a fin de dotar a los ciudadanos de los medios para que expresen su voluntad y promover una transición exitosa a democracias sostenibles a largo plazo.”⁸²³

Bajo tales parámetros es pertinente admitir que la primera condición necesaria para que los Estados sean susceptibles de cumplir con su obligación de alentar la participación popular, alega que el Estado cuente con instituciones democráticas representativas y electorales; según el Informe de la Mesa redonda internacional sobre democracia, paz y seguridad: el rol de las Naciones Unidas aunque las elecciones “...puedan ser una fuente de legitimidad, la democracia debe trascender el proceso electoral.”⁸²⁴

El informe en cuestión propone que la legitimidad en la construcción de la democracia también puede originarse de otros factores distintos de los electorales, mismos que pueden ser: resultados económicos y defensa de los derechos de las minorías.⁸²⁵ No podemos estar menos de acuerdo, por supuesto que estos resultados son muy meritorios e indispensables para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Después de todo es acerca de eso sobre lo que trata la declaración. Pero no hay que olvidarnos que los derechos humanos son en muchos sentidos derechos individuales, atienden a las personas. Y así, para lograr los cometidos que designan los derechos de segunda y de tercera generación, más próximos al tema social y a la seguridad,

⁸²³ A/RES/66/163, *op.*, cit.

⁸²⁴ *Democracia, paz y seguridad El rol de las Naciones Unidas. Informe de la Mesa redonda internacional sobre democracia, paz y seguridad: el rol de las Naciones Unidas*, Naciones Unidas, PNUD, IDEA, 2010, p. 19.

⁸²⁵ *Ibidem.*, pp. 19-20.

se tiene que comenzar por respetar y garantizar el elenco de los derechos individuales. Proveyendo de instituciones que respeten los derechos individuales más básicos como los derechos civiles y políticos, como el derecho a votar y la libertad de expresión.

Refuerza este planteamiento con el hecho de que la Asamblea General haya externado en otra de sus resoluciones, no solamente la reiteración de que: “la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan entre sí,”⁸²⁶ sino que además haya reparado en los derechos humanos; en el pluralismo político; en el sistema electoral y en la participación de la sociedad civil como condiciones *sine qua non* que deben respetar y realizar los Estados para consolidar la democracia, nos parece muy acertada esta resolución porque sintetiza en un solo documento que los derechos humanos, la participación de la sociedad civil y el sistema electoral, se pueden complementar con esfuerzo y compromiso cuando los Estados respetan sus compromisos internacionales, la Asamblea General exhorta a los Estados a consolidar la democracia por medio de:

La promoción del pluralismo, la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la mayor participación posible, de los individuos en la adopción de decisiones y el desarrollo de instituciones competentes y públicas, con inclusión de un sistema judicial independiente, un sistema legislativo y una administración pública responsables y un sistema electoral que garantice elecciones periódicas libres y justas.⁸²⁷

En la perspectiva de la Asamblea General los derechos humanos contribuyen para la consolidación del proceso de democratización.⁸²⁸ En la

⁸²⁶ A/RES/55/96, *op. cit.*

⁸²⁷ A/RES/55/96, *op. cit.*

⁸²⁸ “La promoción, la protección y el respeto de todos los derechos humanos, con inclusión del derecho al desarrollo y las libertades fundamentales, en particular: i) La libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de creencia, de reunión y asociación pacíficas, así como la libertad de expresión, la libertad de opinión y medios de información libres, independientes y pluralistas; ii) Los derechos de las personas pertenecientes a minorías

resolución en comentario dejó patente el exhorto para los Estados de que la consolidación de la democracia debe incluir un sistema electoral que garantice el derecho de las personas a participar en el gobierno, de forma directa o con representantes elegidos, asimismo que un sistema electoral democrático deberá atender a la “justicia y transparencia en el proceso electoral”:

La creación, el fomento y el mantenimiento de un sistema electoral que permita la expresión libre y fiel de la voluntad del pueblo mediante elecciones genuinas y periódicas, en particular: i) Garantizando el derecho de todos a participar en el gobierno del propio país, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) Garantizando el derecho a votar libremente y a ser elegido, en un proceso libre e imparcial, a intervalos regulares, por sufragio universal e igual voto secreto y con pleno respeto del derecho a la libertad de asociación; iii) Adoptando las medidas que procedan para asegurar la representación de los sectores subrepresentados de la sociedad; iv) Garantizando, mediante la legislación, las instituciones y los mecanismos adecuados, de la libertad de formar partidos políticos democráticos que puedan participar en elecciones, así como la transparencia y la justicia del proceso electoral, incluso dando acceso apropiado con arreglo a derecho a financiación y a medios de información libres, independientes y pluralistas.⁸²⁹

El concepto de democracia que ha encabezado Naciones Unidas, es un concepto holístico, orientado hacia la inclusión de las minorías, la igualdad entre el hombre y la mujer, la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento del gobierno local. Bajo tales parámetros se contextualiza la

nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, incluido el de expresar, conservar y desarrollar libremente la propia identidad sin discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley; iii) Los derechos de los pueblos indígenas; iv) Los derechos de los niños, los ancianos y las personas con discapacidad física o mental; v) Fomentando activamente la igualdad entre los sexos con objeto de lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres; vi) Tomando medidas adecuadas para erradicar todas las formas de racismo y discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; vii) Considerando la posibilidad de hacerse partes en los instrumentos internacionales de derechos humanos; viii) Cumpliendo las obligaciones que les imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos en que son partes.”A/RES/55/96, op., cit.

⁸²⁹ A/RES/55/96, op., cit.

visión de la declaración sobre el derecho al desarrollo al reconocer que él: "...desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan."⁸³⁰ En este sentido coincidimos con la definición que expuso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Estudio sobre los problemas comunes a que se enfrentan los Estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el estado de derecho desde una perspectiva de derechos humanos:

La democracia no se limita a la organización de elecciones democráticas, por muy fundamentales que sean para su existencia. Los ciudadanos deben controlar el proceso político ininterrumpidamente, no solo en el momento electoral. Además, la democracia no es solo la articulación de la soberanía popular (el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo), sino que también abarca los valores de la responsabilidad y la rendición de cuentas.⁸³¹

En principio estaría advirtiendo un concepto más amplio de la democracia que incluya dosis de participación popular. Algo coincidente con la

⁸³⁰ Preámbulo, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁸³¹ *Estudio sobre los problemas comunes a que se enfrentan los Estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el estado de derecho desde una perspectiva de derechos humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/22/29*, Naciones Unidas, 2012, p. 5. "I have said nothing here about the justification for such transfers or the mechanisms governing them, but such further arguments will prove important as we strive to make a threshold level of capability available to all the world's people. Especially in an era of rapid economic globalization, the capabilities approach is urgently needed to give moral substance and moral constraints to processes that are occurring all around us without sufficient moral reflection. It may be hoped that the capabilities list will steer the process of globalization, giving it a rich set of human goals and a vivid sense of human waste and tragedy, when choices are pondered that would otherwise be made with only narrow economic considerations in view. Nonetheless, even a highly moralized globalism needs nation states at its core, because transnational structures (at least all the ones we know about so far) are insufficiently accountable to citizens and insufficiently representative of them. Thus the primary role for the capabilities account remains that of providing political principles that can underlie national constitutions; and this means that practical implementation must remain to a large extent the job of citizens in each nation." NUSSBAUM C., Martha, *Women and human development. The capabilities approach*, Cambridge University Press, New York, 2000, p. 105.

resolución de la Asamblea General sobre promoción y consolidación de la democracia:

La creación y la mejora del marco jurídico y los mecanismos necesarios para la participación amplia de todos los miembros de la sociedad civil en la promoción y la consolidación de la democracia: i) Respetando la diversidad de la sociedad con el fomento de asociaciones, estructuras de diálogo, medios de información y su interacción como medio de fortalecer y desarrollar la democracia; ii) Fomentando, por conducto de la educación y otros medios, la conciencia y el respeto de los valores democráticos; iii) Respetando el derecho de reunión pacífica y el ejercicio del derecho a formar organizaciones o asociaciones no gubernamentales, incluidos sindicatos, a ser miembro de ellas y a participar en ellas; iv) Garantizando la existencia de mecanismos para consultar a la sociedad civil en los procesos de gestión de los asuntos públicos y para que ésta constituya a ellos y fomentando la cooperación entre las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales; v) Creando o mejorando el marco jurídico y administrativo para las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la comunidad y otras organizaciones de la sociedad civil; vi) Promoviendo la educación cívica y la educación en derechos humanos, por conducto, entre otros, de organizaciones de la sociedad civil.⁸³²

La democracia no ha dejado de ser en los albores del siglo XXI un concepto complejo, su visión holística impulsada por organismos en todos los niveles nacionales e internacionales ha germinado en un pluralismo conceptual, pero su papel en el gran acuerdo gobierno-sociedad permanece densa. Pues no olvidemos que la democracia implica la clase de sociedad que se quiere y que por añadidura se tiene. Por consiguiente es encomiable reconocer los esfuerzos en los ámbitos regionales por promover el presupuesto participativo en la democracia y es precisamente en estos ámbitos en los que el

⁸³² A/RES/55/96, op., cit.

presupuesto participativo democrático registra apreciables avances, uno de ellos lo constituye el modelo de democracia participativa que se consagró el Tratado de la Unión Europea en el artículo 11⁸³³ en el cual se afirmó el principio de la democracia participativa en la Unión Europea.

Si se hace referencia específica a los elementos que integran el artículo en comento, se entenderá que en efecto, en el articulado se le confirió reconocimiento a la sociedad civil como interlocutor. La sociedad civil es un término que puede ser aplicado a individuos o grupos, que manifiestan una determinada acción social de forma organizada, no se origina en el interior del Estado, ni pertenece a él. La norma en cuestión consagró además los procesos que en el presupuesto participativo reciben el nombre de diálogo civil porque asisten a la generación de una opinión pública organizada en la sociedad civil tendiente a expresar sus opiniones en tres clases de diálogo (diálogo horizontal; diálogo vertical y diálogo sectorial) consagradas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, que se distinguen en virtud de la participación de los sujetos.

Más allá de esta norma convencional, hay que tener presente que el presupuesto participativo requiere de un proceso de cambio social. No siempre se produce de abajo hacia arriba, sino muy frecuentemente proviene de procesos de arriba abajo, esta connotación se percibe cuando son las instituciones las que desencadenan el proceso. De esta manera fue como se incorporó el presupuesto participativo en el contexto de la Unión Europea, semejante hecho no tiene por qué despertar desconfianza, es el fruto de una serie de experiencias de posguerra que Rosanvallon escribe resignadamente:

⁸³³ Artículo 11 “1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. 2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. 3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. 4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados. Los procedimientos y las condiciones preceptivos para la presentación de una iniciativa de este tipo se fijarán de conformidad con el párrafo primero del artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.” Tratado de la Unión Europea.

En el periodo 1960-1970, la referencia a la democracia participativa era patrimonio de movimientos sociales que reivindicaban un nuevo reparto de los poderes. De esa manera, se trataba, pues, de aumentar el peso de los ciudadanos en detrimento del de las instituciones y los partidos. Lo que estaba en juego ya no era lo mismo a comienzos del siglo XXI. En efecto, los nuevos mecanismos participativos casi siempre son implementados por los propios gobiernos. ¿Para restaurar una legitimidad desbaratada por la “crisis de la representación”? Por cierto, pese a que resulte difícil distinguir en la materia qué corresponde al orden de la causa y qué al de la consecuencia. De manera más objetiva, se puede destacar que funcionalmente se necesitan. En ciertos casos, para colmar un vacío institucional, cuando es preciso tratar, por ejemplo, nuevas y controvertidas cuestiones sociotécnicas.⁸³⁴

Para lograr los ideales de la democracia participativa la UE instituyó en 1957 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) que tiene entre sus funciones fomentar la democracia participativa en la Unión Europea. Asimismo las Instituciones Europeas tienen la obligación de mantener un diálogo permanente con los representantes de la sociedad civil.⁸³⁵

Esta exposición general permite avistar como en el plano regional de la UE ha sucedido una experiencia comparada no exenta de ciertas dificultades y aún incompleta, de la configuración de una arquitectura institucional que satisface una obligación de fomento de la democracia participativa, esta experiencia por supuesto se da en el marco institucional del derecho comunitario europeo, su titularidad en razón del artículo 11 del que emana no solo el principio de democracia participativa y la obligación de fomento de la democracia participativa es extensible a todas las instituciones, aunque la figura del CESE es una figura novedosa para el monitoreo del respeto y cumplimiento de este principio y de esta obligación, en ese ámbito regional y

⁸³⁴ROSANVALLON, Pierre, *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad*, Trad. Heber Cardoso, Manantial, Buenos Aires, 2009, p. 295.

⁸³⁵ *Shaping Europe. Recent EESC achievements*, European Economic and Social Committee, Bruxelles, 2012, p. 21.

que corresponde a un modelo de organización supranacional único en su género. Es realmente una experiencia comparada digna de tomarse en cuenta.

V.V Obligación de inclusión de la mujer (art. 8.1 de la declaración)

Se desprende de la declaración sobre el derecho al desarrollo la obligación de asegurar el derecho al desarrollo de la mujer, de conformidad con el artículo 8.1: “Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.”⁸³⁶ La titularidad de la mujer del derecho humano al desarrollo como sujeto beneficiario no deja lugar a dudas, pues constituye una condición fundamental para asegurar el desarrollo económico, social, cultural y político de todos los seres humanos sin distinción de género y cualesquier condición.⁸³⁷

La integración de los derechos humanos en el concepto de desarrollo, contribuyó para la integración de la mujer en la causa del desarrollo.⁸³⁸ En perspectiva coincidimos con Brenes Rosales en la opinión de que ha sido desde la fundación de Naciones Unidas que los derechos humanos de la mujer han registrado los mayores avances.⁸³⁹ No es casual por lo tanto que entre ambos conceptos mujer y desarrollo pudiera converger una relación especial que generará entre otras consecuencias positivas una obligación prospectiva de inclusión de la mujer en el desarrollo, entre los autores que han respaldado esta obligación se destaca la aportación de Isabella Bunn.⁸⁴⁰

Como sucedió con las anteriores obligaciones prospectivas abordadas en este capítulo, los derechos de la mujer constituyen una disciplina de estudio autónoma en sí misma, sin embargo, procederemos a la mención de los lugares comunes que en el campo de estudio específico de los derechos de la mujer han derivado en una relación muy estrecha con el derecho humano al

⁸³⁶ Artículo 8.1, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁸³⁷ Preámbulo, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁸³⁸ GÓMEZ Isa, Felipe, *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, op. cit., p. 105.

⁸³⁹ BRENES Rosales, Raymundo, op. cit., p. 114.

⁸⁴⁰ BUNN, Isabella D., op. cit., p. 52.

desarrollo. Como es sabido, desde su fundación Naciones Unidas promovió la: “igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres”, así lo hizo constar en la Carta de Naciones Unidas.⁸⁴¹ Esta tendencia crucial para un movimiento transformador de las relaciones entre los sexos se vio confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual desde el preámbulo adoptó con vehemencia: “la igualdad de derechos de hombres y mujeres.”⁸⁴²

Desde luego que la violación de los derechos humanos de las mujeres ha estado asociada de forma casi permanente con el profundo problema de la discriminación, en esta postura se puede comprender que la DUDH cuente entre sus principales principios con el principio de no discriminación y que este se haya aplicado de manera manifiesta en la reivindicación y el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer. Pues la discriminación es un grave problema enfrentado por una mayoría de las mujeres en el mundo. Sin embargo, los problemas de la discriminación como se han abordado no afectan únicamente a las mujeres, la discriminación es una práctica de trato desfavorable dirigida contra personas o grupos por ser diferentes.⁸⁴³ La gravedad de este desprecio sistemático es tal, que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo clasifica a las conductas discriminatorias como violaciones masivas y patentes de derechos humanos, conminando a los Estados a la adopción de enérgicas medidas para eliminar estas prácticas, de este modo se constituyó una obligación específica del derecho al desarrollo, aunque prospectiva de aplicar medidas progresivas contra las violaciones graves de derechos humanos⁸⁴⁴; más la aportación novedosa de la declaración sobre el derecho al desarrollo, consiste en particulariza en el papel de la mujer

⁸⁴¹ Preámbulo, *Carta de las Naciones Unidas*.

⁸⁴² Preámbulo, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jaime Oraá Oraá y Felipe Gómez Isa elogian la relevante labor de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer quien se mantuvo: “...defendiendo en todo momento la inclusión en el texto de la Declaración de la perspectiva particular y específica de las mujeres.” ORAÁ Oraá, Jaime, GÓMEZ Isa, Felipe, La declaración universal de derechos humanos, *op. cit.*, p. 60.

⁸⁴³ En relación con la mujer la ONU ha adoptado el criterio de que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación. Ver: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

⁸⁴⁴ Ver artículo 5, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, *op., cit.*

como pieza clave del desarrollo y en derivar de ello una obligación, un auténtico deber para los Estados en relación con la dualidad mujer/desarrollo.

Son significativas las normas internacionales de derechos humanos que son dirigidas de forma especial hacia la mujer como titular de derechos y sujeto especial beneficiario. Estas normas procuran una especial atención en los temas relativos a la situación de la mujer en la administración de la justicia; la discriminación de género entre otras. Uno de los principales textos convencionales lo constituye la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer⁸⁴⁵; esta se acompaña de un Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

No puede ser omiso reparar en un detalle que se encuentra escrito en el preámbulo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esta Convención se adoptó en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas que apela un paradigma del siglo XXI y que es él: “nuevo orden económico internacional”⁸⁴⁶ en la misma oración, la Convención a los principios de: “equidad y la justicia”⁸⁴⁷ reitera la contribución del nuevo orden económico internacional: “a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.”⁸⁴⁸

Esta perspectiva adoptada en la Convención de vincular la igualdad entre hombres y mujeres como un requisito esencial para la constitución del nuevo orden económico internacional, no es casualidad, se corresponde con la tendencia que ya habíamos reparado derivada del advenimiento de la constitución de organismos internacionales después de la posguerra, encaminada hacia un nuevo modelo de relaciones económicas, sociales y culturales entre las naciones, que reflejará en los derechos humanos un paliativo contra las sucesivas violaciones de derechos humanos y de un

⁸⁴⁵ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

⁸⁴⁶ Preámbulo, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

⁸⁴⁷ Ídem.

⁸⁴⁸ Ídem.

sistema basado en el imperialismo.⁸⁴⁹ Agenda nada sencilla, si nos adelantamos hasta nuestros días ya muy posteriores a fechas tan emblemáticas como esa, que tuvo lugar en 1979 en la cual se adoptó un texto convencional sin precedentes, y armónico con el paradigma del nuevo orden económico mundial, instaurado sobre un sector más amplio el que menciona la declaración sobre el derecho al desarrollo el derecho de toda persona: “a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciados en esa Declaración.”⁸⁵⁰

En el plano internacional la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por los gobiernos en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, queremos enfatizar que en esta notoria declaración para los derechos de la mujer, en el apartado 1 los líderes mundiales que participaron en la Conferencia no omitieron en ese texto la referencia al desarrollo, es así que en el tercer punto de la declaración se dejó patente la interdependencia entre mujer y desarrollo, pues la declaración menciona la intención de los líderes mundiales de: “...promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad.”⁸⁵¹

Dicha declaración formuló armónicamente la fundamentación en el DIDH de los derechos humanos de las mujeres, haciendo un recuento de los principales instrumentos normativos de derechos humanos internacionales, destacó entre el catálogo la aportación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo:

Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en

⁸⁴⁹ “The emergence of the international human rights movement as a force in world affairs starting in the late 1970s is not attributable to a single cause. A confluence of unrelated events in different parts of the world that took on added significance because of the Cold War helped to inspire many people to commit themselves to organized efforts to advance the cause.” NEIER, Aryeh, *International human rights movement. A history*, Princeton University Press, New Jersey, 2012, p. 3.

⁸⁵⁰ *Preámbulo, Declaración sobre el derecho al desarrollo, op., cit.*

⁸⁵¹ [3], *Declaración de Beijing*.

particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el derecho al desarrollo.⁸⁵²

Es patente que los derechos humanos de la mujer son compatibles con el derecho humano al desarrollo, es más no puede hablarse del derecho al desarrollo como derecho humano sin tomar en cuenta el estado del arte del derecho al desarrollo, repercutiendo en los principales sujetos beneficiarios, que en un alcance genérico es la persona humana, más en términos específicos sobresalen algunos sujetos que como consecuencia de sus problemas especiales son especiales beneficiarios del derecho humano al desarrollo, uno de los cuales es desde luego la mujer.⁸⁵³ De la situación de la mujer como sujeto especial del desarrollo y en virtud de que en los diferentes instrumentos normativos existentes pertenecientes tanto a los derechos de la mujer como en aquellos respectivos de forma intrínseca al derecho humano al desarrollo, se puede vislumbrar una intertextualidad que denota una fundamentación jurídica de una obligación prospectiva de inclusión de la mujer en el desarrollo.

Dada su especial condición tanto en virtud de sus derechos humanos consagrados en el DIDH, además del reconocimiento que se le ha otorgado en los procesos de desarrollo como sujeto clave,⁸⁵⁴ era de esperarse que la mujer también fue objeto de una especial atención en la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los objetivos del desarrollo del milenio, tuvieron una incidencia en términos de los derechos de la mujer, esto es, que aguardan una perspectiva de género. A continuación abordaremos la perspectiva de los derechos mujer en la Declaración del Milenio y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

⁸⁵² [2], *Declaración de Beijing*.

⁸⁵³ Las reflexiones correspondientes sobre los sujetos de desarrollo, ya ha sido abordada en su momento con rigor metodológico en el capítulo II de la tesis titulado: Configuración constitucional del Derecho al Desarrollo en México.

⁸⁵⁴ BRENES Rosales, Raymundo, *op. cit.*, p. 116.

Desde un punto de vista genérico los ODM son los siguientes:

- 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre;
- 2) Lograr la enseñanza primaria universal;
- 3) Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer;
- 4) Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años;
- 5) Mejorar la salud materna;
- 6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades;
- 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente;
- 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.⁸⁵⁵

En numerosas resoluciones de derechos humanos se ha reconocido la vulnerabilidad de la mujer en los conflictos armados una de ellas es la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad;

Adicionalmente el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer ha promovido numerosos estudios sobre los derechos humanos de la mujer, como el estudio Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del Fondo Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).⁸⁵⁶

- f) Expandir los servicios públicos sensibles a las mujeres: UNIFEM categoriza que los principales servicios básicos para coadyuvar que la ciudadanía “goce” de sus derechos básicos son: educación; salud reproductiva y servicio público de agua y saneamiento;

⁸⁵⁵ A/57/270, *Implementation of the United Nations Millennium Declaration, Report of the Secretary-General.*

⁸⁵⁶ Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños/as Objetivo 5: Mejorar la salud materna Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

- g) Garantizar tierras y empleos para las mujeres; el artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer proveyó de una especial protección para la mujer rural, a nuestro juicio esta situación jurídica que guardan las mujeres en el mundo es crucial, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres sobre las cuales recae este papel, la Convención lo refleja al mencionar que se deberán tomar en cuenta: “los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía.”⁸⁵⁷ UNIFEM hace hincapié en la problemática del acceso de las mujeres a un trabajo decente y en el control de la tierra, derechos básicos aplicados a realidades distintas, uno en el contexto del empleo y el otro en el contexto agrícola, pero la protección y garantía de ambos redundan en un logro genérico que UNIFEM describe: “Cuando las mujeres tienen ingresos propios, tienen una voz importante en la toma de decisiones de la familia y están menos expuestas a la violencia doméstica.”⁸⁵⁸
- h) Incrementar la voz de mujeres en la toma de decisiones: autonomía de las mujeres en la familia, participación de las mujeres en las políticas públicas, participación de las mujeres en las actividades políticas, participación de las mujeres en los gobiernos locales, participación de la mujer en la vida comunitaria; en suma, propiciar que la mujer participe de forma plena en todos los asuntos de la sociedad ha sido una de las demandas que desde la Declaración de Beijing se retomado con insistencia⁸⁵⁹;

⁸⁵⁷ Artículo 14, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, *op. cit.*

⁸⁵⁸ Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, *op. cit.*, p. 8.

⁸⁵⁹ [13] “La potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.” *Declaración de Beijing*.

- i) Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas: No hay duda de que la discriminación es el tema más sensible en la discriminación de género y su denuncia constituye un elemento capital del discurso de los derechos de la mujer. UNIFEM distingue algunas de las consecuencias de esta conducta de violencia contra las mujeres y las niñas se reflejan en gastos que son asumidos de forma directa o indirecta por los supervivientes y el sector público en los rubros de: gastos de policía; legales; salarios; baja productividad. Tasas bajas de matriculación en la escuela de niñas, limitación de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, incluso las mujeres pueden llegar a padecer violencia sexual o física durante el embarazo; la violencia contra las mujeres y las niñas también contribuye para la transmisión del VIH y del SIDA, con sus consecuentes secuelas de estigmatización.⁸⁶⁰

El Informe del PNUD 2014, menciona datos esclarecedores sobre la condición de las mujeres que en México están expuestas más que los hombres a pobreza⁸⁶¹ y a la violencia: “En México, la principal razón por la que las mujeres abandonaban el mercado laboral eran las amenazas y la violencia infligida por sus maridos, que lo desaprobaban.”⁸⁶²

V.VI Obligación en materia de derechos de los discapacitados

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la CIDPD) fue decretada por la Asamblea General el 3 de mayo de 2008, tras ella se abonaban 60 años de la adopción por el mismo órgano de la DUDH; en sentido estricto la DUDH no enunció de manera expresa los derechos de las personas con discapacidad, la cuestión de la discapacidad se demoraría hasta la aprobación de subsiguientes documentos que pondrían de

⁸⁶⁰ Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, op., cit., pp. 4-17.

⁸⁶¹ PNUD, *op. cit.*, p. 78.

⁸⁶² *Ídem.*, p. 83.

relieve la perspectiva de la discapacidad en los derechos humanos.⁸⁶³ El valor jurídico y la trascendencia de la CIDPD consiste desde un enfoque formal en que constituye es el primer texto internacional que le confiere un carácter vinculante a los derechos de las personas con discapacidad.⁸⁶⁴ Como sucede en la mayoría de los textos convencionales de los derechos humanos, la cuestión de los derechos de los discapacitados en el horizonte de Naciones Unidas, abreva de movimientos por el reconocimiento de los derechos de los discapacitados, en el que se puede observar claramente como incide la democracia en el plano internacional como un comportamiento que incluye las demandas de la sociedad civil,⁸⁶⁵ en este tema específico se trata de los derechos de los discapacitados. Aunque por supuesto, las aportaciones de la sociedad civil significan una contribución sustancial, la labor por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos en el ámbito del DIDH de los discapacitados obedece a una multiplicidad de factores.⁸⁶⁶ La CIDPD se complementa con un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Es decir que el proceso del reconocimiento internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad es producto del desarrollo progresivo de los derechos humanos, no hubiera sido posible de no haber

⁸⁶³ PERLIN, Michael L., *International human rights and mental disability law. When the silenced are heard*, Oxford University Press, New York, 2012, p. 22. GUINN, Gerard, DEGENER, Theresia, *Derechos Humanos y Discapacidad: Uso Actual y Posibilidades Futuras de los Instrumentos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Contexto de la Discapacidad*, United Nations Publications, Ginebra, 2002, p. 23.

⁸⁶⁴ SÁNCHEZ Martínez Olga, SOLAR Cayón, José Ignacio, *La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en la legislación autonómica de Cantabria. Propuestas de reforma legislativa*, Dykinson, Parlamento de Cantabria, Madrid, 2015, p. 34. "All of these legal reforms, sought by people with mental impairments and disabilities and their advocates in the growing international movement for fully equal rights, underline the importance of an approach that sees people with disabilities as holders of fully equal rights, entitled to a wide of social services that ensure that they get a chance to exercise their rights." NUSSBAUM, C. Martha, *Frontiers of justice, disability, nationality, species membership*, Harvard University Press, United States of America, 2007, p. 198.

⁸⁶⁵ BARNES, Colin, MERCER, Geof, "The politics of disability and the struggle for change," p. en BARTON, Len (Ed.), *Disability, politics and the struggle for change*, 2a ed., Routledge, New York, 2013, p. 15.

⁸⁶⁶ Declaración de los derechos del retrasado mental de 1971; Declaración de los derechos de los impedidos de 1975; Año Internacional de las Personas Discapacitadas en 1981; Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad en 1982; Decenio Mundial de las Personas con Discapacidad; Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental de 1991; Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.

mediado la idea de la universalidad de los derechos humanos, y ello como indican Sánchez Martínez y Solar Cayón que la CIDPD: "...supone un cambio de paradigma en la historia del tratamiento jurídico de la discapacidad, enfocando el tratamiento de la misma como una cuestión prioritariamente de ejercicio de los derechos humanos."⁸⁶⁷

Pero la vulnerabilidad del discapacitado su situación, exige un trato particular, no era suficiente un discurso amplio de los derechos humanos, era conveniente abordar un instrumento dotado de fuerza obligatoria para convalidar el proceso de internacionalización de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para ello era inaplazable promover las condiciones para el "ejercicio efectivo"⁸⁶⁸ de los derechos de las personas con discapacidad.

La trascendente aportación de la CIDPD constituye en que le dota al discapacitado de una titularidad jurídica de derechos basada en el principio de su dignidad: "El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente."⁸⁶⁹ la cuestión de la discapacidad es ante todo una cuestión de derechos humanos, que reafirma que a los discapacitados se les respeten principalmente los derechos humanos universales, aunque se extienda la protección hacia un elenco específico de derechos básicos para los discapacitados en razón de su situación, esa sería la manera más idónea para entender la postura de la CIDPD y es una precisión

⁸⁶⁷ SÁNCHEZ Martínez Olga, SOLAR Cayón, José Ignacio, *op. cit.*, p. 25.

⁸⁶⁸ *Ibidem.*, p. 36.

⁸⁶⁹ Artículo 1, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. "Aunque la gama completa de derechos humanos da una impresión de complejidad e incluso de caos, todos los derechos de esa gama están ligados entre sí. Los denominadores comunes son los ya mencionados valores de la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad. A partir de esos valores básicos es posible conceptualizar el sistema de libertades fundamentales que los derechos humanos promueven y apoyan, un sistema lo bastante flexible como para incorporar a la mayoría de los sistemas socioeconómicos y lo bastante sólido como para apoyarlos." QUINN, Gerard, DEGENER, Theresia, "La autoridad moral para el cambio: los valores de derechos humanos y el proceso mundial de reforma en materia de discapacidad," en QUINN, Gerard, DEGENER, Theresia, *Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad*, Naciones Unidas, Ginebra, 2002, p. 15.

que Sánchez Martínez y Solar Cayón resaltan: “...lo que hace la CIDPD no es, fundamentalmente, sino adaptar las normas pertinentes de los Tratados internacionales sobre derechos humanos ya existentes al contexto específico de la discapacidad.”⁸⁷⁰

Por eso indican los autores que la CIDPD de conformidad con el artículo 1 “reafirma” la titularidad de las personas con discapacidad de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.⁸⁷¹

La CIDPD hace mención en el preámbulo de que la discapacidad es una condición en constante transformación: “...la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”⁸⁷²

CIDPD: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”⁸⁷³

La CIDPD contempló un conjunto de principios, que a juicio de Sánchez Martínez y Solar Cayón: “configuran un denso entramado de valores éticos que sustentan esos derechos y libertades y que cumplen una importante función

⁸⁷⁰ SÁNCHEZ Martínez Olga, SOLAR Cayón, José Ignacio, op. cit., p. 40.

⁸⁷¹ Ver Preámbulo de la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁷² *Ídem*.

⁸⁷³ Artículo 2, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

hermenéutica,” estos principios generales constituyen los requerimientos básicos para la inclusión de las personas con discapacidad, consagrados en el artículo 3° de la declaración son los siguientes.⁸⁷⁴

- a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
- b) La no discriminación;
- c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
- d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
- e) La igualdad de oportunidades;
- f) La accesibilidad;
- g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
- h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.⁸⁷⁵

La CIDPD contempla en el artículo 4 un rango de obligaciones generales que deberán ser asumidas por los Estados. Estas obligaciones son “extensas.”⁸⁷⁶ La obligación general es la de: “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.”⁸⁷⁷

En el contexto del DIDH en el ámbito del sistema universal de protección de los derechos de los discapacitados, el elenco de de sus derechos se consagró en la CIDPD, su contenido distingue los subsecuentes derechos de los discapacitados: Igualdad y no discriminación;⁸⁷⁸ Mujeres con

⁸⁷⁴ SÁNCHEZ Martínez Olga, SOLAR Cayón, José Ignacio, *op. cit.*, p. 43.

⁸⁷⁵ Artículo 3, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁷⁶ *Implementation of the right of disabled people to independent living, Twenty-third report of session 2010-12*, House of Lords, House of Commons, Joint Committee on Human Rights, p. 11.

⁸⁷⁷ Artículo 4, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁷⁸ Artículo 5, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

discapacidad;⁸⁷⁹ Niños y niñas con discapacidad;⁸⁸⁰ Accesibilidad;⁸⁸¹ Derecho a la vida;⁸⁸² Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias;⁸⁸³ Igual reconocimiento como persona ante la ley;⁸⁸⁴ Acceso a la justicia;⁸⁸⁵ Libertad y seguridad de la persona;⁸⁸⁶ Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;⁸⁸⁷ protección contra la explotación, la violencia y el abuso;⁸⁸⁸ protección de la integridad personal;⁸⁸⁹ libertad de desplazamiento y nacionalidad;⁸⁹⁰ derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad;⁸⁹¹ movilidad personal;⁸⁹² libertad de expresión y de opinión y acceso a la información;⁸⁹³ respeto de la privacidad;⁸⁹⁴ respecto del hogar y de la familia;⁸⁹⁵ educación;⁸⁹⁶ salud;⁸⁹⁷ habilitación y rehabilitación;⁸⁹⁸ trabajo y empleo;⁸⁹⁹ nivel de vida adecuado y protección social;⁹⁰⁰ participación en la vida política y pública;⁹⁰¹ participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.⁹⁰²

Ante todo, es preciso dejar patente que en los términos de la declaración sobre el derecho al desarrollo si es posible deducir una obligación genérica en materia de los derechos de los discapacitados, en ese sustento, la propia CIDPD en el preámbulo menciona que las personas discapacitadas pueden realizar contribuciones al bienestar general y que esto producirá consecuencias positivas en términos de desarrollo económico, social y humano:

⁸⁷⁹ Artículo 6, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸⁰ Artículo 7, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸¹ Artículo 9, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸² Artículo 10, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸³ Artículo 11, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸⁴ Artículo 12, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸⁵ Artículo 13, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁸⁶ Artículo 14, *Ídem*.

⁸⁸⁷ Artículo 15, *Ídem*.

⁸⁸⁸ Artículo 16, *Ídem*.

⁸⁸⁹ Artículo 17, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁹⁰ Artículo 18, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁹¹ Artículo 19, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.

⁸⁹² Artículo 20, *Ídem*.

⁸⁹³ Artículo 21, *Ídem*.

⁸⁹⁴ Artículo 22, *Ídem*.

⁸⁹⁵ Artículo 23, *Ídem*.

⁸⁹⁶ Artículo 24, *Ídem*.

⁸⁹⁷ Artículo 25, *Ídem*.

⁸⁹⁸ Artículo 26, *Ídem*.

⁸⁹⁹ Artículo 27, *Ídem*.

⁹⁰⁰ Artículo 28, *Ídem*.

⁹⁰¹ Artículo 29, *Ídem*.

⁹⁰² Artículo 30, *Ídem*.

Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza.”⁹⁰³

Como se ha mencionado los derechos de los discapacitados son todos ellos derechos humanos, por ello es conveniente y más aún, necesario reivindicar vehementemente en este tema que los discapacitados también son titulares del derecho humano al desarrollo. Y que el derecho humano cuenta entre sus contenidos con una obligatoriedad prospectiva en materia de los derechos humanos de los discapacitados, así, los primeros sujetos obligados son los Estados en los ámbitos nacionales, ello con fundamento en los artículos 2.3 y 3.1, 3.3 y 4.4 de la declaración sobre el derecho al desarrollo.⁹⁰⁴

Aunque la declaración omitió mencionar de forma expresa a los discapacitados, el artículo 1 declara el derecho de todo ser humano: “para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político.”⁹⁰⁵ En una redacción coincidente con el preámbulo de la CIDPD que reivindica la aportación en los temas de desarrollo económico, social y humano de la

⁹⁰³ Preámbulo, *Ídem*.

⁹⁰⁴ Artículo 2.3: “Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.” Artículo 3.1: “Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.” Artículo 3.3: “Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos.” Artículo 4.4: “Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho al desarrollo.” *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op. cit.*

⁹⁰⁵ Artículo 1, *Declaración sobre el derecho al desarrollo, op. cit.*

sociedad y en la erradicación de la pobreza que las personas discapacitadas pueden realizar en sus comunidades. En la declaración sobre el derecho al desarrollo artículo 8.1 menciona las obligaciones básicas que tienen los Estados en términos del derecho al desarrollo, y de estas los discapacitados son titulares: “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de los ingresos.”⁹⁰⁶

Haciendo énfasis del espíritu de la CIDPD al discurso de los derechos humanos se le debe aplicar la perspectiva de discapacidad, la Declaración y el Programa de Acción de Viena: “Es menester prestar especial atención a la no discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones, por parte de los discapacitados, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida su participación activa en todos los aspectos de la sociedad.”⁹⁰⁷

No hay duda de que en los conflictos armados que afectan a la sociedad civil, los discapacitados se encuentran en situación de vulnerabilidad, ante esta circunstancia alarmante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos expuso su preocupación sobre los grupos más vulnerables durante estos conflictos: mujeres; niños; ancianos y los discapacitados.⁹⁰⁸

En el año 2009, El Grupo de expertos de las Naciones Unidas elaboró un informe acerca de la agregación de la perspectiva de la discapacidad en las políticas, procesos y mecanismos de los ODM. Inicialmente los ODM que ya se han abordado, aunque ambiciosos como medidas en colaboración con las

⁹⁰⁶ Artículo 8.1, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, op. cit.

⁹⁰⁷ [22], *Declaración y Programa de Acción de Viena*.

⁹⁰⁸ [29], *Declaración y Programa de Acción de Viena*. “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos está hondamente preocupada por las violaciones de los derechos humanos durante los conflictos armados, que afectan a la población civil, en particular a las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados. Por consiguiente, la Conferencia exhorta a los Estados y a todas las partes en los conflictos armados a que observan estrictamente el derecho humanitario internacional, establecido en los Convenios de Ginebra de 1949 y en otras reglas y principios del derecho internacional, así como las normas mínimas de protección de los derechos humanos enunciadas en convenciones internacionales.”

agencias de Naciones Unidas, los Estados miembros y miembros de la sociedad civil para solucionar los problemas del desarrollo, implicaron el tema de la discapacidad, los expertos observaron el problema de que la discapacidad y las personas con discapacidad no habían sido relevantes ni mencionadas en ese momento en los procesos y políticas de los ODM.⁹⁰⁹

Esta tesis manejada por el grupo de expertos coincide con una inquietud deslizada por Sánchez Martínez y Solar Cayón, quienes dan cuenta de las conclusiones resaltadas en los informes de Naciones Unidas que revelaban una ausencia del enfoque de la discapacidad en los derechos humanos.⁹¹⁰

El reporte del Secretario General: Quinto examen y evaluación quinquenal del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, urgió para incluir los problemas de las personas con discapacidad en los ODM, alertaba de una deficiencia del Informe del Milenio consistente en que si bien se prestaba atención al género y a la situación de las personas enfermas de VIH y de SIDA no se había tomado en cuenta la situación de las personas con discapacidad.⁹¹¹

⁹⁰⁹ “Even though the commitment of the United Nations to the rights of persons with disability and their inclusion in all MDG activities are implied in the MDGs, and the World Summit Outcome⁹⁰⁹ recognizes the need for persons with disabilities to be guaranteed full enjoyment of their rights without discrimination, disability and persons with disabilities are currently not mentioned in relevant MDGs policies and processes. There is no reference either to persons with disabilities in the accompanying body of guidelines and policies, programmes and conferences that are part of the on-going MDG efforts, nor the targets and indicators that operationalize the MDGs. In addition, the MDGs review process underway within the United Nations and related work in development does not include disability.” Report of the Expert Group Meeting, Mainstreaming Disability in MDG Policies, Processes and Mechanisms: Development for All, Geneva, Switzerland, 14-16 April 2009.

⁹¹⁰ “Y por otro, en buena medida como consecuencia de lo anterior, no existía un seguimiento por parte de los órganos encargados de la supervisión de la aplicación de los diversos tratados del grado cumplimiento de los derechos humanos en relación a las personas con discapacidad. Circunstancias que conducían, en definitiva, a una situación paradójica que revelaba una evidente contradicción entre la teoría y la práctica de los derechos humanos en el contexto de la discapacidad, entre los valores proclamados y su falta de aplicación a este colectivo.” SÁNCHEZ Martínez Olga, SOLAR Cayón, José Ignacio, *op. cit.*, p. 36.

⁹¹¹ [4] “Todos los objetivos de desarrollo del Milenio, entre ellos la erradicación de la pobreza, el logro de la enseñanza primaria universal, la reducción de mortalidad de los niños menores de 5 años, el mejoramiento de la salud materna, y la lucha contra el VIH/SIDA, guardan relación con los objetivos del Programa de Acción Mundial, así como con las Normas Uniformes y la Convención. Es necesario ocuparse urgentemente de la cuestión de la ausencia de más del 10% de la población del mundo en la aplicación, el examen y la evaluación de los objetivos de desarrollo del Milenio y sus metas, mecanismos de evaluación e indicadores. La falta de una perspectiva de la discapacidad está menoscabando el propósito de los objetivos de desarrollo del Milenio, que es medir los hitos de desarrollo humano en el establecimiento de un desarrollo

Si se examinan los citados esfuerzos internacionales, encabezados por la aprobación de un texto convencional que especifica los derechos humanos de los discapacitados, es claro, que la obligación de los Estados en materia de los derechos de los discapacitados es una de las principales garantías para las personas que pertenecen a este colectivo.⁹¹² Las obligaciones que se pueden aplicar de forma genérica para los discapacitados son las previstas en el artículo 3.1 de la declaración que mandata el deber de los Estados: "...de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo."⁹¹³

Es indispensable que los Estados en los ámbitos nacionales atiendan a su obligación de formular políticas específicas que integren el enfoque de la discapacidad en los problemas de desarrollo.

En consecuencia resulta evidente que en los ODM se incluyera posteriormente el enfoque de las personas con discapacidad. Pues la discapacidad como apunta Sands despliega profundas interconexiones con el género y la pobreza,⁹¹⁴ sin embargo; la situación de desventaja de la discapacidad a pesar de su estrecha conexión con la pobreza y el género, no estuvo presente en el diseño de las políticas de los ODM.⁹¹⁵ Esta situación obedece a la práctica habitual de que en los tratados internacionales de derechos humanos se omitiera la mención a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esta situación se volvió inaplazable, en efecto, aunque la CIDPD es el texto vinculante para los derechos humanos de las personas con discapacidad, esta situación no podía ser descartada en los

mundial más incluyente y equitativo." *Informe del Secretario General, Quinto examen y evaluación quinquenal del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad*, A/63/183, 28 de julio de 2008.

⁹¹² GÓMEZ Isa, Felipe, *op. cit.*, p. 301.

⁹¹³ Artículo 3.1, *Declaración sobre el derecho al desarrollo*, *op. cit.*

⁹¹⁴ SANDS, Therese, "A voice of our own: advocacy by women with disability in Australia and the Pacific," en KINGMA, Koos, SWEETMAN, Caroline (Ed.), *Gender, development and advocacy*, Oxfam, Oxford, 2005, p. 55. VAN REENEN, Tobías, COMBRINCK, Helene, "International financial institutions and the attainment of the UN Millenium Development Goals in Africa – with specific reference to persons with disabilities," en GROBBELAAR-Du Plessis, VAN REENEN, Tobias, *Aspects of disability law in Africa*, Pretoria University Law Press, Pretoria, 2011, p. 203.

⁹¹⁵ *Ídem.*

ODM, pues la CIDPD de la obligación de los Estados de adoptar medidas en el ramo de la cooperación internacional para lograr la plena efectividad de los derechos y propósitos de la CIDPD:

Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad.⁹¹⁶

La Asamblea General consciente de esta anomalía en una resolución aprobada por este órgano el 18 de diciembre de 2008, dio cuenta de que la mayoría de las personas discapacitadas habitaban en condiciones de pobreza.⁹¹⁷ Subrayando algunas de las circunstancias que afectan a las personas con discapacidad, mismas que corresponden de forma estrecha a los supuestos que la declaración sobre el derecho al desarrollo contempla violaciones masivas y patentes de derechos humanos, por lo que la figura del discapacitado emerge con especial atención debido a que en las obligaciones prospectivas del derecho humano al desarrollo es indispensable la adopción del enfoque de la discapacidad, las circunstancias en comento son:

- a) Pobreza;
- b) Conflictos armados y ocupación extranjera;
- c) Necesidades de género;
- d) Necesidades de edad;
- e) Situaciones de riesgo; emergencias humanitarias y desastres naturales.⁹¹⁸

⁹¹⁶ Artículo 32, *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*.

⁹¹⁷ Resolución A/RES/63/150, *Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*, 18 de diciembre de 2008.

⁹¹⁸ Resolución A/RES/63/150.

Sugiere que los Estados en cooperación con las ONG, instituciones financieras regionales e internacionales y el sector privado adopten su trabajo en favor de las personas con discapacidad empleando los instrumentos normativos provistos por Naciones Unidas, a través de medidas encaminadas hacia la adopción de “estrategias, políticas y programas de desarrollo destinados a la consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”⁹¹⁹ Pone de relieve la importancia de la garantía de accesibilidad para los discapacitados; redes de seguridad social para los discapacitados; garantía de nivel de vida y protección social, esencialmente en los temas de erradicación de la pobreza, educación, salud y empleo; igualdad de oportunidades y participación política.⁹²⁰

Se observa como la cuestión de la discapacidad deja de ser desapercibida para pasar a engrosar los ODM, incorporándose en el contexto del desarrollo y en los ODM.⁹²¹

A la par de las obligaciones jurídicas correspondientes a la CIDPD, la perspectiva de la discapacidad en el contexto del desarrollo, constituye una obligación prospectiva en base a lo dispuesto por la declaración sobre el derecho humano al desarrollo, sin embargo como se ha demostrado la fundamentación, el progreso y la implementación de esta obligación ha sido tardía y no siempre implícita.⁹²²

Paulatinamente la cuestión de la discapacidad fue incorporándose a los ODM:

⁹¹⁹ *Ídem.*

⁹²⁰ *Ídem.*

⁹²¹ *Ídem.*

⁹²² NA. Aunque se aclara nuevamente que por cuestión metodológica en esta tesis no se abordarán las manifestaciones específicas de la implementación las obligaciones sobre el derecho humano al desarrollo. Pues se tratan de temas que corresponden a una disciplina muy específica que ha cobrado relevancia en el DIDH, misma que consiste en el monitoreo de la implementación de los derechos humanos, estas revisiones se realizan tanto en los ámbitos nacionales como internacionales y son en sí mismos garantías. Los textos convencionales regulan generalmente en términos genéricos el gran tema de la implementación como un medio de certeza jurídica para revisar y evaluar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los sujetos obligados, siendo los principales los Estados, estos mecanismos constituyen de manera autónoma una garantía en mismos.

Exhorta a los gobiernos a que faciliten la participación de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo, en particular en todas las actividades dirigidas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asegurando que los programas y políticas encaminados a erradicar la pobreza extrema y el hambre, a lograr la enseñanza primaria universal, a promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, a reducir la mortalidad infantil, a mejorar la salud materna, a combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, a asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo, sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad.⁹²³

La Asamblea General en el Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año:

- a) La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo son instrumentos de derechos humanos como de desarrollo;
- b) Contemplar la perspectiva de la discapacidad en las políticas de desarrollo (erradicación de la pobreza la inclusión social, el empleo pleno y productivo, trabajo decente, el acceso a los servicios sociales básicos).
- c) Reconoce que las políticas de desarrollo deberán tomar en cuenta la perspectiva de la discapacidad en base de las necesidades de ciertos grupos como lo son las mujeres; los niños; los jóvenes; personas indígenas y personas de edad.

⁹²³ Resolución A/RES/65/186, La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 y después de esa fecha, 21 de diciembre 2010.

- d) Aplicar de forma pertinente los ODM y la perspectiva de la discapacidad en los planes específicos, como la promulgación o la enmienda de leyes nacionales y su aplicación, la armonización de las estructuras legislativas, normativas e institucionales nacionales, y la aprobación y aplicación de planes nacionales.
- e) Derecho a la educación;
- f) Servicios de salud;
- g) Sistemas de protección social;
- h) Acceso al empleo;
- i) Accesibilidad;
- j) Datos sobre la discapacidad;
- k) Conocimiento y comprensión sobre discapacidad y desarrollo;
- l) Respuesta humanitaria;
- m) Conciencia social sobre las personas con discapacidad;
- n) Derechos y necesidades de las mujeres y niños con discapacidad;
- o) Bancos de desarrollo;
- p) Cooperación sur-sur norte-sur;
- q) Sector privado;
- r) Fondo fiduciario de donantes múltiples de la Alianza de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad.⁹²⁴

El Secretario General en el informe: El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año: “El debate actual sobre un enfoque inclusivo del desarrollo ofrece una oportunidad decisiva para atender las preocupaciones de las personas con discapacidad que no tiene en cuenta el actual marco internacional del desarrollo basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.”⁹²⁵

⁹²⁴ A/68/L.1, Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año.

⁹²⁵ A/68/95, Informe del Secretario General, El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año. a)

Entre las recomendaciones sugeridas por el Secretario General sobresalen aquellas que disciernen: “El fomento de la comprensión del por qué la discapacidad es un elemento esencial del desarrollo inclusivo y sostenible. Esta medida puede apoyarse con una síntesis de las investigaciones existentes y la información disponible para establecer vínculos entre la discapacidad y otras cuestiones de desarrollo concretas relacionadas con el medio ambiente, la erradicación de la pobreza, la educación, el trabajo y el empleo, entre otras.”⁹²⁶

La obligación en materia de discapacidad suscrita en la declaración sobre el derecho al desarrollo ha tomado carta de naturalización y su lenta incorporación como cuestión de desarrollo intersectorial en los ODM contribuye para el fortalecimiento de esta institución pues se ha convertido en una preocupación genuina en el DIDH, además de ya estar dotados los derechos humanos de los discapacitados de fuerza obligatoria por la CIDPD. Más es preciso insistir en que la CIDPD era insuficiente por sí misma para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los discapacitados sobre todo en el contexto del desarrollo, era prudente poder ir perfilando el nexo entre discapacidad y desarrollo, por utilizar una expresión del Secretario General de Naciones Unidas.⁹²⁷

Todo esto reside en el hecho de que todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, por lo que hace al derecho humano al

Incorporación de cuestiones de desarrollo intersectoriales en la actividad general; b) Experiencias en la incorporación de la cuestión de la discapacidad, la perspectiva regional.

⁹²⁶ A/68/95, *op. cit.*

⁹²⁷ “En los documentos finales aprobados en las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2012 (Río+20), titulado “El futuro que queremos” (resolución de la Asamblea General 66/288, anexo), puso de relieve las interrelaciones entre el desarrollo sostenible y la participación activa de las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario tomar más medidas para impedir que se denomine “grupo vulnerable” a las personas con discapacidad y lograr que la discapacidad en sí se considere un tema intersectorial en cualquier nuevo objetivo de desarrollo sostenible. En 2012, en el informe titulado Hacer realidad el futuro que queremos para todos, el Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda para el Desarrollo. Después de 2015 pidió que se adoptara un enfoque normativo integrado que respondiera a las aspiraciones de todas las personas de vivir en un mundo libre del temor y la miseria.” A/68/95, *op. cit.*

desarrollo y los derechos humanos de los discapacitados. Su nexa es con el fin de contribuir para el bienestar de las personas con discapacidad.

Conclusiones

PRIMERA: Desde la enunciación del derecho humano al desarrollo por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, este derecho humano se ha perfilado en el derecho internacional de los derechos humanos como un integrante más del núcleo duro de los derechos humanos.

SEGUNDA: En México, el derecho humano al desarrollo adquiere nueva connotación con motivo de la reforma constitucional de derechos humanos del año 2011, que introdujo modificaciones como la cláusula de interpretación conforme a los tratados internacionales, la vinculación de la constitución a los tratados internacionales de derechos humanos; el principio *pro homine* y las obligaciones estatales en materia de derechos humanos (obligación de respetar, proteger adoptar medidas y garantizar los derechos humanos y obligación de reparar los derechos humanos). Todas ellas relevantes para efectos de la interpretación legal del derecho humano al desarrollo y de su aplicación e implementación a través de la formulación de políticas públicas, ello de conformidad con el artículo 2.3 de la Declaración sobre el Derechos Humano al Desarrollo que establece el deber de los Estados de enunciar políticas de desarrollo nacional tendientes a optimizar el bienestar de la población y de los individuos.

TERCERA: Respecto de las bases para la interpretación legal del derecho humano al desarrollo, en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos la jurisprudencia interamericana arroja luces por medio de jurisprudencia que ha emitido explicitando el desarrollo progresivo de los derechos humanos tutelado por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que ha adoptado el criterio de que los Estados Partes de la Convención tienen la obligación de adoptar providencias, de tipo multinivel, para lo cual pueden allegarse de mecanismos de nivel interno y hacer uso de la cooperación internacional, particularmente en áreas económicas y técnicas. Lo cual coincide con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Declaración sobre el Derecho Humano al Desarrollo. Esto es coincidente con lo estipulado por la declaración sobre el derecho humano al desarrollo en el

artículo 3 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que estipula el deber de los Estados de procurar en el ámbito internacional la realización de condiciones favorables del derecho humano al desarrollo, el deber de eliminar los obstáculos, la sujeción del derecho humano al desarrollo a los principios de derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas tales como las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados. En sus criterios jurisprudenciales la Corte ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales, deben regirse con miras a su progresividad en razón de la disponibilidad de los recursos, leyes y regulaciones y otros medios, en el que se agrupan políticas públicas, sociales y directivas.

CUARTA: La jurisprudencia mexicana ha venido ofreciendo aunque de manera indirecta, algunos criterios que introducen estándares para aquellos individuos que habiten en zonas que requieran atención prioritaria por ser zonas que estén expuestas a elevados índices de pobreza; de marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el “ejercicio de los derechos para su desarrollo;” impulso de mecanismos con perspectiva de género en temas de participación política de la mujer; derecho a un medio ambiente sano y obligaciones de las autoridades; obligación de aplicar el control de convencionalidad sobre todo en aquellos casos en los que el afectado lo solicite.

QUINTA: El derecho humano al desarrollo está sobradamente fundado en normas vinculantes como lo son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en el sistema de fuentes estos dos pactos como normas convencionales le dotan al derecho humano al desarrollo de un marco legal en el derecho internacional de los derechos humanos a sus contenidos normativos que guardan una dimensión eminentemente procedimental.

SEXTA: En el ordenamiento constitucional mexicano la visualización del derecho humano al desarrollo se fortalece a través de la reforma constitucional de derechos humanos en la materia del año 2011, que internacionaliza los derechos humanos, favorece la interpretación constitucional en base a principios; constitucionaliza los mandatos de optimización que proceden de los

tratados internacionales de derechos humanos, contribuye a colocar a los derechos humanos como una auténtica política de Estado, estos elementos coadyuvan para establecer una base legal a la luz del derecho constitucional mexicano.

SÉPTIMA: Respecto de los sujetos beneficiarios de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, el elemento central del derecho al desarrollo humano es el ser humano, pues es en el ser humano o en la persona humana donde converge todo el dinamismo de este derecho humano, pues la finalidad de este derecho es dignificar la esencia de la persona. A la persona humana se le atribuyen no derechos sino también deberes conforme al artículo 2.2 de la Declaración que dispone de sus responsabilidades individuales y colectivas y los Estados son titulares de un elenco de obligaciones básicas y prospectivas.

OCTAVA: El derecho humano al desarrollo exige el acuerdo entre los ciudadanos y los poderes públicos para poder dar cauce a las obligaciones básicas que se desprenden del derecho humano al desarrollo. La generación de este consenso debe hacerse tomando en cuenta todos los instrumentos de democracia participativa previstos en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos; inclusión de la sociedad civil; un concepto holístico de democracia que no solo incide en la democracia electoral, sino que la afianza y además introduce técnicas o dosis pluralismo, participación en la medida de lo posible de los individuos en la adopción de decisiones; instituciones competentes y públicas; sistemas judiciales imparciales e independientes; responsabilidad del poder legislativo; confiabilidad del sistema electoral; esquemas de diálogo civil y diálogo social con la sociedad civil; fortalecimiento de los órganos colegiados encargados de participar en la toma de decisiones públicas.

NOVENA: Reputar las materias que se consideran fundamentales en términos de desarrollo para fortalecer el núcleo central del derecho humano al desarrollo que son sus obligaciones mismas que le dan validez y certeza jurídica. De esta forma se podrá asignar el concepto de garantía en el derecho humano al desarrollo. Así las cosas las obligaciones de: acceso a los recursos básicos; acceso a la educación; acceso a los servicios de salud; obligaciones en materia

de seguridad alimentaria; materia de vivienda; empleo y de justa distribución de los ingresos (igualdad de oportunidades) constituyen de ser implementadas las verdaderas garantías del derecho humano al desarrollo. El Estado deberá auxiliarse de la técnica del servicio público (se puede optar por el modelo de servicio de interés general de la UE a mi juicio muy completo); la rectoría y regulación de la economía y de las políticas públicas en coordinación con los miembros de la sociedad civil y el sector privado. Además para la garantía de los derechos de segunda y tercera generación el Estado se sujeta al principio de progresividad y de máxima disponibilidad de los recursos. Pero no podrá diferir su implantación sin una justificación de peso. La cláusula de regresividad deberá justificarse y pueden introducirse mecanismos si aplica para su tutela jurisdiccional, deberían fortalecerse las atribuciones cuasi jurisdiccionales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas como la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones y el procedimiento de investigación de conformidad a lo establecido por el artículo 2 y 11 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto daría mayor certeza de las obligaciones jurídicas del derecho humano al desarrollo y evitaría la judicialización de los derechos de segunda y tercera generación,

DÉCIMA: Como consecuencia de una mutación en las situaciones subjetivas de la persona humana. El reconocimiento de los derechos de segunda y de tercera generación ha motivado una aplicación de los derechos humanos, pero también de la titularidad jurídica de los derechos humanos y de las obligaciones en materia de derechos humanos. Esto no exime al derecho humano al desarrollo, este instituto debe concretar garantías de protección para las situaciones subjetivas de las personas que llegasen a requerir la aplicación de este derecho humano. El elenco de los derechos humanos en diversos instrumentos normativos el DIDH se ha ampliado con el fin de proteger a la persona humana, estas ramificaciones han originado obligaciones en materia de medidas progresivas contra la violación de los derechos humanos; en materia de libre determinación de los pueblos; fomento de la Democracia participativa; obligación de inclusión de la mujer y en materia de los derechos

de los discapacitados, mismas que han permeado en la evolución normativa del derecho humano al desarrollo.

DÉCIMA PRIMERA: El derecho al desarrollo es un derecho autónomo pero interdependiente del resto de los derechos humanos. Su titularidad le corresponde a la persona humana. Consiste en el derecho de la persona humana al acceso a los medios y oportunidades necesarias para la realización de los derechos humanos de primera y de segunda generación para de esa manera ser partícipe del desarrollo económico, social, cultural y político y realizar plenamente su personalidad humana.

Bibliografía

ABI-SAAB, G., "The legal formulation of the right to development (subjects and content)," en DUPUY, René Jean, *Hague Academy of International Law and the United Nations University. The right to development at the international level*, Workshop, The Hague, 16-18 october 1979, Sijthoff & Noordhoff, The Netherlands, 1980.

AL HUSSEIN, Zeid Ra'ad "Opening statement," *Working Group on the Right to Development The sixteenth annual session*, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 27 April – 1 May 2015.

ANGHIE, Antony, "International human rights law and developing world perspective," en SHEERAN, Scott, RODLEY, Sir Nigel, *Routledge handbook of international human rights law*, Routledge, New York, 2013.

ABRAMOVICH, Victor, "Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo," *Revista de la CEPAL*, Número 88, abril 2006, Santiago de Chile.

ALARCÓN Requejo, Gílder, *Estados de Derecho, Derechos humanos y democracia. Pautas para la racionalidad jurídico-política desde Elías Díaz*, Dykinson, Madrid, 2011.

AL HUSSEIN, Zeid Ra'ad "Opening statement," *Working Group on the Right to Development The sixteenth annual session*, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 27 April – 1 May 2015.

ÁNGULO Sánchez, Nicolás, *El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, concepto, contenido, objetivos y sujetos*, IEPALA Editorial, Madrid, 2005.

ALSTON Philip, GOODMAN Ryan, International human rights. The successor to international human rights in context, Oxford University Press, United Kingdom, 2013.

- "Introduction," en ALSTON, Philip (Ed.), *People's rights*, Oxford University Press, United States of America, 2001.
- "Prevention versus cure as a human rights strategy," en *Development, human rights and the rule of law, Report of a Conference held in the Hague on 27 april – 1 may 1981, convened by the International Commission of Jurists*, Pergamon Press, Great Britain, 1981.

APARICIO WILHEMI, Marco, *La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de México*, "Boletín Mexicano de Derecho Comparado," No. 124, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, enero-abril 2009.

ARACIL, Rafael, OLIVER, Joan, SEGURA, Antoni, *El mundo actual. De la segunda guerra mundial a nuestros días*, Edicions Universitat de Barcelona, España, 1998.

ARANGO, Rodolfo, "La jurisdicción social de la tutela," en MOLINA Betancur, Carlos Mario (Ed.), *Corte Constitucional. 10 años Balances y perspectivas*, Centro Editorial Universidad del Rosario, Colombia, 2003.

AZIZ, Nikhil, "The human rights debate in an era of globalization: hegemony of discourse," en *Debating human rights. Critical essays from the United States and Asia*, VAN NESS, Peter, Routledge, New York, 2003.

BAGNI S., Trad. C. Astudillo, en PEGORARO, Lucio (Coord.), *Glosario de derecho público comparado*, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012.

BANDRÉS José Manuel, "Artículo 8," en PONS Rafols Xavier, *La declaración universal de los derechos humanos. Comentario artículo por artículo*. Asociación para las Naciones Unidas en España, Icaria Editorial, Barcelona, 1998.

BAÑO León, José María, "La distinción entre derecho fundamental y garantía institucional en la constitución española," *Revista Española de Derecho Constitucional*, Año 8. Num. 24. Septiembre-Diciembre 1988, pp. 155-179.

BARRENA, Guadalupe, *El pacto internacional de derechos civiles y políticos*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2012.

BARRANCO Avilés, Ma. del Carmen, *Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos*, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2011.

BARNES, Colin, MERCER, Geof, "The politics of disability and the struggle for change," p. en BARTON, Len (Ed.), *Disability, politics and the struggle for change*, 2a ed., Routledge, New York, 2013.

BAZÁN, José Luis, Estudio preliminar, en ZUMAQUERO, José Luis, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos II 1978-1998*, EUNSA, Pamplona, 1998.

BEDJAOUI, M., "The right to development," en BEDJAOUI, M., (Ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff, UNESCO, Dordrecht, 1991.

BOBBIO, Norberto, *El tiempo de los derechos*, Ed. Sistema, Madrid, 1998.

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, *Escritos sobre derechos fundamentales*, Traducción de Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, Germany, 1993.

BONET Pérez, Jordi, SAURA Estapà, Jaume, *El derecho internacional de los derechos humanos en periodos de crisis. Estudios desde la perspectiva de su aplicabilidad*, Marcial Pons, Madrid, 2013.

BÓNET Pérez, Jordi, OLESTI Rayo, Andreu, *Nociones básicas sobre el régimen jurídico internacional del trabajo*, Huygens Editorial, Barcelona, 2010.

BULL, H., *Indigenous peoples and the right to development*, en “Global consultation of the right to development as a human right,” Geneva, 8-12 January 1990, HR/RD/1990/CONF.25.

BUNN, Isabella D., *The Right to Development and International Economic Law: Legal and Moral Dimensions*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2012.

CAMPOY Cervera, Ignacio, *El debate sobre la universalidad de los derechos humanos y la inmigración*, en “Una discusión sobre la universalidad de los derechos humanos y la inmigración”, Ed. Librería Dykinson, Madrid, 2006.

CANÇADO Trindade, Antônio, “Hacia la consolidación de la capacidad jurídica internacional de los peticionarios en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos,” en *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, 37, Enero-Junio 2003, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

- “La protección internacional de los derechos económicos, sociales y culturales”, en *Estudios de derechos humanos*, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José 1994.

CANO Linares, María de los Ángeles, *Orígenes y fundamentos prácticos del mantenimiento de la paz en Naciones Unidas (Las posiciones durante la guerra fría)*, Dykinson, Madrid, 2011.

CARBONELL, Miguel, MOGUEL, Sandra, PÉREZ Portilla, Karla (Comp.), *Derecho internacional de los derechos humanos, Textos básicos*, Ed. Porrúa-Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2002.

CARPIZO, Jorge, "Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características," *Cuestiones Constitucionales*, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 25, julio-diciembre 2011, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.

CASSIN, René, *The liberal Western Traditions of Human Rights, Round Table of Human Rights*, Oxford, 11-19 November 1965., UNESCO/22/HR/10.

CARRILLO Salcedo, Juan Antonio, *Soberanía internacional de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo*, Tecnos, Madrid, 1995.

CASADEVALL, Josep, *El convenio europeo de derechos humanos, el tribunal de Estrasburgo y su jurisprudencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

CASTRO, Juventino V., *Garantías y amparo*, Ed. Porrúa, 15ª, México, 2011.

CIRUJANO Campano, Paula, *Género, desarrollo y cooperación*, en CARBALLO De la Riva, Marta, (Coord.), "Género y desarrollo." El camino hacia la equidad, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Ediciones Catarata, Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, 2006.

COLLIARD, Claude-Albert, «L'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration sur le droit au développement », *Annuaire français de droit international*, volume 33, 1987.

CONDÉ, Victor, *A Hand book of international human rights terminology*, 2º, Nebraska Press, 2004.

CORTINA, Adela, MARTÍNEZ, Emilio, *Ética*, 4ª, Akal, Madrid, 2008.

COE, P., *The right to development must also address indigenous peoples and economies*, en “Global consultation of the right to development as a human right,” Geneva, 8-12, January 1990.

COSSIO Díaz, José Ramón, *Estado social y derechos de prestación*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.

CRAWFORD, J., “The rights of peoples: some conclusions”, CRAWFORD, J. (Ed.), *The Rights of Peoples*, Clarendon Press, Oxford, 1992.

CUADRA, Héctor, “El derecho internacional y el nuevo orden económico internacional,” en SOBERANES F., José Luis (Coord.), *Comunicaciones mexicanas al X congreso internacional de derecho comparado (Budapest, 1978)*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1980.

CHAUFFOUR, Jean-Pierre, *The Power of Freedom: Uniting Human Rights and Development*, p. Cato Institute, Massachusetts, 2009.

CHUECA Sancho, A., “El derecho al desarrollo en el ámbito internacional,” *Seminario de Investigación para la paz*, Zaragoza, 21-22 de octubre de 1994.

DAM De Jong, Daniëlla, *International law and governance of natural resources in conflict and post-conflict situations*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2015.

DE ASÍS Roig, Rafael, “Los derechos humanos en el contexto de la desigualdad”, en GARRIDO Gómez, María Isabel (Ed.), *El derecho al humano al desarrollo*, Tecnos, Madrid, 2013.

DE FEYTER, Koen, “The right to development in Africa,” BREMS, Eva, VAN DER Beken, Christophe, ABAY Yimer, Solomon, en *Human Rights and Development: Legal Perspectives from and for Ethiopia*, Hotei Publishing, 2015.

DE LAET, Debra, *The global struggle for human rights. Universal principles in world politics*, 2 ed., Cengage Learning, Stamford, 2015.

DONELLY, J., "Third generation rights", en BRÖLMANN, C., LEFEBER, R., ZIECK, M., (Eds.), *Peoples and minorities in international law*, Kluwer, The Hague, 1993.

DUPUY, R. J., "Thème et variations sur le droit au développement", en *Le droit des peuples a disposer d'eux-memes. Méthodes d'analyse du Droit International. Mélanges offerts a Charles Chaumont*, Pedone, París, 1984.

DE SCHUTTER, Olivier, *International human rights law*, 2^a ed., Cambridge University Press, United Kingdom, 2014.

EASTERLY, William, *Le fardeau de l'homme blanc. L'échec des politiques occidentales d'aide aux pays pauvres*, Editions Markus Haller, Italie, 2009.

FAKUDA-PARR, Sakiko, GREENSTEIN, Joshua, "Monitoring MDGs: A human rights critique and alternative", LANGFORD, Malcolm, SUMNER, Andy, YAMIN, Alicia Ely, Cambridge University Press, United States of America, 2013.

FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, Ed. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ de Oliveira, Michelle Vieira, *La ciudadanía incompleta. Derechos económicos y sociales en la periferia urbana de Brasil*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2014.

FERRER- MACGREGOR, Eduardo, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano, en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro, *La reforma constitucional de derechos*

humanos: Un nuevo paradigma, Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011.

FERRO, Marc, *La colonización. Una historia global*, Siglo XXI Editores, México, 2000.

FREEMAN, Michael, *Human rights*, 2 ed., Polity Press, Cambridge, 2011.

FIGUEROA Pla, Uldaricio, *El sistema internacional y los derechos humanos*, RIL Editores, Santiago, 2012.

FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción al estudio procesal comparativo de la protección interna de los derechos humanos, en *Veinte años de evolución de los derechos humanos*, México, UNAM, 1974.

FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA Carmona, Salvador, *Derecho constitucional mexicano y comparado*, México, Ed. Porrúa, 2012.

FLORES Saldaña, Antonio, El paradigma de la constitución. ¿Neoconstitucionalismo procedimental o sustancial?, en FLORES Saldaña, Antonio, *Interpretación y ponderación de los derechos fundamentales en el Estado constitucional*, Tirant Lo Blanch, Universidad Panamericana Campus Guadalajara Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2013.

GIMBERNAT, José Antonio, *Los derechos humanos. A los cincuenta años de la Declaración de 1948*, Cuadernos FyS, Madrid, 1998.

GÓMEZ Isa, Felipe, El derecho al desarrollo. ¿Otros veinticinco años de diálogo de sordos?, en GARRIDO Gómez, Isabel, *El derecho humano al desarrollo*, Tecnos, Madrid, 2013.

- “El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad,” *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos*, Núm. 1, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003.
- *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1995.

GONZÁLEZ Ordovás, Ma. José, *El derecho a la vivienda. Reflexiones en un contexto socioeconómico complejo*, Universidad Zaragoza, Dykinson, Madrid, 2013.

GREPPI, Andrea, en CARBONELL, Miguel, (Comp.), *Teoría constitucional y derechos fundamentales*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2002.

GROSS Espiell, Héctor, “Strengthening moral solidarity: Human rights, human genetics, and the ethics of science and technology,” en YUSUF, Abdulqawi, *Standard-setting in Unesco, Volume I, Normative, action in education and culture*, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Hotei Publishing, The Netherlands, 2007.

- *La Organización Internacional del Trabajo y los derechos humanos en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1978.
- *Estudios sobre derechos humanos II*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1995.

GROBBELAAR-Du Plessis, VAN REENEN, Tobias, *Aspects of disability law in Africa*, Pretoria University Law Press, Pretoria, 2011.

HÄBERLE, Peter, *El estado constitucional*, Trad. Héctor Fix-Fierro, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.

HART, H.L.A., “El cielo de los conceptos de Ihering y la jurisprudencia analítica moderna”, en CASANOVAS, Pompeu, MORESO, José Juan (Eds.), *El ámbito de lo jurídico*, Crítica, Barcelona, 1994.

HELLER, Herman, *Teoría del Estado*, 3ª ed., Trad. Luis Tobío, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.

HEYNS, Christof, *La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos*, en GÓMEZ Isa, Felipe, PUREZA, José Manuel, (Coord.), “La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI,” Universidad de Deusto, Bilbao, 2004.

HERNÁNDEZ Gómez, Isabel, *Sistemas internacionales de derechos humanos*, Dykinson, Madrid, 2002.

IHERING Von, Rudolf, “La jurisprudencia de conceptos”, en CASANOVAS, Pompeu, MORESO, José Juan (Eds.), *El ámbito de lo jurídico*, Crítica, Barcelona, 1994.

JIBRIL Ali, Abdi, “The right to development in Ethiopia,” en en BREMS, Eva, VAN DER Beken, Christophe, ABAY Yimer, Solomon, *Human Rights and Development: Legal Perspectives from and for Ethiopia*, Hotei Publishing, 2015.

JÍMENEZ Herrero, Luis, *Los objetivos del milenio y el medio ambiente*, en ECHART, Enara, PUERTO, Luis Miguel, SOTILLO, José Ángel, (Coords.), “Globalización, pobreza y desarrollo. Los retos de la cooperación internacional,” Instituto Universitario de Desarrollo, Los libros de la Catarata, Madrid, 2005.

JUSTE Ruíz, José, “El desarrollo sostenible y los derechos humanos,” en RODRÍGUEZ Carrión, Alejandro, PÉREZ Vera, Elisa (Coord.), *Soberanía del Estado y derecho internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo*, Tomo II, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, España, 2005.

KABASAKAL, Arat, Zehra F., *Human rights worldwide*, ABC Clío, Santa Bárbara, 2006.

KACOWICZ, Arie, "Global Governance, International Order, and World Order," en LEVI-FAUR, David, *The Oxford Handbook of Governance*, Oxford, New York, 2012.

KALLHOFF, Angela (Ed.), *Martha C. Nussbaum: ethics and political philosophy. Lecture and colloquium in Münster 2000*, Lit Verlag, Münster, 2001.

KEELEY, Brian, *De l'aide au développement La lutte mondiale contre la pauvreté: La lutte mondiale contre la pauvreté*, OECD Publishing, Paris, 2012.

KICHMEIER, Felix, *The right to development – where do we stand? State of debate of the right to development*, Occasional Paper, Friedrich Ebert Stiftung, Geneva, 2006.

KINLEY, David, "Where hope meets expectation between human rights idealism and pragmatism," en KINLEY, David, SADURSKI, Wojciech, WALTON, Kevin, *Human rights. Old problems, new possibilities*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2013.

KRUMOV, Krum, "Human resource development", LEONARD, Thomas M. (Ed.), *Encyclopedia of the developing world. Volume 1 A-E Index*, New York, Routledge, 2006.

LANG, Anthony F., *International Political Theory. An Introduction*, Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2015.

LOSANO, Mario G., "Las teorías del solidarismo y su influencia en la formulación de los derechos fundamentales económicos," en LOSANO, Mario G. (Ed.), *Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis*, Trad. Luis M. Lloredo Alix, Dykinson, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas," Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2011.

- “La cuestión social y el solidarismo francés: actualidad de una antigua doctrina,” en LOSANO, Mario G., *Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis*, Trad. Luis M. Lloredo Alix, Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas,” Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2011.

LLANO Alonso, Fernando, “El derecho al desarrollo en el sistema de derechos humanos: entre los derechos de la personalidad y la actividad del Estado,” en GARRIDO Gómez, María Isabel (Ed.), *El derecho al humano al desarrollo*, Tecnos, Madrid, 2013.

MATEO Pardo, Regino, La dignidad de la persona humana y su significación en la Constitución española de 1978 a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en “*Escritos Jurídicos en Memoria de Luis Mateo Rodríguez*,” Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, Santander, 1993.

MENDES, Errol P., *Global governance, and human rights and international law. Combatting the tragic flaw*, Routledge, New York, 2014

MUTUA, Makau, *Human rights: a political and cultural critique*, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 2002.

- “The construction of the African Human Rights system: prospects and pitfalls,” en POWER, Samantha, ALLISON, Graham (Eds.), *Realizing human rights. Moving from inspiration to impact*, Palgrave Macmillan, United States of America, 2000.

MARKS, Stephen P., “Human rights and development,” en JOSEPH, Sarah, McBeth, Adam, *Research handbook on international human rights law*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2010.

- “The human rights framework for development: seven approaches,” en SEGUNPTA, Arjun, NEGI, Archana, BASU, Moushumi, *Reflections on the*

right to development, Centre for Development and Human Rights, Sage Publications India, New-Delhi, 2005.

- Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980's?, 33 *Rutgers L. Rev.* 435, 435–52 (1981).
- The human right to development: between rhetoric and reality, *Harvard Human Rights Journal*, 137-68 (2004).

MATTHEWS, Alan, *Integración regional y seguridad alimentaria en países en desarrollo*, *Materiales de capacitación para la planificación agrícola*, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2003.

MELENDO, Tomás, *Las dimensiones de la persona*, Biblioteca Palabra, Madrid, 1999.

MEDINA Quiroga, Cecilia, *The battle of human rights. Gross, systematic violations and the Inter-American System*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 1988.

M'BAYE, Kéba, NDIAYE, Birame, The organization of African unity (OAU), *The international dimensions of human rights*, Vol 1, Greenwood Press-UNESCO, Westport Connecticut, 1982.

MENDES, Errol P., *Global governance, and human rights and international law. Combatting the tragic flaw*, Routledge, New York, 2014.

MOLINARI, Claire, "From a right to development to intergenerational equity," en VIÑUALES, Jorge (Ed.), *The Rio declaration on environment and development. A commentary*, Oxford University Press, United States of America, 2015.

MONTANARI, L., Trad. X. Lazo Fuentes, en PEGORARO, Lucio (Coord.), *Glosario de derecho público comparado*, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Centro de Investigación de Tecnología

Jurídica y Criminológica, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012.

NEIER, Aryeh, *International human rights movement. A history*, Princeton University Press, New Jersey, 2012.

NUSSBAUM C., Martha, *Creating capabilities, the human development approach*, Harvard University Press, United States of America, 2011.

- *Women and human development. The capabilities approach*, Cambridge University Press, New York, 2000.

NIETO, Navia, *Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos humanos*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1993.

NIKKEN, Pedro, *La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo*, Civitas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Madrid, 1987.

NÚÑEZ Palacios, Susana, *La protección de los derechos sociales y su implementación en las sentencias de la Corte Interamericana*, Alegatos, Universidad Autónoma Metropolitana, No. 79, México, 2012.

NÚÑEZ Torres, Michael, *La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución. El paradigma de Venezuela y España*, Editorial Porrúa, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2006.

OLIVEIRA Ribeiro, Cléa Regina, Interdependencia y responsabilidad, en AUSÍN, Txetxu, ARAMAYO, Roberto R. (Eds.), "La interdependencia. Del bienestar a la dignidad," Plaza y Valdés, Madrid, 2008.

PAREJA Eastaway, Montserrat, TURMO Garuz, Joaquín, “Las políticas de vivienda y el estado de bienestar,” en DÍAZ Orueta, Fernando, LOURES Seoane, Ma. Luisa, *Desigualdad social y vivienda*, Ed. Club Universitario, Alicante, 2005.

PECES-BARBA Martínez, Gregorio, “Introducción general,” en PECES-BARBA Martínez, Gregorio (Ed.), *Derecho positivo de los derechos humanos*, Colección Universitaria Editorial Debate, Madrid, 1987.

PÉREZ Luño, Estado de Derecho, Derechos humanos y Constitución, Tecnos, Madrid.

PERLIN, Michael L., *International human rights and mental disability law. When the silenced are heard*, Oxford University Press, New York, 2012.

PIGRAU Solé, Antoni, Introducción al derecho internacional de los derechos humanos, en OLLÉ Sesé, Manuel, ACEBAL Monfort, Luis, GARCÍA Sanz, Nuria, *Derecho internacional de los derechos humanos: su vigencia para los Estados y los ciudadanos*, Anthropos, Barcelona, 2009.

- PIGRAU Solé, Antoni, “Preámbulo, Comentarios al texto de la declaración universal de derechos humanos”, en Asociación para las Naciones Unidas en España, *La declaración universal de los derechos humanos. Comentario artículo por artículo*, Icaria Antrazyt, Barcelona, 1998.

PINILLA Pallejá, Rafael, *Más allá del bienestar. La renta básica de la ciudadanía como innovación social basada en la evidencia*, Icaria, Barcelona, 2006.

PISARELLO, Gerardo, *Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción, El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible*, Icaria, Barcelona, 2003.

QUERIMI, Querim, *Development in International Law: A Policy-Oriented Inquiry*, Koninklijke Brill, The Netherlands, 2012.

QUINN, Gerard, DEGENER, Theresia, “La autoridad moral para el cambio: los valores de derechos humanos y el proceso mundial de reforma en materia de discapacidad,” en QUINN, Gerard, DEGENER, Theresia, *Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad*, Naciones Unidas, Ginebra, 2002.

RAMCHARAN, Bertrand, *The fundamentals of international human rights treaty law, International Studies in Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 2011.

RAHMAN Osmani, Siddqur, “An essay on the human rights approach to development,” en SENGUPTA, Arjun, NEGI, Archana, BASU, Moushumi, *Reflections on the right to development, Center for Development and Human Rights*, Sage Publications, India, 2005.

RIST, Gilbert, *The history of development. From western origins to global faith*, 3ed., Academic Foundation, New Delhi, 2009.

RIVA Palacio Lavín, Antonio, *El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2012.

ROBLEDO Castillo, Jorge Enrique, *Globalización y seguridad alimentaria, en Desarrollo rural y seguridad alimentaria: un reto para Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, Colombia.

ROBERTS, Christopher N.J., *The contentious history of the international bill of human rights*, Cambridge University Press, New York, 2015.

RODRÍGUEZ –Rivera, Luis E., “Is the human right to environment recognized under international law”, en Claude, Richard Pierre, WESTON H., Burns (Ed.), *Human rights in the world community Issues and action*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2006.

ROLLAND, Sonia E., *Development at the WTO*, Oxford University Press, United Kingdom, 2012.

ROSANVALLON, Pierre, *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad*, Trad. Heber Cardoso, Manantial, Buenos Aires, 2009.

RODRÍGUEZ Palop, María Eugenia, *La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación*, Dykinson, Madrid, 2010.

ROUDINESCO, Élisabeth, *A vueltas con la cuestión judía*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2011.

ROSETTI, Andrés, ROSETTI, Andrés, “¿Los derechos sociales como derechos de segunda? Sobre las generaciones de derechos y las diferencias con los derechos de primera,” en ESPINOZA de los Monteros, Javier, ORDÓÑEZ, Jorge, *Los derechos sociales en el Estado Constitucional*, Tirant lo Blanch, México, 2013.

SACCUCI, Andrea, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, en FLORES, Marcello, GROPPi, Tania, PISILLO Mazzeschi, Riccardo, ANSOLABEHERE, Karina (Coords.), “Diccionario básico de derechos humanos. Cultura de los derechos en la era de la globalización,” FLACSO, México, 2009.

SALOMON, Margot, “Legal Cosmopolitanism and the Normative Contribution of the Right to Development”, en MARKS, Stephen (Ed.), *Implementing the Right to Development The Role of International Law*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Geneva, 2008.

SARTORI, Giovanni, *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Trad. Ana Díaz Soler, Taurus, Buenos Aires, 1998.

SALTALAMACCHIA Ziccardi, Natalia, COVARRUBIAS Velasco, Ana, La dimensión internacional de los derechos humanos: Antecedentes históricos, en CARBONELL, Miguel, SALZAR, Pedro, *La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma*, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011.

SÁNCHEZ Martínez Olga, SOLAR Cayón, José Ignacio, *La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en la legislación autonómica de Cantabria. Propuestas de reforma legislativa*, Dykinson, Parlamento de Cantabria, Madrid, 2015.

SCHRIJVER, Nicolaas, "Many Roads Lead to Rome. How to Arrive at a Legally Binding Instrument on the Right to Development?," en MARKS, Stephen (Ed.), *Implementing the Right to Development The Role of International Law*, The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Geneva, 2008.

SAMBO Dorrough, D., *The indigenous human right to development*, "Indigenous affairs," Vol. 1-2, 2010.

SÁNCHEZ M., Víctor, "Breve historia del derecho internacional", en Derecho internacional público," Huygens Editorial, Madrid, 2009.

Santo Tomás de Aquino, *Suma de Teología*, Ed. Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2001.

SAURA Estapá, Jaume, *Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: Una aproximación desde el derecho internacional*, en "Derechos emergentes: Desarrollo y medio ambiente," Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

SEGURA Serrano, Antonio, *El derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas*, Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2007.

SENGUPTA, Arjun, "The right to development", en CLAUDE, Richard Pierre, WESTON, Burns H., *Human rights in the world community. Issues and action*, 3a. ed., University of Pensilvannia Press, United States of America, 2006.

SEPULVEDA, Magdalena, *The nature of obligations under the international covenant on economic, social and cultural rights*, Intersentia, Amsterdam, 2003.

SEPÚLVEDA, Cesar, *Estudios sobre derecho internacional y derechos humanos*, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Colección Manuales (91/7), México, 1991.

SERRA Rojas, Andrés, *Hagamos lo imposible. La crisis actual de los derechos del hombre*, Ed. Porrúa, México, 1982.

SHELTON, Dinah L., *Regional protection of human rights*, Oxford, United States of America, 2010.

SHIVA, Vandana, "Resources", SACHS, Wolfgang (Ed.), *The development dictionary. A guide to knowledge as power*, 12ed., Witwaterstrand University Press, Southern Africa, 2007.

SIEGHART Paul., *The international law of human rights*, Clarendon Press, Oxford, 1983.

SIERPINSKI, B., "Droits de l'Homme, droit des peuples: de la primauté a la solidarité", en *L Homme et la société*, N. 85-86, 1987. Les droits de l'homme et le nouvel occidentalisme.

SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios esenciales*, Tirant lo Blanch, México D.F., 2012.

SMITH, Rhona K.M., *Textbook on international human rights*, Oxford University Press, United States of America, 2012

SSONKO Nabacwa, Mary, "Gender networking and advocacy work in Uganda: controlling the agenda and strategies of resistance," en KINGMA, Koos, SWEETMAN, Caroline (Ed.), *Gender, development and advocacy*, Oxfam, Oxford, 2005.

SSENYONJO, Manisuli, *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Bloomsbury Publishing, Portland, 2009.

STERIO, Milena, *The right to self-determination under international law. "Selfistans," secession, and the rule of the great powers*, Routledge, New York, 2013.

THOMSON, Anne, METZ, Manfred, *Implicaciones de las políticas económicas en la seguridad alimentaria, Manual de capacitación, Materiales de capacitación para la planificación agrícola*, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 1999.

ÚBEDA de Torres, Amaya, *Democracia y derechos humanos en Europa y América. Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos*, Díaz-Bastien & Truan, Ed. Reus, Madrid, 2006.

VALLE Fonrouge, Marcelo, *Desarme Nuclear. Regímenes internacional, latinoamericano y argentino de no proliferación*, Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme UNIDIR, Naciones Unidas, 2003.

COMBRINCK, Helene, "International financial institutions and the attainment of the UN Millenium Development Goals in Africa – with specific reference to persons with disabilities," en GROBBELAAR-Du Plessis, VAN REENEN,

Tobias, Aspects of disability law in Africa, Pretoria University Law Press, Pretoria, 2011.

VASAK, Karel (Ed.), *The international dimensions of human rights*, Vol 1, Greenwood Press-UNESCO, Westport Connecticut, 1982.

VÁZQUEZ, Luis Daniel, SERRANO, Sandra, “Contenido esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles,” en CERVANTES Alcayde, Magdalena, EMMANUELLI, María Silvia, GÓMEZ Trejo, Omar, SANDOVAL Terán, Areli (Coords.), *¿Hay justicia para los derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2014.

- *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica*, en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro, “La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma,” Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011.

VIGO, Rodolfo Luis, *Constitucionalización y judicialización del derecho. Del estado de derecho legal al estado de derecho constitucional*, Porrúa, México, 2013.

VILLÁN Durán, Carlos, “Los derechos humanos ante la epidemia del Sida,” en GÓMEZ Isa, Felipe (Dir.), PUREZA José Manuel, *La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004.

WELLMAN, Carl, *The moral dimensions of human rights*, Oxford University Press, New York, 2011.

WOODIWISS, Anthony, “The law cannot be enough. Human rights and the limits of legalism,” en Meckled-García, Saladin, Çali, Başak, *The Legalization of*

Human Rights, Multidisciplinary perspectives on human rights and human rights law, Routledge, 2006.

- *Making human rights work globally*, Glasshouse, London, 2003

WINTER, Jay, PROST, Antoine, *René Cassin and Human Rights. From the Great War to the Universal Declaration*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2013.

XIONG, Ping, *An international law perspective on the protection of human rights in the TRIPS agreement. An interpretation of the TRIPS agreement in relation to the right to health*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2012.

ZAGREBELSKY, Gustavo, *El derecho dúctil. Ley, derechos y justicia*, Trad. Marina Gascón, 10ª, Ed. Trotta, Madrid, 2011.

ZUMAQUERO, José Manuel, BAZÁN, José Luis, *Textos internacionales de derechos humanos. II 1978-1998*, EUNSA, Navarra, 1998.

Documentos

A/68/L.1, Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año.

A/68/95, Informe del Secretario General, El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año.

Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas.

A/57/270, Implementation of the United Nations Millennium Declaration, Report of the Secretary-General.

Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observación general 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991).*

Centre for Development and Human Rights, The right of development: a primer, Sage Publications India, New-Delhi, 2004.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1994/15, 19 de diciembre de 1994.

Consejo de Derechos Humanos, *Resolución A/HRC/RES/27/2.*

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008.

Democracia, paz y seguridad El rol de las Naciones Unidas. Informe de la Mesa redonda internacional sobre democracia, paz y seguridad: el rol de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, PNUD, IDEA, 2010.

Departamento de Pensamiento Social Cristiano, *Una nueva voz para nuestra época (Populorum Progressio 47), 3ª, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2006.*

Documento de política 14 /Boletín 28, Junio de 2014, El avance hacia la escolarización de todos los niños se estanca, pero algunos países muestran el camino a seguir. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228184S.pdf>.

Estudio sobre los problemas comunes a que se enfrentan los Estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el estado de derecho desde una perspectiva de derechos humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/22/29, Naciones Unidas, 2012.

European Union, Submission in follow-up to HRC resolution 19/34 “The right to development.

German Advisory Council on Global Change, *World in transition 3: Towards sustainable energy systems*, Routledge, 2013.

Governance for peace. Securing the social contract, United Nations Development Programme, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, New York, 2012.

Human Rights Council, Working Group on the Right to Development, Thirteenth session, 7-11 May 2012, Item 4 of the provisional agenda, Review of progress in the implementation of the right to development: consideration, revision and refinement of the right to development criteria and operational criteria (A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2).

Implementation of the right of disabled people to independent living, Twenty-third report of session 2010-12, House of Lords, House of Commons, Joint Committee on Human Rights.

Informe de Admisibilidad y Fondo No. 38/09, Caso 12.670, Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras Vs. Perú, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de marzo de 2009.

Informe del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, PNUD, Nueva York, 2014.

Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Alto al trabajo forzoso, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2001.

Informe y seguimiento de la EPT en el mundo, Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos, UNESCO, París, 2014.

Informe del Director General, *La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones extraídas*, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo 97.ª reunión, 2008, Informe I (B), Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2008.

Informe del Secretario General, Quinto examen y evaluación quinquenal del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, A/63/183, 28 de julio de 2008.

Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari, Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos humanos", A/HRC/4/18, 5 de febrero de 2007, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/InfRE_DerVivienda.pdf.

Informe sobre la salud en el mundo 2013. Investigaciones para una cobertura sanitaria universal, Organización Mundial de la Salud, Luxemburgo, 2013.

Informe del Secretario General, *Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI*, 27 de marzo de 2000, Naciones Unidas, Asamblea General,
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan004567.pdf>.

Informe preparado por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo en cumplimiento de la resolución 15/25 del Consejo de Derechos Humanos, Recopilación de las comunicaciones recibidas de partes interesadas que no son Estados Miembros, Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, 12º período de sesiones, Ginebra, 14 a 18 de noviembre de 2011, A/HRC/WG.2/12/3.

Informe sobre los Períodos de Sesiones Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto, (25 de abril a 12 de mayo de 2000, 14 de agosto a 1.º de septiembre de 2000 y 13 de noviembre a 1.º de diciembre de 2000), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Suplemento N.º 2, Naciones Unidas, Nueva York, 2001.

Las directrices sobre el derecho a la alimentación. Documentos informativos y estudios de casos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2006.

La hora de la igualdad en el trabajo, Informe Global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2003.

La relación entre desarme y desarrollo en el contexto internacional contemporáneo, Informe del grupo de expertos gubernamentales sobre la relación entre desarme y desarrollo, Naciones Unidas, 2005.

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2014, Naciones Unidas, Nueva York, 2014.

Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C.12/2007/1, 38º Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007.

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo*, Naciones Unidas, Ginebra, 2006.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Serie de Capacitación Profesional N° 5/Add.2, *Derechos humanos y aplicación de la ley, Guía para instructores en derechos humanos para la policía*, United Nations Publications, 2004.

Report of the Expert Group Meeting, Mainstreaming Disability in MDG Policies, Processes and Mechanisms: Development for All, Geneva, Switzerland, 14-16 April 2009.

Report on the fourth session (15 January-2 February 1990), Supplement 3, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations, New York, 1990.

Report on the sixth session (25 November-13 December 1992), Supplement 3, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations, New York, 1992.

Resolución A/RES/63/150, Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 18 de diciembre de 2008.

Resolución A/RES/65/186, La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 y después de esa fecha, 21 de diciembre 2010.

Normativa

Constitución de Alemania, Ley Fundamental para La República Federal Alemana de 1949.

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Resolución 41/128, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986.

Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado.

Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, Resolución 3201 (S-VI), Asamblea General de Naciones Unidas, 1º de mayo de 1974.

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en: ZUMAQUERO, José Manuel, BAZÁN, José Luis, Textos internacionales de derechos humanos II 1978-1998, EUNSA, Navarra, 1998.

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, en *Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Protección de la Persona Aplicables en México*, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación- Naciones Unidas – Derechos Humanos- Oficina del Alto Comisionado México, México, 2012.

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación FAO.

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada por la Asamblea General, el 16 de diciembre de 2005.

“Propuesta del experto de los Estados Unidos de América, distribuida ya el 23 de junio de 1983, sobre el artículo 1 de la parte dispositiva,” en *Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el Derecho al Desarrollo*, Relator, Sr. Georges Gautier (Francia), E/CN.4/1985/11, de 24 de enero de 1985, Anexo VIII.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966.

Tratado de la Unión Europea.

Jurisprudencia

Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros project, 1997, I.C.J., Rep. 7, Judgment of 25 sept 1997.

Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú, Sentencia de 1 de julio de 2009.

Doctrina

Observación General 12, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el PIDESC.